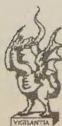
BIBLIOTECA  DE BOLSILLO

NOAM CHOMSKY

La (des)educación

Crítica

La (des)educación



NOAM CHOMSKY

La (des)educación

Edición e introducción de
Donaldo Macedo

Traducción castellana de
Gonzalo G. Djembé

CRÍTICA
Barcelona

Primera edición en Biblioteca de Bolsillo: marzo de 2007
Primera reimpresión en Biblioteca de Bolsillo: junio de 2007

Título original:
Chomsky on MisEducation

Diseño de la cubierta: Jaime Fernández
Imágen de la cubierta: AGE Fotostock
Realización: Átona, S.L.

Crítica, S.L., Diagonal 662-664, 08034 Barcelona
www.ed-critica.es
ISBN: 978-84-8432-884-1
Depósito legal: B. 32.552-2007
Impreso en España

2007. – Romanyà Valls, Capellades (España)

Prólogo*

La democracia ha fracasado porque hay demasiada gente que la teme. Creen que el bienestar y la felicidad son tan escasos, que resulta imposible —y quizá indeseable— creer en un mundo de personas prósperas y libres ... Sin embargo, este mundo, con todas sus contradicciones, aún puede salvarse, aún puede renacer; pero no recurriendo al capital, el interés económico, la propiedad y el oro.

W. E. B. Du Bois[1]

En las sociedades llamadas libres y abiertas, la escuela afronta unas tensiones y paradojas formidables. Por una parte, tiene la responsabilidad de enseñar las ventajas del sistema democrático; por otra, es cómplice de la hipocresía inherente a las democracias contemporáneas, en las que, según Noam Chomsky, el término *democracia* «se refiere a un sistema de gobierno en el que ciertos elementos de la élite, que se apoyan en la comunidad comercial, controlan el estado mediante el dominio de la sociedad privada, mientras que la población observa en silencio. Entendida así, la democracia es un sistema en el que las decisiones son tomadas por las élites y ratificadas públicamente, como sucede en los Estados Unidos. De este modo, la intervención popular en el establecimiento de la política pública se considera una seria amenaza».[2]

Por esta razón, los movimientos populares de los años sesenta y setenta —que se movilizaron para oponerse a la implicación criminal de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, así como para exigir una mayor protección de los derechos civiles y del medio ambiente— representaron una amenaza real para la clase gobernante. En los EE.UU., este sector social dominante replicó creando la Comisión Trilateral, cuyo objetivo era encontrar maneras de evitar que auténticas muchedumbres siguieran participando, de forma democrática, en el cuestionamiento de la conducta inmoral de los gobiernos occidentales. En este proceso, la Co-

* Quisiera expresar mi agradecimiento a Panagiota Gounari, quien me ayudó pacientemente en la elaboración del manuscrito y realizó sagaces comentarios y contribuciones durante la selección de los ensayos incluidos en el presente volumen.

1. W. E. B. Du Bois, *Color and democracy: colonies and peace*, Kraus-Thompson, Milwood (NY), 1975, págs. 99 y 142.

2. Noam Chomsky, *On power and ideology*, South End Press, Boston, 1987, pág. 6 [hay trad. cast: *Sobre el poder y la ideología*, Visor, Madrid, 1989].

misión Trilateral abandonó toda pretensión de que la escuela enseñara los valores democráticos; sus miembros —entre los que se contaba el ex presidente Jimmy Carter— pertenecían a una élite internacional de carácter mayoritariamente liberal, y resolvieron las mencionadas tensiones y paradojas de la escuela «democrática» encargándole el adoctrinamiento tendencioso de los más jóvenes.[3] Ello ha llevado a Chomsky a afirmar que la Comisión Trilateral concebía las escuelas como centros de adoctrinamiento, «en tanto que imponen la obediencia, bloquean todo posible pensamiento independiente e interpretan un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción».[4]

En paralelo a este objetivo de la Trilateral, que buscaba mecanismos para mantener la hegemonía cultural del capitalismo, emergió una plétora de «comisarios» culturales al estilo soviético (cuya empresa era financiada en gran medida por fundaciones y comités de expertos conservadores). Su misión era contener lo que se entendía como un «exceso de democracia» y acusar a «los que quisieran democratizar las instituciones y sustituir las relaciones de poder actuales» por la «catástrofe social» de los sesenta.[5] Resultaba imprescindible, por tanto, atacar frontalmente los experimentos democráticos que ponían en cuestión la conducta inmoral (e incluso criminal) de los gobiernos, y que culpaban sin tapujos a los «programas para una gran sociedad, no solo por las pérdidas económicas, sino también por el descenso en los resultados de los exámenes de secundaria, los problemas con la droga y una generación de niños y jóvenes sin padres, sin fe y sin más sueños que la atracción de la calle».[6]

Mientras la clase gobernante no pide disculpas por la función antidemocrática de las escuelas, se espolea a los gestores culturales de nivel medio (expertos, profesionales y maestros), mediante un sistema de recompensas, para que propaguen el mito de que la escuela es un espacio democrático en el que se enseñan los valores democráticos. Como gestores culturales, los maestros apadrinan estas «verdades teológicas» (o

3. Noam Chomsky, *Language and politics*, ed. C. P. Otero, Black Rose, Nueva York, 1988, pág. 671 [hay trad. cast.: *Sobre política y lingüística*, Anagrama, Barcelona, 1971].

4. Chomsky, *Language and politics*.

5. Stanley Aronowitz y Henry A. Giroux, «Schooling, culture and literacy in the age of broken dreams: a review of Bloom and Hirsch», *Harvard Educational Review*, 58/2 (mayo de 1988), pág. 178.

6. Adam Pentman, «Buchanan announces presidential candidacy», *Boston Globe*, 15 de diciembre de 1991, pág. 13.

incuestionadas), de forma que legitiman la función institucional desarrollada por las escuelas «dentro de un sistema de control y coerción».

El ejemplo más evidente de ello lo he mencionado ya en algunas obras anteriores: se trata del caso de David Spritzler, un estudiante de doce años de la Escuela Latina de Boston, a quien se abrió un expediente disciplinario por haberse negado a pronunciar el Juramento de Fidelidad,* que le parecía «una exhortación hipócrita al patriotismo», puesto que no existe «libertad y justicia para todos». Para Spritzler, el Juramento pretende unir «a los oprimidos y los opresores. Hay gente que lleva coches impresionantes, vive en casas impresionantes y no tienen que preocuparse por el dinero. Y luego está la gente pobre, que viven en barrios malos y van a escuelas malas. Es como si el Juramento hiciera parecer que todo el mundo es igual, aunque no es cierto. No hay justicia para todos».[7]

A Spritzler, finalmente, no se le impuso ninguna sanción, pero fue necesario que la Unión Americana en pro de las Libertades Civiles [American Civil Liberties Union] escribiera una carta a su favor, citando un caso judicial de 1943 (Junta Educativa del Estado de Virginia Occidental contra Barrett), en el que la Corte Suprema de los EE.UU. avaló el derecho de un estudiante a no pronunciar el Juramento de Fidelidad y permanecer sentado.

En el primer capítulo de este libro, titulado «Educar para la libertad», le pregunté a Chomsky a qué se debía que un niño de doce años pudiera detectar la evidente hipocresía del Juramento, y no sus maestros y administradores, que habían recibido una educación de nivel muy superior. Para Chomsky, «lo que le sucedió a David Spritzler es lo que se espera de las escuelas, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta. Lejos de favorecer el pensamiento independiente, la escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera que respalda las estructuras de poder que, a su vez, te recompensan generosamente». En este sentido, como observa acertadamente Edward Said, los maestros son como otros

* *Pledge of Allegiance*: Juramento solemne de fidelidad a los EE.UU., que suele pronunciarse, en posición erguida, durante la ceremonia del saludo a la bandera, habitual en las escuelas estadounidenses. (*N. del t.*)

7. Diego Ribudeneira, «Taking a stand, seated», *Boston Globe*, 14 de noviembre de 1991, pág. 40.

«profesionales, expertos o consultores, que proporcionan autoridad con su labor, a cambio de importantes beneficios».[8] En tanto que funcionarios pagados por el estado, se espera de los maestros que se comprometan con cierto tipo de reproducción ética, social, política y económica, diseñada para moldear a los estudiantes a imagen de la sociedad dominante.

Aunque afirmamos contar con una educación democrática, la realidad es muy diferente: tenemos un modelo educativo colonial, muy elaborado, y diseñado fundamentalmente para formar a los maestros con métodos que devalúan la dimensión intelectual de la enseñanza. El objetivo principal de este modelo colonial es continuar discapacitando a los maestros y estudiantes, de forma que caminen irreflexivamente a través de un laberinto de procedimientos y técnicas. De ello se sigue que el sistema educativo de los Estados Unidos no fomenta el pensamiento crítico e independiente; antes al contrario, nuestras llamadas escuelas democráticas se basan en un enfoque instrumental y acumulativo, que normalmente impide el desarrollo de la clase de razonamiento con la cual se puede «leer el mundo» críticamente y comprender los motivos y relaciones que subyacen a los hechos. A grandes rasgos, este enfoque instrumental se caracteriza por la realización de ejercicios rutinarios, que no exigen esfuerzo ni tratan temas importantes, y que son repartidos «como preparación para exámenes de tipo test» por maestros «que no escriben más que galimatías, en imitación de la palabrería sicológica que los rodea».[9] A medida que los Departamentos Estatales de Educación reafirman su control sobre el currículo escolar mediante la estandarización de exámenes oficiales de tipo test, adquiere más vigencia este tipo de educación instrumental y acrítica, ya que la enseñanza se confía a los tests, mientras que se desatiende «el aprendizaje que ha de guiar la relación del yo con la vida pública y de la responsabilidad social con las peticiones más generales de la ciudadanía».[10] En este proceso, los maestros favorecen el aprendizaje rutinario y la simple memorización de hechos, mientras que sacrifican el análisis crítico del orden sociopolítico (aun cuando este orden empieza por crear la necesidad misma de la edu-

8. Edward W. Said, *Representations of the intellectual*, Pantheon, Nueva York, 1994, pág. xv [hay trad. cast.: *Representaciones del intelectual*, Paidós, Barcelona, 1996].

9. Patrick L. Courts, *Literacy and empowerment: the meaning makers*, Bergin & Garvey, South Hadley (MA), 1991, pág. 4.

10. Henry A. Giroux, *Critical education and cultural studies: making the pedagogical more political*, inédito.

cación). Habitualmente, los maestros no piden a sus estudiantes que analicen las estructuras sociopolíticas que dan forma a sus circunstancias; y tampoco se les permite emprender el proceso de «descubrir la verdad por sí mismos». En lugar de esto, se espera que los estudiantes aprendan (aunque, en la práctica, no sea un camino para aprender nada) «por una mera trasferencia de conocimientos, que se engulla con el aprendizaje memorístico y después se vomite» en los tests estatales estandarizados. No se procura, por tanto, «el desarrollo de un pensamiento crítico e independiente», sino que se anestesia el razonamiento de nuestros estudiantes, como bien supo reflejar John Ashbery en su poema «¿Qué es la poesía?»: «En la escuela / me espulgaron de todas las ideas / hasta dejar el campo limpio».[11] Dado que nuestra sociedad permite que las culturas corporativas reduzcan las metas de la educación a los requerimientos pragmáticos del mercado y, por tanto, se forma a los estudiantes para que sean «trabajadores sumisos, consumidores expectantes y ciudadanos pasivos»,[12] la sociedad se ve forzada a crear estructuras educativas que adormezcan la capacidad crítica de los alumnos, con miras a domesticar el orden social y asegurar así su autopreservación.[13] Consecuentemente, crea patrones educativos que incluyen «acciones que procuran la domesticación de la conciencia y su trasformación en un recipiente vacío. La educación, dentro de esta práctica cultural dominadora, queda restringida a una situación en la que el educador, "que sabe", trasfiere un conocimiento preexistente al estudiante, "que no sabe"».[14]

Cada vez más, a medida que la cultura corporativa aumenta su control sobre la escuela, la función de los maestros se ve reducida a imponer «una verdad oficial», predeterminada por «un grupo reducido de personas que analizan, ejecutan, toman las decisiones y mueven los hilos en el sistema político, económico e ideológico». Para poder llevar a cabo esta tarea de educación (que, irónicamente, no produce más que ignorancia), los maestros han de tratar a sus alumnos como vasijas vacías que se deben rellenar con ideas predeterminadas y, generalmente, desconectadas de la realidad social que los envuelve, así como de cualquier

11. «In School / All thoughts got combed out / What was left was like a field.» John Ashbery, «What is poetry?», *Houseboat days: poems*, Viking, Nueva York, 1977, pág. 47.

12. Giroux, *Critical education.*

13. Paulo Freire, *The politics of education: culture, power, and liberation*, Bergin & Garvey, South Hadley (MA), 1985, pág. 116 [hay trad. cast.: *La naturaleza política de la educación: cultura, poder y liberación*, Paidós, Barcelona, 1990].

14. Freire, *Politics of education*, pág. 114.

valor de igualdad, responsabilidad y democracia. En este sistema del *educar para domesticar*, que bordea la idiotización, se echa en falta el espacio pedagógico para que los alumnos —como bien indica Chomsky más adelante— «no [sean considerados] como un simple auditorio, sino como elemento integrante de una comunidad con preocupaciones compartidas, en la que uno espera poder participar constructivamente». En lugar de ello, se premia al que colabora con su propia idiotización, hasta convertirse en el «llamado "buen estudiante", que repite lo oído, que renuncia al pensamiento crítico, que se adecua a los modelos que le ofrecen [y que] ha de contentarse con recibir contenidos impregnados de una ideología esencial para los intereses del orden sagrado».[15]

Dentro de este modelo de educación domesticadora, por tanto, el mejor estudiante es el que recita religiosamente los eslóganes fosilizados del Juramento de Fidelidad; en la escuela sobresale el que, tozuda e irreflexivamente, acepta las grandes mentiras, como las que cuenta Tom Paxton en su canción *What Did You Learn in School Today?*:

> —Hijo mío, amor mío, ¿qué has aprendido hoy en la escuela?
> Hijo mío, amor mío, ¿qué has aprendido hoy?
> —Aprendí que Washington nunca ha contado una mentira,
> que los soldados no se mueren casi nunca,
> y que todas las personas son libres.
> Eso es lo que he aprendido hoy en la escuela,
> eso es lo que he aprendido hoy.
> Aprendí que los policías son mis amigos,
> que la justicia no tiene fin,
> y que los asesinos pagan sus crímenes con la muerte,
> aunque a veces cometamos algún error.
> Aprendí que nuestro gobierno tiene que ser poderoso,
> que siempre tiene la razón, que no se equivoca:
> nuestros líderes son los mejores,
> por eso los elegimos una y otra vez.
> Aprendí que las guerras no son tan malas,
> y aprendí cosas sobre las [guerras] más grandes que hemos tenido:
> hemos luchado en Francia y en Alemania,
> y quizá algún día llegue mi oportunidad.
> Eso es lo que he aprendido hoy en la escuela,
> eso es lo que he aprendido hoy.[16]

15. Freire, *Politics of education*, pág. 117.
16. Tom Paxton, *What Did You Learn in School Today?*, Cherry Lane Music Pub. Co., Inc. (ASCAP), © 1962.

Afortunadamente, no todos los estudiantes aceptan voluntaria y acríticamente esta pedagogía de los grandes embustes, sino que algunos son conscientes de «las mentiras que me contó mi maestro», por tomar el título de un libro de James W. Loewen. Por ejemplo, los profesores de historia intentan promover el compromiso de sus estudiantes usando libros de texto que «retratan el pasado como si se tratara de un drama moral simplificado: "Sé un buen ciudadano ... Puedes sentirte orgulloso de lo que has heredado. Sé lo máximo que puedas ser. Después de todo, mira todo lo que han logrado los Estados Unidos"».[17] Esta forma de optimismo falso, según Loewen, «puede acabar suponiendo una carga para los estudiantes de color, los hijos de padres de clase trabajadora, las niñas que observan la ausencia constante de personajes históricos femeninos, o los miembros de cualquier otro grupo que no haya conseguido el éxito económico. No es de extrañar que los niños de color estén alienados».[18] En su alienación, se niegan a aceptar el conocimiento que les ha trasmitido un sistema ideológico y doctrinal que falsea la realidad y distorsiona su imagen, con la esperanza de que los estudiantes se acomodarán a vivir en la mentira. Es por esta razón por lo que un gran número de estos estudiantes subordinados planta cara a la educación doctrinal, utilizando el recurso de abandonar los estudios. Y es por esta misma razón, quizá, por lo que muchos de ellos hacen resonar todavía la famosa canción de Pink Floyd *Another Brick in the Wall* («Otro ladrillo en el muro»): «We don't want no education, / We don't want no thought control...».[19] Tal como he indicado hasta aquí, la escuela procura mantener la hegemonía cultural y económica vigente en las sociedades llamadas abiertas y democráticas, para lo cual recurre a la propagación de mitos. Según afirma Bárbara Flores, los mitos «son persistentes porque no se los cuestiona; son convincentes porque ofrecen un retrato simplificado de una realidad compleja; y son antirrealistas, porque disfrazan la verdad».[20] Se sigue, entonces, que la enseñanza de la verdad sin disfrazar —tal como ha sugerido Chomsky persuasivamente— supone una auténtica amenaza para el sistema doctrinal. Un maestro al que se paga

17. James W. Loewen, *Lies my teacher told me*, The New Press, Nueva York, 1945, pág. 3.

18. Loewen, *Lies my teacher told me*.

19. «No queremos educación / ni control del pensamiento»; Pink Floyd, *Another Brick in the Wall*, Pink Floyd Music Ltd., © 1979.

20. Bárbara Flores, *Language interference on influence: toward a theory for hispanic bilingualism*, tesis de licenciatura, Universidad de Arizona, Tucson, 1982, pág. 131.

para que proteja el sistema doctrinal e ideológico vigente tendrá escaso interés en enseñar a sus estudiantes que los Estados Unidos han violado sistemáticamente el Juramento de Fidelidad, desde la legalización de la esclavitud y la denegación de los derechos de las mujeres al genocidio casi total de los nativos americanos, pasando por las actuales prácticas discriminatorias en contra de las personas que, debido a su raza, etnia o sexo, no son tratadas con la dignidad y el respeto por los que se aboga en el Juramento.

Este maestro tampoco tendrá alicientes para explicar la *Historia de la gente de los Estados Unidos*, de Howard Zinn, en la que los estudiantes podrían aprender que érase una vez un comité legislativo de Massachusetts, que promulgó una ley para incentivar económicamente el asesinato de los indios: «Por cada cabellera de hombre indio que se mate ... cuarenta libras. Por cada cabellera de mujer india, o de hombre indio menor de veinte años ... veinte libras».[21] Y tampoco verá la razón de enseñar a sus estudiantes que ni siquiera Abraham Lincoln, el presidente antiesclavista, respaldó plenamente los principios de igualdad, respeto a la vida, libertad y persecución de la felicidad, contenidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando aseveró que «diré, entonces, que no estoy, ni lo he estado jamás, a favor de fomentar de ninguna forma la igualdad social y política de las razas blanca y negra ... Yo, al igual que cualquier otro hombre, estoy a favor de mantener la posición superior asignada a la raza blanca».[22]

Podría replicarse, tal vez, que los incidentes citados en el párrafo anterior pertenecen a los archivos más polvorientos de nuestra historia temprana, pero no me parece que hayamos aprendido demasiado de estos testimonios históricos peligrosos, vista nuestra propensión a la barbarie en contra de otros grupos y naciones y en nombre de la democracia. No es una simple coincidencia —ni una denominación accidentalmente ingenua— el que la destrucción de pueblos enteros de Vietnam, que produjo una masacre de mujeres, niños y ancianos, fuera denominada por los Estados Unidos una «operación de paz». Tampoco es una coincidencia el que la invasión de Panamá recibiera el nombre de «Operación Causa Justa». Esta invasión supuso la muerte de miles de vícti-

21. Citado en Howard Zinn, *Declarations of independence: now examining American ideology*, HarperCollins, Nueva York, 1990, págs. 234-235.
22. Zinn, *Declarations of independence*.

mas inocentes en el intento de arrestar a un jefe de estado —Manuel Noriega— que, en realidad, era un desaprensivo creado y respaldado por el gobierno de los EE.UU., trabajaba como informador a sueldo de la CIA y siempre había sido considerado «amistoso», hasta que empezó a actuar con excesiva independencia para nuestro gusto «democrático». Invadir un país y arrestar a su jefe de estado viola las mismas leyes internacionales que los EE.UU. afirmaban estar defendiendo durante la guerra del Golfo.

La defensa estadounidense de los elevados principios y leyes internacionales que condujeron a la guerra del Golfo no puede tener validez moral, a no ser que olvidemos nuestra memoria histórica más reciente. Digámoslo claro: la invasión de Kuwait por parte de Sadam Husein fue brutal, cruel y, en suma, imperdonable. Pero, desde luego, no lo fue más que la invasión estadounidense de la isla de Granada, la invasión estadounidense de Panamá o la invasión turca del norte de Chipre; por no mencionar el apoyo de los EE.UU. al totalitarismo derechista y los escuadrones de la muerte en Chile, El Salvador y Guatemala, entre otros países.

Frente a este paisaje de agresión y de violación continua de las leyes internacionales, perpetradas por los Estados Unidos —y otros países que cuentan con su apoyo—, resulta difícil explicar la facilidad con la que el presidente Clinton y otros mandatarios occidentales convencieron a una ciudadanía supuestamente muy instruida y «libre» de que el bombardeo de Kosovo por parte de la OTAN fue una «intervención humanitaria», destinada a detener la limpieza étnica de los albaneses, cuando el resultado fue justamente el contrario; esto es, el bombardeo de Kosovo por las fuerzas de la OTAN «provocó un agravamiento dramático e inmediato de la limpieza étnica y el genocidio en Kosovo; y provocó igualmente, como era predecible, un incremento drástico de las matanzas, las violaciones y la tortura de los habitantes de etnia albanesa».

La incapacidad de relacionar diferentes sucesos históricos, de trazar relaciones que deriven en una comprensión clara de la realidad, impide entender a los que han sido domesticados mediante la educación que «si aplicáramos el mismo razonamiento que ha servido para justificar la "intervención humanitaria" en Kosovo, la OTAN debería bombardear también otros países, como Colombia, por ejemplo, e incluso Turquía, que es uno de sus estados miembro». En Colombia, como bien ha demostrado Chomsky con numerosas pruebas, «la media anual de asesinatos

políticos cometidos por el gobierno y su aparato paramilitar, según las estimaciones del Departamento de Estado, está en el mismo nivel que en Kosovo antes del bombardeo de la OTAN, y ha generado por encima del millón de refugiados». En lugar de bombardear Colombia para detener la matanza de los propios colombianos, la administración de Clinton propuso enviar 1.600 millones de dólares para reforzar el ejército —con el objetivo, supuestamente, de combatir la guerra de la droga— y además, según Chomsky, fue «singularmente generosa en su elogio del presidente César Gaviria», a cuyo mandato cabe achacar la responsabilidad de «un nivel de violencia atroz».

El caso de Turquía no es menos incomprensible, pues ha provocado que «más de un millón de kurdos huyeran del campo a Diyarbakir, la capital oficial del Kurdistán», intentando escapar al bombardeo de sus pueblos con aviones estadounidenses. El apoyo de los Estados Unidos a Indonesia, al igual que su complicidad con las matanzas de Timor Oriental, está perfectamente documentado y exigiría la aplicación de los mismos principios internacionales que defienden la «intervención humanitaria». De no ser por la amnesia social y la incapacidad de relacionar los diferentes acontecimientos, nos hubiéramos referido, sin duda, a la función desempeñada por Daniel Patrick Moynihan como embajador ante las Naciones Unidas. En su memoria de la invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia, titulada *Un lugar peligroso*, Moynihan arroja luz sobre su papel como embajador estadounidense ante las Naciones Unidas: «Los Estados Unidos querían el resultado que finalmente se produjo y se esforzaron en provocarlo. El Departamento de Estado quería que las Naciones Unidas demostraran su inutilidad en todas y cada una de sus medidas; esta tarea me fue confiada a mí, y puedo decir que la supe llevar a término con un éxito nada despreciable».[23] Moynihan añadió que, en tan solo dos meses, habían muerto alrededor de 60.000 personas, «prácticamente la misma proporción de bajas que sufrió la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial».[24] Pero como no se denuncia la relación que vincula estos sucesos, los Estados Unidos han podido seguir proclamando la excelsitud moral de su defensa de las leyes internacionales y la inviolabilidad de las fronteras nacionales,

23. Citado en Noam Chomsky, *Towards a new Cold War*, Pantheon, Nueva York, 1982, págs. 339-340 [hay trad. cast.: *La segunda guerra fría*, Crítica, Barcelona, 1984].
24. Chomsky, *La segunda guerra fría*.

al par que continuaba violando leyes y fronteras a su entero capricho. La incapacidad de percibir estas contradicciones tan evidentes es un componente clave de la manipulación ideológica, que suele producir una desarticulación de los conocimientos adquiridos, alejando así a los observadores de una comprensión crítica y coherente del mundo en el que viven. Esta desarticulación del conocimiento conlleva la anestesia de la conciencia, sin la cual es imposible desarrollar una postura política clara. Tal como ha indicado elocuentemente Frei Betto, la percepción clara de la realidad requiere que cada cual trascienda «la concepción de la vida como un simple proceso biológico, para llegar a entenderla como un proceso personal y colectivo».[25] Betto se refirió a esa concepción errónea como «el tendedero de la información»; puede haber colgada en él una gran cantidad de piezas de información, pero no todo el mundo es capaz de relacionarlas unas con otras. No es de extrañar, por tanto, que las potencias occidentales prestaran un respaldo tan eufórico a la «intervención humanitaria» de la OTAN en Kosovo, que pretendía parar la limpieza étnica de los albaneses, pero a la vez fingieran no tener noticia de las matanzas en Ruanda, Colombia, Turquía y otros países. La percepción clara de la realidad política requeriría que uno fuera capaz de separar y reordenar las piezas, frecuentemente fragmentarias, del tendedero.[26] La adquisición de la suficiente claridad de ideas exige un alto nivel de claridad política, algo que la ideología dominante intenta eliminar por todos los medios —ya desde la escuela—, y que se adquiere a base de cribar el flujo de información y relacionar unas piezas con otras, hasta que se logra una comprensión global de los hechos y su razón de ser.

Podemos ver ahora por qué las personas que han sido educadas bajo un modelo domesticador, de trasferencia (o incluso imposición) de conocimientos, no son capaces de interconectar las piezas y distinguir, por ejemplo, dos dimensiones en la «intervención humanitaria» de la OTAN en Kosovo: la mítica y la objetiva. En parte, ello obedece a que los maestros —políticos de tres al cuarto que, como la mayoría de «expertos», han aceptado ciegamente la ideología dominante— son técnicos que, en razón de la educación domesticadora que se les ha trasferido en la línea de montaje de la fábrica de las ideas, e impulsados por este conoci-

25. Citado en Paulo Freire y Donaldo Macedo, *Literacy: reading the word and the world*, Bergin & Garvey, South Hadley (MA), 1987, pág. 130 [hay trad. cast.: *Alfabetización, lectura de la palabra y lectura de la realidad*, Paidós, Barcelona, 1989].

26. Freire y Macedo, *Literacy*.

miento engañoso, no suelen llegar a desarrollar una comprensión del mundo crítica y coherente. En resumen, este tipo de pensamiento domesticado hace posible que nos pongamos de parte de los líderes políticos que realizan el ritual de exigir la protección de los derechos humanos en todo el mundo, pero que no reconozcamos la complicidad de estos mismos líderes en la violación de los derechos de los ciudadanos que viven bajo regímenes totalitarios apoyados —abierta o encubiertamente— por los Estados Unidos. La naturaleza selectiva de nuestro respaldo «incondicional» a los derechos humanos resulta evidente en los casos de Colombia, Guatemala, Indonesia, Haití o Turquía, entre otras naciones.

Uno de los componentes centrales de esta pedagogía de las mentiras, diseñada por la ideología dominante para impedir el desarrollo de una «comprensión crítica de la realidad», es la creación de «ilusiones necesarias y simplificaciones en gran escala y de gran poder emotivo ... para que el "rebaño desconcertado" —la masa ingenua y mentecata— no se vea aturdido por la complejidad de los problemas reales que, además, tampoco sabría cómo resolver». Es por ello que la escuela y la universidad intentan frenar el desarrollo de una educación más crítica, según los varios modelos propuestos por Chomsky, Paulo Freire o Henry Giroux; según ellos, «como sujetos que sabemos (que tenemos un conocimiento en ocasiones previo, y en ocasiones referido a objetos que aún han de ser producidos), nuestra relación con los objetos cognoscibles no se puede limitar a los objetos en sí mismos. Necesitamos llegar a comprender el complejo de las relaciones entre los objetos».[27]

En una época en la que vivimos controlados por una creciente «fabricación del consentimiento»,* debida a las triquiñuelas tecnológicas de los medios de comunicación —cortes de voz mínimos y selectivos, manipulación metafórica del lenguaje e ideas precocinadas y carentes de sustancia—, resulta aún más urgente aceptar la propuesta de Chomsky: desarrollemos un enfoque crítico de la educación, «un auténtico servicio público y general, [que] nos proporcionaría técnicas de autodefensa». Vista la tendencia de los seres humanos a construir «"cuentos" placenteros con los que suelen engañarse a sí mismos y favorecerse a sí mis-

27. Freire y Macedo, *Literacy*, pág. 131.
* Macedo cita aquí, indirectamente, uno de los títulos de Chomsky, *Manufacturing consent*. (*N. del t.*)

mos y sus grupos»[28] (especialmente cuando esos cuentos engañosos son recompensados por el orden social dominante), el desarrollo de una comprensión crítica que enlace el significado de las palabras con un entendimiento más coherente del significado del mundo se constituye en un requisito previo para alcanzar una percepción más clara de la realidad. Tal como indica Freire, es únicamente «mediante la práctica política [como] se empieza a superar la poca coherencia de la sensibilidad ante el mundo, y una empresa intelectual más ambiciosa origina una más coherente comprensión del mundo».[29]

Así, con miras a superar las lecturas de la realidad que no pasan del mero nivel de la palabra (por ejemplo, «intervención humanitaria»), hemos de desarrollar una comprensión crítica de varias entidades sicológicas, como «las memorias, las creencias, los valores, los significados, etcétera ... que existen realmente allí fuera, en el mundo de la acción y la interacción social».[30] Antes de dotar de sentido a una descripción de la realidad en el nivel de las palabras, por tanto, es necesario leer el mundo, esto es, las prácticas culturales, sociales y políticas que lo conforman.

La lectura del mundo debe preceder, por tanto, a la lectura de las palabras, tal como sugiere Freire. Ello equivale a afirmar que, para poder acceder al significado pleno y verdadero de cualquier entidad, debemos analizar las prácticas culturales y políticas que vehiculan nuestro acceso al campo semántico del mundo y su interacción con los rasgos semánticos de la palabra. Como el significado es, cuando menos, huidizo, tenemos que basarnos en aquellos modelos culturales que son responsables de «nuestros cuentos» y, frecuentemente, «los cuentos con los que nos engañamos».[31] Una ojeada a la tesis de la «intervención humanitaria» en Kosovo basta para desvelar cómo las prácticas culturales y políticas no solo moldean, sino que incluso determinan la manipulación metafórica del lenguaje, facilitada a su vez por imágenes controladas informáticamente y mensajes verbales marcados por «el uso estratégico de un lenguaje ambiguo que oculta a los telespectadores el alcance real del terror

28. James Gee, *The social mind: languages, ideology, and social practices*, Bergin & Garvey, South Hadley (MA), 1992, pág. VII.
29. Freire y Macedo, *Literacy*, pág. 132.
30. Freire y Macedo, *Literacy*.
31. Gee, *The social mind*, pág. XI.

y las matanzas» inherentes a esas «intervenciones humanitarias».[32] Para William Lutz, este lenguaje deliberadamente ambiguo «esquiva la responsabilidad o la imputa a otros, y discrepa de su significado real o pretendido. Es un lenguaje que oculta e impide el pensamiento; más que potenciar el pensamiento, este lenguaje lo limita».[33]

En esta lúcida recopilación de ensayos, Chomsky no solo urge a todo aquel que anhele una vida más democrática a que adopte una actitud más crítica hacia el mundo, sino que además nos proporciona útiles herramientas para revelar el (des)orden social y, con él, las prácticas hipócritas y deshumanizadoras de nuestras «democracias»; ello equivale a «enseñar la verdad sobre el mundo y la sociedad». Chomsky impele a los lectores a adoptar un lenguaje crítico, necesario para desenmascarar una realidad oscurecida y su manipulación ideológica, pero también, de acuerdo con lo expresado por Giroux y Freire, promueve una pedagogía de la esperanza, por la cual «se invita a los estudiantes a que descubran por sí mismos la naturaleza de la democracia y su funcionamiento». En este proceso, los estudiantes abandonan su posición de meros objetos y se convierten en agentes de la historia, a la búsqueda incesante de la verdad. Según enfatiza Chomsky enérgicamente, los maestros han de cesar en su complicidad con la educación tecnocrática que los desintelectualiza y hace que «[trabajen] fundamentalmente para reproducir, legitimar y mantener el orden social dominante, que les reporta beneficios».

Los maestros, por tanto, han de rechazar la tentación de convertirse en «comisarios culturales», y convertirse en auténticos intelectuales, que «tienen la obligación de investigar y difundir la verdad sobre los temas más significativos, sobre los temas que importan». Tal como precisó Chomsky en nuestro diálogo, «este punto no deja de ser percibido por los intelectuales occidentales, que no tienen mayor problema en aplicar principios morales elementales en aquellos casos que atañen a los enemigos oficiales». En esta línea, Chomsky impele a los que quieran vivir democráticamente a unirse al coro de intelectuales genuinos, definidos por Edward Said como los que

32. Peter McLaren y Rhonda Hammer, «Media knowledge, warrior citizenry, and postmodern literacies», *Journal of Urban and Cultural Studies*, 1 (1992), pág. 49.
33. William Lutz, *Doublespeak*, HarperCollins, Nueva York, 1989, pág. 1.

> se arriesgan a prescindir de las certezas fáciles que nos proporcionan nuestra formación, nuestro idioma y nuestra nacionalidad, y que con tanta frecuencia nos impiden observar las realidades ajenas. También conlleva buscar e intentar apoyar un único estándar de actuación humana en lo que atañe a cuestiones como la política extranjera o la social. De este modo, si condenamos un acto de agresión inmotivado por parte de un enemigo, deberíamos ser capaces de hacer lo mismo cuando nuestro gobierno invade a otro estado más débil.[34]

Como intelectuales genuinos, en suma, los maestros tienen que hacer suyo un lenguaje crítico que denuncie la hipocresía, la injusticia social y las situaciones de miseria. Han de comprender, también, que «la escuela [representa] a la vez la ideología dominante y la posibilidad de lucha y resistencia, y que [debería ser] defendida por grupos diversos, ya que desempeña un papel fundamental en preparar a los estudiantes para que asuman la responsabilidad de expandir los horizontes de la democracia y la ciudadanía crítica».[35] Es desde esta perspectiva a la vez crítica y posibilista desde donde Chomsky urge a los lectores del presente libro a tomarse en serio el desafío de convertirse en agentes de la historia; a que trabajen por un mundo menos discriminatorio, más democrático, menos deshumanizador y más justo. Las lúcidas propuestas de Chomsky respecto a la humanización del mundo tienen un eco significativo en las afirmaciones de otro gran educador, Paulo Freire, quien recuerda continuamente a todos los que comparten ese deseo que «pensar en la historia como posibilidad es reconocer la educación como una posibilidad. Significa que, si bien la educación no puede lograrlo todo, sí tiene algunos logros a su alcance ... Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos los educadores es descubrir qué resulta históricamente factible en la línea de contribuir a la trasformación del mundo, originando un mundo más redondeado, menos anguloso, más humano».[36]

34. Said, *Representations of the intellectual*, pág. XIV.
35. Henry Giroux, *Radical pedagogy and educational hope: remembering Paulo Freire*, inédito.
36. Paulo Freire y Donaldo Macedo, «A dialogue: culture, language and race», en Pepi Leistyna, Anvie Woodrum y Stephen A. Sherblom, eds., *Breaking free: the transformative power of critical pedagogy*, Harvard Educational Review, Cambridge (MA), 1996, pág. 222.

1

Educar para la libertad

(un diálogo con Donaldo Macedo)*

DONALDO MACEDO: *Hace algunos años, me sentí intrigado por el caso de David Spritzler, un estudiante de la Escuela Latina de Boston, de tan solo doce años, quien tuvo que afrontar un expediente disciplinario por haberse negado a pronunciar el Juramento de Fidelidad.*** *A Spritzler le parecía «una exhortación hipócrita al patriotismo», puesto que no hay «libertad y justicia para todos». Quería preguntarte por qué crees que un niño de doce años pudo detectar la evidente hipocresía del Juramento y, en cambio, no lo hicieron sus maestros y administradores. Me deja pasmado que los maestros, que —por la misma naturaleza de su trabajo— deberían considerarse a sí mismos intelectuales, sean incapaces de ver lo que le resulta evidente a un niño, o incluso se nieguen a aceptarlo.*

NOAM CHOMSKY: No es difícil de entender. Lo que acabas de mencionar demuestra la profundidad del adoctrinamiento tendencioso que se lleva a cabo en nuestras escuelas, e incapacita a las personas instruidas para comprender siquiera las ideas más elementales, al alcance de cualquier niño de doce años.

De acuerdo, pero me sorprende que un maestro —que ha recibido

* Título original: «Beyond a domesticating education: a dialogue»; esta conversación se produjo en junio de 1999.

** Véase la nota de la pág. 9. (*N. del t.*)

una formación superior— o un director de escuela sacrifiquen el mensaje del Juramento de Fidelidad a la imposición de la obediencia, y exijan a sus estudiantes que lo pronuncien.

A mí no me extraña, en absoluto. De hecho, lo que le sucedió a David Spritzler es lo que se espera de las escuelas, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta. Lejos de favorecer el pensamiento independiente, la escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de control y coerción. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera que respalda las estructuras de poder que, a su vez, te recompensan generosamente. Pensemos en Harvard, por ejemplo. En Harvard no aprendes solo matemáticas; aprendes, además, qué se espera de ti por ser un graduado de Harvard, qué conducta has de seguir y qué preguntas no tienes que hacer jamás. Aprendes las gollerías propias de un cóctel, cómo debes vestirte, cómo se imposta el acento de Harvard.

Y también cómo relacionarte con una determinada estructura de clase, y cómo conocer las metas, los objetivos y los intereses de esta clase, la clase dominante.

Así es. En este caso, hay una diferencia abrumadora entre Harvard y el MIT [Instituto de Tecnología de Massachusetts]. Aunque sería razonable definir el MIT como una institución más de derechas, es, en cambio, mucho más abierto que Harvard. En Cambridge tienen un dicho que refleja bien esta diferencia: Harvard forma a la gente que gobierna el mundo; el MIT forma a los que lo hacen funcionar. Como consecuencia, en el MIT hay mucha menos preocupación por el control ideológico y mucho más espacio para el pensamiento independiente. Mi situación aquí es una buena muestra de ello, pues nadie ha puesto obstáculos a mi acción política ni mi activismo. Ahora bien, no pretendo decir con eso que el MIT sea un foco de activismo político. No ha dejado de desarrollar la función institucional que le corresponde: ocultar la mayor parte de la verdad sobre nuestro mundo y nuestra sociedad. De no haber sido así, si se hubiera dedicado a enseñar la verdad, tampoco habría podido sobrevivir demasiado.

Y precisamente porque no enseñan la verdad sobre el mundo, las escuelas estadounidenses no tienen más recurso que el bombardeo propa-

gandístico constante a favor de la democracia. Si la escuela fuera en verdad democrática, no sería necesario machacar a los estudiantes con tópicos sobre la democracia. Simplemente, la acción y la conducta serían democráticas; pero sabemos que no es así. En principio, cuanto más necesario resulte hablar sobre los ideales de la democracia, menos democrático será el sistema.

Esto es bien conocido por los que se dedican a la política y, a veces, ni siquiera se molestan en ocultarlo. La Comisión Trilateral se refería a las escuelas como las «instituciones» responsables del «adoctrinamiento de los jóvenes». Este adoctrinamiento tendencioso es imprescindible, porque las escuelas fueron diseñadas —hablando a grandes rasgos— para apoyar los intereses del sector social dominante, la gente de mayor riqueza y bienestar. Desde muy temprano, en la educación se nos socializa para que comprendamos la necesidad de prestar respaldo a las estructuras del poder, sobre todo a las grandes empresas, a los hombres de negocios. La lección que uno saca de esta educación socializadora es que, como no apoyes los intereses de los más ricos y poderosos, lo tendrás crudo: sencillamente, se te expulsa del sistema o se te marginaliza. Y la escuela cumple con éxito este programa de «adoctrinamiento de los jóvenes» —por decirlo con las mismas palabras de la Trilateral— gracias a que opera dentro de un marco de propaganda cuyo efecto es deformar o suprimir las ideas y la información no deseadas.

¿Cómo es posible que estos intelectuales, que propagan falsedades al servicio de los intereses de los más poderosos, sin atreverse a salir de dentro del marco propagandístico, salgan impunes de su complicidad?

Lo cierto es que no salen impunes de nada. De hecho, están prestando el servicio que se espera de ellos; lo esperan así las instituciones para las que trabajan, y ellos cumplen los requerimientos del sistema doctrinal, ya sea voluntaria o quizá inconscientemente. Es como si contrataras a un carpintero y, una vez realizado el trabajo para el que lo contrataste, te preguntaras cómo ha podido hacerlo. Bueno, ha hecho lo que se esperaba de él; y los intelectuales ofrecen un servicio muy parecido. Se comportan tal como se espera de ellos en la medida en que presentan una descripción de la realidad mínimamente ajustada, pero sobre todo adecuada a los intereses de los que tienen más poder y más rique-

za, es decir, de la gente que posee esas instituciones que solemos llamar escuelas y que, en el fondo, vienen a poseer la sociedad entera.

Está claro que, históricamente, los intelectuales han interpretado un papel vergonzoso con su apoyo al sistema doctrinal. Vista esta postura —no demasiado honrosa—, ¿crees que pueden ser tenidos por intelectuales, en el sentido más genuino del término? En varias ocasiones te has referido a algunos profesores de la universidad de Harvard como «comisarios», al estilo soviético. Personalmente, creo que ese término los describe mejor que el de «intelectuales», pues son cómplices de la estructura del poder; además, desarrollan un rol funcionarial, puesto que defienden los supuestos «valores de la civilización», aun cuando estos, en muchos casos, han generado justamente el efecto contrario: miseria, genocidio, esclavitud y explotación en gran escala de la masa de trabajadores.

A lo largo de la historia, efectivamente, esa es una imagen casi exacta de lo que ha sucedido. Si te retrotraes al tiempo de la Biblia, verás que los intelectuales que más tarde fueron denominados «falsos profetas» trabajaban en pro de los intereses de los poderosos. Sabemos que había intelectuales disidentes con una concepción alternativa del mundo: los que después fueron llamados «profetas» (que es una traducción dudosa de un término confuso). Pues bien, estos fueron preteridos, torturados u obligados a exiliarse. Y las cosas no son muy diferentes en nuestros días: la mayoría de las sociedades marginan a los intelectuales disidentes y, en lugares como El Salvador, se los quitan de en medio brutalmente. Eso es lo que les pasó al arzobispo Romero y los seis jesuitas: fueron asesinados por tropas de élite, entrenadas y armadas por nosotros [los Estados Unidos] y costeadas con nuestros impuestos. Un jesuita salvadoreño observó acertadamente en su diario que, en su país, un Václav Havel, por poner un ejemplo (el antiguo prisionero político que terminó siendo presidente de Checoslovaquia) no habría ido a la prisión, sino que lo hubieran destazado y abandonado en la vereda. Pero a Václav Havel, que se convirtió en el ojito derecho de Occidente, no se le puede acusar de cicatero, sino que agradeció cumplidamente este apoyo, dirigiéndose al congreso de los Estados Unidos —muy pocas semanas después del asesinato de los seis jesuitas en El Salvador— sin mostrar ninguna solidaridad con sus compañeros de la disidencia salvadoreña; an-

tes al contrario, elogió y bendijo al congreso como «el defensor de la libertad». El escándalo es tan mayúsculo que sobran los comentarios.

Pero bastará una simple prueba para demostrar su magnitud. Imagina, por ejemplo, lo siguiente: Un comunista estadounidense y de color se presenta en lo que entonces era la Unión Soviética, poco después de que seis destacados intelectuales checos hayan sido asesinados por fuerzas entrenadas y armadas por los rusos. Se dirige a la Duma y la ensalza como «la defensora de la libertad». ¿Qué reacción se hubiera producido en los Estados Unidos, entre los políticos e intelectuales? Sin duda, habría sido rápida y predecible: se le denunciaría por apoyar a un régimen criminal. Los intelectuales estadounidenses deberían preguntarse por qué se sintieron arrobados por la espléndida actuación de Havel, que es equiparable a esta historia imaginaria.

¿Cuántos intelectuales de nuestro país han leído algo —siquiera una página— de lo escrito por los intelectuales centroamericanos asesinados por los varios ejércitos que actúan como delegados nuestros? ¿Cuántos saben de la existencia de Dom Helder Cámara, el obispo brasileño que se distinguió en la defensa de los pobres de Brasil? La mayoría tendrían problemas incluso para dar el nombre de algún disidente de las brutales tiranías latinoamericanas —o de otras zonas— a las que apoyamos, además de entrenar a sus ejércitos; creo que solo eso ya basta para describir el estado de nuestra cultura intelectual. Los hechos que no convienen al sistema doctrinal se despachan con rapidez, como si no existieran; simplemente, se eliminan.

Esta construcción intelectual del «no ver» caracteriza a algunos intelectuales, descritos por Paulo Freire como educadores que afirman adoptar un enfoque científico y «pueden estar intentando esconderse en lo que consideran la neutralidad de los objetivos científicos, sin atender al modo en que se vayan a usar sus descubrimientos, sin molestarse a pensar siquiera para quién o para qué intereses están trabajando».[1] *En el nombre de la objetividad, según Freire, estos intelectuales «parecen analizar la sociedad que estudian como si no participaran en ella. En su celebrada imparcialidad, [parecen] acercarse al mundo como si llevaran guantes y mascarilla, para no contaminarlo ni resultar contami-*

1. Paulo Freire, *The politics of education: culture, power, and liberation*, Bergin & Garvey, South Hadley (MA), 1985, pág. 103.

nados».[2] Personalmente, añadiría que no solo llevan «guantes y mascarilla», sino anteojeras, que les impiden ver lo evidente.

Creo que no estoy demasiado de acuerdo con esa crítica posmoderna en contra de la objetividad. No debemos desdeñar la objetividad; al contrario, en nuestra persecución de la verdad tenemos que esforzarnos por ser objetivos.

Me parece razonable. Con mi crítica no pretendía rechazar la objetividad. Lo que sí resulta imprescindible es analizar la cobertura de objetividad que utilizan numerosos intelectuales para no incorporar en sus análisis una serie de factores poco convenientes, y que probablemente revela su complicidad con la eliminación de la verdad al servicio de la ideología dominante.

Así es. Hay que condenar sin tapujos la pretensión de objetividad, cuando funciona como un medio de distorsión y desinformación al servicio del sistema doctrinal. Esa postura es mucho más frecuente en las ciencias sociales, debido a que, en ellas, el mundo exterior impone unas constricciones especialmente débiles sobre los investigadores; la capacidad de comprensión es más reducida, y los problemas que se afrontan son mucho más oscuros y complejos. Como consecuencia, resulta mucho más sencillo ignorar todo lo que no interesa oír. Hay, por tanto, una diferencia muy marcada entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En el primer caso, los hechos se atestiguan en la naturaleza de una forma verificable, lo que dificulta que un investigador pueda ignorar los datos que contradicen sus hipótesis favoritas; es por ello que los errores no suelen perpetuarse. Como en las ciencias naturales pueden repetirse los experimentos, los posibles errores se descubren sin mayores problemas. Además, hay una disciplina interna que rige esa tarea intelectual. Aun así, está claro que ninguna investigación, por seria que sea, nos conducirá forzosamente a la verdad.

Pero volvamos al punto inicial: la escuela impide la difusión de verdades esenciales. Es la responsabilidad intelectual de los maestros —o de cualquier otra persona que se mueva en ese ámbito— intentar decir la verdad. Eso me parece indiscutible. Es un imperativo moral: averi-

2. Ibídem.

guar la verdad sobre las cuestiones más importantes, y difundirla lo mejor que uno pueda, y siempre al auditorio más adecuado. Porque ponerse a decirle la verdad al poder es malgastar el tiempo, literalmente, y ese intento puede ser, con frecuencia, una forma de cubrirse las espaldas. A mi modo de ver, desde luego, es una pérdida de tiempo irle con la verdad a Henry Kissinger o al director general de AT&T, o a otros que ejercen el poder en instituciones coercitivas: en la mayoría de los casos, ya la conocen, la verdad. Permíteme precisar lo que acabo de decir: cuando los que están en el poder se apartan de sus circunstancias institucionales —si es que lo hacen— y se convierten en seres humanos, en agentes morales, en ese caso podemos dirigirnos a ellos como al resto de las personas. Pero en su función como dirigentes, prácticamente no vale la pena, es una pérdida de tiempo. No es más útil comunicarle la verdad al poder que a los peores tiranos o criminales, que no dejan de ser personas, independientemente de lo terrible de sus actos. Así que decirle la verdad al poder no es ninguna tarea honrosa.

Lo que debemos procurarnos es un auditorio que importe. En el caso de la enseñanza, se trata de los estudiantes; no hay que verlos como un simple auditorio, sino como elemento integrante de una comunidad con preocupaciones compartidas, en la que uno espera poder participar constructivamente. Es decir, no debemos hablar *a*, sino hablar *con*. Eso es ya instintivo en los buenos maestros, y debería serlo en cualquier escritor o intelectual. Los estudiantes no aprenden por una mera trasferencia de conocimientos, que se engulla con el aprendizaje memorístico y después se vomite. El aprendizaje verdadero, en efecto, tiene que ver con descubrir la verdad, no con la imposición de una verdad oficial; esta última opción no conduce al desarrollo de un pensamiento crítico e independiente. La obligación de cualquier maestro es ayudar a sus estudiantes a descubrir la verdad por sí mismos, sin eliminar, por tanto, la información y las ideas que puedan resultar embarazosas para los más ricos y poderosos: los que crean, diseñan e imponen la política escolar.

Consideremos con más detalle qué significa enseñar la verdad y que todo el mundo aprenda a distinguir las verdades de las mentiras. Me parece que no requiere más que sentido común, el mismo sentido común que nos hace adoptar una postura crítica hacia los sistemas propagandísticos de las naciones que consideramos como enemigas. Antes sugerí que los más señeros intelectuales de nuestro país serían incapaces de nombrar ni uno solo de los bien conocidos disidentes de las tiranías con-

troladas por los Estados Unidos, como por ejemplo la de El Salvador. Sin embargo, estos mismos intelectuales sabrían proporcionarte una larga lista de disidentes de la antigua Unión Soviética. Y tampoco les supondría ningún problema el distinguir las mentiras, deformaciones e incongruencias que sirven para evitar que la población de los regímenes enemigos conozca la verdad. Pero esa capacidad crítica que utilizan para desenmascarar las falsedades difundidas en los estados «delincuentes» se esfuma cuando se trata de criticar a nuestro propio gobierno o a las tiranías que apoyamos. En el trascurso de la historia, las clases mejor formadas han respaldado mayoritariamente a los aparatos propagandísticos y, cuando se minimizan o se eliminan las desviaciones de la pureza doctrinal, la máquina de la propaganda suele lograr éxitos apabullantes. Hitler y Stalin lo sabían muy bien y, hasta el día de hoy, tanto las sociedades abiertas como las cerradas han procurado y recompensado la complicidad de la clase instruida.

Esta clase instruida ha sido considerada una «clase especializada», ya que es un grupo reducido de personas que analizan, ejecutan, toman las decisiones y mueven los hilos en el sistema político, económico e ideológico. Esta clase especializada suele representar un porcentaje ínfimo de la población, que tiene que recibir protección frente a la gran masa a la que Walter Lippmann dio el nombre de «rebaño desconcertado». Es una clase que desarrolla las «funciones ejecutivas», lo que significa que realizan la función de examinar, planear y establecer el «interés común» (ahora bien, con esta fórmula se refieren a los intereses de la clase de los hombres de negocios). A la gran mayoría de la población, esto es, al «rebaño desconcertado», le corresponde en nuestra democracia el rol de «espectadores», no el de «participantes en la acción», según el credo democrático liberal que Lippmann supo articular perfectamente. En nuestra democracia, cada cierto tiempo los miembros del «rebaño» tienen la posibilidad de participar en la aprobación de uno u otro líder, mediante un proceso conocido como «elecciones». Una vez han aprobado a este o a aquel miembro de la clase especializada, deben retirarse y convertirse de nuevo en espectadores.

Cuando el «rebaño desconcertado» intenta ampliar su papel como mero espectador, cuando la gente intenta participar en la acción democrática, la clase especializada reacciona en contra de lo que se pasa a denominar una «crisis de la democracia». Esa es la razón de que nuestras élites sientan tanto odio hacia los años sesenta, cuando varios gru-

pos de personas históricamente marginadas empezaron a organizarse y cuestionar la política de la clase de los especialistas, sobre todo la relativa a la guerra de Vietnam, pero también, en el ámbito interior, la política social.

Una de las posibles maneras de mantener el control sobre el «rebaño desconcertado» es adoptar la concepción de escuela que hemos visto antes, la que propuso la Comisión Trilateral: las escuelas son las instituciones responsables del adoctrinamiento de los jóvenes. Los miembros del «rebaño» tienen que ser rigurosamente adoctrinados en los valores e intereses de tipo privado y estatal-corporativo. Los que asimilen mejor esta educación en los valores de la ideología dominante y demuestren su lealtad al sistema doctrinal podrán, a la postre, entrar a formar parte de la clase especializada. El resto del «rebaño desconcertado», por el contrario, ha de ser mantenido a raya, de forma que no creen problemas, sean simples espectadores del desarrollo de la acción y no reflexionen sobre aquellos aspectos de la realidad que son de veras importantes. La clase instruida considera que es imprescindible para el «rebaño», porque este es demasiado estúpido como para gobernar sus asuntos por sí mismo y lo haría mal, actuaría de acuerdo con sus «concepciones erróneas». Cerca del 70 por 100 de los estadounidenses cree que la guerra de Vietnam no era correcta desde un punto de vista moral, pero, según la clase dominante, es necesario protegerlos de sus «concepciones erróneas», que los han llevado a oponerse a la guerra; tienen que acabar creyendo en la versión oficial, que indica que la guerra fue, sencillamente, un error.

Con miras a proteger al «rebaño desconcertado» de sí mismo y de sus «concepciones erróneas», las clases especializadas de las sociedades abiertas deben girar la vista sobre todo hacia las técnicas de propaganda, denominadas eufemísticamente «relaciones públicas». En los estados totalitarios, en cambio, controlas al «rebaño» colgando un martillo sobre sus cabezas: al que se mueva de su lugar, le chafas la cabeza. Pero en las sociedades democráticas no se puede confiar en la fuerza bruta para mantener la población a raya, así que, para controlar la opinión pública, hay que optar principalmente por la propaganda. En esta tarea de control de la opinión, la clase instruida resulta indispensable, y la escuela desarrolla una función crucial.

Tus afirmaciones sugieren —y, por mi parte, estoy de acuerdo— que en las sociedades abiertas la censura es un componente esencial de la

estructura de soporte de la propaganda, como intento de «controlar la opinión pública». Desde mi punto de vista, no obstante, la censura de las sociedades abiertas difiere sustancialmente de la que se ejerce en las sociedades totalitarias. Y lo que he observado en los Estados Unidos es que la censura no solo se manifiesta bajo una forma diferente, sino que también depende, en cierta medida, de una especie de autocensura. ¿Qué papel desempeñan la educación y los medios de comunicación en este proceso?

Eso que has denominado «autocensura» empieza, en realidad, a una edad muy temprana, mediante un proceso de socialización que es, a su vez, una forma de adoctrinamiento; el objetivo es promover la obediencia en sustitución del pensamiento independiente. La escuela funciona como un mecanismo más de esta socialización, y su meta es evitar que la gente haga preguntas importantes sobre las cuestiones importantes que les afectan directamente a ellos o bien a los demás. Es decir, en la escuela no se aprenden solo contenidos. Como te decía antes, si quieres convertirte en un profesor de matemáticas, no te limitas a aprender un montón de nociones matemáticas, sino que, además, aprendes cómo has de comportarte, cómo vestirte adecuadamente, qué tipo de preguntas puedes hacer, cómo encajar (en el sentido de amoldarte), etc. A la que seas demasiado independiente, o cuestiones demasiado a menudo el código de tu profesión, lo más probable es que te expulsen del orden de los privilegiados. De modo que uno se da cuenta muy rápido de que, para triunfar, hay que servir a los intereses del sistema doctrinal. Hay que estarse callado e instilar en los alumnos las creencias y los dogmas más útiles para los intereses de los que están de verdad en el poder. La clase de los hombres de negocios y sus intereses privados tienen un representante en las redes del estado corporativo. Y es que la escuela no es el único de tales sistemas de adoctrinamiento; hay otras instituciones que colaboran para reforzar el proceso. Piensa en los programas que nos echan por la televisión, por ejemplo: se nos propone que contemplemos una retahíla de *shows* que no nos exigen el esfuerzo de pensar, que deberían distraernos; pero su función, en realidad, es impedir que los espectadores comprendan sus verdaderos problemas o identifiquen sus verdaderas causas. Una de las maneras de afrontar una vida poco plena es comprar sin parar; pues bien, estos programas se dedican a explotar las necesidades emocionales de los espectadores y los mantienen desco-

nectados de las necesidades de los demás. A medida que se van desmantelando los espacios públicos, las escuelas y los relativamente pocos espacios públicos que quedan trabajan para convertirnos en buenos consumidores.

Eso encaja con la sacralización del individualismo.

Personalmente, creo que no; yo no lo veo como una forma de individualismo. El individualismo —el individualismo bien entendido— requiere cierto grado de responsabilidad ante las propias acciones; pero este modelo de entretenimiento está vacío y solo nos mueve a amoldarnos al sistema y actuar ante todo por razones emocionales o impulsivas. Y el impulso que está en juego es el de consumir más, el de ser buenos consumidores. En este sentido, tanto la escuela como los medios de comunicación y la cultura popular están divididos entre los que razonan —esto es, los que diseñan y toman las decisiones en nuestra sociedad— y el resto de la gente. Para lograr su cometido, estas personas que razonan y se adhieren a la clase especializada tienen que crear «ilusiones necesarias» y «simplificaciones en gran escala y de gran poder emotivo» (por decirlo en palabras de Reinhold Niehbuhr), para que el «rebaño desconcertado» —la masa ingenua y mentecata— no se vea aturdido por la complejidad de los problemas reales que, además, tampoco sabría cómo resolver. El objetivo es mantenernos apartados de las cuestiones reales, y apartados unos de otros; así, se hace necesario aplastar cualquier intento de organización o de establecimiento de vínculos colectivos. Al igual que en los estados totalitarios, en las sociedades abiertas también existe la censura. Lo que sucede es que adopta formas diferentes: se consideran inaceptables las preguntas ofensivas y embarazosas para el sistema doctrinal, y se suprime la información inconveniente. No hay que hacer un gran esfuerzo para llegar a esta conclusión; basta con analizar sin prejuicios lo que se recoge en los medios de comunicación y lo que se deja fuera, por ejemplo; o con intentar comprender sinceramente qué información se permite en la escuela y cuál no. No hace falta ser un superdotado; creo que cualquier persona corriente puede darse cuenta de que los medios manipulan y censuran la información que no es de su agrado. Probablemente requiere algún trabajo el llegar a descubrir las deformaciones y las supresiones en la información que recibimos, pero basta con el deseo de conocer la verdad.

No hay razón por la que los intelectuales no puedan adoptar la misma postura respecto a nuestros protectorados en Latinoamérica que respecto a los dominios enemigos. Lo único que hace falta es la voluntad de emplear la misma capacidad crítica y el mismo sentido común que aplicamos al analizar las atrocidades cometidas por nuestros enemigos. Si la escuela fuera un auténtico servicio público y general, nos proporcionaría técnicas de autodefensa, pero eso quiere decir enseñar la verdad sobre el mundo y la sociedad. Y se dedicaría, con mucha más asiduidad y energía, justamente al tipo de cuestiones de las que estamos tratando, para que las personas que crecen dentro de una sociedad abierta y democrática desarrollen técnicas de autodefensa no solo contra los aparatos propagandísticos de las sociedades totalitarias controladas por el estado, sino también contra los sistemas privados de propaganda —esto es, la escuela, los medios de comunicación, la prensa que selecciona los temas de discusión y la de la intelectualidad—, que controlan casi del todo el desarrollo de la tarea educativa. Es por ello que los que ejercen este control sobre el aparato educativo merecen ser considerados como miembros de la clase de los «comisarios»; los comisarios, en efecto, son intelectuales que trabajan fundamentalmente para reproducir, legitimar y mantener el orden social dominante, que les reporta beneficios. Los auténticos intelectuales, por el contrario, tienen la obligación de investigar y difundir la verdad sobre los temas más significativos, sobre los temas que importan. Este punto no deja de ser percibido por los intelectuales occidentales, que no tienen problema en aplicar principios morales elementales en aquellos casos que atañen a los enemigos oficiales.

Se trata de una especie de ética selectiva. Y al participar en ella, en esta ética selectiva, los comisarios culturales encuentran un fundamento lógico para justificar su complicidad con lo que Theodor Adorno denominó «un seco negarse a ver». Yo he vivido bajo dos dictaduras muy diferentes, la de Antonio Salazar en Portugal y la de Franco en España, y la censura, en esos regímenes totalitarios, era clara e inconfundible, y estaba bajo control policial. Mi experiencia aquí, en la democracia estadounidense, indica que la censura es mucho más difusa y que, habitualmente, se ejerce subliminalmente o por parte de los colegas de tu propio contexto laboral (sin excluir a los estudiantes).

A vueltas con la democracia, ¿no te parece irónico que en los Esta-

dos Unidos (que se precian de ser la sociedad más democrática y ejemplar del Primer Mundo) la escuela siga siendo de lo más antidemocrática? Me refiero a que es antidemocrática no solo por sus estructuras de gobierno (los directores, por ejemplo, son nombrados desde arriba, y no elegidos por votación), sino también porque reproduce la ideología dominante que, a su vez, desincentiva la reflexión crítica e independiente. Vista, pues, la naturaleza antidemocrática de nuestra escuela, ¿cómo podría lograr la educación ser un estímulo para el pensamiento crítico, en lo que respecta a la creatividad, la curiosidad e incluso las necesidades de los estudiantes?

Han existido varias alternativas a la actual escuela antidemocrática que acabas de mencionar. Por mi parte, yo tuve la fortuna de asistir a una escuela basada en genuinos principios democráticos, en la que se dejaba sentir vivamente la influencia de John Dewey y se motivaba a los alumnos para que estudiaran e investigaran, como proceso para descubrir la verdad por sí mismos. Lo cierto es que si una escuela tiene que imponer la enseñanza de los principios democráticos, hay razón para sospechar; cuanto más antidemocrática resulta ser una escuela, más necesidad siente de enseñar los ideales de la democracia. Como te decía antes, si la escuela fuera verdaderamente democrática —en el sentido de dar la oportunidad a sus alumnos de que experimenten en la práctica qué es la democracia—, no le sería necesario adoctrinarlos con tópicos sobre la democracia. Por esa razón, me siento especialmente afortunado porque mi experiencia escolar no consistiera en memorizar mentiras sobre las maravillas de nuestro sistema. Lástima que la influencia de Dewey no se extendiera a todas las escuelas, aunque fue una figura de vanguardia del liberalismo norteamericano y uno de los principales filósofos del siglo XX.

También recuerdo que, en mi adolescencia, fui consejero de un campamento de verano y pude ser testigo, en numerosas ocasiones, del éxito de un proceso de adoctrinamiento similar a la recitación del Juramento de Fidelidad al que te has referido antes. Recuerdo que los niños se emocionaban de veras, y algunos incluso lloraban, mientras recitaban himnos patrióticos hebreos que ni siquiera comprendían. Probablemente algunos lo entendían todo al revés, pero eso no frenaba su emoción. La verdadera enseñanza democrática, entonces, no consiste en insuflar patriotismo en los alumnos o hacerles memorizar los ideales de la demo-

cracia; sabemos, además, que ese no es el camino para aprender nada. El aprendizaje auténtico se produce cuando se invita a los estudiantes a que descubran por sí mismos la naturaleza de la democracia y su funcionamiento.

La mejor manera de descubrir cómo funciona una democracia real es poniéndola en práctica; pero lo cierto es que las escuelas no lo hacen demasiado bien. Para medir el grado de democracia real, ya sea en la escuela o en la sociedad, podemos mirar hasta qué punto la teoría se acerca a la práctica; y sabemos que tanto en la escuela como en la sociedad están separadas por un abismo. En una democracia, según la teoría, todos los ciudadanos pueden participar en las decisiones que afectan su vida, por ejemplo determinando cómo ha de obtener y cómo ha de usar el estado sus ingresos, qué política exterior debe promover, etcétera. Un ejemplo muy sencillo bastará para percibir el abismo que disocia la teoría —según la cual todos podemos participar en las decisiones que afectan nuestra vida— de la práctica, en la que la concentración del poder en el gobierno sirve para restringir las posibilidades de que un ciudadano o un grupo controle sus propios asuntos e, igualmente, para establecer el tipo de política exterior que se pretende seguir.

Así que pensemos por un momento en los bombardeos actuales de Kosovo e Iraq. La situación de Kosovo antes del bombardeo del 24 de marzo [de 1999] era —y aún me quedaré corto— terrible. El 24 de marzo empezó el bombardeo y, al cabo de unos pocos días, había miles de refugiados huyendo de Kosovo, así como un incremento brutal de las violaciones, masacres y torturas; ello fue una consecuencia directa —pero anunciada— de ese bombardeo, que se quiso presentar como una intervención humanitaria para proteger a los habitantes de etnia albanesa. Creo que salta a la vista que, si la situación era terrible antes del bombardeo, hoy es catastrófica; si la perspectiva en Kosovo ya era terrible, ha tomado proporciones catastróficas después de la «intervención humanitaria» de la OTAN. La OTAN fundamentó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos su derecho a la «intervención humanitaria» para detener, supuestamente, la limpieza étnica de los albaneses. Ahora bien, se ha visto que el bombardeo de la OTAN provocó un agravamiento dramático e inmediato de la limpieza étnica y el genocidio en Kosovo; y provocó igualmente, como era predecible, un incremento drástico de las matanzas, las violaciones y la tortura de los habitantes de etnia albanesa. De hecho, el comandante general de la OTAN, Wesley

Clark, ya había informado a la prensa de que este sería un efecto «perfectamente predecible» de los bombardeos.

Si aplicáramos el mismo razonamiento que ha servido para justificar la «intervención humanitaria» en Kosovo, la OTAN debería bombardear también otros países, como Colombia, por ejemplo, e incluso Turquía, que es uno de sus estados miembro. En Colombia, la media anual de asesinatos políticos cometidos por el gobierno y su aparato paramilitar, según las estimaciones del Departamento de Estado, está en el mismo nivel que en Kosovo antes del bombardeo de la OTAN, y ha generado por encima del millón de refugiados, que intentan escapar a esas atrocidades. Colombia ha recibido de los Estados Unidos más armas y entrenamiento que ningún otro país occidental, a pesar de que la violencia no ha dejado de incrementarse en la década de los noventa, y esa ayuda sigue aumentando ahora con la excusa de una «guerra contra la droga». No hay un solo observador serio que se trague esta excusa. Y la administración de Clinton ha sido singularmente generosa en su elogio del presidente César Gaviria, cuyo mandato es responsable de «un nivel de violencia atroz», según las organizaciones pro derechos humanos.

En el caso de Turquía, el genocidio de los kurdos a lo largo de la década de los noventa ha superado en mucho lo conocido en Kosovo antes del bombardeo de la OTAN. Alcanzó su máximo a mediados de los noventa; una prueba de ello es que, entre 1990 y 1994, más de un millón de kurdos huyeron del campo a Diyarbakir, la capital oficial del Kurdistán, mientras el ejército turco destruía su región. En 1994 se lograron dos récords negativos: fue «el año de la represión más dura en las provincias kurdas», según informó Jonathan Randal desde el mismo lugar de los hechos, y fue así mismo el año en que Turquía se convirtió en «el mayor importador individual de armamento pesado de fabricación estadounidense y, con ello, en el comprador de armas más importante del mundo». Cuando las asociaciones pro derechos humanos denunciaron que Turquía estaba utilizando los aviones estadounidenses para bombardear los pueblos kurdos, la administración de Clinton supo encontrar la manera de saltarse las leyes que exigían la suspensión del suministro armamentístico. Es lo mismo que hicieron con Indonesia y otros muchos países. Así que, si aplicáramos de nuevo los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los que la OTAN justificaba su bombardeo de Kosovo, a la OTAN le sobrarían razones para bombardear Washington.

Examinemos ahora el ejemplo de Laos. Durante muchos años, se ha matado a miles de personas, sobre todo niños y campesinos pobres, en la Llanura de la Discordia, en el norte del país, que aparentemente ha sido el escenario de un intensísimo bombardeo en contra de objetivos civiles, probablemente el más cruel de la historia. Y el ataque rabioso de Washington en contra de esta sociedad de campesinos pobres tenía muy poco o nada que ver con las guerras de la región. La peor época comenzó en 1968, cuando Washington (empujado por la presión popular, pero también por la de los hombres de negocios) se vio obligado a entablar conversaciones y a finalizar el bombardeo regular del norte de Vietnam; en ese momento, Henry Kissinger y Richard Nixon decidieron trasladar el bombardeo a Laos y Camboya. Gran parte de las muertes son provocadas por las *bombies*, pequeñas minas antipersona que son mucho más dañinas que las minas de tierra y están diseñadas específicamente para matar personas, sin afectar a vehículos ni edificios. Kissinger y Nixon colmaron la Llanura con cientos de millones de estos artilugios mortales, que, según el propio fabricante, Honeywell, no siempre explotan a la primera, sino que fallan en un 20 o 30 por 100 de los casos. Es difícil saber si ello se debe a un pésimo control de calidad o, tal vez, a un plan para ir asesinando a los civiles con acciones retardadas. Las minas antipersona son solo una pequeña parte de la tecnología usada, que incluía igualmente unos misiles innovadores, capaces de hallar la entrada de las cuevas en que intentaban refugiarse las familias laosianas.

Estas minas causan un número de bajas que se estima entre varios centenares al año y «una cifra total anual de 20.000» laosianos damnificados (de los cuales mueren más de la mitad), según reportó Barry Wain, el veterano corresponsal del *Wall Street Journal* en Asia, en un artículo aparecido en la edición asiática. De modo que, incluso si nos atenemos a las cifras más conservadoras, la simple crisis del año pasado es comparable a la situación de Kosovo antes de los bombardeos. Pero la muerte, además, se encarniza especialmente con los niños, según los informes del Comité Mennonita Central, que ha estado allí desde 1977, trabajando para aliviar en lo posible las continuas atrocidades.

Los medios de comunicación estadounidenses aplaudieron la intervención de la OTAN en Kosovo —que debía contener la limpieza étnica de los albaneses—, aun cuando el bombardeo no logró más que intensificar esta y otras atrocidades en su contra. Pero en el caso de Laos, la reacción de los Estados Unidos fue no hacer nada, a pesar de que somos

directamente responsables de las matanzas. Aquí no abrieron la boca ni los medios ni los comentaristas, siguiendo la designación oficial de la guerra contra Laos como «guerra secreta»; es decir, era una guerra perfectamente conocida, pero silenciada, al igual que se hizo con la guerra contra Camboya a partir de 1969. El nivel de autocensura que se alcanzó entonces fue extraordinario, pero el de hoy no es inferior. La importancia de este ejemplo ciertamente chocante es clara: mientras que los medios estadounidenses exultaban de alegría cuando el Tribunal Internacional acusó a Slobodan Milosevic de crímenes contra la humanidad, Kissinger, uno de los arquitectos de la matanza de Laos, sigue en libertad y es celebrado como un «experto» cuyas «opiniones» sobre el bombardeo de Kosovo eran seguidas con avidez por los medios de comunicación.

En el caso de Iraq, las atrocidades son igualmente incontables, con numerosos civiles asesinados en una guerra biológica singularmente cruel. En 1996, en un programa de la televisión nacional, se le preguntó a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, qué tenía que decir ante la matanza de medio millón de niños iraquíes en tan solo cinco años; pues bien, respondió que «es un precio que vale la pena pagar». Según las estimaciones actuales, todavía son asesinados cerca de 4.000 niños cada mes y, al parecer, el precio aún «vale la pena».

Un análisis más detallado de la guerra del Golfo nos descubriría los mismos principios rectores de la intervención «humanitaria» de los Estados Unidos, o de la que defiende a las «democracias» de todo el mundo. Los medios de comunicación y las clases instruidas cumplieron bien su labor y se limitaron a repetir la afirmación del presidente George Bush [padre], según el cual «América permanece en el mismo lugar que siempre: en contra de la agresión, en contra de los que desearían sustituir el imperio de la ley por el uso de la fuerza». Da igual que pocos meses antes hubiera invadido Panamá, violando esos mismos principios «en contra de la agresión, en contra de los que desearían sustituir el imperio de la ley por el uso de la fuerza». El presidente Bush era entonces el único jefe de estado que había sido condenado por el Tribunal Internacional de Justicia debido al «uso ilegal de la fuerza» (en la guerra de Washington contra Nicaragua). Esa pretensión de Bush, ese elevado principio moral, no son más que una burla, porque ni los Estados Unidos ni ningún otro país fueron al golfo a defender principio alguno. La reacción contra Sadam Husein, que no tenía precedente, no se debió a

su brutal agresión, sino que a que pisó a quien no debía, como había hecho Manuel Noriega unos años antes. Los dos son criminales que han sido amigos del presidente Bush. Sadam Husein es un gángster y un asesino, pero ya lo era mucho antes de la guerra del Golfo, cuando era nuestro amigo y uno de nuestros mejores socios comerciales. Está claro que su invasión de Kuwait fue una salvajada, pero no alcanzó el nivel de las múltiples salvajadas que había cometido antes con el apoyo de los Estados Unidos, y fue uno más entre los muchos crímenes similares que han dirigido los Estados Unidos y sus aliados.

Así sucedió, por ejemplo, con la invasión y anexión de Timor oriental por parte de Indonesia, que alcanzó proporciones casi genocidas; murieron 700.000 personas —cerca de una cuarta parte de la población—, lo que significa una matanza superior incluso a la emprendida por Pol Pot en esos mismos años. Pues bien, tanto los Estados Unidos como sus aliados prestaron su apoyo a estos crímenes. El ministro de Asuntos Exteriores de Australia justificó la aquiescencia de su país a la invasión y anexión de Timor afirmando, simplemente, que «el mundo es un sitio ciertamente injusto, repleto de ejemplos de anexiones por la fuerza». Ahora bien, cuando Iraq invadió Kuwait, su gobierno denunció la agresión declarando con solemnidad que «ningún gran país puede invadir a un país vecino más débil y salir indemne de ello». El objetivo real de la política de los Estados Unidos en el golfo era que los incomparables recursos energéticos del Oriente Próximo siguieran bajo nuestro control y que los enormes beneficios que generan ayudaran a potenciar la economía de los Estados Unidos y su cliente británico.

Es triste, desde luego, que aunque los hechos que has mencionado sean tan obvios, la clase instruida de los Estados Unidos —con la excepción de una pequeña minoría—, haya sido incapaz de relacionar entre sí los diferentes acontecimientos históricos, para desarrollar una comprensión rigurosa de nuestro mundo. El vicepresidente Dan Quayle cometió un lapsus freudiano que describe perfectamente la Guerra, anunciando la «emotiva victoria de las fuerzas de agresión». Y al presidente Bush se le escapó un lapsus similar durante una entrevista de Natalie Jacobson, la directora de informativos del Canal 5 de Boston; refiriéndose a la guerra del Golfo, Bush afirmó que «hemos completado con éxito nuestra agresión», en lugar de lo que sin duda quería de-

cir, «hemos completado nuestra misión». Estas palabras aparentemente involuntarias de Bush y Quayle dejan al desnudo su pedagogía de las grandes mentiras, hasta el punto de que sus afirmaciones reflejan a la perfección la esencia de una frase de José Ortega y Gasset. Según este, lo que conocemos como la civilización, si quedara «abandonada a sus propios recursos» y a la merced de comisarios *del estilo de Kissinger, vería el renacer del primitivismo y la barbarie.*

Tus ejemplos sobre la barbarie en Kosovo, en Turquía, en Colombia y en Laos apuntan justamente a la barbarie de la civilización. En muchos casos, el alto grado de complejidad técnica que ha desarrollado esta «civilización» se ha usado de maneras a cuál más bárbara, como atestiguan las cámaras de gas antisemitas y los bombardeos de Laos y Camboya. No me parece que sea una civilización ilustrada la que se complace en devolver a Iraq a la época preindustrial, en tanto que asesina a decenas de miles de víctimas inocentes, mujeres y niños inclusive, y deja en el poder a Sadam Husein, que es nuestro hombre en la guerra.

La expectativa más generalizada prevé que la intervención militar estadounidense mantendrá en el poder a este tirano y asesino iraquí, quien continuará desarrollando su programa armamentístico, a la vez que pone trabas a los observadores internacionales. Y es necesario recalcar también que los peores crímenes de Sadam fueron cometidos cuando era un aliado y socio comercial destacado de los Estados Unidos, y que, inmediatamente después de ser expulsado de Kuwait, los EE.UU. miraron en silencio cómo volvió las matanzas en contra de los rebeldes iraquíes —primero los chiíes, luego los kurdos—, llegando incluso a negarles el acceso a las armas capturadas a Iraq. La historia oficial no acostumbra a presentar una descripción ajustada de lo que verdaderamente sucede; y tampoco crea estructuras que permitan descubrir la verdad. Es por ello que una educación cuya meta sea lograr un mundo más democrático debería proporcionar a sus estudiantes herramientas críticas con las que trazar relaciones entre los acontecimientos que, finalmente, desenmascaren las mentiras y el engaño. En lugar de adoctrinar a los estudiantes con mitos sobre la democracia, la escuela debería comprometerlos en la práctica de la democracia.

Me parece poco probable que la escuela cese de adoctrinar a los es-

tudiantes mediante mitos, puesto que es precisamente la propagación de mitos el medio que utiliza la ideología dominante para intentar acallar la expresión de una cultura democrática plena, y mantener así la actual hegemonía económica y cultural. Coincido contigo en que la escuela debe comprometer a los estudiantes en la práctica de la democracia; sin embargo, para lograr eso —como ya has indicado en numerosas ocasiones—, tiene que dotar a los alumnos de instrumentos críticos que les permitan extraer el contenido ideológico de los mitos. Solo así empezarán a entender, por ejemplo, por qué el maestro y el director de David Spritzler, que habían invertido tiempo y dedicación en el sistema doctrinal hegemónico, llegaron incluso a sacrificar los propios principios del Juramento de Fidelidad con tal de impedir que Spritzler viviera en la verdad; y es que una persona que pretenda vivir en la verdad representa una auténtica amenaza para el sistema doctrinal dominante y debe ser eliminada o, cuando menos, neutralizada. Por ello, no debería sorprendernos que tanto el maestro como el director procuraran tan afanosamente que Spritzler no pusiera al descubierto la hipocresía y las diferencias de clase de nuestra supuesta sociedad sin clases.

El mito de que vivimos en una sociedad sin clases es un puro chiste, pero hay mucha gente que se lo cree. Mi hija, que enseña en una facultad estatal subvencionada, me cuenta que la mayoría de sus estudiantes no muestran ningún signo de conciencia de clase y se consideran de clase media.

El propio discurso académico parece apuntar a esta falta de conciencia de clase. En los medios de comunicación aparece muchas veces el concepto de clase trabajadora, *y también el de* clase media *(en titulares como «Rebaja fiscal para la clase media»), pero nunca verás que se mencione ninguna* clase alta *o* clase dominante.

No encontrarás ninguna referencia a la *clase dominante*, porque se eliminan sistemáticamente, eso es todo. Y los alumnos de mi hija, que son de clase trabajadora, no se consideran miembros de la clase trabajadora. El adoctrinamiento funciona, desde luego.

La élite dominante, ayudada por la intelligentsia, *no se ha parado en barras a la hora de crear mecanismos que perpetúen el mito de que*

los Estados Unidos son una sociedad sin clases. A pesar de toda la controversia sobre el fracaso de la educación en este país, no se suele mencionar una de las variables fundamentales: la clase social. La clase es un factor determinante del resultado de la escolarización, pues la mayoría de los estudiantes que fracasan proceden de las clases inferiores. Sin embargo, los educadores evitan religiosamente el uso del factor clase en sus análisis y aseveraciones; en lugar de eso, han creado toda suerte de eufemismos como «marginalidad económica», estudiantes «en situación desventajosa» o «de riesgo», etc., para evitar llamar por su nombre a la realidad de la opresión clasística. Y como optes por incorporar el factor clase en tus propios análisis, te acusarán de inmediato de estar promoviendo una guerra de clases. Seguro que recuerdas aquella campaña presidencial de 1988, en la que George Bush censuró a su oponente demócrata afirmando que «No pienso tolerar que ese gobernador liberal divida a esta nación ... Eso estará bien para las democracias europeas o para cualquier otro. No sirve para los Estados Unidos de América. La clase social no nos va a dividir ... Somos el país de los grandes sueños, de las grandes oportunidades, del juego limpio, y este intento de dividir América en clases va a fracasar, porque el pueblo americano sabe que somos un país muy especial, porque cualquiera, si se le da una oportunidad, puede triunfar y realizar el sueño americano».

Sí, sin duda es un país muy especial: si eres rico. Por mencionar solo un ejemplo actual, fíjate en el sistema tributario, que cada vez es menos progresivo, de forma que enriquece a los ricos mediante un importante descuento fiscal y los enormes subsidios que, tradicionalmente, han recibido las corporaciones empresariales. Bush tiene razón al mencionar la guerra de clases. Pero es una guerra de clases concebida para aplastar aún más a los pobres. Todos los indicadores nos recuerdan que la miseria infantil sigue siendo muy alta en nuestro país, y la malnutrición se ha visto agravada por los programas de defensa de los «valores familiares». Este asalto al estado del bienestar pretende seguir machacando a los pobres, a las madres del bienestar, a todo el que necesite ayuda, mientras que no se toca a la poderosa niñera, subvencionando a las corporaciones con trasferencias ingentes de capital. No hay duda de que tenemos un estado del bienestar, pero del bienestar de los ricos. Y si quieres ayudar a mantener la buena marcha de este estado del bienestar para

los ricos, hace falta que desarrolles una plena conciencia de clase: la de pertenecer a la clase de los hombres de negocios. El resto de la gente tiene que estar convencida de que vive en una sociedad sin clases. Y la escuela, desde siempre, ha desempeñado una función clave en la pervivencia de este mito.

2

Democracia y educación*

El título que se me propuso para esta conferencia —y me alegra poder hablar sobre este tema— es el de «Democracia y educación». Este sintagma, *democracia y educación*, me trae de inmediato a la memoria la vida, los escritos y la actuación de John Dewey, uno de los pensadores más importantes de los últimos cien años, quien dedicó la mayor parte de su reflexión y su tiempo a estos asuntos. Supongo que debería advertirles que me mueve un interés especial por la obra de Dewey. Sus ideas ejercieron una gran influencia sobre mí en mis años de formación (y, de hecho, fue así desde que tenía yo unos dos años, por varias razones en las que no entraré aquí). Durante la mayor parte de su vida —en sus últimos años se tornó algo más escéptico— Dewey parece haber considerado que una reforma de los primeros niveles de la educación podía provocar cambios sociales significativos. Podía abrir el camino a una sociedad más justa y libre, una sociedad en la cual, citando al propio Dewey, «el objetivo último de la producción no sea la producción de bienes, sino la producción de seres humanos asociados entre sí en términos de igualdad». Este compromiso básico, que recorre toda la obra y el pensamiento de Dewey, choca con las dos corrientes directrices de la vida intelectual y social moderna. Choca, en efecto, con una corriente muy fuerte en su día —recordemos que Dewey escribía sobre ello en los años veinte y treinta—, relacionada con las economías dirigidas de la Europa occidental; esto es, con los sistemas creados por Lenin y Trotsky y convertidos en una monstruosidad aún mayor por Stalin. La segunda co-

* «Democracy and education», conferencia pronunciada el 19 de octubre de 1994 en la Universidad de Loyola, en Chicago.

rriente la constituye la sociedad capitalista, industrial y estatal, que se estaba construyendo en los Estados Unidos y numerosos países occidentales, en donde el gobierno efectivo lo detenta el poder privado. Estos dos sistemas se asemejan en varios aspectos esenciales, incluidos algunos ideológicos. Los dos fueron —y uno de ellos lo sigue siendo— terriblemente autoritarios en sus principios fundamentales; y los dos se oponían radical y enérgicamente a una tercera tradición de pensamiento: la tradición libertaria de izquierdas. Esta tradición deriva de los valores de la Ilustración, e incluía en esos años perfiles muy diversos: liberales progresistas del estilo de Dewey, socialistas independientes como Bertrand Russell, líderes marxistas (sobre todo, los antibolcheviques) y, naturalmente, socialistas libertarios y varios movimientos anarquistas, sin olvidar a la mayoría del movimiento sindical y otros sectores populares.

Esta izquierda independiente, en la que estaba integrado Dewey, hunde sus raíces en el liberalismo clásico. A mi modo de ver, procede justo de este liberalismo, y se opone frontalmente a la corriente absolutista formada por las instituciones y el pensamiento tanto del estado capitalista como del socialista. Incluyo en este grupo la clase ciertamente extrema de absolutismo que aquí, en los Estados Unidos, practican los denominados «conservadores», con un uso del término que, si levantaran la cabeza, hubiera despertado la risa de Orwell y la indignación de cualquier conservador auténtico (suponiendo que se pueda encontrar alguno).

No hará falta insistir en que, por decirlo suavemente, no es este el panorama que se suele describir por norma general; pero tiene al menos una ventaja: es exacto. Intentaré explicarlo.

Permítanme volver a uno de los temas centrales en Dewey, el ya citado de que el objetivo último de la producción no ha de ser la producción de bienes, sino la de seres humanos que se asocien entre sí en una relación de igualdad. Ello incluye, naturalmente, la educación, que fue una de sus preocupaciones más constantes. El objetivo de la educación —citando ahora a Bertrand Russell— es «lograr que se perciba el valor de la realidad ajena a la dominación» con miras a crear «ciudadanos sabios de una comunidad libre» y estimular una combinación de ciudadanía, libertad y creatividad individual. Ello significa que contemplamos a un niño «del mismo modo que un jardinero contempla un árbol de pocos años, esto es, como algo que posee una determinada naturaleza intrínseca, que lo hará desarrollarse hasta adquirir una forma admirable, siempre que se le dé el suelo, el aire y la luz adecuados». De hecho, por

mucho que Dewey y Russell estuvieran en desacuerdo en numerosos temas —y lo estaban—, ambos coincidían en lo que Russell denominó la «concepción humanística», de raigambre ilustrada: la idea de que la educación no ha de entenderse como el proceso de llenar de agua un recipiente, sino más bien el de ayudar a que una flor crezca según su propia naturaleza. La idea consiste, en otras palabras, en proporcionar las circunstancias en las que se puedan desarrollar las diferentes manifestaciones de la creatividad. Se trata de una idea del siglo XVIII, recuperada a la par por Dewey y Russell.

Ambos autores compartían también la convicción de que estas ideas rectoras, heredadas de la Ilustración y el liberalismo clásico, tenían una fuerza revolucionaria, y así lo recalcaron en sus escritos (de la primera mitad de este siglo). Si se llevaran a la práctica, estas ideas podrían crear seres humanos libres, cuyos valores no serían ya el acaparamiento y la dominación, sino la asociación libre en términos de igualdad, de distribución equitativa, de cooperación, de participación igualitaria en la realización de unos objetivos comunes, que se han determinado democráticamente. Los dos sentían simple desprecio por lo que Adam Smith había llamado la «máxima abyecta de los señores de la humanidad: todo para nosotros, y nada para los demás»; sin embargo, hoy se nos enseña a sentir admiración y devoción por este principio rector, ya que los valores tradicionales se han debilitado por culpa de un ataque incesante e implacable, liderado, en las décadas más recientes, por los denominados «conservadores».

Tomémonos un tiempo para percibir el alcance verdaderamente radical de este conflicto de valores entre, por una parte, la concepción humanística que procede de la Ilustración y se continúa en figuras señeras del siglo XX como Dewey y Russell y, por otra parte, la doctrina que se impone hoy, la doctrina que Adam Smith había despreciado por ser una «máxima abyecta». También la había denunciado la prensa de clase trabajadora, hace ahora más de un siglo, condenando lo que se llamó el «nuevo espíritu de la época: hazte rico, olvídate de todo menos de ti mismo» (la misma «máxima abyecta» de la que abominaba Smith, por tanto). Resulta bastante significativa la evolución de estos valores, puesto que los de un pensador precapitalista como Adam Smith —quien recalca la empatía, el objetivo de la igualdad perfecta y el derecho inalienable de los hombres a un trabajo creativo— contrastan de forma llamativa con los valores actuales, los de quienes defienden el «nuevo espíritu de la época» y, en ocasiones, llegan a invocar desvergonzadamente el

nombre de Adam Smith. Valga como ejemplo uno de los ganadores del Nobel de economía, James Buchanan, quien ha escrito que lo que todos nosotros buscamos «en una situación ideal» es «dominar un mundo de esclavos». Por si no lo sabían, eso es lo que persiguen todos ustedes, un objetivo que a Adam Smith le hubiera parecido sencillamente enfermizo.

Por cierto, el mejor libro que conozco sobre el pensamiento real de Adam Smith, llamado *Adam Smith and his legacy for modern capitalism*, es obra de una profesora de esta casa, de Loyola, la profesora Patricia Werhane. Claro está que, en la medida de lo posible, siempre es mejor leer directamente el texto original.

Una de las demostraciones más evidentes del «nuevo espíritu de la época» y sus valores son los comentarios de estos días en la prensa en torno a las dificultades con que topamos en nuestro proyecto de *aupar* a la gente de la Europa oriental. Como sabrán, son nuestros nuevos beneficiarios, y les estamos haciendo extensivos los mismos cuidados maternales que hemos prodigado a nuestros varios pupilos de tantas partes del mundo, desde Latinoamérica a las Filipinas. Los resultados que hemos obtenido en esas cámaras de los horrores son terriblemente claros y coherentes, pero, por algún raro milagro, no se ha sacado la lección de quiénes somos y qué hacemos. Podríamos preguntarnos por qué ha sucedido así. Pero el caso es que nos hemos decidido a aupar a esa gente, que se ha liberado por fin del comunismo, del mismo modo que hemos estado liberando a los haitianos y a los brasileños y a los guatemaltecos y a los filipinos y a los nativos americanos y a los esclavos del África, entre tantos otros. El *New York Times* está publicando una interesante serie de artículos sobre todos estos problemas, que permiten darse cuenta de qué valores imperan actualmente. Ha aparecido, por ejemplo, un artículo sobre la Alemania del Este, escrito por Steven Kinzer. Kinzer comienza citando a un párroco que había estado al frente de las protestas populares en contra del régimen comunista, y que expresa su preocupación ante los cambios sociales. Afirma que «la competencia sin freno y la ambición de dinero están destrozando nuestro sentido comunitario, y casi todo el mundo es presa del miedo, de la depresión o de la inseguridad». Entretanto, la gente se va formando en el nuevo espíritu de la época, que inculcamos a los pueblos retrasados.

El siguiente artículo de la serie trataba del éxito fulgurante de Polonia, un país que está hoy en boca de todos, y lo escribió Jane Perlez. El titular dice «Doble velocidad en el camino del capitalismo». El meollo

de la historia consiste en que hay algunos que ya se han enterado de qué va la cosa, mientras que otros siguen retrasados. Perlez da ejemplos de buenos y de malos estudiantes. Pues bien, el pupilo más aplicado posee una pequeña fábrica, un «ejemplo vigoroso» que resume lo mejorcito de la moderna Polonia capitalista. En ella se producen vestidos de novia de diseño exquisito, que solo pueden adquirir los alemanes ricos y la minúscula porción de polacos archimillonarios. Todo ello en un país en el que los índices de pobreza se han duplicado desde la instauración de las reformas, según refleja un estudio del Banco Mundial, y los ingresos han caído cerca de un 30 por 100. Ahora bien, el que tenga hambre o le falte trabajo siempre puede deleitarse contemplando esos vestidos exquisitos en los escaparates, y percibir así el nuevo espíritu de la época. Es comprensible, por tanto, que se elogie el triunfo de Polonia, que va acercándose a nuestros logros.

El artículo cede luego la palabra a otra buena estudiante, que aclara que «hay que conseguir que la gente lo entienda: han de luchar por sí mismos, no se pueden apoyar en nadie». Está describiendo el objetivo de un cursillo de formación a su cargo, con el que intenta insuflar los valores estadounidenses en personas cuyo cerebro había sido lavado. Les habían lavado el cerebro mediante eslóganes del tipo de «Trabajo en las minas. ¿Quién hay mejor que yo?». Pues bien, eso no sirve,.tienen que quitárselo de la cabeza; hay mucha gente mejor que los mineros, incluyendo a los que saben diseñar vestidos de boda para los alemanes ricos, ya que ese es el ejemplo que se ha escogido para ilustrar el triunfo de los valores de nuestro país. Aparte quedan los fracasados, los que marchan a una velocidad lenta en el camino del capitalismo. Perlez escoge como muestra de ellos un minero de cuarenta y cuatro años, «sentado en el salón de su casa —un salón tapizado de madera—, mientras contempla los frutos de su trabajo en tiempos del comunismo: un televisor, muebles cómodos, una cocina reluciente y moderna» y se pregunta «por qué razón está en casa, por qué está en el paro y depende de las subvenciones». Este minero no ha sabido entender el nuevo espíritu de la época, ese «hazte rico, olvídate de todo menos de ti mismo», y todavía se cree lo de que es minero y «¿Quién hay mejor que yo?». La serie de artículos prosigue con otros ejemplos parecidos. Es interesante leerlos y fijarse en qué es lo que se da por sentado.

Lo que está sucediendo en la Europa occidental es un paradigma de lo que lleva pasando muchos años en nuestros dominios del tercer mun-

do y, de hecho, encaja en una trama ya muy antigua. Es muy similar a nuestra propia historia, y también a la de Inglaterra, antes de nuestra independencia. David Montgomery, de la universidad de Yale, que es un distinguido historiador del trabajo, indicaba en un libro reciente que los modernos Estados Unidos se crearon aplastando la protesta de sus trabajadores. Creo que tiene mucha razón. La protesta era enérgica y clara, especialmente por parte de la clase trabajadora y la prensa comunitaria que floreció en los EE.UU. entre los primeros años del siglo XIX y la década de 1950, cuando fue finalmente destruida por el poder privado. En Inglaterra, esta destrucción se consumó unos diez años más tarde. El primer estudio importante sobre este tema se publicó en 1924, y era obra de Norman Ware. Su análisis no ha perdido actualidad. Se había publicado aquí, en Chicago, y lo ha reeditado recientemente Ivan Dee, una editorial local. De veras que vale la pena leerlo, porque ha sido un estímulo clave para el desarrollo de la historia social.

Ware estudia la prensa obrera, para describir cómo hay que machacar en la cabeza de la gente corriente el sistema de valores por el que aboga el poder privado, cómo hay que enseñarles a abandonar los sentimientos humanos más normales y poner en su lugar eso que se llamaba el «nuevo espíritu de la época». Estudia sobre todo las cabeceras más importantes de mediados del siglo XIX, que, por cierto, eran dirigidas en ocasiones por mujeres de clase trabajadora. En ellas se reflejan varios temas que son constantes durante muchos años; la preocupación, por ejemplo, ante lo que denominaban «degradación» y pérdida de la dignidad y la independencia, ante la pérdida del amor propio, es decir, ante el menosprecio del trabajador en tanto que ser humano. También preocupaba la decadencia brusca del nivel y el desarrollo culturales, por cuanto los trabajadores estaban sujetos a la «esclavitud del jornal», que no les parecía demasiado diferente a la esclavitud tradicional, que habían intentado erradicar durante la guerra civil americana. Uno de los efectos más drásticos —y más relevantes para la situación actual— es la decadencia de la que conocemos como «alta cultura»; la lectura de obras clásicas y contemporáneas. Las chicas de las fábricas de Lowell, los artesanos y muchos otros trabajadores solían contratar a alguien para que les fuera leyendo mientras trabajaban. Tenían interés en esa cultura, tenían bibliotecas, pero todo eso debía irse al traste.

Muchos consideraban —parafraseo ahora a esta prensa obrera— que, cuando vendes un producto, conservas el control sobre tu persona.

En cambio, cuando vendes tu trabajo, te estás vendiendo a ti mismo, pierdes los derechos de hombre libre y te conviertes en vasallo de empresas elefantinas, propiedad de una «aristocracia adinerada» que «amenaza con aniquilar a todo aquel que se atreva a poner en cuestión su derecho a esclavizar y oprimir». «Los que trabajan en los molinos deberían poseerlos», y no tener el simple estatus de máquinas controladas por «déspotas» privados que están implantando «principios monárquicos en suelo democrático», después de arrasar la libertad y los derechos humanos, la civilización, la salud, los principios éticos y el pensamiento independiente, en esta nueva forma de feudalismo comercial.

Por si acaso alguien va desencaminado, les diré que todo esto es muy anterior a cualquier posible influencia del marxismo; es la experiencia de trabajadores estadounidenses de la década de 1840. La prensa obrera condenaba también a los que designaban como «los vendidos de la clerigalla», refiriéndose a los medios de comunicación, las universidades y la clase intelectual, es decir, a los apologistas que se afanaban por justificar el despotismo absolutista del «nuevo espíritu de la época», así como por difundir sus valores sórdidos y degradantes. Uno de los primeros líderes de la AFL [Federación Estadounidense del Trabajo], Henry Demarest Lloyd, supo formular con acierto, hace ahora algo más de un siglo la perspectiva más habitual: la misión del movimiento obrero era vencer «los pecados y la superstición del mercado», y defender y extender la democracia, de modo que los trabajadores controlaran la industria.

Todo ello hubiera parecido muy razonable a los fundadores del liberalismo clásico, a gente como Wilhelm von Humboldt, por ejemplo, quien sirvió de inspiración a John Stuart Mill y consideraba —con un punto de vista próximo al de su contemporáneo Adam Smith— que el valor central de la vida humana era el trabajo creativo, emprendido por decisión propia y realizado en colaboración con otros. Humboldt escribió que, si una persona produce un objeto por encargo, podemos admirar su obra, pero a él le despreciaremos, pues no es un auténtico ser humano que actúe movido por sus propios impulsos y deseos. Los «vendidos de la clerigalla», por su parte, tienen la función de socavar estos valores, de eliminarlos de entre las personas que se venden en el mercado de trabajo. Por razones semejantes, Adam Smith había advertido que, en una sociedad civilizada, el gobierno debería intervenir con el objeto de evitar que la división del trabajo haga del trabajador «un ser humano de

estulticia e ignorancia extremas». Su defensa del mercado —que comporta numerosos matices— se basa en la hipótesis de que, si las condiciones fuesen verdaderamente libres, entonces los mercados tenderían hacia un equilibrio perfecto. Luego los otros lo tomaron como justificación moral, y la clerigalla se olvidó de todos los matices, con lo que lo convertían en una historia muy diferente.

Dewey y Russell son dos de los más destacados herederos de esta tradición en el siglo XX, de esta tradición que, como dije antes, hunde sus raíces en la Ilustración y el liberalismo clásico. Aún más interesante y sugerente es el testimonio de la organización, las luchas y las protestas obreras desde principios del siglo XIX, cuando los trabajadores y las trabajadoras intentaban conseguir una mayor libertad y justicia y mantener los derechos adquiridos frente al avance del nuevo despotismo: el del poder privado favorecido por el estado.

La idea central fue formulada con gran claridad por Thomas Jefferson, hacia 1816. Lo hizo, por tanto, antes de que la Revolución Industrial se hubiera asentado en las antiguas colonias, pero por entonces ya podía empezarse a ver por dónde iban a ir los tiros. En sus últimos años, al observar el desarrollo de los acontecimientos, se sintió muy preocupado por el destino del experimento democrático. Temía el ascenso de una nueva forma de absolutismo, aún más ominosa que la que habían derrotado durante la Revolución Americana (durante la cual, como es notorio, Jefferson se había distinguido mucho). Jefferson quiso separar entonces a los que llamaba «aristócratas» de los verdaderamente «demócratas». Los aristócratas son «los que temen al pueblo y desconfían de él, y quisieran alejarlo de todas las formas de poder y darlas a las clases más privilegiadas». Los demócratas, en cambio, «se identifican con el pueblo, confían en él y lo tienen en alta estima, considerándolo el depositario más honrado y fiable del interés público», si no «el más sabio». Los aristócratas de su tiempo eran los santos patrones del naciente estado capitalista, que Jefferson veía con gran desprecio, reconociendo a la legua la evidente contradicción que se produce entre la democracia y el capitalismo; desde luego, es así en lo que atañe a lo que podríamos denominar «capitalismo real», es decir, el que está guiado y financiado por poderosos estados desarrollistas, como los de Inglaterra, los Estados Unidos y, de hecho, muchos otros lugares.

Esta contradicción esencial se agravó a medida que se concedían poderes cada vez más plenos a las nuevas estructuras corporativas, y ello

no mediante procedimientos democráticos, sino gracias a que las cortes de justicia y los abogados trasformaron lo que Jefferson designaba como «las instituciones de la banca y las corporaciones adineradas» (que iban a destruir la libertad, según afirmó, a pesar de que por entonces tan solo estaban dando sus primeros pasos). Las trasformaron en «personas inmortales» con poderes y derechos que desbordarían las más terribles pesadillas de pensadores precapitalistas como Adam Smith o Thomas Jefferson. Medio siglo antes, Adam Smith ya había advertido contra esta posibilidad, y eso que no pudo ver más que sus primeros pasos.

La diferenciación de aristócratas y demócratas fue desarrollada cerca de medio siglo más tarde por Bakunin (el pensador y político anarquista). De hecho, fue una de las pocas predicciones de las ciencias sociales que ha acabado por cumplirse; solo por ello, merece ocupar un lugar de honor en los estudios de humanidades y ciencias sociales. Volviendo al siglo XIX, Bakunin predijo que la naciente *intelligentsia* de su época se decantaría por una de entre dos opciones posibles. La primera consiste en explotar las luchas populares para tomar el poder estatal, dando origen a lo que llamó la «burocracia roja», que terminó por imponer el régimen político más cruel de la historia. La segunda opción, paralela a la primera, la seguirán los que descubran que el poder real reside en otro lugar, y se erigirán en «los vendidos de la clerigalla», como los denominaba la prensa obrera. Estos servirán a los dueños auténticos, dentro de un sistema de poder privado protegido por el estado, ya sea como administradores o bien como apologistas de las democracias capitalistas estatales, quienes, en definición de Bakunin, «le zurran la badana al pueblo con el mismo bastón del pueblo». Son muy llamativas las similitudes que se dan entre los dos caminos posibles, que todavía existen. De hecho, ayudan a explicar por qué es tan fácil pasar de una posición a otra. Parece una transición forzada, pero reposa sobre una base ideológica común. Actualmente podemos observarlo en la Europa oriental, con el sector social que a veces se conoce con el nombre de «capitalistas de la Nomenklatura», esto es, la vieja clase gobernante del comunismo, que ahora defiende con entusiasmo el mercado, ya que se enriquece mientras las sociedades en las que viven se trasmutan en sociedades típicas del Tercer Mundo. Entre una y otra opción existe un paso muy pequeño, porque se trata, en lo fundamental, de la misma ideología. El paso similar entre hacer apología del estalinismo y «celebrar los

valores de América» es muy habitual en la historia contemporánea, puesto que no requiere variar en exceso los valores, sino sobre todo la idea de en qué lugar reside el poder.

El miedo a la democracia está muy arraigado. Alexander Hamilton lo expresó con toda claridad cuando describió al pueblo como la «gran bestia» de la que hay que guarecer a las élites gobernantes. Y estas ideas se están arraigando cada vez más hondamente entre los círculos instruidos, a medida que se realizan los temores de Jefferson y las predicciones de Bakunin. La actitud básica, ya en el siglo XX, la reflejó a la perfección Robert Lansing, el secretario de Estado del presidente Woodrow Wilson; es la actitud que condujo a lo que se conoció como el «Miedo Rojo», que se afanó durante más de un decenio en destruir el pensamiento obrero independiente. Lansing advirtió del peligro de permitir a «la masa de la humanidad, ignorante e incapaz» que «domine la Tierra» o sea influyente en algún grado (eso es lo que creía que pretendían los bolcheviques). Es una reacción histérica y evidentemente errónea, pero es la más habitual entre los que sienten amenazado su poder.

Esta preocupación fue luego desarrollada por los intelectuales progresistas del periodo, comandados quizá por los ensayos de Walter Lippmann sobre la democracia (que se publicaron sobre todo en la década de 1920). Lippmann era también el decano de los periodistas estadounidenses y, durante muchos años, fue uno de los más destacados comentaristas de los asuntos públicos. Postuló que «el público debe ser puesto donde le corresponde», de forma que los «hombres responsables» puedan «vivir libres de ese rebaño desconcertado que ruge y pisotea», esto es, de la «gran bestia» de Hamilton. En una democracia, estos «observadores externos, necios y metijones» tienen una «función», pero su función es la de ser meros «espectadores interesados de la acción», en lugar de «participantes». Su peso debe ser trasferido periódicamente a algún miembro de la clase dominante —a este proceso lo suelen llamar «elecciones»— y después se supone que han de volver a sus asuntos personales. De hecho, por esa época varios conceptos muy similares pasaron a integrarse en la corriente principal de la teoría política.

En 1934, por ejemplo, en su alocución como presidente de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas [American Political Science Association], William Shepard defendió que el gobierno debe estar en manos de «una aristocracia del intelecto y el poder», y que es necesario impedir que los «elementos estúpidos, desinformados y antisociales»

controlen las elecciones (Shepard creía, equivocadamente, que en el pasado las habían controlado). Uno de los fundadores de la ciencia política moderna, Harold Lasswell, fundador a su vez del campo de las comunicaciones, escribió en la *Enciclopedia de las ciencias sociales* (de 1933 o 1934) que las técnicas modernas de propaganda, refinadas con todo esmero por los liberales del presidente Wilson, proporcionaban una buena manera de mantener al pueblo a raya.

Los logros propagandísticos de Wilson durante la primera guerra mundial impresionaron a muchos dirigentes, entre ellos al propio Adolf Hitler. Pero, sobre todo, impresionaron a nuestra comunidad comercial y de negocios. Ello derivó en una expansión sin precedentes de la industria de las «relaciones públicas», cuya función consistía, en realidad, en controlar la opinión pública. *Controlar* es una manera más honrada de decirlo, y así lo hizo Lasswell en la ya mencionada *Enciclopedia de las ciencias sociales*, refiriéndose sin tapujos a su propuesta en términos de «propaganda». Hoy no lo llamamos así. Somos más finos.

Como teórico de la política, Lasswell abogó por un uso más complejo de la propaganda, que era la nueva técnica de control sobre el público en general. Ello permitiría, según él, que los hombres más inteligentes de cada comunidad (que son sus gobernantes naturales) superaran la amenaza de la gran bestia, que puede acabar con el orden establecido debido a «la ignorancia y la estupidez de las masas», por decirlo en los términos del propio Lasswell. De ajustarnos a su teoría, no deberíamos sucumbir al «dogmatismo democrático según el cual cada hombre es el mejor juez de sus propios intereses»; antes al contrario, los mejores jueces son las élites, a las que, a cambio, deben garantizárseles los medios para imponer su voluntad en nombre del bien común. Se trata, en suma, de los aristócratas de Jefferson.

Lippmann y Lasswell representan la corriente de opinión más liberal y progresista, la que le otorga a la bestia, cuando menos, una función como espectador. En el extremo más reaccionario se encuentran hoy los mal llamados «conservadores». Es el caso de los reaccionarios estatalistas más cercanos a Reagan, que consideraban que el público, la bestia, no debía desempeñar ni siquiera el papel de espectador. Ello puede ayudar a explicar su fascinación por las operaciones de terrorismo clandestino, que, de hecho, no eran nada secretas, y menos para las víctimas, aunque sí lo resultaran para el público estadounidense. Estas operaciones se diseñaron de forma que el público de nuestro país no tuviera no-

ticia de ellas. También exigían unas medidas de propaganda y censura sin precedentes, entre otras actuaciones, que debían garantizar un estado fuerte e intervencionista, protegido de la chusma y al servicio del bienestar de los ricos. La misma preocupación es la que ha conducido al enorme incremento del negocio de la propaganda en los últimos años, así como al reciente asalto de las universidades por parte de las fundaciones de derechas. Es una preocupación despertada por lo que las élites liberales habían llamado la «crisis de la democracia», es decir, la crisis de los años sesenta, cuando varios sectores previamente marginados y apáticos —como las mujeres, los jóvenes, los viejos, los trabajadores y tantos otros— quisieron incorporarse a la arena pública, aun cuando, según saben todos los aristócratas y derechistas, no tienen derecho a estar allí.

John Dewey fue uno de los supervivientes de la tradición liberal de la Ilustración, que se oponía a la regla de la inteligencia y a la acometida de los aristócratas jeffersonianos, independientemente de si ocupaban una posición más a la izquierda o a la derecha en este espectro político ciertamente reducido. Dewey supo percibir con claridad que «la política es la sombra que proyectan sobre la sociedad los grandes negocios» y, en tanto que lo sea, la simple «atenuación de la sombra no trasformará su sustancia». Con ello quería decir que las reformas tendrían una utilidad limitada; lo que la democracia necesita es que se elimine el origen de la sombra, no solo porque controla la arena política, sino porque las mismas instituciones del poder privado debilitan la democracia y la libertad. Dewey pensaba en un poder antidemocrático concreto, y fue muy explícito al referirse a él. A pesar de que escribía hacia 1920, ya afirmaba que «el poder reside hoy en el control de los medios de producción, distribución, publicidad, trasporte y comunicación. Quienes los controlan gobiernan la vida del país», aunque sea sin perder las formas democráticas. El sistema del poder real, el origen de la coerción y el control, son los «negocios que persiguen el beneficio privado mediante el control de la banca, la agricultura y la industria, reforzado por el dominio de la prensa, de los agentes publicitarios y el resto de medios de publicidad y propaganda»; hasta tanto este sistema no sea desballestado, no se podrá hablar de verdadera democracia y libertad. Dewey esperaba que la clase de educación que postulaba en sus escritos, es decir, la producción de seres humanos libres, podría ser un mecanismo útil para socavar ese absolutismo monstruoso.

En una sociedad democrática y libre, según Dewey, los trabajadores deberían ser «los dueños de su propio destino industrial», y no herramientas alquiladas por los empresarios. Coincidía, en las cuestiones fundamentales, con los iniciadores del liberalismo clásico y con el sentir democrático y libertario que había animado a los movimientos obreros y populares de la primera Revolución Industrial, hasta que fueron finalmente destruidos por una combinación de violencia y propaganda. En el ámbito de la educación, por tanto, Dewey consideraba que era «antiliberal y amoral» el formar a los niños para que trabajen «sin apelar a la libertad ni a la inteligencia, sino en nombre del salario», en cuyo caso su actividad «no es libre, puesto que no la han escogido libremente». Aquí se puede observar de nuevo la influencia del liberalismo clásico y de los movimientos obreros. En consecuencia, proseguía Dewey, la industria debe pasar «de un orden social de carácter feudal a uno democrático», controlado por los trabajadores y regido por la asociación libre. Nuevamente, encontramos ideales propios de la tradición anarquista y herederos del liberalismo clásico y la Ilustración.

Dado que el sistema doctrinal se ha reducido mucho al haber sido hostigado incesantemente por el poder privado, sobre todo en las últimas décadas, estos valores y principios libertarios —que son imprescindibles— pueden sonar hoy exóticos, extremosos o incluso, por decirlo con uno de los términos del moderno pensamiento totalitario de Occidente, «antiamericanos». Vistos los cambios, parece útil recordar que el tipo de ideas que formulaba Dewey son tan «americanas» como la tarta de manzana. Se originaron, en efecto, en tradiciones muy nuestras, en su mismo meollo; no recibieron la influencia de ninguna peligrosa ideología extranjera; se originaron, como digo, en una tradición muy valiosa, a pesar de que se la suele deformar y olvidar. Creo que todos estos cambios forman parte del deterioro general de la democracia en nuestra época, tanto en el nivel institucional como en el ideológico.

La responsabilidad de la educación, sin duda, corresponde en parte a la escuela, a la universidad y a todos los sistemas formales de información. Ello es cierto tanto si el objetivo de la educación es educar para la libertad y la democracia, como postulaba Dewey, o bien educar para la obediencia, la subordinación y la marginalización, como exigen las instituciones dominantes. Un sociólogo de la universidad de Chicago, James Coleman, que es uno de los principales investigadores del sistema educativo y los efectos de la experiencia en la vida de los niños y ha

realizado numerosos estudios al respecto, ha llegado a la conclusión de que el efecto global del ambiente y el trasfondo familiar determina los resultados obtenidos por el estudiante en mucha mayor medida que el de la variable escolar. Es necesario, por tanto, echar un vistazo a qué forma están dando a los factores del entorno familiar la política social y la cultura dominante.

Se trata de un tema apasionante. La investigación se ha visto muy facilitada gracias a un estudio de la UNICEF publicado en 1993 y llamado *Desatención infantil en las sociedades ricas* [*Child neglect in rich societies*]. Fue realizado por una economista estadounidense muy conocida, Sylvia Ann Hewlett, que analiza un periodo de quince años, desde finales de los setenta a principios de los noventa. Se ocupa de las naciones ricas; no es un estudio sobre el Tercer Mundo, sino sobre los países más ricos. Pues bien, Hewlett encontró un contraste agudo entre las sociedades angloestadounidenses, por un lado, y el Japón y la Europa continental, por otro. Según sus conclusiones, el modelo angloestadounidense, encabezado por los reaganitas y Margaret Thatcher, ha resultado un desastre para los niños y las familias. El modelo europeo y japonés, sin embargo, partía de una situación que ya era más favorable, pero además la ha mejorado considerablemente, a pesar de que esas sociedades carecen de las ventajas enormes que sí poseen las angloamericanas. Los Estados Unidos tienen un nivel de riqueza y unas posibilidades únicas. Y en cuanto a Inglaterra, al Reino Unido, ha sufrido un declive notable, muy especialmente bajo Thatcher, pero tiene al menos la ventaja económica de ser cliente de los EE.UU., además de haberse convertido en un importante exportador de petróleo. Eso es lo que hace más dramático el fracaso económico del thatcherismo, según han demostrado algunos conservadores genuinos como lord Ian Gilmour.

Hewlett considera que el desastre del modelo angloamericano es atribuible «a la preferencia ideológica por el mercado libre». Sin embargo, eso es cierto solo a medias, a mi modo de ver, porque el «conservadurismo» de los partidarios de Reagan se oponía al libre mercado. Para ser más exactos, defendía un mercado libre para los pobres, pero avanzó mucho más que todos sus predecesores en la exigencia y el desarrollo de un nivel altísimo de subvenciones públicas y protección estatal para los ricos. Cualquiera que sea el nombre que se le dé a estos principios ideológicos, es injusto manchar la buena reputación del conservadurismo refiriéndose como tal a este modelo particular de estata-

lismo violento, ilegítimo y reaccionario. Llámenlo como prefieran, pero no es conservadurismo. Y no es mercado libre. En cualquier caso, Hewlett acierta al identificar el mercado libre para los pobres como la fuente del desastre para las familias y los niños; y son bastante evidentes los efectos de lo que Hewlett describe como el «espíritu antiinfantil que campa en esos países», es decir, en el Reino Unido, pero de forma aún más cruda en los Estados Unidos. Este «modelo angloestadounidense, en el que domina la desatención», se basa en una disciplina de mercado para los pobres, por lo que se ha privatizado casi toda la atención infantil, a la vez que la mayoría de las familias se han visto en la imposibilidad de atender personalmente a sus hijos. Tal era el doble objetivo de la política «conservadora» de Reagan y la primera dama británica. El resultado, naturalmente, es una situación desastrosa para los niños y las familias.

Siguiendo con el análisis de Hewlett, la autora observa que «en el modelo europeo, mucho más protector», la política social ha reforzado, en lugar de debilitar, los sistemas de ayuda familiar e infantil. Por lo que sé, sin embargo, aun cuando este informe es de 1993 y resulta tener una relevancia crítica para nuestros intereses, todavía hoy [19 de octubre de 1994] no ha aparecido siquiera una reseña en la prensa. No ha aparecido en el *New York Times*, por ejemplo, a pesar de que la sección de libros del pasado domingo se dedicaba especialmente a este tema, y recogía predicciones sombrías sobre el declive de los cocientes intelectuales, el declive de las notas en los exámenes de acceso a la universidad y todas esas cosas y sus posibles causas. Pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde la política social que se postulaba y respaldaba en el propio *Times* ha colocado a cerca del 40 por 100 de los chavales por debajo del umbral de la pobreza, de forma que sufren de malnutrición y enfermedades, entre otras consecuencias. Pues bien, parece ser que eso es irrelevante para el declive de los cocientes intelectuales, al igual que lo es todo lo analizado por Hewlett en su estudio del modelo angloestadounidense, «en el que domina la desatención». Bien al contrario, parece ser que lo más determinante para ese declive son ... los genes defectuosos. De alguna manera, a la gente se le están estropeando los genes, y hay varias teorías que intentan explicarlo. Quizá lo que sucede es que la leche de las madres negras no alimenta correctamente a sus hijos, y ello se debe quizá a que crecieron en África, que tiene un clima hostil. Así que quizá son esas las razones. Son razones muy serias, ciencia de

la de quemarse los cascos, y una sociedad democrática solo puede ignorarlas por su propia cuenta y riesgo, según este especial del *Times*. Los que escriben esto son *comisarios*, bien disciplinados, que saben cómo distraer la atención de los problemas fundamentales, de los que están claramente relacionados con la política social. Problemas bien a la vista para cualquiera que tenga la cabeza en su sitio, y que resulta que son analizados con toda minuciosidad por una conocida economista en un estudio de la UNICEF, que aquí difícilmente llegará a ver la luz del día.

Los hechos no son secretos. Según informó una comisión de máximo nivel, integrada por miembros de las Juntas Estatales de Educación [State Boards of Education] y de la Asociación Médica Americana, «es la primera vez que la generación de los hijos es menos saludable, ha sido peor cuidada y está peor preparada para la vida que la generación de sus padres a su misma edad». Estamos hablando de una gran trasformación de la sociedad industrial, y se produce solo en las sociedades angloestadounidenses, en las que ha primado durante quince años este espíritu antifamiliar y antiinfantil, disfrazado de conservadurismo y valores de la familia. Sin duda, se trata de un triunfo de la propaganda.

Como síntoma expresivo de este desastre podemos fijarnos en que, en el momento en que Hewlett redactaba su libro, la Convención internacional de los Derechos de los Niños había sido ratificada por 146 países. En la lista hay una ausencia significativa: los Estados Unidos. Es la norma para todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos. Ahora bien, seamos justos y no dejemos de añadir que el conservadurismo de Reagan es plenamente católico en su espíritu antiinfantil y antifamiliar: cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, votó si se condenaba a la corporación Nestlé por comercialización agresiva de una leche materna que causa la muerte de muchísimos niños, el resultado fue de 118 votos a favor y solo uno en contra. Les dejo que adivinen quién votó en contra. Y aun así, es un caso menor en comparación con lo que la OMS califica de «genocidio encubierto», que mata a millones de niños cada año como consecuencia de las políticas de mercado libre para los pobres y de la negativa de los ricos a proporcionar auxilio. En este campo, de nuevo, uno de los registros más miserables de entre todas las naciones ricas corresponde a los EE.UU.

Otro síntoma simbólico del desastre es una nueva línea de tarjetas de felicitación de la casa Hallmark. Una de ellas dice: «¡Que pases un día genial en la escuela!». Hay que ponerla, según nos cuentan, debajo del

cartón de los cereales, de forma que, cuando el niño vaya a tomarse el desayuno antes de ir a la escuela, se encuentre con un mensaje cálido y afectuoso. Otra de las postales dice: «Me gustaría tener más tiempo para arroparte por la noche». Supongo que esa la pones debajo de la almohada, cuando el niño se va a dormir solo. [Risas del auditorio.] Y hay muchos otros ejemplos parecidos de esta situación desastrosa que, en parte, obedece simplemente al descenso de los salarios. La política empresarial del estado durante los últimos años, y muy especialmente bajo Reagan y Thatcher, responde al designio de enriquecer a una pequeña minoría y empobrecer a la gran mayoría. Y lo han logrado, han logrado exactamente lo que pretendían. Eso significa que la gente tiene que trabajar muchas más horas para poder sobrevivir. La mayoría de las parejas tienen que trabajar los dos y durante más de cincuenta horas semanales, solo para cubrir las necesidades mínimas de la familia. Entretanto, curiosamente, los beneficios empresariales se han disparado. La revista *Fortune* habla de que los beneficios «mareantes» están alcanzando cimas nunca vistas en el ránquing de los 500 empresarios más ricos, a pesar de que el volumen de ventas se ha estancado.

Otro factor crucial es la inseguridad laboral. Ya me entienden, es lo que los economistas suelen llamar «flexibilidad del mercado de trabajo», lo que resultará estupendo para la teología académica dominante, pero es una auténtica maldición para las personas. Claro está que el destino de las personas no entra en los cálculos de estos pensadores asépticos. Flexibilidad del mercado laboral significa que tienes que trabajar horas extra sin saber siquiera si mañana tendrás trabajo, por ejemplo. No hay contratos, no hay derechos. Esa es la flexibilidad: carguémonos las rigideces del mercado. Seguro que un economista sabría explicárselo mejor que yo. Pero cuando los dos miembros de la pareja trabajan horas extras y, en muchos casos, lo hacen por un sueldo cada vez más bajo, creo que no hay que ser una hacha para predecir el resultado. Las estadísticas lo reflejan, pueden leerlas en el estudio de Hewlett para la UNICEF, si les interesa; pero lo que se nos viene encima es evidente, sin necesidad de consultarlas. Indican que el tiempo de contacto afectivo, el tiempo que los padres pasan con sus hijos, se ha reducido drásticamente en las sociedades angloestadounidenses, durante los últimos veinticinco años, pero sobre todo en los más recientes. Hoy los padres pasan con sus hijos una media de entre diez y doce horas a la semana. Pero, además, también se ha reducido la proporción de tiempo «de alta cali-

dad», esto es, el tiempo durante el cual los padres no hacen nada más que estar con los niños. Eso destruye la identidad y los valores familiares. Hace que la supervisión de los niños se confíe cada vez más a la televisión. Crea lo que se suele conocer como *latchkey children*, los 'niños con llave de casa', que están solos al volver de la escuela; y es un factor clave del creciente alcoholismo infantil, de la drogadicción infantil, de la violencia criminal de unos niños contra otros y tantas otras consecuencias obvias sobre la salud, la educación, la capacidad de participar en una sociedad democrática o incluso la supervivencia personal, además del ya referido descenso de los cocientes intelectuales y las pruebas de acceso a la universidad. Pero no debe preocuparnos. La culpa, como bien saben todos ustedes, es de los genes defectuosos.

No son las leyes de la naturaleza las que producen estos efectos. Su causa es una política social cuidadosamente trazada para una meta específica, que es la de enriquecer a los 500 del ránquing de *Fortune* y empobrecer al resto. En Europa, donde las condiciones son más duras, pero la política no se rige por el mismo espíritu antifamiliar y antiinfantil, se registra la tendencia contraria, y el estatus medio de los niños y las familias es notablemente mejor.

Permítanme precisar, sin embargo, e incluso recalcarlo, que el proceso no se limita a las sociedades de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Somos un país poderoso. Tenemos influencia. ¿Qué sucede cuando otros países, dentro de nuestra zona de influencia, intentan desarrollar políticas que beneficien a la familia y los niños? Vale la pena preguntárselo, la respuesta es muy llamativa.

La región que controlamos más a nuestras anchas es la de Centroamérica y el Caribe. Dos de sus países han emprendido políticas como las mencionadas y, de hecho, con un éxito considerable. Se trata de Cuba y de Nicaragua. No sorprenderá a nadie el que hayan sido justo esos dos países los principales objetivos del ataque estadounidense. Y el ataque ha tenido éxito. En Nicaragua, por ejemplo, la mejora de los estándares de salud, el crecimiento de la alfabetización y la reducción de la malnutrición infantil se han invertido *gracias* a la guerra terrorista que hemos desarrollado allí, y ahora todos estos indicadores se acercan a los niveles de Haití. En el caso de Cuba, claro está, la guerra terrorista lleva mucho más tiempo en marcha, ya que fue iniciada por John F. Kennedy. Y no tenía nada que ver con el comunismo, no es que estuvieran rondando los rusos. Tenía que ver, más bien, con el hecho de que los cubanos

estaban destinando demasiados recursos a los sectores equivocados de la población; con que estaban mejorando los estándares de salud; con que les preocupaba la malnutrición, la situación de los niños. Así que iniciamos una guerra terrorista implacable. Recientemente se ha desclasificado un buen montón de documentos de la CIA que aclaran numerosos detalles de la época de Kennedy, y son terribles. Hoy en día, la situación continúa siendo la misma. De hecho, se produjo otro ataque hará cosa de un par de años. Y, para colmo, se ha dispuesto un embargo que ha de asegurar que lo pasen realmente mal. Durante muchos años, el pretexto para justificar todo esto eran los rusos, pero no es más que una mentira, como demuestran los acontecimientos de aquella época y, de forma aún más clara, los acontecimientos actuales, toda vez que los rusos han desaparecido. Era una tarea especial para los «vendidos de la clerigalla»: que nadie se dé cuenta de que después de la desaparición de los rusos hemos endurecido nuestra embestida contra Cuba. Suena un poco raro, si se supone que el ataque obedecía a que eran la avanzadilla del comunismo y el imperio ruso, pero no hay problema, eso se arregla.

¿Cuándo hemos endurecido las condiciones del embargo? Cuando los rusos han desaparecido de la escena, es decir, cuando se ha hecho posible estrangular definitivamente a Cuba. Un demócrata liberal, Robert Torricelli, envió una propuesta al congreso a favor de prohibir que pudiera comerciar con la isla ninguna filial de empresas estadounidenses, o ninguna corporación extranjera que utilizara componentes fabricados en los Estados Unidos. La violación de las leyes internacionales era tan evidente que George Bush tuvo que vetarla. Sin embargo, se vio forzado a aceptarla para contrarrestar el avance de los partidarios de Clinton en las pasadas elecciones, con posturas aún más derechistas que las suyas. La ley entró de inmediato en la agenda de las Naciones Unidas, donde fue denunciada por casi todos los países; obtuvo tan solo el voto favorable de Israel —que es automático— y, por alguna extraña razón, el de Rumanía. Nadie defendió la postura de los EE.UU. Viola tan claramente la normativa internacional que incluso el Reino Unido, entre otros aliados, la criticó. Pero qué más da. Es imprescindible que desarrollemos allí donde nos llegue la mano nuestro espíritu antifamiliar y antiinfantil, así como nuestra insistencia en una conformación social extremamente polarizada. Si un país controlado por nosotros intenta emprender un camino diferente, ya nos desvelaremos por cuidarlos también a ellos.

El ataque y el embargo no han cesado. Pero es el tipo de situación que pueden ustedes ayudar a remediar, si así lo quieren. Aquí en Chicago están los Pastores por la Paz y la Coalición Chicago-Cuba, por ejemplo, que están preparando otra caravana humanitaria para intentar paliar el embargo y llevar medicamentos, libros de medicina, leche en polvo para los bebés, entre otras formas de ayuda. Están en la guía de teléfonos local, pueden buscarla por *Chicago-Cuba Coalition*. Puede hacerlo todo el que tenga interés en contrarrestar el espíritu antifamiliar y antiinfantil que reina en nuestro país —y que intentamos exportar de forma violenta en todas las partes del mundo a nuestro alcance—, al igual que se pueden emprender muchas otras iniciativas desde casa mismo.

Quisiera añadir que los efectos de esta última propuesta con la que los demócratas pretenden estrangular a Cuba, y que finalmente ha sido aprobada, han sido analizados por dos prestigiosas revistas médicas de nuestro país, como son *Neurology* y el *Florida Journal of Medicine*, en sus números de octubre. Se limitan a estudiar los efectos de la nueva ley, y a informar de lo que es evidente para todos: resulta que cerca del 90 por 100 del comercio prohibido por la ley de Clinton y Torricelli eran alimentos, ayuda humanitaria, medicamentos y cosas por el estilo. Por poner un ejemplo, se bloqueó la exportación de un mecanismo de filtrado del agua por parte de una compañía sueca, porque uno de sus componentes se fabrica en los Estados Unidos; este mecanismo se usa en la preparación de vacunas. Hay que estrangularlos hasta que revienten, hay que asegurarse de que muera una buena cantidad de niños. Porque uno de los efectos de esta ley es un repunte drástico de la malnutrición y la mortalidad infantil. Otro es una rara enfermedad neurológica que se ha extendido por la isla, y de la que todo el mundo finge desconocer las causas. Pero las causas son claras: se debe a la malnutrición, es una enfermedad conocida, pero que no se veía desde el tiempo de los campos de prisioneros japoneses, durante la segunda guerra mundial. Lo hacemos a conciencia, como se puede ver. El espíritu antifamiliar y antiinfantil no se ceba solo en los niños de Nueva York, sino mucho más allá.

Permítanme recalcar que, en Europa, la situación es muy diferente. Hay varias razones para ello. Una de las diferencias es que existe un movimiento sindical muy fuerte. Eso se integra en una segunda diferencia, verdaderamente crucial: la sociedad de los Estados Unidos está controlada por el sector de los negocios hasta un extremo sin parangón en ninguna otra parte del mundo; la consecuencia, como cabría esperar, es

que la «máxima abyecta de los señores de la humanidad», como la llamaba Adam Smith, prevalece también de una forma sin igual. El asociacionismo sindical es uno de los mecanismos que permiten que la democracia funcione normalmente, pero ahora la mayoría de la población se refugia en lo que la prensa suele denominar «antipolítica», esto es, en odiar al gobierno, en despreciar los partidos políticos y el proceso democrático en general. Los «aristócratas» pueden cantar victoria, los aristócratas en el sentido de Jefferson, es decir, los que temen al pueblo y desconfían del él, y quisieran entregar todo el poder a las clases altas. Hoy en día las clases altas son las corporaciones trasnacionales y los estados y las instituciones paragubernamentales que sirven a sus intereses.

Una segunda victoria para los aristócratas es que la desilusión, que es palmaria, se convierta en «antipolítica». Un titular del *New York Times*, que se ocupaba de esta cuestión, rezaba así: «La ira y el cinismo crecen entre los votantes mientras decrece la esperanza. El ambiente va a peor y cada vez más gente se siente desilusionada con la política». El magacín del pasado domingo se dedicó a la antipolítica. El nombre es significativo: a la antipolítica, no al descontento con la autoridad y el poder, con las fuerzas fácilmente identificables que tienen en sus manos los mecanismos decisorios y proyectan su sombra sobre la sociedad bajo el disfraz de la política, como decía Dewey. Esas fuerzas tienen que resultar invisibles. El *Times* trae hoy otra noticia sobre el tema, en la que cita a algún palurdo que no se entera de la misa la media, y sostiene que «p'sí, en el Congreso están podridos, el Congreso son negocios de los buenos, cómo no van a estar podridos». Pero eso es lo que no hay que ver; se espera que seamos antipolíticos. Ello es así porque, pienses lo que pienses del gobierno, es justo la única parte del sistema en la que se te permite participar, intervenir, sugerir modificaciones. Donde nunca podrás intervenir —lo prohíbe la ley y es cuestión de principio— es en las empresas inversoras o en las grandes corporaciones trasnacionales. Así que mejor si esa parte no la ve nadie, mejor si eres antipolítico. Con eso se apuntan otra victoria.

La sombra de la política, la que según Dewey proyecta sobre la sociedad el mundo de los grandes negocios —lo cual, dicho sea de paso, era casi una perogrullada para Adam Smith— resulta hoy casi indetectable. La visibilidad de la sombra ha sido minimizada en gran medida por las instituciones ideológicas y está ya tan lejos de la conciencia del público que solo nos queda la antipolítica. Se trata de un golpe severo

para la democracia, y de un gran triunfo para los sistemas de poder absolutistas e incontrolables, que han alcanzado un nivel a duras penas imaginable para Thomas Jefferson o John Dewey.

Se nos presentan, por tanto, las opciones habituales. Podemos elegir ser demócratas, en el sentido jeffersoniano del término. O también podemos escoger ser aristócratas, que es el camino más fácil, y el que será recompensado por las diversas instituciones. Puede devengarnos un beneficio muy notable, vistos los extremos de riqueza, privilegio y poder a los que tiende por naturaleza. El segundo camino, el camino de los demócratas, implica la lucha constante, y muchas veces la derrota; pero ofrece recompensas muy superiores a todo lo que puedan pensar los que sucumben al «nuevo espíritu de la época», al «hazte rico, olvídate de todo menos de ti mismo». Estamos ante una situación similar a la de hace 150 años, cuando se intentaba imbuir estas ideas a las chicas de las fábricas de Lowell, a los artesanos de Lawrence y a tantos otros. El mundo actual es, sin duda, muy diferente al de Thomas Jefferson. Pero las opciones que nos presenta, en cambio, son sustancialmente las mismas.

3

El arte de la «maquinación histórica»*

1. El arte de la «maquinación histórica»[1]

La vocación de maquinar planes que dirijan el curso de la historia es tan vieja como la vida misma, y los Estados Unidos la elevaron al rango de responsabilidad profesional a partir de su entrada en la primera guerra mundial. Un análisis concreto de varios casos particulares nos servirá para arrojar luz sobre cómo funciona este sistema. En el presente epígrafe nos ocuparemos de dos ejemplos ilustrativos, tomados de un importante proyecto conjunto del gobierno y los medios de comunicación, realizado a lo largo de los años ochenta: la «demonización de los sandinistas» y la defensa paralela de los estados terroristas de Washington.

Una de las pruebas que se han aportado para demostrar que Nicaragua es un tumor canceroso que expande la subversión por todo el continente —una prueba más, tan verosímil como el resto— consiste en denunciar que los sandinistas habían suministrado armas para un ataque terrorista del M-19 contra el Palacio de Justicia de Colombia, en noviembre de 1985. El 5 y el 6 de enero de 1986, el *New York Times* publicó sendos artículos sobre la incriminación de Colombia a Nicaragua y el posterior desmentido nicaragüense. Al día siguiente, el 7 de enero, Colombia aceptó oficialmente este desmentido; el ministro de Asuntos Exteriores colombiano declaró, en una conferencia de prensa, que «Colombia acepta la explicación de Miguel d'Escoto, el ministro de Asun-

* «The craft of "historical engineering"», publicado originalmente en Noam Chomsky, *Necessary illusions: thought control in democratic societies*, South End, Boston, 1989, págs. 197-261 (citado en adelante como *NeI*).

1. Véase «Addendum» a Chomsky, *NeI*, pág. 80.

tos Exteriores de Nicaragua, y considera cerrado el incidente». Pero esta noticia no pasó de la página 81 del *Boston Globe* (en la sección de deportes). En cuanto al *Times,* ni una palabra sobre la cuestión; bien al contrario, su editorial del día 8 afirmaba que «Colombia ha acabado por perder la paciencia ante la evidencia —discutida por Nicaragua— de que los sandinistas habían suministrado armamento a los terroristas que organizaron» el incidente de noviembre. El 15 de enero, el *Times* informó de que «oficiales estadounidenses relacionan a Nicaragua con los actos terroristas de Bogotá» —una acusación que ha sido repetidamente rechazada por el gobierno nicaragüense— y publicó una columna de opinión, firmada por Elliott Abrams, en la que se repetían estas incriminaciones, aunque tanto Abrams como los editores sabían de su falsedad. Y aún reaparecieron en una noticia del 26 de febrero, ignorando de nuevo el hecho de que Colombia había retirado oficialmente la acusación y lo consideraba un incidente cerrado. Tampoco el *Washington Post* acertó a informar de que Colombia había aceptado las propuestas de inocencia hechas por los nicaragüenses.[2]

El 18 de marzo, un editorial del *Times* titulado «El show de los horrores en Nicaragua» se ocupó de una propuesta de Reagan, quien «requería 100 millones de dólares para ayudar a la "contra" en su conflicto con los tiranos izquierdistas de Nicaragua». El editorial se mostraba crítico con el discurso de Reagan, tan repleto de falsedades y afirmaciones gratuitas que despertó cierta reticencia. Se postulaba, en cambio, que «el Sr. Reagan debería haberse atenido a [las] trasgresiones innegables» de los sandinistas; debería haber consultado cómo podían «ser refrenadas, y qué pueden emprender los Estados Unidos para favorecer la democracia en Nicaragua», incorporando con ello a este país a las filas de los estados terroristas de Washington. Se presentaba luego una lista de los «auténticos agravios del continente»: la política nacional «totalitaria» en Nicaragua y la complicación de los «problemas de seguridad de la región» al haber construido, con ayuda soviética, la mayor base militar aérea de Centroamérica y un puerto de gran calado en el Caribe, además del respaldo prestado «a sus camaradas de la guerri-

2. Associated Press (en adelante, AP), *New York Times* (en adelante, NYT), 5 de enero de 1986; Stephen Kinzer, NYT, 6 de enero; AP, *Boston Globe* (BG), 8 de enero; editorial, NYT, 8 de enero; Bernard Weinraub, NYT, 15 de enero; Abrams, Op-Ed(*), NYT, 15 de enero; David Shipler, NYT, 26 de febrero de 1986. [(*) La Op-Ed se corresponde aproximadamente con nuestras páginas de Opinión (*N. del t.*)]

lla salvadoreña». La lista de «trasgresiones innegables» concluye con esta frase: «no solo la piedad ha movido a Tomás Borge, el ministro de Interior, a participar en una misa por las guerrillas del M-19 que dispararon sobre el Palacio de Justicia de Bogotá, en Colombia»; su asistencia es una prueba evidente de su complicidad en el ataque terrorista. No fueron los únicos en quedar impresionados por esta demostración de la iniquidad sandinista. William Beecher, corresponsal diplomático del *Boston Globe*, subrayó la asistencia de Borge a una «misa en memoria de las guerrillas del M-19», que utilizaron «armas cuyo origen se dice que es nicaragüense»; esta colaboración es el tipo de «error» que los «analistas rigurosos» esperan que puede provocarse «si se eleva la presión militar» sobre Nicaragua, según Beecher. ¿Olvidaba que, nueve días antes, su propio diario había informado de la contestación colombiana?[3]

Un lector de Arizona, el Dr. James Hamilton, quiso saber en qué datos cimentaban los editores del *Times* su acusación renovada, pues sabía que esta había sido rechazada por el propio gobierno colombiano. Así, escribió una serie de cartas al director, Max Frankel, y también al director de internacional, Warren Hoge, al recibir de este la típica carta despectiva. Después de numerosos intentos de obtener la respuesta a esta pregunta tan sencilla, recibió finalmente una carta, a mediados de julio, en la que Hoge le comunicaba que

> en respuesta a su pregunta sobre Tomás Borge, [sepa que] el Sr. Borge asistió a una misa celebrada en Managua por el rev. Uriel Molina, que conmemoraba el primer aniversario de la muerte de Enrique Schmidt, el ministro de Comunicaciones, asesinado en una trifulca con la contra. Durante la ceremonia, uno de los presentes gritó consignas a favor de que se oficiara también una misa por el M-19, y desplegó la bandera de este grupo.[4]

Como ha escrito Hamilton, «una misa en memoria de un antiguo miembro del gobierno sandinista se convierte, por obra del redactor editorial, en "una misa por las guerrillas del M-19", permitiendo así que el *Times* refleje una imagen interesada de Borge y dé a entender que existe una afiliación entre los sandinistas y el M-19, utilizando la actitud de una de las personas presentes en la misa para respaldar sus opiniones».

3. Beecher, «Pressuring Nicaragua», BG, 17 de enero de 1986.
4. Hamilton, inédito, 1987.

Hay algunos cuentos que son demasiado útiles como para abandonarlos.[5]

El resto de las «trasgresiones innegables» del mencionado editorial merecen el mismo crédito y, de hecho, tienen su interés tan solo en relación con la histeria despertada en el *establishment* por la negativa de Nicaragua a someterse a órdenes ajenas y sus esfuerzos para sobrevivir al desmedido ataque estadounidense.

Una segunda maquinación, aún más relevante, consiste en establecer una «simetría» entre la contra y las guerrillas de El Salvador. Esta simetría resultaba crucial para la propaganda del gobierno de los Estados Unidos y era, por tanto, un asunto primordial para los medios. Puede ser fácilmente establecida, pero a cambio de ignorar la escala y el carácter de la ayuda que prestan los EE.UU. a la contra y su implicación directa en los actos de terrorismo. Y, por otra parte, colabora a la simetría la repetición insistente de que, aunque los rebeldes de El Salvador niegan recibir ayuda nicaragüense, «existen numerosas pruebas que la demuestran, y [los rebeldes] tendrían muchas dificultades para sobrevivir, si no fuera por esta ayuda», en palabras de LeMoyne, después de la firma de los acuerdos de paz de Centroamérica (en agosto de 1987).[6] LeMoyne, sin embargo, no ha presentado ninguna de esas pruebas, ni entonces ni en otro momento. De hecho, tampoco ha dicho nada del fracaso paralelo del gobierno de los EE.UU. —a quien no le faltan precisamente los recursos—, incapaz de presentar ninguna demostración convincente desde principios de 1981 (y aun entonces lo fue en muy escaso grado). Así lo determinó el Tribunal Internacional; después de analizar la validez de los materiales públicos aportados por el gobierno de los EE.UU., el Tribunal terminó por rechazarlos, arguyendo que carecían de rigor.[7] La cuestión es sencilla: la simetría es una necesidad propagandística, luego existe.

Los esfuerzos del *Times* por esconder los hechos relevantes son muy significativos. Cuando apareció la citada afirmación de LeMoyne, la

5. Para una documentación extensa sobre cómo se mantienen ciertos gastos reconocidamente falsos con el fin de desviarlos hacia objetivos propagandísticos, y la interesante reacción que produjo la exposición de estos hechos, véanse las referencias citadas en *NeI*, Apéndice I, sección 1.

6. *NYT*, 13 de agosto de 1987.

7. Para una revisión detallada de las alegaciones principales del Departamento de Estado, véase Morris Morley y James Petras, *The Reagan administration and Nicaragua*, Institute of Media Analysis, Nueva York, 1987.

asociación FAIR,* que se encarga de supervisar a los medios, se dirigió al *Times* para pedirle que compartiera las «numerosas pruebas» de Le-Moyne con todos los lectores. No se quiso publicar la carta, pero recibieron una comunicación privada del director de internacional, Joseph Lelyveld, reconociendo que LeMoyne había sido «impreciso».[8]

Después de haber reconocido, en setiembre de 1987, que la acusación era «imprecisa», el *Times* ha tenido muchas oportunidades para corregir su imprecisión, pero se ha limitado a reiterar la misma incriminación que, en privado, se reconocía como injustificada. Así, en su contribución al bombardeo mediático que se organizó aprovechando la deserción del sandinista Roger Miranda (en diciembre), LeMoyne proclamó que el ministro de Defensa nicaragüense, Daniel Ortega, «parecía estar confirmando indirectamente la existencia de la ayuda sandinista a los rebeldes salvadoreños», cuando dio respuesta a las acusaciones de Miranda. Así es como LeMoyne trasmite la queja de Ortega, quien consideraba que la administración de Reagan no tenía siquiera derecho a realizar ese tipo de acusaciones, puesto que ellos estaban armando a la contra. Lo que Ortega proseguía diciendo (y ya no se quiso reflejar en el artículo) es que «las guerrillas de El Salvador tienen algunos recursos y métodos para obtener su armamento» y que «se arman sobre todo con recursos propios», sin depender «de fuentes externas; son autosuficientes». Por tanto, Ortega negó que Nicaragua prestara ayuda a la guerrilla salvadoreña, pero LeMoyne y el *Times* lo convirtieron hábilmente en una «confirmación» de esa supuesta ayuda.[9]

Los colegas de LeMoyne también se subieron al ring. Stephen Engelberg, por ejemplo, escribió que la acusación del gobierno de los Estados Unidos «parece haber sido confirmada» por Miranda, quien «afirmó que los sandinistas trasportaban la ayuda armamentística por mar», esto es, «cruzando el golfo de Fonseca».[10] Pero el golfo no tiene más de

* *Fair* significa 'justo', y corresponde a las siglas de *Fairness and Accuracy in Media*, esto es, Justicia y Exactitud en los Medios de Comunicación. El lector encontrará, al final del libro, un apéndice en el que se resumen las diferentes abreviaturas usadas. (*N. del t.*)

8. *Extra!*, oct.-nov. de 1987. En una carta fechada el 11 de marzo de 1988, Lelyveld informó a FAIR de que había dado instrucciones a LeMoyne «para que dedique un artículo entero a comentar qué indican los datos actuales al respecto» (*Extra!*, set.-oct. de 1988, recalcando que «seis meses más tarde, no ha aparecido ningún artículo similar»). Véase más adelante.

9. Humberto Ortega, FBIS-LAT-87-239, 14 de diciembre de 1987; LeMoyne, 20 de diciembre de 1987.

10. *NYT*, 18 de diciembre de 1987.

treinta km de ancho, los marines y los equipos de SEAL* patrullan por él constantemente y está controlado por una instalación de radar sita en el mismo golfo (concretamente, en la isla del Tigre), capaz de localizar y seguir la ruta de cualquier barco en una zona bastante más amplia que la del golfo (así lo ha declarado ante el Tribunal Internacional David MacMichael, el especialista de la CIA que se encargó del análisis de los datos relevantes para el caso en la época a la que se refiere Engelberg). A pesar de todos estos controles, no hay pruebas del traslado de armamento; pero ya es curioso que Nicaragua sí tenga muchas pruebas que demuestran los suministros de la CIA en la situación pretendidamente «simétrica». Se requiere mucho autocontrol para que no nos domine aquí la sensación de ridículo.

Cuando los acuerdos de paz fueron finalmente desarbolados (en enero de 1988), George Volsky, otro articulista del *Times*, escribió que la disposición de los acuerdos conforme a la cual se requiere a «todos los países que se nieguen al uso de su territorio por parte de insurgentes de las naciones vecinas ... debe aplicarse sobre todo a Nicaragua, de quien se dice que está ayudando a los rebeldes de El Salvador, y a Honduras, cuyo territorio se afirma que es una parte importante del aprovisionamiento armamentístico de la contra, dirigido por Estados Unidos».[11] Sin duda, es un resumen preciso de los datos más fidedignos en torno a la ayuda a las fuerzas ilegítimas e insurrectas, ilegalizada por los acuerdos.

Volsky no explicó por qué esta misma disposición no era aplicable a El Salvador, de quien también «se afirma» que está implicado en la estructura estadounidense de suministro a la contra; o a Costa Rica, que «ha sido, desde hace mucho, la base de la facción más liberal de los rebeldes nicaragüenses» y desde donde continúa operando «la contra costarricense», como se puede comprobar regularmente cuando las noticias citan a una «fuente de la contra en Costa Rica» (además de ser perfectamente demostrable, solo con que alguien tuviera un mínimo de interés en conocer los hechos).[12]

LeMoyne advirtió posteriormente de que los acuerdos de paz se iban a ir al traste, si en el futuro «se sigue encontrando que los sandinistas

* SEAL, que literalmente es 'precinto', es el acrónimo con que se designa al cuerpo especial antiterrorista de los marines, el SEa-Air-Land (Aire, Mar y Tierra). (*N. del t.*)

11. NYT, 18 de enero de 1988.

12. J. D. Gannon, *Christian Science Monitor* (en adelante, CSM), 26 de agosto de 1988.

colaboran con las guerrillas salvadoreñas»; pero no hizo referencia a ningún problema similar en ninguna otra zona. En cuanto a Honduras, LeMoyne se limitó a observar con cautela, varios meses más tarde, que el apoyo que prestaban a la contra «*aparenta ser* una violación flagrante de los acuerdos».[13] Uno de sus colegas del periódico, el corresponsal militar Bernard Trainor, escribió que «hasta la fecha, el respaldo de los sandinistas a las guerrillas salvadoreñas no se ha podido establecer de forma concluyente»; en la jerga del *Times*, eso equivale a decir que no se conocen más hechos probatorios que un suministro minúsculo de siete años atrás, ya mucho después de que las fuerzas de seguridad, apoyadas por los Estados Unidos, hubieran iniciado una «guerra de exterminio y genocidio contra la población civil indefensa» (en palabras del obispo Rivera y Damas, sucesor del asesinado arzobispo Romero).[14]

Así es como se establece la doctrina necesaria.

No es menos interesante el hecho de que lobos y corderos dan por sentado lo mismo: que hubiera significado un auténtico crimen el proveer a la población civil indefensa de medios de defensa con los que protegerse de la guerra de exterminación y genocidio; lo hubiera sido, sin duda, porque se trata de una guerra dirigida por clientes de los Estados Unidos, con ayuda de los EE.UU. y, en el apogeo, con su organización e intervención directa. En cambio, proporcionar armas de defensa a las víctimas de Pol Pot, de haber sido posible, habría significado un gesto de nobleza. Es ilustrativo el observar que un contraste tan sencillo como este, y su importancia innegable, resulten aquí casi incomprensibles.

A finales de 1988, LeMoyne quiso cerrar su cuarto año de corresponsalía en El Salvador para el *Times* publicando un análisis completo de la ayuda prestada a las guerrillas salvadoreñas.[15] Habían pasado quince meses desde que escribió —poco después de la firma de los acuerdos de paz— que «numerosas pruebas» atestiguaban la colaboración sandinista, hasta el punto de que las guerrillas de El Salvador «tendrían mu-

13. *NYT*, 7 de febrero y 4 de julio de 1988. La cursiva es mía.

14. Trainor, *NYT*, 3 de abril de 1988; Rivera y Damas, 26 de octubre de 1980, citado por Bonner, *Weakness and deceit*, *Times* Books, Nueva York, 1984, pág. 207.

15. «Salvador rebels: where do they get the arms?», *NYT*, 24 de noviembre de 1988. Ya fuera accidentalmente o no, este artículo apareció un mes después de que FAIR hubiera denunciado públicamente que el *Times* no había analizado este asunto, a pesar de la promesa del director de la sección de Internacional; véase la nota 8.

chas dificultades para sobrevivir, si no fuera por esta ayuda». Habían pasado catorce meses desde que el director de la sección de internacional había mostrado su acuerdo con que las «numerosas pruebas» no eran tales; y nueve meses desde que este había pedido a LeMoyne que dedicara un artículo entero a las pruebas reales, fueran las que fueran (véase la nota 8). Nueve largos meses de investigación bien merecen una lectura minuciosa.

Ahora, las «numerosas pruebas» de la ayuda nicaragüense, de la que las guerrillas dependían para su simple subsistencia, se han esfumado por completo. LeMoyne no hace mención alguna de sus afirmaciones anteriores, ni de la petición de que muestre sus pruebas, ni de la contribución que sus frases gratuitas significaron para el proyecto de demonización del sandinismo, protegiendo con ello a los clientes asesinos de los Estados Unidos y minando la base de los acuerdos de paz.

Ahora resulta ser que las pruebas son «muy circunstanciales, y abiertas a diferentes interpretaciones». Ya no son «numerosas», sino «limitadas», y aun de estas no se ofrece ninguna relación fidedigna. Además, las «pruebas limitadas» indican que los cargamentos «son reducidos y, probablemente, esporádicos», es decir, nada que ver con la ayuda en gran escala que mantenía viva a la guerrilla salvadoreña, según la versión de agosto de 1987 y artículos posteriores. Claro está que tales conclusiones no sorprenderán a quien haya estudiado cómo ha funcionado, con respecto a estas cuestiones, la propaganda gubernamental estadounidense de los últimos años. Las «pruebas limitadas» tienen que ver con el trasbordo de mercancías desde el bloque soviético, especialmente desde Cuba (aunque, de nuevo, no se aportan hechos probatorios). Si seguimos leyendo, encontraremos que se han atestiguado, al menos en la misma medida, los suministros directos de armamento de la contra a la guerrilla salvadoreña, al igual que la implicación en ellos del ejército hondureño. Ello tampoco resultará sorprendente para los que se hayan tomado la molestia de *leer* la propaganda gubernamental, en lugar de limitarse a informar a partir de los comunicados de prensa; en un escrito interno del Departamento de Estado, por ejemplo, se recogen las declaraciones de un desertor sandinista, que no corroboró los supuestos suministros sandinistas, pero en cambio sí afirmó que las armas «provenían de México y Guatemala»[16] (resulta igualmente probable, aunque no

16. Véase mi introducción a Morley y Petras, *The Reagan administration.*

se ha investigado, que cuando los delegados de los EE.UU. se dirigieron a la frontera, en febrero de 1988, después de que se terminara con sus tres vuelos diarios de suministro, empezaran a vender armas a oficiales hondureños corruptos, quienes las venderían a su vez a las guerrillas salvadoreñas; es un tema sobre el que volveremos en seguida). La contribución más importante del sandinismo a la guerrilla salvadoreña es, según la nueva versión de LeMoyne, un «puerto seguro» en Nicaragua para la ubicación de sus oficinas y centros logísticos y de trasporte, además de la libertad de viajar por Nicaragua y otras zonas. Lo mismo podría decirse de muchos otros países, dejando a un lado a los EE.UU. y sus dependencias; y todos los estados de la región, incluyendo a Costa Rica, han prestado siempre este tipo de ayuda —y una mucho más intensa— a las fuerzas delegadas por los EE.UU. para que atacaran Nicaragua.

El lector atento ya habrá percibido que hemos llegado al fin de la farsa. Como era bien evidente, el cuento de la supuesta «simetría» no pasa de ser ridículo. El engaño ha sido mantenido con éxito en tanto en cuanto prestar ayuda a la contra era una opción política relevante y viable; durante este tiempo, era necesario presentar a las fuerzas delegadas de los Estados Unidos como guerrillas genuinas, insistiendo así en la idea de la «simetría» existente entre la contra nicaragüense y la guerrilla salvadoreña, necesitadas ambas de colaboración exterior para sobrevivir. A finales de 1988, la opción de la contra perdió el poco atractivo que le quedaba; en parte porque ya no era necesaria para lograr el objetivo de arruinar Nicaragua y maximizar el sufrimiento y el malestar de su población civil, en parte porque comenzaba a ser imposible mantener por más tiempo a las fuerzas de la contra en el país. Por tanto, se permite que el cuento desaparezca de los medios; ahora bien, siempre sin reconocer la intervención previa. Ello implica a su vez que desaparezca de la historia, como probablemente sucederá.

Las reglas del juego son claras: el poder establecido fija los términos del debate político. El sistema mediático y gubernamental crea la afirmación de que los sandinistas están ayudando a las guerrillas salvadoreñas y la reitera insistentemente, tanto como lo requiera la causa. De forma aislada, se tolera la intromisión de algún escéptico que objete que las pruebas son ciertamente escasas. Sin embargo, no se trata ni se investiga sobre la cuestión de la posible ayuda salvadoreña a las fuerzas de la contra, dirigidas por los Estados Unidos, aun cuando no hay dudas de

que, durante 1986, El Salvador sirvió de base para los ataques contra Nicaragua (y las mismas fuentes que dijeron la verdad entonces, pero fueron ignoradas, aseveran que el proceso continúa hoy, pero siguen siendo ignoradas). Mientras resultó útil, en suma, se mantuvo la absurda tesis de la «simetría»; y la teoría de una colaboración imprescindible del exterior, hoy dejada a un lado, puede recuperarse cuando sea necesaria, aun cuando haya sido retirada silenciosamente, puesto que ya se han sentado sus bases en la conciencia pública.[17] El debate ha de centrarse sobre un único tema: la idea de que Nicaragua, al igual que otros gobiernos —e incluso los mismos ciudadanos, de ser así posible—, *debería* enviar ayuda a las personas que intentan defenderse ante el asalto de los ejércitos y los escuadrones de la muerte enviados por un régimen militar implantado por una potencia extranjera. Si se analizara con más detalle el otro tema —el prohibido— podrían extraerse conclusiones interesantes sobre los principios éticos y el clima intelectual reinante; pero nos alejaría tanto del consenso fabricado por el poder que esta posibilidad resulta inimaginable.

Observemos, finalmente, que no se ha dispensado a todos los desertores el mismo trato regio que a Miranda, cuya deserción se produjo en el momento crítico de la fase final de la campaña mixta —mediática y gubernamental— para terminar con los indeseados acuerdos de paz. En el caso de Miranda, el bombardeo mediático se inició con dos largos artículos de portada en el *Washington Post* (publicados el 13 de diciembre de 1987) y fue continuo durante varias semanas. Los medios retrasmitían la propaganda del Departamento de Estado, basada en el testimonio del ex sandinista, que advertía ominosamente de que Nicaragua podría intentar defender su territorio nacional contra el suministro aéreo de la CIA a las fuerzas delegadas de los Estados Unidos; afirmaba que Nicaragua se reía en las narices de la impotente marina estadounidense, con envíos indetectables de armas a El Salvador a través del golfo de Fon-

17. También otros han puesto entre paréntesis esta doctrina. Charles Lane, corresponsal del *Newsweek* en Centroamérica, escribe en el *Wall Street Journal* (siempre tan airadamente en contra de los intentos sandinistas de derrocar el gobierno de El Salvador y otros países) que las guerrillas de El Salvador «capturan o se fabrican la mayor parte del armamento»; se les ha escapado su oportunidad histórica, prosigue, en parte por el «desilusionante experimento sandinista», una «revolución que había sido prometedora», pero que, por razones que no se hacen constar, «derivó en una situación irremediable y vergonzosa, al estilo de la de Cuba, y en un campo de batalla para la lucha de soviéticos y estadounidenses»; *Wall Street Journal* (WSJ), 23 de diciembre de 1988.

seca; y reportaba que los sandinistas planeaban reducir su ejército regular y entregar armamento ligero a los civiles para que se defendieran ante una posible invasión de los EE.UU. (aunque esta última noticia fue trasformada por la prensa independiente en la amenaza de la «destrucción y el terrorismo» contra sus vecinos).[18]

Compárese el caso de Miranda con la reacción de los medios ante la deserción de Horacio Arce, quien desde 1985 era el jefe del servicio de inteligencia del FDN (Fuerzas Democráticas Nicaragüenses, el bloque más importante de la contra). Tras haber recibido asilo en la embajada de México en Tegucigalpa, Arce partió para Ciudad de México en noviembre de 1988, y regresó a Managua durante el programa de amnistía del gobierno nicaragüense. Fue entrevistado durante su estancia en México, y se vio que tenía muchas cosas que decir.

El jefe del servicio de inteligencia de la contra proporcionó detalles de la ayuda que les prestaba el Pentágono, violando las restricciones del Congreso; se incluía el entrenamiento de los contras por parte de instructores militares estadounidenses, a lo largo de 1986, en cierta base militar de un estado del sur (una base aérea semisecreta, con diecisiete pistas, a la que llegaron directamente en varios Hércules C-130, sin pasar por ningún control de inmigración o aduanas, como es lógico). Los instructores provenían de Fort Bragg. Cuando finalizó la guerra de las Malvinas, en 1982, la contra hondureña perdió a los adiestradores y consejeros argentinos, pero en la base estadounidense en la que se los formaba ilegalmente (el propio Arce estuvo allí), había entre los instructores un especialista chileno en la guerra sicológica, con lo que se mantenían los vínculos con los países neofascistas de la órbita estadounidense.

Arce, entre otros, también recibió adiestramiento en la base aérea de Ilopango, cerca de San Salvador, por parte de instructores salvadoreños y estadounidenses. En Honduras fueron entrenados directamente por el ejército hondureño, que desde 1980 había estado proporcionando la base de la instrucción y la logística, y cedía a sus pilotos para los vuelos de suministro en territorio de Nicaragua. Las autoridades hondureñas de la inmigración también colaboraron, facilitando el acceso de la contra a los

18. Sobre el testimonio de Miranda y la versión que de este publicaron los medios de comunicación y el Departamento de Estado, véanse mi artículo en *Z Magazine* (en adelante, *ZMag*), marzo de 1988, y Holly Sklar, *Washington's war on Nicaragua*, South End, Boston, 1988, págs. 383 y ss.

campos de refugiados para la recluta (en ocasiones forzosa). Los indios misquito eran entrenados separadamente, por un oficial japonés. La mayoría de los supervisores de la instrucción y la ayuda eran de origen hispano, sobre todo cubanos, dominicanos, puertorriqueños, suramericanos y aun algunos españoles. Las armas procedían mayoritariamente de Israel, «como todo el mundo sabe», sobre todo del armamento requisado durante la guerra del Líbano, en 1982. «Los cubanos de la CIA están por todas partes», involucrados hasta la médula en la corrupción general. Y parte de la financiación de la contra se obtenía mediante el tráfico de drogas.

Los Estados Unidos son un poder global y, por tanto, cuentan con la capacidad de construir sistemas muy refinados de terrorismo y corrupción, utilizando para ello a sus estados clientes y mercenarios, así como su tradicional vinculación con el terrorismo internacional y los sindicatos del crimen. Los oficiales de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, según Arce, proporcionaban información privilegiada a la contra, entre otras ayudas; sus contactos en la embajada eran, por ejemplo, «Robert McHorn, de la CIA, y Alexander Zunnerman, quien aparentemente es de la AID, pero a la vez es de la CIA».* Así mismo, Arce entró en contacto directo con los almacenes de la AID en Tegucigalpa, en la sede de la compañía Electropura; AID ha servido en el pasado como avanzadilla de las operaciones terroristas de la CIA, y ello se ha reconocido públicamente, en especial durante la «guerra clandestina» contra Laos.

El 19 de julio de 1979, día de la victoria sandinista, Arce había huido de Nicaragua con su padre, comandante de la guardia nacional de Somoza. Un año después, fue reclutado para la contra, adoptando el nombre de guerra de *El mercenario*; en enero de 1981, la operación se había convertido ya en «algo serio, algo grande». Fue ascendiendo hasta lograr el rango de comandante, y fue nombrado jefe del servicio de inteligencia después de que Ricardo Lau, su antecesor en el cargo, fuera despachado (y, probablemente, asesinado por la misma contra, según las conjeturas de Arce). Lau representaba un problema para la contra, ya que, a principios de 1985, el antiguo jefe de inteligencia de El Salvador, Roberto Santiváñez, le había involucrado en la trama del asesinato del arzobispo Romero y le había atribuido una «función clave» en la orga-

* AID es la división del Departamento de Estado de los EE.UU. que coordina los programas de ayuda internacional. (*N. del t.*)

nización e instrucción de los escuadrones de la muerte en El Salvador y Guatemala, así como en varios asesinatos políticos cometidos en Honduras. Era «el más ladrón de los ladrones», según Arce.

El mercenario precisó también que no todos los contras «iban a sueldo», ya que algunos sentían lealtad por sus jefes. Aun así, su salario era muy elevado, comparado con el estándar de la región. Sin tener una familia a su cargo, Arce ingresaba cerca de 500 dólares mensuales.

Las fuerzas armadas hondureñas «participan en todas las operaciones que se desarrollan cerca de la frontera», y además realizan servicios de investigación sobre «objetivos nicaragüenses, tanto militares como civiles». Los objetivos civiles son muy importantes, ya que, según Arce, «atacábamos muchas escuelas, centros de salud y este tipo de cosas. Hemos intentado que el gobierno de Nicaragua no pueda prestar ninguna clase de servicios sociales a los campesinos, que no pueda desarrollar su proyecto ... esa es la idea». Resulta evidente que su instrucción por parte de los Estados Unidos fue todo un éxito y comprendieron de qué se trataba.

Arce también se refirió a la frecuente corrupción de los contras, empezando por el propio comandante Enrique Bermúdez, y a la venta de armas y materiales suministrados por los Estados Unidos, «gran parte de lo cual ... acababa probablemente en manos de las guerrillas de El Salvador». En colaboración con oficiales hondureños —que sacan también su tajada del pastel— la contra está vendiendo rifles de asalto y equipamiento de radiocomunicaciones al FMLN de El Salvador (a la postre, por tanto, será verdad que el FMLN está recibiendo ayuda desde Nicaragua; LeMoyne y el *Times* estarán encantados de saberlo).[19]

Como puede verse, pues, Arce tenía mucho más que contar que Miranda, y su función en la organización de la contra fue mucho más relevante que la de Miranda en el gobierno de Nicaragua. Además, como ya se ha indicado, la contra se veía favorecida por una atención y publicidad extraordinarias, superiores por lo general a las del propio gobierno. Pero en este caso, no hubo manera de bastardear su testimonio para que

19. Marcio Vargas, Ciudad de México, entrevista con Arce, *Boletín informativo de Centroamérica*, Ciudad de Guatemala, 21 de diciembre de 1988; Rubén Montedonico, *El Día*, Ciudad de México, 6 y 7 de noviembre de 1988, traducido al inglés en *Honduras Update*, nov.-dic. de 1988. En cuanto al coronel Ricardo Lau, véase Chomsky, *Turning the tide*, South End, Boston, 1985, pág. 104 [trad. cast. de Carme Castells: *La quinta libertad*, Crítica (Biblioteca de Bolsillo, 17), Barcelona, 1999, pág. 166].

ayudara a la causa de la «demonización de los sandinistas» y recabara respaldo público para los estados terroristas; bien al contrario, su mensaje iba en el sentido inverso. Los directores de los medios de comunicación realizaron su elección a partir de eso.

2. Silencio obligado[20]

Suele sostenerse en los Estados Unidos la tesis de que «los americanos tendemos a flagelarnos respecto a varios aspectos de nuestra política y nuestras acciones que nos parecen reprobables». La realidad, sin embargo, es muy diferente.

El modelo más común combina una extraordinaria habilidad para «no ver» los crímenes cuya responsabilidad se nos puede achacar, con la indignación irreprimible ante los crímenes del enemigo (apelando a los grandes principios, y a la vez sin escatimarnos elogios por ello). En Occidente, existe mucha bibliografía —en gran parte, fraudulenta— que denuncia con desdén a los apologistas y supuestos apologistas de la Unión Soviética o de las víctimas de la intervención estadounidense en el Tercer Mundo. Sin embargo, casi no se ha investigado la reacción más común: el silencio y la apología de los crímenes de nuestro país y sus estados clientes, aun cuando la simple voluntad de afrontar esos hechos ya podría significar un cambio sustancial y la limitación —o incluso el fin— de tales abusos. Este es también el comportamiento más habitual en otras regiones; en la esfera soviética, por ejemplo, los disidentes son denunciados acremente por los *comisarios* derechistas, en tanto que apologistas de los crímenes de Occidente. En nuestro país reproducimos el mismo patrón.

Tanto en este libro como en otros, nos hemos ocupado ya de numerosos ejemplos. Para la evaluación de la cultura política y los medios en los Estados Unidos, los casos más ejemplares (dejando ahora a un lado los crímenes perpetrados por los propios EE.UU.) son los de sus clientes principales: en los últimos años, El Salvador e Israel. El ejemplo de Israel es singularmente explicativo, desde que la demostración del poder israelí en 1967 despertó unas alabanzas y una devoción que aún no se

20. Véase «Addendum» a *NeI*, pág. 81.

han extinguido entre los intelectuales estadounidenses. La bibliografía apologética no pasa de ser, con frecuencia, una mera parodia del periodo estalinista.[21]

Las elaboradas campañas de difamación, dirigidas contra los que no satisfacen las exigencias de los fieles, tampoco son nada nuevo. El efecto pretendido, como en otros lugares, es el de intimidar a los críticos y allanar el terreno para el recurso a la violencia, así como el de erigir obstáculos a un acuerdo político que hace tiempo que está al alcance de la mano.[22]

Israel puede estar tranquilo; mientras sea considerado un «valor estratégico», seguirá siendo «el paradigma de la respetabilidad», según lo llamaba el *New York Times* cuando las atrocidades israelíes en los territorios ocupados alcanzaron un grado tan brutal que los medios llegaron incluso a prestarles atención. Y puede apoyarse en el politburó del movimiento laboral estadounidense para justificar todos sus actos, para dar fe de que si bien

> en su lucha por mantener el orden, las fuerzas de defensa israelíes han recurrido en ocasiones a un uso excesivo de la fuerza ... [sin embargo] no hay duda de que esos incidentes deben atribuirse a la inexperiencia del ejército israelí en el control de los disturbios y otras funciones policiales, así como a la frustración que sienten los policías israelíes cuando se enfrentan a jóvenes palestinos que les lanzan piedras y cócteles molotov.[23]

Para poder apreciar plenamente el alcance de esta afirmación, es necesario recordar que se produjo después de uno de los raros periodos en los que los medios de comunicación reprodujeron al menos parte de las atrocidades que se han estado cometiendo durante años en los territorios ocupados, a un nivel quizá menor, pero no menos escandaloso. Los artículos de John Kifner para el *New York Times* eran ejemplos singular-

21. Para el análisis de un ejemplo, véase mi reseña de *To Jerusalem and back*, de Saul Bellow, reimpresa en mi *Towards a new Cold War*, Pantheon, Nueva York, 1982 [trad. cast.: *La segunda guerra fría*, Crítica, Barcelona, 1984]; esta reseña despertó tal cólera que ocasionó el cierre del periódico que la publicó originalmente, según se me dijo. Para otros muchos ejemplos, pueden verse otros capítulos del mismo libro, así como mi *Peace in the Middle East?*, Pantheon, Nueva York, 1974, cap. 5, y *Fateful triangle*, South End, Boston, 1999 (edición ampliada), 1983.

22. Véase *NeI*, Apéndice V, sección 4.

23. «Statement by the AFL-CIO Executive Council on Israel», 16 de febrero de 1988.

mente buenos de periodismo profesional, coherente con las extraordinarias marcas obtenidas trabajosamente durante tantos años.

Los apologistas de esta especie, con posturas similares a las del consejo ejecutivo de la AFL-CIO, han prestado sus servicios durante veinte años con miras a dotar de autoridad una represión cruel y una humillación incesante. Se ha alcanzado ya el nivel de los pogromos: los soldados entran por la fuerza en las casas, destrozan los enseres, parten los huesos a sus habitantes y matan a palos a simples adolescentes después de arrastrarlos a la calle; la violencia de los colonos se ejerce con plena impunidad; y lo mismo sucede con los suplicios colectivos, la deportación y el terrorismo sistemático por orden del Ministerio de Defensa. A medida que la moda vaya pasando, las figuras más señeras de la campaña contraria a la supervisión de la violencia estatal se irán creando, sin duda, un pasado nuevo; pero los archivos están ahí, disponibles para quien haya elegido ver.

Siempre ha habido algún Elie Wiesel con la función de asegurar al lector que no se producen más que unas pocas «excepciones lamentables, pero corregidas inmediatamente por las autoridades israelíes», a la vez que se censura acremente el delito realmente execrable: que la opinión pública condene las atrocidades israelíes. Nos describe los «ojos soñadores» de los soldados de Israel; ¿quizá son los mismos que habían sido descritos, pocas semanas antes, por los reservistas que volvían de los territorios palestinos? Estos reservistas noticiaron los «actos de humillación y violencia contra los habitantes palestinos, que se han convertido en una costumbre y prácticamente nadie procura impedirlos», incluyendo «actos ignominiosos» que pudieron contemplar en persona, mientras las autoridades militares miraban hacia otra parte.[24] O tal vez

24. Wiesel, Op-Ed, *NYT*, 23 de junio de 1988; Reuven Padhatzur, *Ha'aretz*, 16 de mayo. Con respecto a la doctrina defendida recurrentemente por Wiesel, según la cual es obligatorio callar ante las atrocidades del estado que uno ama y, además, él debe abstenerse de comentar cualquier atrocidad, puesto que solo las personas en el poder están en una posición que les permite conocerlas, véanse los ya citados *Fateful triangle* y *La quinta libertad*. Wiesel reiteró la obligación del silencio en los momentos más duros de la reciente represión; véase su artículo en *Yediot Ahronot*, 22 de enero de 1988, en el que afirma que «renuncio a criticar a Israel, siempre he renunciado a hacerlo», entre otros sentimientos similares, que recuerdan a los expresados tiempo atrás por algunos apologistas de otros estados. Sin embargo, sería injusto poner de relieve esta práctica de Wiesel sin hacer referencia también a los que hoy lo condenan por su silencio al par que borran el recuerdo de las declaraciones todavía peores que han ido realizando durante muchos años. Sobre lo inaceptable de estos hechos, véanse las referencias citadas en la nota 21. Pero Wiesel, al menos, tuvo la integridad de permanecer en su postura de siempre incluso después de que esta se hiciera impopular.

Wiesel esté pensando en los soldados que capturaron a un chaval de diez años y, cuando este se negó a dar los nombres de otros niños que hubieran tirado piedras, se pusieron a «reventarle la cabeza», dejándolo «como un bistec» (en palabras de los mismos soldados), y luego golpearon igualmente a su madre, que intentaba protegerlo, para fijarse solo entonces en que el niño era sordomudo y retrasado. Eso «no preocupó» a los soldados, según afirmó más tarde uno de los participantes, y el jefe de sección les ordenó que siguieran de una vez con la faena, porque «no tenemos tiempo para jueguecitos». O quizá la observación de Wiesel quiera hacernos ver que «la imagen de un soldado israelí pateando a una anciana árabe ya no es noticia», según recoge con amargura la prensa hebrea, refiriéndose a los que aceptan las atrocidades tan tranquilamente como el autor de *Contra el silencio*, aunque sus palabras podrían servir para aliviar el sufrimiento y reducir los abusos, si no estuviera comprometido con el silencio como con una causa justa.[25] El hecho de que ese comportamiento repetido durante décadas se contemple con respeto, e incluso casi como un signo de santidad, lo dice todo sobre la cultura occidental.

Vista la dispensa, Israel es libre de usar la colosal ayuda de los Estados Unidos para enviar a su ejército a dirigir operaciones regulares como las descritas en la prensa israelí, pero raramente en la nuestra —por las mismas fechas en que aparecieron las reflexiones de Wiesel sobre las «excepciones lamentables»—, como impedir, por ejemplo, el abastecimiento de los campos de refugiados, en los que hay una «carencia grave de alimentos». O como golpear tan brutalmente a los prisioneros jóvenes que el médico militar del campamento de prisioneros de Ansar 2 se negó a admitirlos; uno de ellos fue «golpeado hasta quedar sin sentido durante más de una hora y media, rodeado de soldados, sin recibir ayuda médica», luego fue «arrojado» desde el jeep en el camino del hospital y finalmente «apalizado brutalmente» por segunda vez, «ante decenas de soldados» (a uno de los cuales, según parece, se le re-

25. Zeev Sachor, «Getting accustomed to atrocities», *Hotam*, 1 de abril de 1988; se trata de uno de los muchos textos de la prensa israelí traducidos en el informe de 1988 de la Liga Israelí para los Derechos Humanos, con sede en Tel Aviv, que recuerdan a los pogromos organizados por el Ministerio de Defensa con el fin de dar una lección a las bestias de carga. Este material es muy informativo, pero es prácticamente desconocido en los Estados Unidos, aun cuando alguna relevancia debe de tener para los que se supone que han de pagar la factura.

probó su conducta). O como forzar la entrada en una casa, arrastrar fuera a un niño de siete años que se escondía debajo de la cama y entonces «aporrearlo salvajemente delante de sus padres y familiares», luego apalear al padre y al hermano porque no habían revelado el escondite del niño, mientras el resto de los hijos gritan histéricos «y la madre no puede calmarse porque se le ha ordenado que no se mueva». O como apalizar sin compasión a críos incluso de cinco años, a veces entre tres y cuatro soldados, ayudados de las porras, «hasta partirles las manos y las piernas», o rociarlos con gas directamente en los ojos. Esta es la suerte de historias de terror que cuentan los soldados que regresan del miserable campo de refugiados de Jabaliya, en el cual el ejército ha conseguido «terminar con ellos», de forma que están «totalmente machacados, débiles, exhaustos». Arrastrar a un niño de entre doce y quince años por encima de un alambre de espino, «para herirlo» a la llegada de los presos a la cárcel de Dahariya, mientras un oficial lo observa, sin reaccionar; o apalear cruelmente a los prisioneros en formación de marcha con porras, tubos de plástico y anillas, mientras el oficial al mando lo contempla; «los autobuses de Israel se han convertido en cámaras de tortura», según Dedi Zucker, parlamentario en la Kĕnésset, quien ha informado de estas y otras salvajadas. O almogavarear por Jericó, forzando las casas, humillando a los residentes, golpeándoles como bestias. O «desbocarse como locos homicidas» por el campo de refugiados de Amari, «tirando las puertas, violentando las casas, destrozando las propiedades y apalizando a los habitantes, incluso a los niños», para apalear luego al conductor de una ambulancia que venía a socorrer a los heridos, después de haberlo arrastrado por el suelo (en este caso, fue obra de una unidad de paracaidistas de élite, que, según los testigos, entró a saco sin que mediara ninguna provocación). O recluir a un prisionero «en perfecto estado de salud» y devolverlo «sordo y paralítico», lo que «parece ser el resultado de las palizas y torturas brutales ... que sufrió durante su detención» en el centro de interrogatorios de Jenín. O liberar a un joven árabe encarcelado por haber quemado el coche de un supuesto informador de la policía, toda vez que se descubre que la confesión se obtuvo mediante tortura, pero sin que el tribunal ni el abogado del distrito hagan referencia a la «confesión obtenida mediante palizas» o lo que le hubieran hecho. Y tantas otras salvajadas.[26]

26. *Ha'aretz*, 15 y 4 de julio de 1988; *Jerusalem Post* (en adelante, JP), 6 de julio;

Existen numerosas variantes. Willy Shlap, comandante de una tropa de élite, ha descrito lo que vivió en su primera semana en el campo de refugiados de El Burij, cerca de Jabaliya. Su unidad se encontró a un niño de once años lanzando una piedra, y lo llevó a su casa, donde se ordenó a su padre que le pegara. El padre le soltó un bofetón, pero el oficial gritó: «¿A eso le llama pegarle? ¡Que le pegue le digo! ¡Que le pegue!»; la tensión creció hasta hacerse insoportable y el padre «se puso histérico», comenzando a apalear al hijo desaforadamente, golpeándolo contra el suelo y pateándole el costillar con todas sus fuerzas, hasta que los soldados se quedaron, aparentemente, satisfechos. Cuando la brutalidad subió aún más de grado, en el verano de 1988 (es decir, cuando se publicaron las reflexiones de Wiesel), el *Jerusalem Post* informó de que, según los trabajadores del UNRWA [Organismo de Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio] y los médicos de los hospitales, las víctimas del cruel incremento de la violencia fueron sobre todo «hombres de entre quince y treinta años», pero durante las semanas anteriores las clínicas habían «tratado también a 24 niños y cinco niñas de unos cinco años o menos», así como a muchos otros niños; por ejemplo, un niño de siete años «con el riñón sangrando y señales de haber sido apaleado». Los soldados golpean, patean y apalean regularmente a niños, según el testimonio de los médicos y los responsables de los organismos de socorro.[27]

En uno de los casos se llegó a juicio, por lo que la prensa (la israelí, se entiende) le dispensó una atención considerable: fueron detenidos cuatro soldados de una sección de élite de la brigada Givati, acusados de haber apalizado hasta la muerte a un habitante del campo de Jabaliya, el 22 de agosto. Se informó de ello por primera vez en *Ha'aretz*, un mes más tarde. Unos niños habían estado lanzando piedras, y veinte soldados

---

Ya'akov Lazar, *Hotam*, 15 de julio, informando desde Jabaliya; William Montalbano, *Los Angeles Times* (*LAT*), 31 de mayo y AP, 30 de mayo de 1988, sobre Dahariya, una de las atrocidades de las que informa Dedi Zucker a partir del testimonio de varios reservistas, en *Yediot Ahronot* (*YAh*), el 10 de junio; *Yerushalayim*, 17 de junio, sobre Jericó; AP, 22 y 24 de junio, citando acusaciones de Ran Cohen, miembro de la Kĕnésset [la asamblea legislativa israelí]; *JP*, 3 de agosto de 1988, sobre la liberación de Mohammed Dari, después de tres meses de prisión. Para una documentación extensa, véase *Punishing a nation: human rights violations during the Palestinian uprising, December 1987-December 1988*, Al-Haq-Law in the Service of Man, Ramala, diciembre de 1988.

27. Yizhar Be'er, *Kol Ha'ir*, 26 de agosto de 1988; Joshua Brilliant, *JP*, 26 de agosto de 1988.

violentaron una casa y comenzaron a golpear a Hani al-Shami, el padre de uno de los niños sospechosos; fue pateado y apaleado con porrazos y culatazos; lo tiraron al suelo, y los soldados le saltaban encima desde la cama, mientras su cabeza sangraba, por los golpes recibidos. Su mujer fue igualmente apaleada. Llegó entonces un oficial, quien, al encontrar al hombre tan malherido y con varias hemorragias, ordenó que se le trasladara a las oficinas de la administración militar (en lugar de al hospital; es el procedimiento acostumbrado). Más tarde, se notificó a la familia que al-Shami había muerto. Dos soldados de la misma unidad afirmaron que «es cierto, lo apalizamos, le dimos bien fuerte, pero es mejor partirles los huesos que matarlos», haciéndose eco de unas declaraciones del ministro de Defensa. «Hemos perdido la imagen de seres humanos», dijeron más tarde.[28]

Cuando se hicieron públicas las detenciones, salieron a la luz otras salvajadas de la misma brigada. Entre ellas, la historia de un periodista del campo de refugiados de El Burij, quien tuvo que ser hospitalizado después de que los soldados forzaran su casa y le obligaran a ponerse a cuatro patas y rebuznar como un asno, mientras le propinaban porrazos en los testículos, el vientre y la espalda, y lo torturaban con cables eléctricos, todo ello durante hora y media; le trizaron las gafas, mientras gritaban: «¡Ahora serás un burro ciego!». Otros soldados describieron Givati como «una brigada sin ley», acusando a su comandante y censurando su «orientación derechista», con muchas unidades procedentes de Hesder Yeshivot, es decir, de escuelas de instrucción militar y religiosa, reputadas por su fanatismo de ultraderecha.[29]

Mientras se celebraba el juicio por la muerte de al-Shami, los soldados quedaron en libertad, como se notició brevemente en el *Jerusalem Post*, sin más comentarios. La prensa hebrea reflejó detalles omitidos en la versión preparada para el público extranjero. Un soldado declaró, por ejemplo, que «le humillamos y le apaleamos, pero algo había que hacer para pasar el tiempo»; otro añadió que al-Shami era panzón y su aspecto resultaba muy divertido, por «eso le pegábamos sobre todo en la barriga». Un oficial advirtió que ya había amenazado a al-Shami con matarlo, pues «sus quejidos me cargaban»: «Le grité que se callara de una

28. Eitan Rabin, *Ha'aretz*, 23 de setiembre de 1988.
29. Shimon Elkavetz, *Hadashot*, 28 de setiembre de 1988; Tali Zelinger, *JP*, 29 de setiembre de 1988.

vez, o le mataría». En su testimonio indicó también que, en las instalaciones militares a las que lo trasladaron después de la paliza, había pedido a un doctor que lo atendiera, pero este se negó, ordenando tan solo que le limpiaran la sangre de la cara; ese mismo día, según el testigo, llegaron muchos árabes al centro de mando, con las manos atadas y los ojos vendados, y allí los apaleaban tanto los oficiales como los soldados. Al preguntársele por qué no se había preocupado por el estado de al-Shami, respondió que «es un árabe herido, no me interesa, son árabes y quieren matarnos». Varios soldados coincidieron en que «en los disturbios, cuando pillas a alguno lo apalizas ... da igual si no se resiste. Es para que les entre el miedo». Las tropas tienen órdenes de «romperles las piernas, para que no se muevan, y partirles las manos, para que no tiren piedras». El mando de una compañía dio «órdenes claras» para que se apaleara a todos los sospechosos hasta que «queden fuera de juego por un mes o dos»; es una acción «necesaria», según su testimonio, porque encerrarlos «es como llevarlos a un curso de instrucción de la OLP». Violentar las casas de Gaza y apalizar a sus habitantes es «cosa de rutina».

El tribunal militar aceptó la tesis de la defensa, sentenciando que «hay fundamentos serios para creer que el fallecido fue golpeado dentro de los cuarteles por soldados a los cuales, por desgracia, la investigación no ha logrado identificar». Además, como los soldados de Givati habían estado detenidos durante 83 días, se había logrado ya el «equilibrio adecuado entre las necesidades del ejército, la naturaleza de su inocencia y la naturaleza de la justicia», puesto que se trata de soldados que «cumplieron su deber militar, no de criminales», según la sentencia judicial. «Nadie niega que se haya apalizado bárbaramente a un árabe desarmado dentro de su propia casa, que le hayan partido una o dos trancas en la cabeza delante de sus hijos, o que le hayan saltado encima con las botas de combate», según Ziva Yariv; pero de estos actos no se deriva ninguna responsabilidad legal, porque podrían no haber sido la causa directa de su muerte, «como si las leyes no prohibieran el apalizamiento salvaje de los civiles o el partirles una tranca encima, como si las leyes no prohibieran el ataque sanguinario o el hacer carnicería de alguien».[30]

El corresponsal militar de *Ha'aretz* ha comentado que cada vez llegan menos «excepciones» a los tribunales, pero ello se debe a que «las

30. *JP*, 17 de noviembre de 1988; *Ha'aretz*, 15 y 16 de noviembre y 2 de diciembre;

excepciones se han convertido en norma». Los soldados de Givati —al igual que los miembros de otra unidad de élite, acusada de saquear el campo de refugiados de Kalandia—, «no entendían de qué iba el rollo», puesto que habían hecho lo mismo que sus compañeros de otras secciones y habían cumplido estrictamente las órdenes, como se espera de ellos; entendían que se les estaba juzgando injustamente, porque el apaleamiento despiadado de civiles árabes, ya sea en la calle o en sus propias casas, forma parte del día a día. El tribunal, naturalmente, se mostró de acuerdo con ellos. *Harig*, el término hebreo para designar a una 'excepción', parece significar hoy, sencillamente, 'atrocidad'.[31]

La brutalidad no inquieta a las autoridades. El Dr. Marcus Levin, que fue llamado a filas para que sirviera como reserva en el centro médico del campamento de prisioneros de Ansar 2, ha explicado que se le encomendó verificar la salud de los prisioneros «antes y después de los interrogatorios». Al preguntar a los médicos titulares por qué debía revisar a los presos «después de los interrogatorios», le respondieron que «por nada especial, algún que otro miembro roto. Ayer, por ejemplo, trajeron a un niño de doce años con las dos piernas rotas» ... *después* del interrogatorio, claro. Levin, que había servido dieciséis años en el ejército, se dirigió al comandante y le dijo: «Soy Marcus Levin, y no Joseph Mengele; por razones de conciencia, me niego a servir en un lugar que me recuerda a las dictaduras suramericanas». La mayoría, sin embargo, no tienen problemas de conciencia, o sencillamente miran hacia otro lado. Uno de los médicos le contó a Levin que «al principio sí que te sientes como un Mengele, pero te acostumbras en seguida».[32]

Dan Almagor, escritor israelí, cuenta cómo recordó un telefilme que había visto en Inglaterra, cuando se conmemoraba el trigésimo aniversario del inicio de la segunda guerra mundial, en el cual se preguntaba a varios oficiales alemanes —una vez cumplida su condena por crímenes de guerra— por qué habían filmado minuciosamente las atrocidades en las que tomaron parte. Uno de los oficiales respondió que «la mayoría no las filmábamos para la historia», sino «para que los niños tuvie-

---

Yariv, *YAh*, 18 de noviembre de 1988; Michal Sela [*sic*], *JP*, 26 de enero y 3 de febrero de 1989; *JP*, 10 de febrero; y véase también Glenn Frankel, *Washington Post* (*WP*), 12 de febrero; George Moffett, *CSM*, 15 de febrero de 1989.

31. Reuven Padhatzur, *Ha'aretz*, 30 de noviembre de 1988; véase también Eitan Rabin, *Ha'aretz Supplement*, 2 de diciembre de 1988, quien realiza las mismas observaciones.

32. *Hadaf Hayarok*, suplemento de *Al Hamishmar*, 23 de agosto de 1988.

ran algo con lo que jugar, cuando regresábamos a casa el fin de semana. Los niños se reían mucho con ellas», a falta de películas de Mickey Mouse, por las restricciones de la guerra. Almagor recordó el mencionado telefilme al leer el testimonio de los soldados de la brigada Givati, que se reían tanto con el «atractivo» vientre de Hani al-Shami, «un blanco perfecto para los golpes». Almagor ha descrito, así mismo, una visita a Cisjordania, acompañado por un comandante al cargo de la instrucción de brigadistas, quien relataba con orgullo cómo zurraba a los árabes con la porra. Este mando se unió a un grupo de oficiales y reunieron un corro de oyentes que se partían de risa con las historias de un miembro de la ultraderecha religiosa, que cubría su cabeza con un solideo de punto; en ellas contaba cómo arrasaba con el buldózer las casas señaladas por la policía secreta, incluyendo una que no estaba marcada, pero se encontraba entre dos que sí lo estaban, o cómo había destruido igualmente una tienda al intentar dar la vuelta con la excavadora. La acre relación de Almagor también a mí me trajo a la memoria recuerdos del pasado, entre ellos uno de la «zona de guerra» de Boston, donde se exhibía un terrorífico documental japonés sobre el bombardeo de Hiroshima, como si de un filme pornográfico se tratara, para el mayor regodeo de la concurrencia. O cierta historia que apareció en el *New York Times* en marzo de 1968 (justo después, por tanto, de la «ofensiva del Têt»),* en la que se noticiaba con cierto disgusto cómo unos manifestantes habían irrumpido en una exposición del Museo de la Ciencia de Chicago, en la que los niños podían «entrar en un helicóptero militar y simular que disparaban la metralleta sobre varios objetivos señalados sobre un diorama de las tierras altas del Vietnam central», incluyendo una cabaña de campesinos, lo que molestó singularmente a aquella panda de odiosos pacifistoides.[33]

«Me temo que resulta ya imposible recopilar todas estas historias, y más aún pedir explicaciones o buscar a los responsables. Cada dos días hay una nueva.» Con esta desesperación se expresa Zvi Gilat, quien ha estado registrando con gran cuidado y dedicación las salvajadas cometidas en los territorios, mientras las fuerzas armadas israelíes recurren a medidas cada vez más implacables para aniquilar el levantamiento pa-

* Fuerte ofensiva del Vietcong, entre el 29 de enero y el 29 de febrero de 1968, que causó numerosas bajas por ambos bandos, minó la moral de los survietnamitas y obligó a la administración estadounidense a plantearse la posibilidad de retirarse de la guerra. (*N. del t.*)

33. Almagor, *Ha'ir*, 16 de diciembre de 1988; NYT, 18 de marzo de 1988.

lestino. Gilat describe el pueblo de Beita, que se hizo tristemente famoso por el asesinato de una niña judía, a principios de abril de 1988; fue asesinada por un escolta israelí desquiciado que acompañaba a unos excursionistas, después de haber matado ya a dos habitantes del pueblo. La hermana de uno de ellos, embarazada de tres meses, fue encarcelada por haber arrojado una piedra al asesino de su hermano, y no se la liberó hasta pocos días antes del parto; en cambio, el escolta israelí no fue siquiera acusado de los asesinatos, porque, según afirmó el portavoz del ejército, el coronel Raanan Gissen, «entiendo que este trágico incidente y su resultado ya son un castigo». Otros residentes de Beita han permanecido hasta ocho meses en prisión, sin sentencia condenatoria, y en las sesiones del tribunal militar tan solo se permitía la presencia de un familiar. La sentencia que condenaba a cuatro beitanos a tres años de prisión, acusados de haber lanzado piedras antes del homicidio de la niña, mereció unas pocas palabras en el párrafo undécimo de un artículo de Associated Press (AP) para el *Times*; diez días antes, el *Times* había noticiado la condena de un colono judío a dos años y medio de prisión (el mínimo, según la legislación israelí) por haber matado a un pastor palestino, al que encontró apacentando su rebaño cerca de la colonia. Los habitantes de Beita fueron expulsados del pueblo; se demolieron numerosas viviendas, incluyendo muchas de las que no estaban en la lista negra; se destruyeron los bienes; y se prohibió la exportación de aceite de oliva a Europa —la principal fuente de ingresos del pueblo—, aun cuando en Israel se niegan a comprarlo. Y dos semanas antes de que Gilat volviera a visitar la población, un niño de doce años fue tiroteado en la nuca, a quemarropa, por varios soldados israelíes de los que pretendía huir, al salir de casa y verlos allí apostados; fue abandonado en la calle, desangrándose durante al menos cinco horas, según los testigos presenciales. Gilat, sin embargo, aunque ya no dispone «de más fuerza ni de más voluntad», continúa recopilando estas historias de horror, sevicia y humillación, mientras decrece progresivamente la sensibilidad incluso entre los que las leen (aunque en esta categoría se cuentan solo unos pocos de los que pagan las facturas).[34]

He citado solo una ínfima muestra de las «excepciones lamentables»

34. Gilat, *Hadashot*, 16 de diciembre de 1988; Gissen, Joel Brinkley, *NYT*, 28 de abril; AP, *NYT*, 15 de diciembre; *NYT*, número especial, 5 de diciembre de 1988. Eiran Taus, *Al Hamishmar*, 19 de noviembre; Judith Green, *News from Within*, Jerusalén, 14 de diciembre de 1988. Green, una arquitecta de Jerusalén que colabora con el «Comité Beita» (para la

que —«no hay duda»— son atribuibles a la «inexperiencia» y la «frustración», y que aumentaron a mediados de 1988, al tiempo que los medios de comunicación estadounidenses dejaban de prestarles atención; estaban recibiendo un aluvión de críticas por el injusto trato que dispensaban a la indefensa Israel, y se les acusaba incluso de antisemitismo. Así mismo, fueron apareciendo lamentos ante las tribulaciones del pueblo israelí, y sus excesos accidentales, por parte de algunos de los que habían ayudado a sentar la base de lo que ahora temen. El encarnizamiento continúa, al par que la prensa mira hacia otro lado y los que podrían ayudar a mitigarlo observan religiosamente su voto de silencio, nos tranquilizan afirmando que no está sucediendo nada grave, o advierten acaso de los problemas que puede llegar a afrontar Israel si no avanza un poco en el camino de reconocer los derechos humanos de los palestinos (que antes de hoy no eran motivo de preocupación).

Las historias horrendas que se pueden leer en la prensa israelí (mayoritariamente hebrea) apenas raspan la superficie. Un oficial del ministerio israelí de Asuntos Exteriores, que regresaba a la reserva, ha indicado que «una mayoría apabullante de los actos de crueldad y violencia en los territorios palestinos no llegan a la luz pública», y ha estimado que solo se dio a conocer uno de cada diez de estos actos cometidos durante la escalada de violencia, que era prácticamente «una guerra auténtica». Y aun este 10 por 100 se oculta casi del todo al contribuyente estadounidense que lo sufraga, una jugada más en favor del terrorismo de estado.[35]

También se oculta a la vista de los que pagan las facturas varias propuestas actuales, según las cuales la solución podría pasar por, sencillamente, «trasladar» de zona a la población recalcitrante de los territorios ocupados; se trata de una idea venerable, que recobra ahora su protagonismo, aun cuando sus detractores —la corriente principal de los comentaristas— suelen argüir que no es factible. A mediados de 1988, cer-

reconstrucción de las casas destruidas por el ejército), visitó el pueblo en compañía de un representante del consulado de los EE.UU., el mismo día en que fue asesinado el niño, e informó de este suceso, así como de la destrucción causada por el avance violento de los soldados, que recorrieron un pueblo en silencio, con las calles casi desiertas en el momento en que aparecieron los soldados con el equipamiento antidisturbios. Para una mayor información sobre el trasfondo, basada en parte en una visita personal (una semana después del incidente de abril, cuando el pueblo todavía estaba bajo asedio militar), véase mi artículo en *ZMag*, julio de 1988, reimpreso en *Fateful triangle*, ed. de 1999.

35. Gad Lior, *YAh*, 10 de julio de 1988.

ca de un 40 por 100 de los judíos de Israel eran favorables a la expulsión de la población árabe, mientras que el 45 por 100 consideraba que su país era excesivamente democrático, y el 55 por 100 se oponía a que se otorgaran los mismos derechos a los ciudadanos israelíes de origen árabe (contrariamente a lo que reza la propaganda, siempre ha habido una restricción severa de los derechos de los árabes, empezando por el acceso a la mayor parte del territorio del país). Numerosos textos de la literatura sionista han descrito a los palestinos como visitantes temporales de la Tierra de Israel, o en parte como simples inmigrantes recientes, atraídos por los esfuerzos de la reconstrucción israelí; y este cuento ha sido igualmente popular entre los intelectuales de los Estados Unidos. Los grupos religiosos ultraortodoxos, cada vez más poderosos y con una base muy fuerte en los EE.UU., difícilmente se opondrán al desplazamiento de personas que, por su misma naturaleza, creen ser inferiores a los judíos; en palabras del reverendo Rav Kook, rabí supremo de los askenazíes entre 1921 y 1935:

> la diferencia entre el alma de un israelita ... y el alma de todos los no judíos, en cualquier nivel, es mayor y más profunda que la diferencia que separa el alma de un hombre y el alma de los animales, puesto que entre las dos últimas [categorías] existe solo una diferencia cuantitativa, mientras que entre las dos primeras la diferencia es cualitativa.[36]

Los que creen que ni siquiera la solución del «traslado» o desplazamiento resultaría aceptable para determinados círculos de los Estados Unidos se equivocan gravemente. Figuras destacadas de la izquierda social y democrática de los EE.UU. han postulado hace ya bastante tiempo que los descendientes de la antigua Palestina son «marginales para la nación» israelí, por lo que sus problemas podrían resultar «aliviados» si «se ayuda a partir a los que tienen que partir». No se escuchó ni un murmullo, según reportó Alexander Cockburn, cuando, en 1988, la platafor-

36. Para unas breves referencias a la discusión reciente sobre la idea del traslado («transfer»), véase mi artículo en *ZMag*, mayo de 1988. Poll, *Ha'aretz*, 8 de junio de 1988; en el referéndum, que excluía a los colonos y a los miembros de los quibbuts, un 41 por 100 de los votantes se mostró a favor. Otro referéndum celebrado poco después reflejó un 49 por 100 de votantes a favor de «trasferir» a los árabes de los territorios ocupados; *JP*, 12 de agosto de 1988, y Rav Kook, citado por Eyal Kafkaki, *Davar*, 26 de setiembre. Véase Yehoshafat Harkabi, *Israel's fateful hour*, Harper and Row, Nueva York, 1988, la primera fuente fácil de conseguir que se ocupa de todas estas cuestiones importantes.

ma del Partido Republicano «llegó a proponer tímidamente la noción de trasferencia» con las siguientes palabras: «En los países vecinos hay más trabajo y más oportunidades, lo que tal vez atraiga las energías de la gente joven: de esta forma podrán construir un mundo para sí, en lugar de destruir el ajeno».[37] De la gente joven que ha de luchar por sus derechos contra un régimen militar implacable, elevado al poder y financiado por los Estados Unidos.

3. Reuniones en la cumbre[38]

Durante los preparativos de la cumbre Reagan-Gorbachov, que se celebró en Washington en diciembre de 1987, la información fue preparada muy cuidadosamente para que solo llegaran al público las ideas convenientes. Debía excluirse, por tanto, la votación apabullante que, en una asamblea de las Naciones Unidas, había condenado la escalada de la carrera armamentística, por la que abogan los Estados Unidos en un aislamiento casi total; no resultaba, desde luego, un mensaje útil en el momento en que todos los focos debían iluminar a Reagan y sus avances en el camino de la paz universal. Tampoco el movimiento pacifista nacional era digno de aparecer en las noticias. En su análisis global del trato mediático de la cumbre, la organización supervisora FAIR destacó que «solo se consideraban noticiables las posturas que criticaban el tratado de INF* desde la derecha». Mark Hatfield, senador republicano, criticó con crudeza a la administración de Reagan, por su imprudente despliegue nuclear, pero fue «censurado en los medios nacionales», al igual que lo fue SANE/Freeze, el grupo pacifista más importante de los EE.UU.: su conferencia de prensa sobre la función del movimiento pacifista en el establecimiento de las bases para el acuerdo de INF no fue tomada en consideración. En cambio, «se convirtió en una gran noticia» otra conferencia de prensa organizada el mismo día por parte de la Alianza An-

37. Michael Walzer, «Nationalism, internationalism, and the Jews», en Irving Howe y Carl Gersham, eds., *Israel, the Arabs and the Middle East*, Bantam, 1972; Cockburn, *Nation*, 21 de noviembre de 1988.

38. Véase «Addendum» a *NeI*, pág. 84.

* Fuerzas Nucleares de alcance Intermedio: despliegue de misiles de medio alcance, capaces de destruir la Unión Soviética desde las bases estadounidenses en Europa y viceversa. (*N. del t.*)

ticontemporización [Anti-Appeasement Alliance], en la que se tildó a Reagan de ser un «imbécil ante el Kremlin». Se informó de cómo George Shultz, el secretario de Estado, criticó a los movimientos pacifistas y los animó a «reconocer que se han equivocado», pero, según refiere Brigid Shea, la secretaria para la paz de SANE/Freeze, «a nosotros no se nos da ni la más mínima oportunidad de explicar nuestra versión de los hechos». La acusación soviética de que los EE.UU. habían intentado minar el tratado de no proliferación de los misiles ABM* —para poder desarrollar así la «guerra de las galaxias»— fue rechazada en los informativos de televisión, considerándola «doctrinaria» y «hostil»; pero se ofreció un «ejercicio de precalentamiento para la cumbre», en el que se enfrentaban Richard Perle —que criticaba el tratado de INF desde la más rancia derecha— y el demócrata Sam Nunn, un lobo disfrazado de cordero (Tom Brokaw, canal NBC). Como siempre, existe un debate, pero dentro de los límites más convenientes.[39]

El programa oficial de la cumbre incluía el papel de Reagan como pacificador, y su pasión por los derechos humanos; la tarea de los medios, por tanto, era destacar estas dos facetas tan nobles de todo lo logrado por el presidente. La primera era sencilla de resaltar: bastaba con usar los filtros adecuados. Para la segunda, no les faltó aplomo: durante la retrasmisión de la llegada de Gorbachov al aeropuerto de Washington, Dan Rather, maestro de ceremonias de la CBS, comentó que el presidente soviético quería centrar la discusión en la reducción de armamento, pero que «Reagan presionará a la URSS sobre cuestiones más amplias, como los derechos humanos, Afganistán y Nicaragua».[40] Nadie fue tan zoquete como para preguntar sobre las espléndidas marcas obtenidas por Reagan en derechos humanos (léase Centroamérica, por ejemplo), pero la mayoría tampoco llegaron al extremo del «ultraliberal» Dan Rather, al interpretar que la situación de Nicaragua obedecía a una trasgresión soviética.[41]

En un artículo de portada del *New York Times*, Philip Taubman es-

* Esto es, de los misiles antimisiles (también conocidos como «antimisiles balísticos»). (*N. del t.*)

39. *Extra!*, diciembre de 1987.

40. Noticias de la CBS, 7 de diciembre de 1987, 6:30 p.m. La frase entrecomillada es o bien una cita exacta o bien una paráfrasis muy cercana, pues no dispongo de la trascripción.

41. Sin embargo, no fueron pocos los que lo hicieron; véase *NeI*, cap. 2.

cribió desde Moscú que Gorbachov, a pesar de lo que prometía, tiene todavía mucho que aprender. Gorbachov, en efecto, continúa «con la perspectiva soviética ortodoxa sobre cómo es la vida en los Estados Unidos: existe una clase dominante que, dirigida por un complejo militar e industrial, controla el gobierno y explota a la gran mayoría de los estadounidenses, creando una sociedad de desigualdad social e injusticia». Esta perspectiva, «deformada ideológicamente», no es coherente con la «mirada más sabia de aquellos analistas soviéticos y colegas de mayor edad que están familiarizados con los EE.UU.» y, por ende, son conscientes de la distancia que se supone separa esta perspectiva de la realidad. En el mismo número del *Times*, sin embargo, se publicó un artículo de Adam Walinsky titulado «La vida en el infierno», que describe la realidad de la vida en los suburbios marginales de Chicago, en esta sociedad nuestra que no conoce la desigualdad social, la injusticia ni la explotación.[42]

La cumbre de Moscú, en junio de 1988, recibió un trato similar en los medios. Con escasas excepciones, los comentarios se movían entre la admiración por Reagan, esforzado defensor de los derechos humanos (en la Unión Soviética), y la crítica por la debilidad con que temporiza con los rusos o por su curiosa conversión al leninismo. Se habló del encuentro de Reagan con los disidentes soviéticos; el presidente es un hombre que «cree con firmeza en unos pocos principios muy simples, y su labor misionera en pro de los derechos humanos y el modelo de vida americano está en el corazón de sus valores más esenciales», según el *New York Times*. Y en un «momento de perfección retórica», prosiguen los editores, su discurso a los estudiantes de Moscú «supo difundir la loable y continua defensa que el presidente hace de los derechos humanos», una preocupación que, tal vez, ponen igualmente de manifiesto tanto su admiración por los asesinos genocidas del mando militar guatemalteco como su organización del terrorismo estatal en El Salvador, por no mencionar el amable trato dispensado a los pobres de nuestro país.[43]

Peor suerte tuvo una conferencia organizada en el Church Center, cercano a la sede de las Naciones Unidas, por parte de una coalición pro derechos humanos. Los medios nacionales hicieron caso omiso de la llamada de atención sobre las violaciones de los derechos humanos en los

42. *NYT*, 4 de diciembre de 1987.
43. Steven Roberts, *NYT*, 31 de mayo; editorial, *NYT*, 1 de junio.

EE.UU. y los países dependientes de su ayuda; no obstante, en la conferencia participaron el director legal de la Unión Americana en pro de las Libertades Civiles y representantes del Centro para los Derechos Constitucionales y del Movimiento de los Indios Americanos, además de asociaciones defensoras de los derechos de los presos, entre otros.[44]

Algunas cabeceras de la prensa extranjera fueron más reticentes a adaptarse al programa de actos de Washington. Los editores del *Toronto Globe and Mail*, por ejemplo, recalcaron que mientras Reagan «sentía la necesidad de dar lecciones de derechos humanos a la Unión Soviética» durante la cumbre, el *New York Times* publicaba algunas «informaciones desconcertantes» sobre los torturadores instruidos y armados en Honduras por los Estados Unidos, o sobre la preferencia de la CIA por ciertos métodos inhumanos que no dejan señales visibles. Sin embargo, el *Times* no se atrevió a citar la noticia emitida por la BBC seis meses antes: personal estadounidense estuvo presente en el conciliábulo en el cual el batallón 316 —uno de los escuadrones de la muerte entrenados por los EE.UU.— ordenó que se asesinara a un párroco de nuestro país, el padre James Carney, arrojándolo al vacío desde un helicóptero.[45] La función desempeñada por los EE.UU. en Honduras, así como la «tácita aprobación» de la «guerra sucia» en Argentina, no son precisamente «muestras de respeto por la dignidad humana y la libertad, de las que sentirse orgulloso», según los editores del *Globe and Mail*, que aun así habían seleccionado sus ejemplos de entre los más tibios posibles. Nótese que el *New York Times* fue capaz de publicar estas informaciones, pero, a diferencia de su homólogo canadiense, no creyó ver ningún conflicto con «la loable y continua defensa que el presidente hace de los derechos humanos» en la Unión Soviética.

Por su parte, el *New Statesman* londinense afirmó que «cualquier declaración de superioridad moral por parte del presidente de los Estados Unidos se convierte en la más macabra de las hipocresías», puesto que este «demagogo de los derechos humanos» presta su respaldo al terrorismo estatal en El Salvador y Guatemala, así como a la «sangrienta

44. Alexander Cockburn, *Nation*, 18 de junio de 1988.

45. Editorial, *Globe and Mail* (en adelante, *G&M*), 10 de junio de 1988; James LeMoyne, *New York Times Magazine* (*NYT Mag*), 5 de junio de 1988. Con respecto al padre Carney, LeMoyne se limita a recoger la noticia de que había sido ejecutado. Para un seguimiento de cómo ha informado LeMoyne sobre la tortura, véase *Nel*, Apéndice V, sección 6.

campaña terrorista» contra la indefensa población civil nicaragüense. El editorial comenta también la «ironía evidente» de que Reagan regalara a Gorbachov una videocinta con la película *Friendly Persuasion*, el único filme de la historia de Hollywood en cuyos créditos no consta el guionista; este fue censurado cuando Reagan era presidente del Sindicato de Actores y expulsaba de la organización a los «subversivos», durante la *caza de brujas* de McCarthy, aunque después haya asegurado que «en Hollywood no hubo nada parecido a una lista negra». «Los medios de comunicación occidentales han interpretado a una voz las melodías de Reagan» en Moscú, según el *Statesman*; «saben bien cuál es su lugar». Por lo que respecta a los Estados Unidos, tienen toda la razón; hay que rebuscar mucho para poder escuchar una nota disonante de este estilo.[46]

4. Los medios y la opinión pública internacional[47]

La votación de Naciones Unidas, paralela a la citada cumbre de diciembre de 1987 en Washington, y su trato en los medios, ponen al descubierto una tendencia más general: en los últimos años, los Estados Unidos encabezan con diferencia la lista de los vetos a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Entre 1967 y 1981, por ejemplo, los EE.UU. vetaron siete resoluciones de condena a las intervenciones de Israel en el sur del Líbano, defensa de los derechos de los palestinos o desautorización del cambio de estatus de Jerusalén y del establecimiento de colonias en los territorios ocupados. En los siete casos, solo los EE.UU. votaron en contra. Luego ha habido trece vetos adicionales por parte de la administración de Reagan, relativos a situaciones similares, y siempre en aislamiento.[48] Los EE.UU. también se han quedado solos, o acompañados de una pequeña minoría, en su oposición o veto a las resoluciones de la ONU sobre Sudáfrica, la venta de armas y otras cuestiones parecidas.

46. *New Statesman*, 3 y 10 de junio de 1988. Para algunas excepciones, véase el editorial sin contemplaciones del *Boston Globe* (BG), 1 de junio, y Michael Parks, *LAT*, 28 de mayo de 1988.
47. Véase «Addendum» a *NeI*, pág. 89.
48. *American-Arab Affairs*, invierno de 1987-1988.

Pues bien, estas votaciones se notician muy raramente o solo de forma marginal. Y aun esta información ocasional suele asemejarse a la que uno esperaría encontrar en una prensa controlada por el estado, como demuestran los ejemplos referidos más arriba. Por poner otro ejemplo: en noviembre de 1988, la Asamblea General de la ONU votó a favor de una resolución que «condena» a Israel por «matar y herir a palestinos indefensos» durante la represión del levantamiento palestino, y «lamenta vivamente» que este país haya desatendido las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad, que censuraban su actuación en los territorios ocupados. El resultado de la votación fue de 130 votos a favor y 2 en contra (los de EE.UU. e Israel). La noticia que apareció en el *New York Times* dedicaba tres párrafos a la descripción de los hechos fundamentales, y el resto (diez párrafos) a las posiciones de los EE.UU. e Israel, a los abstencionistas y a la «actuación relativamente pobre» de los estados árabes en las resoluciones previas. De los partidarios de la resolución, todo lo que se refleja son las reservas de los que la encontraban «poco equilibrada».[49]

El aislamiento de los Estados Unidos ha despertado cierta preocupación. En 1984, el *New York Times Magazine* dedicó todo un reportaje a la cuestión, redactado por el corresponsal en Naciones Unidas, Richard Bernstein.[50] Bernstein considera que «se escuchan muchas voces» que se preguntan «con una mezcla de escepticismo y aflicción» si la ONU tiene o no algún valor: «Cada vez se siente con más fuerza que las Naciones Unidas se han convertido en un lugar repetitivo, retórico, extremista y antidemocrático, en el que se ataca a los EE.UU. con aparente impunidad, incluso por parte de países con los cuales mantenemos relaciones bilaterales cordiales». Añade luego que «no hay duda de que, con el paso de los años, las Naciones Unidas han pasado a estar dominadas por lo que podría designarse como una *ideología tercermundista*» —es decir, por la perspectiva de la mayoría de sus miembros— y que sus enfrentamientos con los EE.UU. son «excesivos y arbitrarios».

Bernstein mantiene una valoración como esta a pesar de que la ONU ha condenado anualmente la intervención soviética en Afganistán, de que ha realizado informes continuados sobre las violaciones de los derechos humanos en ese país asiático, y de que el Consejo de Seguridad

49. Paul Lewis, *NYT*, 4 de noviembre de 1988.
50. «The U.N. versus the U.S.», *NYT Mag*, 22 de enero de 1984.

ha reprobado el derribo de un avión KAL 007 sobre territorio soviético. En cambio, no hubo reacción de condena para el derribo por parte de la marina estadounidense de un avión civil iraquí, que se produjo dentro de las aguas territoriales de Iraq y causó la muerte de 290 personas; y el ataque de los EE.UU. a Vietnam del Sur, al igual que los de Indochina, nunca fueron condenados ni investigados por la ONU; de hecho, según apunta Shirley Hazzard, «durante todos estos años, la guerra de Vietnam no se ha analizado nunca en las Naciones Unidas».[51]

Prosiguiendo con su reseña del hundimiento de la ONU, Bernstein observa que tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General censuraron la invasión estadounidense de la isla de Granada, con el voto a favor de la mayoría de los países de la OTAN y el resto de aliados de los EE.UU. Ni siquiera los esfuerzos negociadores de la embajadora ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, «tal vez el intelecto más deslumbrante del cuerpo mundial» (un comentario que, sin duda, se prestará a la chacota), han logrado contener la marea de «galimatías prefabricados sobre racismo, colonialismo y fascismo» y de ataques «rituales» a los EE.UU., que han sustituido al «debate razonado» de los buenos tiempos, cuando existía «una mayoría automática» que apoyaba las propuestas estadounidenses. «La cuestión», según concluye Bernstein ·

> no es saber por qué la política de los EE.UU. ha pasado a divergir de la del resto de estados miembros, sino por qué la democracia más poderosa del mundo ha fracasado en lograr que los otros participantes en los debates de la ONU apoyen nuestras perspectivas. La respuesta parece estar en dos factores subyacentes. El primer factor —y el más importante— es la propia estructura y cultura política hacia las que ha evolucionado el cuerpo mundial, que ha tendido a aislar a los Estados Unidos y representarlo como una suerte de «malo» ideológico. El segundo factor es la incapacidad de los EE.UU. de jugar a la diplomacia multilateral con suficiente destreza.

La cuestión, en suma, es saber por qué el mundo anda tan desacompasado; y la respuesta no tiene nada que ver con la política de los

51. Shirley Hazzard, *Defeat of an ideal*, Atlantic Monthly Press, Little, Brown, 1973, pág. 201; las dos únicas excepciones, según esta autora, fueron una iniciativa del gobierno de Laos, en 1959, y el incidente de 1964 en el golfo de Tonkín (Vietnam), cuando Adlai Stevenson pretendió, sin razón, que los supuestos ataques contra los barcos de la Marina estadounidense eran «un acto de agresión militar contra los Estados Unidos, calculado e intencionado».

EE.UU., que es loable por definición, así que para qué vamos a discutirla.

Una perspectiva bien diferente es la expresada por el senador William Fulbright, quien en 1972 se mostraba así de descontento con la política de los Estados Unidos: «Hemos controlado las Naciones Unidas durante muchos años, tan estrecha y a la vez tan fácilmente como el *capo* de una gran ciudad controlaría la maquinaria de su partido, [y] nos hemos acostumbrado a la idea de que la ONU es un sitio en donde podemos hacer y deshacer a voluntad». En su *Historia de las Naciones Unidas*, Evan Luard considera que

> sin duda, si los estados comunistas hubieran sido mayoría, se habrían comportado del mismo modo. [Pero] el comportamiento de Occidente ... ha representado, aun así, un abuso de poder. Y se trata de un abuso que los mismos países [occidentales] tuvieron que lamentar seriamente cuando el equilibrio de poder volvió a cambiar y el control de la organización quedó en manos de una mayoría diferente.

Sin embargo, ello no ha provocado «hasta el momento que nadie se lamentara, sino solo que sintieran rabia», según apostilla Shirley Hazzard en su reseña del estudio de Luard.[52]

Hazzard relata también cómo, con la complicidad del secretario general, Trygve Lie, los Estados Unidos impidieron que la ONU creara un «servicio civil internacional, de carácter independiente»; este «debía divulgar la información y proponer medidas correctivas para mantener vigentes los principios que fueron suscritos en San Francisco por los diferentes gobiernos», cuando se fundó la ONU. Y refiere, así mismo, la insistencia de los EE.UU. para que se permita al FBI emprender una «caza de brujas» y controlar la selección del personal, abriendo «las compuertas ... a los nombramientos políticos» y comprometiendo así a la organización de forma irremediable.

En su propio estudio sobre la «autodestrucción de las Naciones Unidas», Hazzard ha descrito la caza de brujas en detalle, desvelando que «la *mayoría* de los trabajadores del secretariado "internacional" de la ONU» fue sometida a la aprobación de los investigadores del FBI, gracias a un acuerdo secreto con el Departamento de Estado (el único prece-

52. *Times Literary Supplement* (Londres), 17 de setiembre de 1982.

dente, de alcance inferior, parece ser un edicto de Mussolini referido al secretariado de la Liga de las Naciones). Este acuerdo secreto significó «un hito en la historia de la ONU, y el momento clave en que el secretariado internacional se entregó decididamente en manos del interés nacional, durante los primeros años de la organización ... lo que representa una violación clara de sus principios fundacionales». Hazzard apunta que, si se hubiera descubierto un pacto similar con la Unión Soviética, «la protesta internacional habría sido tal que, probablemente, habría supuesto el fin de las Naciones Unidas». En este caso, el descubrimiento del pacto pasó inadvertido, como es habitual, y la ONU se sometió a la voluntad de los EE.UU. para no perder su contribución económica. Según concluye Hazzard, «el concepto de "internacional", para los EE.UU., era —y lo sigue siendo— como máximo una suerte de unilateralismo benigno, mediante el cual la política estadounidense se impondría sin contestación, para beneficio de todos».[53]

Esta conclusión arroja luz sobre la actitud manifestada a lo largo de los años por la opinión pública de los EE.UU. (y por sus medios en general) en relación con las Naciones Unidas. Mientras la ONU fue un instrumento dócil, se censuraba con indignación el negativismo de la Unión Soviética, al par que distinguidos científicos sociales buscaban su raíz en la cultura rusa y su modo de educar y atender a los niños. Pero cuando la organización cayó bajo la «tiranía de la mayoría» (que se suele designar también con otro nombre, a saber: democracia), la opinión pública empezó a sentir la referida «mezcla de escepticismo y aflicción», con raíces igualmente notables en las deficiencias culturales de nuestra mayoría insipiente.

La misma actitud es la que predomina ante otras organizaciones internacionales. Cuando los delegados latinoamericanos, en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), se negaron a plegarse a la voluntad de los reaganitas —emperrados en deponer a Manuel Noriega, toda vez que ya no les era útil—, Elaine Sciolino, corresponsal del *New York Times*, comentó afligida que «con el paso de los años, la OEA ha perdido casi toda su autoridad como conciencia de Latinoamérica» (29 de febrero de 1988). En román paladino, vale decir que ya no obedece las órdenes de los EE.UU.

53. Hazzard, *Defeat of an ideal*, págs. 9, 14 y ss., 60 y ss., 65 y 71.

Como puede verse, pues, se presupone —como verdad incuestionable— que las iniciativas emprendidas o defendidas por los Estados Unidos son buenas y correctas; si los demás no aciertan a percibir su rectitud moral, es evidente que están en un error. Esta ingenuidad resulta, probablemente, atractiva por lo infantil; pero el atractivo se esfuma en el acto cuando nos damos cuenta de que es un instrumento para infligir dolor y sufrimiento.

Al ser el país más rico y poderoso del mundo, sin embargo, los EE.UU. responden manejando la tralla. El *Times* ha informado de que «presumiblemente, [la OEA] suspenderá su programa de ayuda para el resto de este año, debido a la peor crisis financiera de su historia». La mitad de las pérdidas reflejadas en el balance de 1988 (unos 20 millones de dólares) provienen de un recorte en la contribución estadounidense; y dos tercios de la deuda acumulada en noviembre de 1988 (alrededor de 46 millones de dólares) corresponden a los EE.UU. «Es una situación tan crítica, que está en peligro la propia esencia de la organización», según ha indicado el secretario general. Los técnicos de la OEA, por su parte, advierten de que la falta de fondos supondrá el fin de los programas de desarrollo, añadiendo que «la disputa se debe al tremendo choque entre los diferentes modos de concebir la función de la OEA en el continente», ya que los EE.UU. desaprueban los programas de desarrollo preferidos por sus beneficiarios. El programa antidroga también «será inoperante a finales de año», según ha informado el jefe de la Comisión Interamericana de Control del Abuso de las Drogas, mientras la administración de Reagan vapuleaba a los gobiernos latinoamericanos por su incapacidad de controlar el flujo de drogas que entraba en los EE.UU. Los recortes presupuestarios de los EE.UU. son paralelos a las críticas que han dirigido a la OEA algunos funcionarios de la administración y miembros del Congreso por «negarse a tomar medidas más agresivas contra Nicaragua» y el general Noriega.[54] Un congresista ha declarado que «no estábamos satisfechos con el rendimiento que se ofrecía a los contribuyentes de nuestro país». La táctica de la administración de Reagan y sus rufianes no ha logrado sino despertar la solidaridad con alguien tan poco apreciado como Noriega por parte de la mayoría de los países del continente, molestos con el intervencionismo

54. Denominado aquí «general Ortega», en un desliz de la pluma; David Johnston, NYT, 25 de junio de 1988. Lindsey Gruson, NYT, 14 de noviembre de 1988.

vergonzante que ha seguido al repentino cambio de opinión de los EE.UU.

Las Naciones Unidas se enfrentan a los mismos problemas, ahora que les ha fallado el sentido común y ya no funcionan como un órgano del poder estadounidense. Los EE.UU. son, de lejos, el mayor deudor de la ONU: en setiembre de 1987 debían 412 millones de dólares. El siguiente en la lista es Brasil, con 16 millones de dólares; la Unión Soviética había anunciado que se pondría al día de sus atrasos. Unos años antes, cuando la lista era encabezada por la URSS, los EE.UU. habían promovido un requerimiento al Tribunal Internacional para que legislara sobre el pago obligatorio de las contribuciones, y se habían adherido a la resolución del Tribunal, según la cual todos los deudores tenían que sanear sus cuentas. Hoy, sin embargo, las tornas han cambiado, y el pago de la deuda ha dejado de ser una obligación solemne. Además, se silencia el hecho de que —según ha manifestado la comisión de las Naciones Unidas en nuestro país— el simple operativo de la ONU «insufla entre 400 y 700 millones de dólares anuales a la economía de Nueva York y los EE.UU.».[55]

Los medios de comunicación también baquetean a las diferentes instituciones del orden mundial, cuando discrepan con los objetivos de estas. Uno de los ejemplos más significativos es el de los intentos por resolver tensiones fronterizas; si el promotor es un estado enemigo, su intento no suele encontrar eco en nuestros medios, especialmente si se trata de una de las víctimas del ataque de los EE.UU. Una buena muestra de ello son las propuestas de control fronterizo por parte de Nicaragua. Por añadir un simple botón a lo ya conocido, en marzo de 1988, una manifestación nicaragüense de oposición a la contra se adentró algunos kilómetros en zonas hondureñas dominadas por la contra; los medios comentaron con gran indignación que se trataba de una agresión sandinista y una amenaza para la pacífica Honduras. Nicaragua pidió entonces que una fuerza de Naciones Unidas supervisara la frontera, lo que serviría para calmar los temores (suponiendo que tuvieran alguna base real). Pero Honduras rechazó la presencia de observadores internacionales, según comunicó a los periodistas el portavoz de la ONU. Nicaragua también había pedido al Tribunal Internacional de Justicia que investigara lo que consideraba que eran incursiones armadas desde territorio

55. Paul Lewis, *NYT*, 16 de octubre de 1987; AP, 28 de febrero de 1988.

hondureño; pero no se hace mención de ello en el *New York Times*, quien prefirió reportar que, tres meses antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Carlos López Contreras, había propuesto igualmente la supervisión de la frontera.[56]

5. La demolición de los acuerdos de paz[57]

Vista la política por la que abogan en el Tercer Mundo, los Estados Unidos suelen ver reflejado en el espejo su poderío militar, a la vez que su debilidad política, que se reconoce abiertamente en los documentos internos. El resultado es una oposición sistemática a la diplomacia y los acuerdos políticos. Y como los hechos no se conforman a la imagen requerida, es necesario aplicar una buena dosis de maquinación histórica;[58] el problema ha surgido constantemente en los conflictos centroamericanos de los últimos años.

Así, los Estados Unidos han bloqueado por sistema todos los intentos de resolver de forma pacífica lo que la corresponsal del *Times* Shirley Christian ha denominado «*nuestra* agonía nicaragüense», con la voluntad de expresar el sufrimiento derivado de nuestros «esfuerzos esencialmente idealistas por resolver la situación», en la cual, «sobre la balanza, probablemente hemos sido los que traían las mejores intenciones».[59] Los Estados Unidos también han logrado bloquear las iniciativas

56. AP, 22 de marzo de 1988; *CSM*, 25 de marzo, 43 palabras; Treaster, *NYT*, 27 de marzo de 1988. Véase igualmente Mary McGrory, *BG*, 23 de marzo, quien destaca que Honduras no admitió la presencia de un equipo de observadores de Naciones Unidas.

57. Véase «Addendum» a *NeI*, pág. 90.

58. Para un análisis de cómo se ha tratado este problema en el caso de Indochina, desde 1950 hasta el presente, véase Edward S. Herman y Noam Chomsky, *Manufacturing consent*, Pantheon, Nueva York, 1988, caps. 5-6 [hay trad. cast.: *Los guardianes de la libertad*, Crítica (Biblioteca de Bolsillo, 45), Barcelona, 2000]. Sobre unos problemas similares en relación con el conflicto árabe-israelí, véase *NeI*, Apéndice V, sección 4.

59. *New Republic*, 29 de agosto de 1988; la cursiva es mía. Christian, considerada una especialista en Nicaragua, prosigue con la defensa de que la contra es un movimiento de guerrilla típicamente latinoamericano, «básicamente, una creación centroamericana», puesto que «aparte de unos pocos estadounidenses con conexiones gubernamentales poco claras, los que desarrollaron un papel fundamental fueron los coroneles argentinos» (trasformados aquí en centroamericanos), Gustavo Álvarez (un capitoste militar hondureño y asesino reconocido) «y varios miembros de la antigua guardia nacional nicaragüense». Se trata, con certeza, del «modelo clásico de ejército guerrillero en Latinoamérica», incluso dejando de lado unas

de Contadora, frustrar todos los recursos al Tribunal Internacional y a Naciones Unidas (requeridos por la ley internacional y las leyes supremas de los diversos países) y eludir los intentos reiterados de Nicaragua por satisfacer los intereses legítimos de los estados centroamericanos (incluidos los supuestos temores de EE.UU. sobre la seguridad en la zona, por absurdos que sean). E igualmente, procuraron hacer fracasar las propuestas de paz de Arias en 1987, y terminaron por lograrlo en julio, gracias a la colaboración de José Napoleón Duarte, el presidente salvadoreño.

Las propuestas de Reagan y Wright, del 5 de agosto, debían suponer el sabotaje definitivo de cualquier posible acuerdo relevante que surgiera de la reunión de los presidentes centroamericanos, prevista para el día siguiente. Sin embargo, demostró ser «un tremendo error estratégico», en palabras de un diplomático guatemalteco, ya que despertó «el instinto nacionalista de las delegaciones de Costa Rica y Guatemala», que se sintieron «insultadas» por este uso de la fuerza.[60] El 7 de agosto, para mayor consternación de la administración estadounidense, los presidentes centroamericanos firmaron los acuerdos de Esquipulas II, «inspirados por el deseo visionario y permanente de los grupos de Contadora y de apoyo [a Latinoamérica]».[61]

Los acuerdos del día 7, inesperados, obligaron a los medios a retirar rápidamente su valoración de las propuestas de Reagan y Wright como gesto para una paz cercana. El 6 de agosto, LeMoyne había informado falsamente de que, aparte de Nicaragua —que se arriesgaba a quedar aislada, debido a su intransigencia—, los presidentes centroamericanos «se sintieron agradecidos» por las propuestas de Reagan y Wright (aunque Guatemala y Costa Rica las habían despreciado con irritación, al considerarlas un «insulto»). Al día siguiente, cuando era Washington el que había quedado aislado por el acuerdo de paz de los mandatarios de

---

cuantas omisiones considerables. Christian no elabora ningún comentario sobre ese interesante grupo de «los que desarrollaron un papel fundamental». Al parecer, se da crédito a este tipo de contribuciones.

60. Michael Allen, *Wall Street Journal* (WSJ), 10 de agosto; *Central America Report* (CAR), Ciudad de Guatemala, 14 de agosto de 1987. Para estos acontecimientos y la reacción de los medios de comunicación, véase Chomsky, *Culture of terrorism*, South End, Boston, 1988, págs. 141 y ss. y 18-19 [hay trad. cast: *La cultura del terrorismo*, Ediciones B, Barcelona, 1989].

61. Tanto aquí como más adelante, usaré la versión guatemalteca de la traducción inglesa: Special Document, Esquipulas II Accord, CAR, 14 de agosto de 1987.

Centroamérica, LeMoyne describió Esquipulas como un acuerdo que comparte «la intención primigenia del plan del Sr. Reagan, que exige cambios políticos internos en Nicaragua»; lo cierto es que el acuerdo no hacía mención de Nicaragua, sino que estaba pensado para ser aplicado de forma simultánea y paralela en todos los países de la región. Los medios pasaron a construir una interpretación en la que el mérito correspondía a los Estados Unidos, que habían empujado a Nicaragua a negociar gracias a las medidas de fuerza planteadas por Reagan y Wright. El objetivo, además de ocultar la sistemática oposición de los EE.UU. a cualquier acuerdo de paz, era legitimar la violencia estatal y preparar con ello el terreno para su reutilización futura, donde y cuando pudiera estimarse necesaria.[62]

Algunos fueron incapaces de encubrir su consternación. A. M. Rosenthal, por ejemplo, antiguo director ejecutivo del *New York Times* (cuyas contribuciones, de aparición regular, permiten hoy entender mejor el pensamiento que animaba al *Times* durante su dirección), denunció a los «prosandinistas» de la prensa y la política —un grupo fácilmente detectable, siempre que uno cuente con el microscopio adecuado— por no continuar apadrinando las ideas de Reagan y Wright después de la firma del acuerdo de Esquipulas. Aseguraba a los lectores que los presidentes centroamericanos se habían quedado «atónitos» ante el fracaso del plan, que, en el mundo de Rosenthal, les placía sobremanera (cuando en el mundo real lo habían despreciado). Los enemigos del plan presidencial, según escribió, están ayudando a matar «las propuestas de paz para Nicaragua»; es decir, el propio plan de Reagan, que, a diferencia de los acuerdos de Esquipulas, se refería exclusivamente a Nicaragua y, por tanto, es una propuesta de paz comprensible solo para un jingoísta estadounidense. Canonizando el recurso a la violencia, Rosenthal postuló que «el secretario Shultz y Howard Baker, creyendo que los sandinistas habían sido heridos lo suficiente para obligarlos a negociar, lograron la aprobación del presidente». Pero ahora, los «prosandinistas de nuestro país» están invalidando los logros de Shultz y Baker con su acercamiento a los acuerdos de Esquipulas, e incluso «se comportan como si fuera un pecado mortal el sugerir que los Estados Unidos no deberían

62. LeMoyne, NYT, 6 y 7 de agosto. Sobre la reacción real de los presidentes Cerezo y Arias, véase CAR, 14 de agosto. Para más detalles, véase mi citado *Culture of terrorism*, págs. 141 y ss.

destruir inmediatamente a la contra, cuya existencia dio origen a la posibilidad de negociar».[63]

La mayoría, no obstante, se decantaron por métodos menos ofensivos y por integrar el acuerdo de paz en la estructura básica del plan de Reagan y Wright. El acuerdo de Esquipulas puso en marcha una campaña del gobierno de los Estados Unidos para desarbolarlo y mantener las opciones de atacar de nuevo a Nicaragua, así como de organizar el suficiente terrorismo de estado para conservar en su sitio a las «democracias inexpertas». La colaboración entusiasta de los medios de comunicación garantizó el éxito de la tarea; el resultado anhelado se produjo finalmente en enero de 1988, tras una operación conjunta del gobierno y los medios, ejecutada con brillantez.

La primera tarea era suprimir las referencias a los Estados Unidos, esto es, a lo que se designaba en los acuerdos como el «elemento indispensable» para la paz: el fin de cualquier forma de ayuda a las guerrillas nacionales y a la contra. La ayuda de los EE.UU. a la contra —que atacaba a Nicaragua desde sus bases en Honduras y Costa Rica— ya era criminal, incluso en el sentido técnico del término, pero los acuerdos de Esquipulas erigían una nueva barrera. Pues bien, si en agosto de 1987 los vuelos de abastecimiento a la contra se organizaban ya con una frecuencia de uno al día —a lo que se añade la vigilancia constante requerida para asegurar el ataque a los objetivos nicaragüenses, apenas defendidos—, los EE.UU. respondieron multiplicando la ayuda; los vuelos de suministro se doblaron en setiembre y prácticamente se triplicaron durante los meses siguientes. A finales de 1988, la CIA intentó sobornar a los líderes misquitos para que se opusieran a la reconciliación pacífica y reanudaran la guerra.[64]

Estas violaciones flagrantes del «elemento indispensable» para la paz debilitaron seriamente la base de los acuerdos. La función de los medios puede evaluarse si analizamos qué trato dispensaron a estos acontecimientos tan significativos. Continuaré ateniéndome sobre todo al *New York Times*, el periódico más importante de nuestro país y el que

63. Rosenthal, *NYT*, 21 de agosto de 1987.

64. Brian Barger, United Press International (en adelante, UPI), *Philadelphia Inquirer*, 9 de octubre de 1987; *Excelsior*, Ciudad de México, 22 de octubre de 1987. Sobre los vuelos de abastecimiento y otros asuntos, pueden consultarse las versiones anotadas de mis artículos en *ZMag*, enero y marzo de 1988.

ofrece la versión casi oficial de la historia; pero el comportamiento de los otros medios fue muy similar.[65]

No he sabido encontrar en el *Times* ni una sola referencia a los sobornos, a la rápida escalada de los vuelos de abastecimiento y vigilancia, ni al crecimiento de los ataques terroristas contra la población civil. El acuerdo de Esquipulas establecía un periodo de tres meses (del 7 de agosto a principios de noviembre) para la realización de sus resoluciones, y un segundo periodo hasta mediados de enero, considerado una primera fase, tras la cual la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS) tenía que presentar un informe sobre los avances reales. Durante el primero de estos dos periodos, el corresponsal del *Times* en Nicaragua, Stephen Kinzer, publicó 41 artículos relacionados con este país, pero omitió cualquier posible referencia a todos estos acontecimientos clave. De hecho, incluso la propia existencia de los vuelos de suministro y control fue mencionada tan solo en dos ocasiones.[66] El 23 de setiembre, Kinzer afirmó que «miles de contras del interior de Nicaragua son abastecidos actualmente sobre todo mediante vuelos de suministro organizados por la CIA»; y el 15 de octubre, escribió que «los aviones que se introducen de noche en el espacio aéreo nicaragüense para dejar caer el abastecimiento parten de Honduras». Durante los meses posteriores, hubo algunas otras referencias dispersas a estos vuelos.[67]

En suma, se han eliminado totalmente los hechos que afectaban a la médula de los acuerdos, por no hablar de la flagrante violación del de-

65. Para algunas excepciones, véase *NeI*, capítulo 4, notas 34 y 37.

66. Es necesario precisar que esta reseña del *Times* se basa en la edición para hemerotecas que, en ocasiones, difiere de la edición más temprana (la de Boston). Así, en el último párrafo (el 25) de un relato sobre los ataques de la contra, publicado el 24 de octubre, pero omitido en la versión de las hemerotecas, Kinzer menciona que la contra está utilizando misiles *Redeye* y otras armas suministradas por vuelos «clandestinos» de la CIA desde Honduras, que Nicaragua no puede interceptar, pues no dispone de aviones a reacción.

67. En una entrevista a un comandante de la contra, realizada el 6 de diciembre, Kinzer entrecomilla una afirmación de este, según la cual la contra no es capaz de abastecerse dentro del territorio nicaragüense (siguiendo la convención habitual, no se menciona aquí el evidente contraste con la situación de El Salvador) y había recibido, intactos, 52 suministros aéreos de la CIA. En un artículo del día siguiente, Kinzer cita un informe del gobierno nicaragüense, que contabiliza 82 vuelos de suministro y 21 misiones de vigilancia entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre. Un relato del 25 de enero indica que «los vuelos de abastecimiento, nocturnos y clandestinos, son un auténtico cordón umbilical para la contra nicaragüense», citando a un oficial estadounidense que afirma que en 1987 hubo más de 350 vuelos de esa clase. Una breve nota de AP, del 30 de octubre de 1987, da cuenta del accidente de uno de estos aviones de suministro en Honduras.

recho internacional y la demostración innegable de que la guerrilla era una delegación estadounidense instaurada de forma artificial (aunque nunca se ha llegado a esta conclusión, según he podido comprobar). Es una marca que atestigua a las claras la dedicación de los medios a favor de la propaganda y la violencia estatales.

No contento con la omisión de las operaciones de control y de abastecimiento, ni con la supresión total de la escalada de la ayuda estadounidense a sus fuerzas en la región —que pretendía minar la fuerza de los acuerdos de Esquipulas—, el *Times* recurrió incluso a la simple y llana falsificación. A mediados de noviembre, el presidente Ortega participó en una reunión de la OEA en Washington, a la que los Estados Unidos hicieron acudir también a la dirección civil de la contra (financiada por la CIA), con la correspondiente indignación de los delegados latinoamericanos. Durante la sesión, Ortega denunció el gran incremento de los vuelos de suministro, aun cuando habían sido prohibidos por los acuerdos de paz, cifrándolos en un total de 140 desde agosto. El líder de la contra, Adolfo Calero, rechazó esta estimación, considerándola demasiado baja y comentando que «el radar de Ortega no acaba de ir bien». El *New York Times* reprodujo las afirmaciones de ambos dirigentes, pero ajustándolas interesadamente; allí donde Ortega y Calero hablaban de vuelos de suministro, la noticia del *Times* rebajaba la referencia a «vuelos de vigilancia», que también estaban vetados por los acuerdos y por las leyes internacionales, pero eran una violación menos grave y, por tanto, aparentemente más aceptable.[68]

Pocos días después, Nora Astorga, embajadora de Nicaragua en Naciones Unidas, informó de que, entre el 7 de agosto y el 3 de noviembre, se habían detectado 275 vuelos de abastecimiento y control. Sin embargo, no he encontrado en la prensa ni una referencia a esta acusación, no precisamente trivial.[69]

Con los mismos métodos, los medios ayudaron al objetivo de Washington de eliminar dos disposiciones centrales de los acuerdos: «cese de la ayuda a fuerzas irregulares y movimientos insurrectos» y «no uso del territorio para atacar a otros estados». Gracias a esta revisión implí-

68. Neil Lewis, NYT, 12 de noviembre de 1987. Otros reflejaron correctamente los hechos. Véanse las referencias citadas en la nota 64.

69. Asamblea General de las Naciones Unidas, A/42/PV.67, 16 de noviembre de 1987. Sobre el trato dispensado por los medios a esta sesión de la ONU, véase *NeI*, capítulo 4.

cita de lo acordado en Esquipulas, los Estados Unidos eran libres de actuar a su entera libertad, con la aprobación del presidente Arias, al menos según la versión del *Times*.[70]

Los acuerdos de Esquipulas reclamaban

> un proceso democrático auténticamente plural y participatorio, para promover la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la soberanía, la integridad territorial de los estados y el derecho de cada país a determinar, con libertad y sin ningún tipo de interferencia exterior, su propio modelo económico, político y social.

Además, era necesario asegurar progresivamente «la justicia, la libertad y la democracia», la libertad de expresión y de acción política, y la apertura de los medios de comunicación «a todos los grupos ideológicos». También se reclamaba un «diálogo con todos los grupos no armados de oposición política dentro de cada país», así como otros pasos hacia la reconciliación nacional. Además, «se promulgarán decretos de amnistía, sentando unas bases que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad, los bienes materiales y la seguridad de todas las personas que se acojan a los antedichos decretos».

El Salvador fue el primero en no respetar las condiciones de amnistía, puesto que indultó a los servicios de seguridad del estado y a sus asociados, liberándolos de la improbable posibilidad de que fueran juzgados por sus crímenes. Los defensores de los derechos humanos repro-

70. Stephen Kinzer, *NYT*, 15 de octubre de 1987, quien afirma que el presidente Arias «dijo que no se podía pretender que Honduras cerrara los campamentos de la contra y prohibiera los vuelos de abastecimiento clandestinos, a no ser que los sandinistas negociaran una tregua con la contra y promulgaran una amnistía generosa». Pero el Acuerdo de Esquipulas no impuso esta condición para el cese de la ayuda a la contra; y ni Arias ni nadie han mantenido que la ayuda extranjera a las guerrillas de El Salvador y Guatemala sea legítima mientras sus gobiernos no negocien una tregua con las fuerzas indígenas o respeten los términos de los acuerdos. Si la afirmación de Kinzer es correcta, se sigue que también el propio Arias tenía la intención de hacer fracasar los acuerdos conocidos erróneamente como «plan Arias». En el *Times* constan otras muchas referencias a supuestas posturas de Arias que nos conducirían a la misma conclusión, pero es difícil determinar hasta qué punto son referencias fiables o simples ilusiones. Para más detalles sobre la función de Arias y la razón de que resulte relativamente aceptable para los EE.UU., véase mi artículo en *ZMag*, noviembre de 1988. Para un comentario sobre su «logro sorprendente» al «defender solo superficialmente su plan, a la vez que responde a las presiones de Washington y a poderosos personajes de la derecha de Costa Rica», véase Council on Hemispheric Affairs (COHA), *News and analysis* (*N&A*), 10 de febrero de 1989.

baron esta iniciativa, prediciendo —como efectivamente ocurrió— que causaría un crecimiento del terrorismo de estado. El *Times*, sin embargo, aplaudió la amnistía. Por lo que respecta a Nicaragua, la interpretación de los medios de Washington fue que su amnistía debía ser aplicada de un modo mucho más generoso que el contemplado en los acuerdos. Volveremos sobre ello.

Era del todo inaceptable que los susodichos avances hacia la democracia, la justicia social, la protección de los derechos humanos, etcétera, se produjeran en los estados terroristas de Washington.[71] Es por ello que las resoluciones correspondientes tenían que ser eliminadas de la versión operativa de los acuerdos. Se optó, de nuevo, por el método de silenciar los hechos no deseados y alabar a los gobiernos terroristas por su cumplimiento riguroso de los acuerdos (que, en realidad, estaban violando cada día más).

En setiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió un informe que ponía de manifiesto «un descenso perceptible en el respeto a los derechos humanos» en Guatemala, y expresaba su preocupación por «la recuperación de métodos y sistemas de aniquilación masiva y la reaparición de los temibles escuadrones de la muerte». La Comisión para los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), con base en Costa Rica, informó a las Naciones Unidas en noviembre sobre el terrorismo continuado que practicaban los servicios de seguridad guatemaltecos y los escuadrones de la muerte, documentando unos 175 casos de secuestros, desapariciones y asesinatos entre el 8 de agosto y el 17 de noviembre de 1987, así como ataques con granadas, el lanzamiento de una bomba dentro de una iglesia, etcétera. La Comisión para los Derechos Humanos en Guatemala había registrado, durante los nueve primeros meses de 1987, 334 ejecuciones extrajudiciales y 73 desapariciones. Uno de sus directores ha aseverado en Washington que «los acuerdos están siendo usados como una cortina de humo para tapar que la situación de los derechos humanos es hoy mucho más grave ... [y han servido] para permitir su violación con mucha mayor impunidad»;

71. También hay dudas en cuanto a Costa Rica, a la que se suele considerar exenta del cumplimiento de los acuerdos. Allí, la prensa en español está bajo el firme control de la derecha, que cierra las puertas «a todos los grupos ideológicos», entre otras cuestiones que surgirían si se informara suficientemente sobre los asuntos costarricenses. Véase *NeI*, Apéndice v, sección 6 y, para un caso crítico, *Culture of terrorism*, pág. 243.

ha precisado, además, que los casos documentados son solo una parte de los abusos reales, porque la mayoría suceden fuera de la capital, y ha referido igualmente otras muchas atrocidades del gobierno. El ejército, por su parte, ha iniciado una nueva ofensiva en las montañas, para intentar arrastrar a los supervivientes de las anteriores campañas de principios de los años ochenta —casi genocidas— hasta nuevas «poblaciones de desarrollo» en las que podían ser controlados por la fuerza.[72]

A los lectores estadounidenses nadie les trasmitió estos hechos. Según la especialista en Latinoamérica Susanne Jonas, «durante los seis meses posteriores a la firma de los acuerdos, no apareció en el *New York Times* ni siquiera un artículo sobre su cumplimiento por parte de Guatemala, y prácticamente ninguno en el resto de los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos». Después de revisar el *Times*, el *Christian Science Monitor*, el *Miami Herald* y el *Wall Street Journal* entre octubre de 1987 y marzo de 1988, Alexander Cockburn encontró muy pocas referencias a Guatemala y ni una sola mención a la creciente avalancha de violencia política del mes de noviembre. Cuando las salvajadas se hicieron aún peores en diciembre y enero, los periódicos antedichos no publicaron más que dos artículos (los dos en el *Monitor*, y los dos sobre la violación de los derechos humanos). Las cifras totales de octubre a enero son de más de 500 muertos, 160 desaparecidos y 2 artículos en la prensa. Si se combinan todos los datos, concluye Cockburn, «en los medios más influyentes de los EE.UU. aparece un artículo crítico sobre la situación en Guatemala cada 154 días».[73]

En cuanto a El Salvador, Tutela Legal —la oficina de defensa de los derechos humanos de la archidiócesis de San Salvador— ha expuesto que las matanzas de los escuadrones de la muerte se han redoblado: durante el mes siguiente a los acuerdos se ha tenido noticia de diez, y continúan en enero; para todo el año, las cifras de Tutela Legal hablan de 88 personas desaparecidas y 96 asesinadas por los escuadrones de la muerte, las fuerzas armadas y defensa civil, además de 280 personas asesinadas —la mayoría, probablemente, civiles— durante operaciones

72. COHA, *Washington Report on the Hemisphere* (WRH), 3 de febrero de 1988; *Update*, Central American Historical Institute (CAHI), Universidad de Georgetown, Washington, 28 de diciembre de 1987; *Cultural Survival*, 12/3 (1988).

73. Jonas, *San Francisco Bay Guardian*, y Cockburn, *Anderson Valley Advertiser*, ambos de 8 de junio de 1988.

militares del ejército.[74] Amadeo Ramos, uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños (ANIS), ha informado del bombardeo de un asentamiento indio por parte del ejército, tras el cual «los cuerpos de varios indios fueron hallados en una zona remota, arrojados a una zanja», a mediados de noviembre; como no eran misquitos nicaragüenses, qué interés tiene lo que les pase. Y así hubo muchos otros casos dramáticos, ignorados o apenas mencionados por nuestros medios. El Consejo para Asuntos del Hemisferio (COHA) estima que los escuadrones de la muerte han matado o «desaparecido» al menos a 87 civiles durante la primera fase de los acuerdos de paz (agosto-enero). Chris Norton, uno de los escasos periodistas estadounidenses radicados en El Salvador, ha declarado repetidamente que desconocemos las cifras reales, porque, al igual que en Guatemala, la mayoría de las carnicerías de los escuadrones «han ocurrido en zonas rurales, y son pocas las que se han comunicado».[75]

La protección del régimen cliente de El Salvador es una necesidad especialmente imperiosa, que alcanza niveles terribles. La suerte final de la Comisión para los Derechos Humanos en El Salvador (CDHES) es ilustrativa. El asesinato de su presidente, Herbert Anaya, fue noticiado por LeMoyne, con el debido respeto a la versión oficial del gobierno, según la cual fue obra de la guerrilla; pero omitió de su relato las declaraciones contrarias de la viuda, Mirna Anaya, y otras personas. Mirna Anaya, jueza en activo hasta 1987, tuvo que huir de El Salvador después de que pasaran por las armas a su marido; su declaración —que culpaba a las fuerzas de seguridad, como podían acreditar varios testigos, si se les garantizaba protección— pudo ser leída por los lectores canadienses, pero a los del *New York Times* se les ahorró el conocimiento de hechos tan desagradables. Lo mismo sucedió con la comparecencia de Mirna Anaya en la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, en la que identificó a un escuadrón de la muerte formado

74. Human Rights Watch (Americas Watch, Asia Watch y Helsinki Watch) y Lawyers Commitee for Human Rights, *Critique: review of the Department of State's country reports on human rights practices for 1987*, junio de 1987. Este análisis condena especialmente los informes del Departamento de Estado sobre los países centroamericanos, la denigración de estos y la escasa representatividad concedida a los estudios de la «muy respetada» Tutela Legal. Se trata de características habituales en los productos del Departamento de Estado.

75. COHA, *WRH*, 17 de febrero de 1988; *Latinamerica Press (LPr)*, Perú, 19 de noviembre de 1987.

por «miembros de la policía de la hacienda y de la policía nacional».[76]

Carece de relevancia, también, el hecho de que Marianela García Villas, antigua presidenta de la CDHES, fuera asesinada por las fuerzas de seguridad (pretextándose entonces que formaba parte de la guerrilla), o que otros miembros hayan sido igualmente asesinados o «desaparecidos» por las fuerzas de seguridad. Herbert Anaya había sido detenido y torturado por la policía del tesoro en mayo de 1986, junto con otros miembros de la comisión. Durante su estancia en prisión, continuaron su obra, recopilando el testimonio, bajo juramento, de otros prisioneros que habían sido torturados; y lograron sacar de la cárcel un documento con pruebas detalladas de la tortura de 430 reclusos, además de una videocinta probatoria. Sin embargo, como lo que se demostraba era la tortura por parte de los agentes y los clientes de los Estados Unidos —incluyendo un oficial estadounidense vestido de uniforme—, sin referencias a las prisiones rusas o cubanas, las pruebas no despertaron ningún interés, y en los medios nacionales no apareció ni una sola mención. Después de ser liberado en un intercambio de prisioneros, Anaya fue denunciado por el gobierno y se le comunicó que encabezaba una lista de miembros de la comisión amenazados de muerte. No se le dispensó protección —la protección que le hubiera proporcionado el haber aparecido en los medios— y fue finalmente asesinado, probablemente por las fuerzas de seguridad o sus adláteres, según indicó el arzobispo Rivera y Damas en una homilía pronunciada en la catedral metropolitana (de nuevo, ignorada por el *Times*), donde aseveró que «ha sido obra de un escuadrón de la muerte».[77]

Con su actitud de ocultar de forma sistemática los hechos no convenientes de El Salvador, LeMoyne tranquilizó a sus lectores a finales de noviembre, indicando que el presidente Duarte «ha avanzado mucho más [que los sandinistas] en la realización de las resoluciones del tratado», aun cuando tal vez no está «particularmente empeñado con su espíritu de reconciliación», ya que «procura dividir a la coalición de los rebeldes izquierdistas» (eso es todo). LeMoyne también aplaudió a

76. Para más detalles, véase mi artículo en *ZMag*, marzo de 1988; testimonio de las Naciones Unidas, *La Voz*, CDHES, 24 de marzo de 1988.

77. AP, 15 de noviembre de 1987; el arzobispo pudo observar igualmente otras matanzas a manos de los escuadrones de la muerte. El 20 de febrero, el *Times* publicó una breve nota de AP según la cual el arzobispo había atribuido el asesinato a los escuadrones de la muerte y el supuesto asesino se había retractado de su confesión.

Duarte por haber permitido a los rebeldes el «acceso libre a la prensa»; no obstante, el COHA ha constatado que «los periodistas practican la autocensura hasta tal extremo que ningún diario publicará jamás una sola afirmación de los grupos de oposición al gobierno».[78]

LeMoyne se sentía, así mismo, impresionado porque Duarte hubiera «permitido que los líderes civiles de los rebeldes regresaran a casa y persiguieran activamente sus objetivos políticos»; y se preguntaba si acaso «al igual que los rebeldes de El Salvador, la contra acabaría finalmente ... por arriesgarse a enviar algunos representantes de vuelta a Nicaragua, para verificar la promesa sandinista de ofrecer una auténtica libertad política, después de ocho años de gobierno de un partido único» (puesto que existen razones para «dudar de su sinceridad» y de su voluntad de «tolerar un tanto de oposición política»).[79] LeMoyne sabe perfectamente que numerosos mandatarios de la Iglesia e intelectuales de El Salvador, sin conexión alguna con la guerrilla, se han visto obligados a abandonar el país, y las amenazas de muerte les impiden regresar. En Nicaragua, sin embargo, la oposición nunca se ha enfrentado a una situación ni remotamente comparable al terrorismo practicado por las fuerzas de seguridad de Duarte y sus asociados; ello a pesar de que apoya abiertamente los ataques del ejército estadounidense, se identifica regularmente con ellos en sus apariciones en *La Prensa*, denuncia públicamente al gobierno y reclama implícitamente más ayuda militar para la contra en sus visitas a Washington.[80]

LeMoyne también sabe perfectamente que no solo la oposición interior partidaria de la contra, sino incluso los líderes militares que han regresado a Nicaragua viven y trabajan allí sin tener que preocuparse por su vida. Citaré solo un caso de varios: Fernando Chamorro, dirigente contra, regresó a Nicaragua desde Costa Rica y ha sido nombrado presidente del Partido Conservador, que apoya sin reservas a los contras.[81] Compárese con la situación del coronel salvadoreño Adolfo Majano, que

78. LeMoyne, *NYT*, 29 de noviembre de 1987; COHA, *WRH*, 17 de febrero de 1988. Un tiempo después, se levantaron considerablemente las restricciones de acceso a la radio y la televisión, pero resulta estrafalario hablar de «acceso libre a la prensa» en noviembre de 1987; además, no ha existido nada comparable al periódico *La Prensa*, favorable a la contra y financiado por los EE.UU. Sobre los medios de comunicación en Centroamérica, véase *NeI*, Apéndice V.

79. *NYT*, 29 de noviembre de 1987; 22 de febrero y 5 de junio de 1988.

80. Véase *NeI*, Apéndice V, sección 6.

81. Ibídem. Sobre el regreso de Chamorro, véase COHA, *N&A*, 20 de febrero de 1988.

no es un responsable de la guerrilla, sino el oficial del ejército que lideró el golpe militar reformista de octubre de 1979 y fue descrito entonces por la prensa de los EE.UU. como «el símbolo de la política estadounidense en ese país», debido a sus esfuerzos para promover una reforma democrática.[82] Pues bien, después de que las fuerzas represivas tradicionales recuperaran el poder (con el apoyo del gobierno de los EE.UU.) se relegó a Majano, y finalmente se le expulsó de la Junta en diciembre de 1980, cuando Duarte alcanzó la presidencia para presidir la intensificación de las matanzas. Fue obligado a huir de los crecientes actos terroristas, y regresó al cabo de siete años de exilio, para verificar la realidad de la «nueva democracia». Tras su retorno, logró sobrevivir al menos a dos intentos de asesinato atribuidos a escuadrones de la muerte; y un tercero le sobrevino el 25 de agosto de 1988, cuando, al pasar por un centro comercial de San Salvador, su coche fue ametrallado por dos pistoleros, lo que causó la muerte de dos de sus guardaespaldas. Según declaró Majano, «esta intentona criminal me buscaba a mí, y no hay duda de que ha sido ejecutada por escuadrones de la muerte». El arzobispo mostró su acuerdo con la acusación, afirmando, en una misa celebrada tres días más tarde, que la matanza era obra de «los siniestros escuadrones de la muerte».[83] El intento de asesinato de Majano había tenido lugar después de una serie de asesinatos debidos a las fuerzas de seguridad y, probablemente, a los escuadrones de la muerte. Tiendo a pensar que, de haber ocurrido algún suceso similar en Managua, el *Times* se hubiera hecho eco de ello. Sin embargo, lo único que ofrece este periódico son reflexiones filosóficas sobre la libertad y el aperturismo que caracterizan a El Salvador, comparados con la brutal represión del régimen sandinista.

El celo con que LeMoyne vitoreaba la esperanzadora evolución de El Salvador, confrontada con la represión nicaragüense, ha llegado a ser excesivo incluso para el estándar del *Times*. Ello es perceptible, por ejemplo, cuando noticia los planes de Rubén Zamora y Guillermo Ungo, «oficiales civiles de los rebeldes» que pretenden regresar a El Salvador, donde esperan sobrevivir mediante chalecos antibalas, cambios constantes de residencia y una restricción de movimientos cuidadosamente es-

82. Véase *Turning the tide*, págs. 109-110 [*La quinta libertad*, pág. 176].

83. *El Sol* (*El Salvador On Line*), Center for Central American Studies, Washington, 29 de agosto de 1988; Sam Dillon, «El Salvador's violent past returns in poverty and death», *Miami Herald*, 6 de setiembre de 1988.

tudiada. Según LeMoyne «el proyecto de retorno de los dos hombres contrasta seriamente con la situación en la vecina Nicaragua, donde el régimen sandinista ha prometido que encarcelará a todos los líderes rebeldes que intenten regresar para desarrollar una actividad política». Cinco días antes, Stephen Kinzer había reproducido las palabras del presidente Ortega, según el cual «todos los contras que abandonen la lucha» —incluyendo al líder Adolfo Calero o al comandante Enrique Bermúdez— «podrán participar plenamente en la vida política de Nicaragua», y citado su afirmación literal:

> Nuestro objetivo inmediato es lograr una tregua; si los contras la aceptan, podrán unirse al debate político con el resto de los partidos nicaragüenses. Si Calero y Bermúdez aceptan esta propuesta, serán libres para recorrer las calles de Managua, organizar manifestaciones e incorporarse al Partido Conservador o al partido que sea que elijan. No será necesario que nadie firme nada. A su desarme seguirá una amnistía automática.[84]

No se informa, en suma, de los hechos relativos a Fernando Chamorro, Adolfo Majano u Horacio Arce, entre otros; y tampoco de la reacción del gobierno salvadoreño cuando Mario Aguiñada Carranza, comandante de la guerrilla, anunció su intención de regresar al país y reincorporarse a la vida política. El gobierno replicó que le prohibiría la entrada, y el ejército añadió que se le capturaría para juzgarlo por sus crímenes.[85] La situación de los dos países es justamente la contraria a la descrita por LeMoyne, como este sabe muy bien.

De hecho, la propia comparación de Zamora y Ungo, por un lado, con Bermúdez y Calero, por otro, es un comienzo un poco extraño. Tanto Zamora (un demócrata cristiano de izquierdas)[86] como Ungo (un socialdemócrata, integrado en la misma lista electoral que Duarte en 1972)

84. LeMoyne, *NYT*, 21 de noviembre de 1987; Stephen Kinzer, *NYT*, 16 de noviembre de 1987. LeMoyne reflejó adecuadamente los riesgos que corrían Zamora y Ungo por culpa de los «extremistas de izquierda y de derecha» que «imponen sus ideas mediante las balas y la sangre», pero ocultó el hecho de que el mayor riesgo ha sido siempre, y con diferencia, el comportamiento de los servicios de seguridad del estado, y de sus colaboradores. La técnica del «terrorismo de izquierda y derecha» es un recurso literario corriente para tapar el terrorismo de los «centristas» que cuentan con el respaldo de los Estados Unidos.

85. *El Norte*, México, 17 de julio de 1988; Central America NewsPak.

86. Pertenece al partido del Movimiento Popular Cristianosocial. Para su valoración de la situación actual, sin una «democracia en funcionamiento» y ni siquiera «una apertura democrática», véase COHA, *WRH*, 31 de agosto de 1988.

huyeron de El Salvador por las amenazas de muerte, ya que sus colaboradores y familiares estaban siendo asesinados. Entre las víctimas se contaba el hermano de Rubén Zamora (Mario Zamora, el procurador general del país, de filiación cristianodemócrata). Dos semanas después de que su colega fuera asesinado por un escuadrón de la muerte, Duarte se unió a la Junta y se afanó en legitimar las matanzas. Desde entonces, Zamora y Ungo han mantenido una asociación política con las guerrillas salvadoreñas que, en su mayoría, habían sido empujadas hacia las montañas por el terrorismo de estado. Enrique Bermúdez, por el contrario, es el comandante del ejército de la contra, y había sido oficial de la guardia nacional de Somoza; y Calero, que se relaciona con el ala más derechista de la «dirección civil» impuesta por la CIA, es un reconocido abogado del terrorismo, al cual se le había llegado a prohibir, por esta razón, la entrada en Costa Rica. Además, no hay comparación posible entre las guerrillas indígenas de El Salvador y el ejército que ataca a Nicaragua por delegación de los Estados Unidos. Una situación más estrechamente comparable con la de Zamora y Ungo sería la de los miembros de la oposición interior nicaragüense, que siempre han sido libres para intervenir en la vida política, y no por ello han de arrostrar un terrorismo estatal como el practicado por Washington o Duarte, sino el simple hostigamiento de la política. Son verdades como puños, pero no se las verá aparecer en el *Times* ni, por lo que sé, en las otras cabeceras importantes, salvo contadísimas excepciones.

La historia oficial repite constantemente que Duarte representa el «centro moderado», pero es incapaz de controlar «la violencia tanto de la ultraderecha como de las guerrillas marxistas» (James LeMoyne); en la fotografía que acompaña a este último comentario, se ve al alcalde de Nueva York, Edward Koch, siendo saludado por el general Vides Casanova, ministro de defensa de Duarte y responsable directo de gran parte de las matanzas. En un editorial se comentó el asesinato de Anaya, pero describiéndolo como una prueba del «valor» de Duarte, que se atrevía a «desafiar» a los escuadrones de la muerte. Enterrado por entre un artículo de información, el mismo día, consta el hecho de que los asesinos utilizaban un armamento de última tecnología, al alcance solo de «los escuadrones de la muerte, de filiación derechista»; es decir, de los escuadrones asesinos del ejército de Duarte.[87]

87. LeMoyne, fotografía, *NYT*, 4 de noviembre de 1987; *NYT*, 28 de octubre de 1987.

En cuanto a Honduras, no hizo siquiera intención de cumplir los acuerdos de Esquipulas. Las violaciones de los derechos humanos, que se habían convertido ya en un problema muy serio cuando los Estados Unidos trasformaron el país en una base militar (en la década de los ochenta), se incrementaron con la firma de los acuerdos. Ramón Custodio, presidente de la Comisión para los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) y de la Comisión para los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), hizo público a finales de octubre de 1987 que las carnicerías de las fuerzas de seguridad estatales eran cada vez más «flagrantes», citando ejemplos concretos. Al finalizar el primer periodo de tres meses, se organizó una conferencia de prensa internacional en la que Custodio declaró que la situación de los derechos humanos seguía deteriorándose gravemente en Honduras después de la firma del tratado de paz, así como en El Salvador y Guatemala. Durante la primera fase de los acuerdos (agosto-enero), esta y otras informaciones similares vieron la luz en Canadá y México, pero fueron omitidas en el *Times*.[88]

CODEH ha denunciado que en Honduras se produjeron, durante 1987, 263 ajusticiamientos, esto es, 144 más que en 1986, 107 de los cuales serían atribuibles a los escuadrones de la muerte; también ha puesto de manifiesto el crecimiento de la tortura y las detenciones ilegales. El periodista hondureño Manuel Torres Calderón ha indicado que la crisis económica derivada de la dependencia de los EE.UU. ha «forzado al gobierno a intervenir en la economía mucho más que su denigrado vecino, Nicaragua». La fuga de capitales ha llegado hasta el extremo de que «el dinero deja el país tan pronto como entra», según un banquero hondureño. La mitad de la población no tiene acceso a servicios de salud y más de un millón de hondureños viven apelotonados en barrios de chabolas, a pesar de la ingente ayuda económica de los EE.UU. y de que no existe la amenaza de la guerrilla ni ninguna forma de ataque exterior. Claro está que ni las crecientes violaciones de los derechos humanos ni el impacto de la política económica impulsada por los EE.UU. han hecho su aparición en el programa de nuestros medios.[89]

Así mismo, nuestros medios tampoco dan razón de la hostilidad que despierta la contra en muchos hondureños, y no solo en los miles de campesinos expulsados de sus casas en el «territorio contra» del sur. Las

88. Para completar esta información, véanse las referencias citadas en la nota 64.
89. CAR, 15 de julio de 1988; *LPr*, Perú, 21 de julio de 1988, fechado en Tegucigalpa.

agencias de noticias han trasmitido que el periódico conservador *La Prensa*, «que publica numerosas páginas de información sobre Nicaragua siguiendo los postulados de la contra, ha indicado que, según un sondeo de opinión realizado antes de la pasada crisis [de marzo de 1988], el 88,5 por 100 de los hondureños era favorable a la expulsión de los contras». Esta encuesta recibió muy poca atención. De la misma forma, los medios tampoco han acertado a enterarse de la protesta de la Unión Nacional de Campesinos de Honduras, que ha denunciado que la contra reclutaba labriegos pobres mediante sobornos de 500 dólares (un importe colosal para lo habitual en la región), como se ha publicado en *El Tiempo*, uno de los principales diarios hondureños. Pero todos estos hechos, claramente relevantes y noticiables, tienen que ser ignorados, porque no coinciden con la única imagen que interesa dar: la del animoso campesinado nicaragüense, decidido a resistir a la depredación sandinista.[90]

La creciente preocupación de los hondureños por la pérdida de la independencia y la integridad nacionales bajo la influencia de los Estados Unidos tampoco ha sido precisamente popular. Como ya se ha visto más arriba, las operaciones nicaragüenses de marzo de 1988, cuyo objetivo era la contra hondureña, levantaron en los medios y el Congreso de nuestro país airadas denuncias de la agresión y la amenaza sandinistas, por lo que tanto republicanos como demócratas coincidieron en pedir una ayuda extra de 48 millones de dólares —armamento inclusive— para los libertarios vejados y atacados de modo tan palmariamente injusto. Cuando los EE.UU. enviaron un cargamento para «defender a Honduras» de la agresión sandinista, se organizó aquí una sonada fanfarria patriotera, pero se prestó bastante menos atención a la reacción surgida en la propia Honduras: los periodistas hondureños habían condenado la «invasión» estadounidense. *El Tiempo* reprobó que el gobierno hubiera pedido el envío de tropas estadounidenses —o no se hubiera opuesto a él—, considerándolo «no solo ilegal, sino vergonzoso. Estamos proclamando a gritos que el estado de Honduras no existe». Este periódico designó a las tropas extranjeras como una «fuerza de ocupación», mientras que el Partido Demócrata Cristiano «afirmó que los soldados de los EE.UU. debían volar inmediatamente de regreso a su país», y su máximo

90. Reuters y AP, *Toronto Globe and Mail* (*TG&M*), 23 de marzo de 1988; Pamela Constable, *BG*, 20 de marzo de 1988; *El Tiempo*, 14 de julio de 1987.

dirigente, Rubén Palma, «indicó a los periodistas que José Azcona, el presidente de Honduras, había actuado ilegalmente al requerir la presencia de tropas extranjeras sin la necesaria autorización del parlamento».[91]

En el *Times* hay poco que leer sobre estas declaraciones, y no mucho más en el resto de periódicos.[92] Si hubiera aparecido una información menos dependiente del programa oficial del gobierno, no se hubiera producido un shock general cuando, unas semanas más tarde, los hondureños atacaron la embajada estadounidense, en una explosión antiyanqui, mientras la policía observaba impasible.

Además de la oposición al terrorismo estadounidense —superada, como hemos visto, gracias a la complicidad de los medios de comunicación—, había aún dos resoluciones de los acuerdos de paz de Esquipulas que resultaban intolerables para Washington: la importancia concedida a los observadores internacionales (la CIVS) y el principio de la «simetría», que exigía avances paralelos por parte de todos los estados centroamericanos. La primera de las condiciones era inaceptable porque interfería con el poder de los EE.UU. para violar los acuerdos a su voluntad; la segunda, por la misma razón, y porque los estados terroristas de Washington probablemente no sobrevivirían a un proceso de democratización y reinstauración de los derechos humanos. La tarea de los medios era, otra vez, terminar con estas dos resoluciones; el nuevo acuerdo, revisado unilateralmente por los EE.UU., se aplicaría tan solo a Nicaragua y sin intermediación de ningún observador internacional. De esta forma, los acuerdos de paz, contrarios a los intereses estadounidenses, encajarían con el plan de Reagan y Wright, el que había sido rechazado en agosto por todos los presidentes de Centroamérica.

El problema de la supervisión internacional se agravó en enero de 1988, cuando la CIVS debía presentar su informe a los cinco presidentes de la zona. Era evidente que se trataba del acontecimiento diplomático más importante del mes, pero también lo era que resultaba intolerable,

91. *TG&M*, 23 de marzo de 1988. Sobre la sensatez de las preocupaciones expresadas con acritud en torno a la violación sandinista de la frontera, véase *NeI*, Apéndice III. Sobre la propuesta de ayuda, véase Susan Rasky, *NYT*, 19 de marzo de 1988.

92. Desde Tegucigalpa, Joseph Treaster informó tan solo de que «los hondureños de la calle» suelen pensar que, con la contra fuera de Honduras, se acabarían los problemas entre los dos países, refiriéndose al miedo hondureño de «no poderse librar» de la contra; *NYT*, 21 y 27 de marzo.

sobre todo en el momento de presentar las conclusiones. La CIVS condenó exclusivamente a los Estados Unidos, por su ayuda continuada «a las fuerzas irregulares que operan en contra del gobierno de Nicaragua», violando, por tanto, «un requisito indispensable para el éxito de los esfuerzos de paz y de este procedimiento en su conjunto». Uno de los representantes de la CIVS informó a la prensa de que los representantes latinoamericanos se habían quedado «atónitos ante las actitudes de evidente temor» de los sindicalistas y los políticos de la oposición de El Salvador y Guatemala. Luego añadió que la CIVS no podía detallar el grado de cumplimiento de las resoluciones debido a las reservas de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador; se trata de un signo claro de qué hubiera constado en el informe, de no haber sido bloqueado por los EE.UU. y sus clientes. Las conclusiones elogiaban los «avances concretos» hacia la democratización que habían podido observar en Nicaragua, a pesar de las dificultades con las que se enfrentaba.

Estos hechos fueron reflejados por varios periódicos, pero no por el *New York Times*, en el cual James LeMoyne, en un artículo centrado en varias reprobaciones a Nicaragua, despachó el informe de la CIVS en una sola frase despreciativa, indicando tan solo que su conferencia terminó «sin demasiado acuerdo» (el informe fue aprobado por unanimidad). La condena de los Estados Unidos fue mencionada brevemente —en un artículo que también trataba de otros temas— por Stephen Kinzer, quien agregó que «la comisión perdió el favor de algunos círculos políticos cuando concluyó que Nicaragua había realizado "avances concretos para iniciar un proceso democrático"». La CIVS, como antes la OEA, había «perdido casi toda su autoridad como conciencia de Latinoamérica».[93] La comisión fue desmantelada debido a las presiones de los EE.UU., lo que posibilitó la continuación sin trabas de sus actos terroristas y del papel de Duarte como testaferro de la represión y la degollina.

El segundo problema, el del principio de la «simetría», se solucionó concentrando casi toda la atención en Nicaragua, junto con la reiteración constante de que —haciendo caso omiso de la letra de los acuerdos de Esquipulas— «no hay duda de que las resoluciones principales se dirigen sobre todo a Nicaragua, y afectarán a Nicaragua en mucha mayor

93. Véase *Nel*, pág. 221. Peter Ford, *Christian Science Monitor* (*CSM*), 15 de enero de 1988; Richard Boudreaux, *Los Angeles Times* (*LAT*), 14 de enero; LeMoyne, *NYT*, 16 de enero; Kinzer, *NYT*, 25 de enero de 1988.

medida que a las otras naciones firmantes del acuerdo» (James LeMoyne). Desde luego, es así por lo que atañe a las condiciones dictadas por Washington y respetadas escrupulosamente por la prensa, pero no tiene ningún fundamento en lo pactado en los acuerdos. Como LeMoyne adujo más adelante, los sandinistas están «en una posición considerablemente difícil», porque ellos —y solo ellos— «son analizados minuciosamente para comprobar si cumplen lo estipulado en el tratado de paz de Centroamérica».[94] Nuevamente, LeMoyne está en lo cierto, si asumimos que la Prensa Libre camina al paso de las órdenes dictadas desde Washington. Kinzer, el colega de LeMoyne, ofreció el mismo análisis de la situación, como hicieron en general todos los medios.

La Media Alliance de San Francisco ha estudiado los artículos publicados durante dos periodos álgidos de comentario sobre los acuerdos de paz (del 5 de agosto al 15 de setiembre de 1987, y del 5 de enero al 7 de febrero de 1988). Pues bien, el *New York Times* dedicó, en el primero de los periodos mencionados, diez veces más artículos a Nicaragua que a la suma del resto de países, y en el segundo, once veces más. El análisis de otros medios refleja proporciones similares.[95] Pero todos los intentos de difundir estos informes en la prensa nacional fracasaron.

Los reportajes y artículos también diferían cualitativamente entre sí. Por ejemplo, un incidente relacionado con el lanzamiento de una piedra en Nicaragua, el 23 de enero, ocupó la portada del *Washington Post* y recibió una atención considerable en el resto de medios; así, el *Times* advirtió que el incidente «reforzaría los argumentos» de la administración de Reagan, según la cual Nicaragua está incumpliendo el plan de paz. De forma similar, se dio una amplia cobertura mediática a la detención, el 16 de enero, de cuatro miembros de la oposición nicaragüense que venían de una reunión con la contra, y a la detención, el 19 de enero, de cinco representantes de la oposición; todos ellos fueron liberados sin un rasguño, después de varias horas de interrogatorio (en el *Times* le dedicaron al primer incidente diecinueve párrafos y un titular de página, y al segundo un artículo en la parte superior de la portada). Meses más tarde, Roy Gutman se refirió a este incidente en el *Washington Post* comentando que «los gobiernos no suelen permitir que un partido político legal negocie un programa conjunto con un ejército que intenta derrocar

94. *NYT*, 10 de noviembre de 1987.
95. *San Francisco Bay Guardian*, 6 de enero y 20 de abril de 1988.

a esos gobiernos». Ahora bien, cuando el 15 de enero se asesinó en Honduras a un defensor de los derechos humanos y un dirigente del Partido Demócrata Cristiano, la noticia no mereció más que 160 palabras de un artículo sin titular, en el que, además, no se extraía ninguna conclusión sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. El 23 de enero, la disolución de un encuentro de las «Madres de Prisioneros Políticos» por parte de civiles partidarios del gobierno sandinista ocupó un artículo principal del *Times* y su correspondiente foto; pero la disolución de una marcha de «Madres de Prisioneros Políticos y Desaparecidos» por parte de los antidisturbios salvadoreños, el 21 de diciembre, no fue noticiada.[96] Estos ejemplos son característicos y fácilmente explicables: responden a un modelo propagandístico.

Los lectores del *Toronto Globe and Mail* y de las agencias de noticias pudieron conocer que, durante una sola semana de enero —mientras las portadas se centraban en el grado de cumplimiento de los acuerdos— diez personas fueron asesinadas en El Salvador, y halladas con las marcas típicas de los escuadrones de la muerte y signos de tortura; entre ellas, dos mujeres colgadas de un árbol por los cabellos, con los pechos cortados y el rostro pintado de rojo. Más tarde, aún en enero, se produjeron otras carnicerías; aparecieron, por ejemplo, una serie de cuerpos torturados y amontonados a la manera de los escuadrones. Los diplomáticos extranjeros y los mandatarios de la Iglesia responsabilizaron de todo ello a las fuerzas armadas. Rosa Chávez, la auxiliar del arzobispo, afirmó en su homilía del 7 de febrero que «según la información recogida por nuestra oficina [Tutela Legal], los secuestradores [de dos trabajadores torturados y asesinados] eran hombres vestidos de paisano y soldados uniformados de la sección de contrainsurgencia de la primera brigada de artillería» (una unidad de élite, entrenada por los Estados Unidos).[97] En cambio, no se permitió que todos estos hechos llegaran a conocimiento de los lectores del *New York Times*, al igual que no se estimó interesante una misa televisada del 3 de enero en la que el arzobispo Rivera y Damas volvió a denunciar «la práctica de la tortura,

96. Ibídem; cuestionario de FAIR, enviado a los editores del *Times*, sobre su cobertura de los temas centroamericanos, 23 de enero de 1988. Gutman, *Washington Post* (*WP*), 7 de agosto de 1988.

97. AP, 2 y 3 de febrero de 1988; *Globe and Mail* (*G&M*), 3 de febrero; Amnistía Internacional, *El Salvador: «Escuadrones de la muerte», una estrategia gubernamental*, octubre de 1988. Para más detalles, véase mi artículo en *ZMag*, enero de 1988.

que los escuadrones de la muerte aplican a tantos salvadoreños», indicando que los obispos de varias provincias han informado de un incremento en las degollinas de los escuadrones y han reclamado el final de los asesinatos y la tortura.[98]

Pocas semanas más tarde, mientras los servicios de seguridad de Duarte y sus colaboradores extendían su siniestra labor —y el *Times*, naturalmente, se hacía el distraído—, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que elogiaba el progreso democrático de El Salvador. La propuesta original aseveraba que El Salvador ha desarrollado un sistema «que respeta las libertades humanas», pero el representante liberal Ted Weiss, de Nueva York, logró que se cambiara y dijera tan solo que «ha procurado» establecer ese sistema. «Reconoce que lo han intentado, Ted», le había replicado el director de asuntos extranjeros de la cámara, Dante Fascell. En diciembre, mientras el terror se disparaba después de la firma de los acuerdos de Esquipulas, la Cámara de Representantes había aprobado por mayoría aplastante una enmienda que especificaba una larga lista de «acciones que deben ser acometidas» para realizar los elevados ideales del Congreso ... en Nicaragua. Ted Weiss había intentado también introducir algunas modificaciones, para que las condiciones se aplicaran a «todos los países de Centroamérica», pero su propuesta solo contó con el respaldo de una pequeña minoría. El Congreso y los medios de comunicación comparten el mismo programa.[99]

Durante los meses posteriores, siguió aumentando el terrorismo de estado en El Salvador, sin que se reflejara en los medios. James LeMoyne había dedicado muchos artículos al terrorismo de la guerrilla, con titulares como «Rebeldes salvadoreños asesinan a 12 personas en una incursión urbana», «Las guerrillas de El Salvador intensifican el terrorismo antes de las elecciones» y «Objetivos civiles de los rebeldes salvadoreños: 3 asesinatos», mencionando reiteradamente las mismas supuestas atrocidades.[100] Pero el terrorismo de los clientes de los Estados Unidos no pasaba precisamente inadvertido, así que LeMoyne concluyó

98. Douglas Farah, *WP*, 4 de enero de 1988; COHA, *WRH*, 20 de enero de 1988.

99. AP, 23 y 26 de febrero de 1988; Congressional Record, Cámara de Representantes, 8 de diciembre de 1987, H11037f. Para la reacción de algunos jesuitas nicaragüenses, véase *Envío*, enero de 1988.

100. 18 de febrero, 20 de marzo y 20 de abril de 1988. En cuanto a la credibilidad de los artículos de LeMoyne sobre las atrocidades de la guerrilla, véase *NeI*, Apéndice V, sección 4.

una de sus noticias con palabras como «esta violencia de la guerrilla ha causado un incremento de los asesinatos políticos», sin citar la fuente. En una columna de «la semana a examen», describe cómo la guerrilla está empezando a adoptar «estrategias terroristas», a lo que añade que «la guerrilla y sus simpatizantes son también, de forma creciente, objetivos de la violencia». Otro análisis se centra en el terrorismo de las guerrillas, aunque observa a su vez que «parece que el ejército ha vuelto a asesinar a presuntos izquierdistas como represalia por los cada vez más frecuentes asesinatos, bombardeos y otros ataques de la guerrilla».[101] El mensaje es este: el gobierno testaferro de los EE.UU. tal vez no sea perfecto, pero sus deficiencias obedecen a las carnicerías de la guerrilla. Los lectores que se hayan familiarizado con esta costumbre periodística pueden leer entre líneas y aventurar que el gobierno salvadoreño probablemente no tiene la sensatez de respetar su compromiso con los derechos humanos, adquirido con la firma de los acuerdos. Pero la fuente les oculta los hechos. Pueden volver la vista a la prensa extranjera y leer en una cabecera destacada que los europeos «quieren ver progresos hacia una política civilizada no solo en Nicaragua y Costa Rica, sino también en Guatemala, Honduras y El Salvador, que, desgraciadamente, siguen siendo paradigmas de la barbarie».[102]

Recordemos de nuevo que estos mecanismos para ocultar la barbarie proporcionan un escudo bajo el cual los estados terroristas pueden continuar su labor. Los periodistas que observan la disciplina contribuyen en no poca medida a los asesinatos, la tortura y la aflicción general.

La campaña de los medios —de la que hemos visto aquí apenas una muestra—[103] logró demoler lo que, hacia enero, quedaba en pie del plan de paz. Desarbolada la CIVS bajo la presión de los Estados Unidos, Or-

101. 20 de marzo de 1988, «Review of the week»; 29 de febrero de 1988. Lindsey Gruson, el sucesor de LeMoyne, sigue esencialmente el mismo guión. Así, este corresponsal comienza su despacho titulado «Ataques rebeldes contra el levantamiento en El Salvador» con diez párrafos sobre la violencia de los «marxistas empeñados en redistribuir la riqueza de la nación y derrocar al gobierno que apoyan los Estados Unidos», incluyendo ataques a cuarteles generales del ejército, emboscadas a los policías y dos coches bomba en un barrio acomodado; en el párrafo undécimo, nos enteramos de que los defensores de los derechos humanos comunican «un fuerte crecimiento en el terrorismo y las masacres, atribuido a los escuadrones de la muerte (de filiación derechista), el ejército y las guerrillas»; *NYT*, 20 de octubre de 1988.

102. Editorial, *Observer*, Londres, 7 de febrero de 1988.

103. Para los detalles, véanse mis artículos en *ZMag*, enero y marzo de 1988.

tega aceptó avanzar más allá de lo acordado (y luego olvidado), perdiéndose por entero el requisito de la simultaneidad de los avances. El «espíritu del plan Arias», según los editores del *Times*, «es otorgar a Nicaragua la oportunidad de entenderse con sus vecinos sin dar la impresión de estar sometiéndose a Washington»; ya no se exige la simultaneidad que, en el momento de firmar los acuerdos, se entendía que era el verdadero «espíritu» del plan.[104] Vistas algunas referencias y citas, quizá tengan razón respecto a los designios de Arias; pero, de ser así, ello indica tan solo que este no tenía más interés en la realización de los acuerdos de Esquipulas que el *New York Times*.

Ortega tuvo que reconocer, en suma, que la ley la impone el más fuerte, y aceptó que Nicaragua fuera la única en dar vigencia a las resoluciones de Esquipulas, para lo que reclamó incluso la presencia de una comisión internacional, con representantes de los dos partidos políticos estadounidenses, que verificase únicamente la observancia de Nicaragua.[105] Los medios afirmaron entonces que Ortega había decidido «atenerse a los acuerdos» (vale decir a la versión revisada por Washington, que no se parece demasiado al texto original), avisando, sin embargo, de la poca credibilidad de este presidente. Ahora que los acuerdos habían sido relegados al olvido, las promesas del resto de mandatarios carecían de importancia. LeMoyne, que citaba «oficiales» anónimos, retrató a Nicaragua como el malo de la película, «el país más frecuentemente acusado de mala fe», ahora «entre la espada y la pared, debido a la presión de los otros cuatro líderes centroamericanos», y obligado a cumplir el tratado. Los lectores que optaran por la prensa extranjera, sin embargo, podían leer que «Nicaragua ha avanzado mucho más en el camino de ajustarse al plan de paz para Centroamérica que los otros cinco firmantes, a excepción de Costa Rica»; este editorial del *Globe and Mail* es fiel a la verdad, pero esta fue enmascarada por el bombardeo mediático estadounidense, con tan solo alguna mínima referencia ocasional a los hechos inaceptables.[106]

Los críticos también fueron borrados por la campaña de propaganda. Así, en un editorial del *Nation* (el 30 de enero) se lee que Ortega «ha hecho concesiones significativas respecto al plan de paz», es decir, ha

104. Editorial, *NYT*, 31 de enero.
105. LeMoyne, *NYT*, 22 de enero de 1988.
106. LeMoyne, *NYT*, 18 de enero de 1988; *G&M*, 5 de febrero de 1988.

aceptado abandonarlo, como le exigían los Estados Unidos. Los estados terroristas estaban ahora exentos de cumplirlo, al igual que su patrocinador.

Durante todo este periodo, podía determinarse qué resoluciones del plan eran válidas mediante un algoritmo sencillo: las violaciones de los Estados Unidos y las «democracias inexpertas» no cuentan, y tampoco los requisitos a los que se hubiera ajustado Nicaragua. Uno de los elementos cruciales de los acuerdos, por ejemplo, era la creación de una Comisión de Reconciliación Nacional. Solo Nicaragua estableció una comisión relevante, escogiendo para encabezarla a su crítico más severo, el cardenal Miguel Obando. Duarte, por el contrario, escogió para ese puesto a Álvaro Magaña, el candidato presidencial de los EE.UU., que no hizo nada. En Honduras, la segunda dependencia estadounidense, prácticamente no se dio importancia a la comisión, aunque no puede decirse que esta permaneciera inactiva: según atestiguó la prensa hondureña, la Comisión de Reconciliación Nacional estaba supervisando la distribución del abastecimiento estadounidense a la contra y, con ello, «ayudaba a subvertir» la tregua de marzo de 1988.[107]

De acuerdo con el citado algoritmo, desapareció todo interés por las resoluciones de Esquipulas sobre las comisiones de reconciliación nacional. Igualmente, carecen de toda utilidad las conclusiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que indicaban que la repatriación de refugiados había sido mucho más exitosa en Nicaragua que en el resto de países, debido a la «excelente disposición del gobierno sandinista».[108] Fuera del programa queda, por tanto, el «sentimiento de urgencia» con el que los presidentes centroamericanos se habían comprometido en Esquipulas a favorecer la repatriación de los refugiados. El algoritmo se aplica virtualmente sin excepciones.

Aplicando, pues, este procedimiento, los medios de comunicación redujeron en seguida los acuerdos de paz a «dos puntos centrales» (en palabras de Stephen Kinzer):

1) ¿Ofrecerá Nicaragua una amnistía a los «prisioneros políticos» (según los denominan el gobierno de los Estados Unidos y los medios)?[109]

107. Editorial, *El Tiempo*, 5 de mayo de 1988, reeditado por Hondupress, 18 de mayo.
108. CAR, 17 de junio de 1988.
109. Los defensores de los derechos humanos han condenado repetidamente esta técnica de guerra ideológica, pero sin éxito. Para más detalles, véase mi artículo en *ZMag*, enero de 1988.

2) ¿Aceptará Nicaragua negociar con la dirección civil de la contra?

En relación con el primer punto, pocos lectores sabrán que, a principios de noviembre de 1987, la CIVS había determinado que las resoluciones de amnistía se aplicarían cuando cesara la agresión contra Nicaragua; y ni siquiera un auténtico diarioadicto se habría enterado de que, pocas semanas más tarde (todavía en noviembre), la asamblea nacional nicaragüense había decretado una amnistía completa y había revocado el estado de emergencia con dos leyes que «entrarán en vigor en el preciso momento en que [la CIVS certifique] el cumplimiento» del compromiso de terminar con los ataques contra Nicaragua, adquirido en Esquipulas. Estas leyes dependían del principio de la simultaneidad, que Nicaragua, ingenuamente, creía operativo.[110] De este modo, ya en noviembre Nicaragua se había ajustado de largo a los acuerdos escritos. Era el único país en hacerlo, además de Costa Rica, y así hubo de ser.

Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos trabajaba con una versión del tratado de paz muy diferente a la del texto original y la de la CIVS. Puede leerse en la propaganda del Departamento de Estado o, indirectamente, en los artículos del *New York Times*. En uno de estos, Stephen Kinzer resumió los acuerdos de Esquipulas del siguiente modo: «Según sus resoluciones, ningún país de la región podrá ayudar a la contra, una vez que los sandinistas hayan establecido una libertad política plena».[111] Esta versión tan útil implica que, mientras Nicaragua no se equipare a una democracia escandinava en época de paz, los EE.UU. están autorizados a mantener su ejército delegado en la zona y atacar a Nicaragua, violando explícitamente, por tanto, el acuerdo real. Dado que el tratado de paz no singulariza ningún trato especial para Nicaragua, de ello se deriva que, según la versión del *Times* y el Departamento de Estado, se autoriza a la Unión Soviética a que envíe armamento y suministros a las guerrillas de El Salvador, con varios vuelos diarios desde

110. Reuters, *NYT*, 9 de noviembre de 1987, citando el informe de la CIVS de 8 de noviembre y a varios oficiales latinoamericanos; *Amnesty law and bill to suspend the state of emergency* [Ley de amnistía y propuesta parlamentaria de supresión del estado de emergencia], promulgada en noviembre de 1987, en su traducción inglesa no oficial, que me proporcionó Miguel d'Escoto, el ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua (quien, al parecer, creía sinceramente que se permitiría sobrevivir a este acuerdo).

111. 18 de noviembre de 1987.

Cuba, hasta que no se complete una reestructuración radical del gobierno terrorista de Washington. Claro está que nadie menciona derivaciones como estas.

Como ya se ha dicho, si bien El Salvador también declaró una amnistía, su formulación desatendía lo acordado en Esquipulas. Sin embargo, el *New York Times* aplaudió los decretos del gobierno de Duarte como «un avance concreto para cumplir con los acuerdos de paz de la región», comparando esos progresos con la negativa de los sandinistas a llevar a cabo lo pactado, aparte de algunos pasos «inseguros» y renuentes[112] (unos pasos que se adecuaban a lo pactado, como acabamos de ver, aun cuando el *Times* nunca informara de ello). El *Toronto Globe and Mail* no lo contó con las mismas palabras, sino que describió el edicto salvadoreño como una «amnistía para los militares y los escuadrones de la muerte». El noble gesto de Duarte fue condenado también con acritud por los grupos de defensa de los derechos humanos, no solo porque se exculpaba de antemano a los asesinos de decenas de miles de personas (aunque es improbable que hubieran sido perseguidos por ello, cuando el gobierno estaba bajo control efectivo del ejército), sino también porque —como indicó María Julia Hernández, de Tutela Legal, después de largos meses de atrocidades continuadas— «aseguraba a los militares que [en el futuro] tampoco se combatirían las violaciones de los derechos humanos». La amnistía «beneficiaba especialmente a los escuadrones de la muerte, vinculados con el gobierno», según el comentario preciso del *Globe and Mail*.[113]

Por lo que atañe al segundo «punto central», el de la negociación, los acuerdos no promovían ningún tipo de tratos con asociaciones de tapadera creadas por la CIA a la manera del Partido Comunista clásico. Que la dirección de la contra era justamente eso es bien conocido, y aparece documentado minuciosamente en una monografía importante (pero innombrable) de Edgar Chamorro, a quien la CIA había seleccionado para que actuase de portavoz de un frente creado a beneficio del «territorio enemigo» interior.[114] En una sesión de la vista del caso Irán-contra, Robert Owen, el vínculo de Oliver North con los contras, describió al fren-

112. Lindsey Gruson, NYT, 29 de octubre de 1987; LeMoyne, NYT, 29 de noviembre de 1987.

113. Chris Norton, G&M, 10 de febrero de 1988.

114. Chamorro, *Packaging the contras: a case of CIA disinformation*, Institute of Media Analysis, Nueva York, 1987.

te civil como «nada más que un nombre», «una creación del gobierno de los Estados Unidos para lograr el apoyo del Congreso»; el poder real está en manos del FDN, un partido controlado por los somocistas y encabezado por Adolfo Calero, que es también «una creación del gobierno y, por tanto, el caballo que escogimos para que nos llevara», aunque es secundado por personas que son «falsas, y las mueve la ambición del poder y el dinero», y que consideran la guerra «un negocio», puesto que esperan que los marines les devuelvan el poder que han perdido.[115]

Sin embargo, los medios aplicaron a los acuerdos de paz el ya referido algoritmo e interpretaron que lo central eran las negociaciones entre el sandinismo y el frente creado por los especialistas en relaciones públicas de Washington. El *New York Times* llegó incluso a designar al gobierno nicaragüense y la contra como «las dos facciones» que han de negociar un acuerdo, tarea que está resultando difícil porque la «facción» gubernamental insiste en que «se termine con toda la ayuda exterior a la contra» (tal como estipulan los acuerdos de paz, detalle que se omite).[116] Otro periodista, en un análisis de los problemas de la región, describe a los dos contendientes por el poder como «los dos bandos enemigos»; pero en El Salvador, por el contrario, la guerra civil enfrenta al «gobierno, apoyado por los EE.UU.» con las «guerrillas marxistas».[117] En esta película, la precisión lingüística interpreta un papel importante, al igual que la selección cuidadosa de los hechos, su deformación y, de ser necesario, la mentira.

La insistencia en que se establezcan negociaciones de alcance con la dirección de la contra es uno de los componentes del esfuerzo insistente por aparentar que el ejército delegado es, en realidad, una fuerza nacional, comparable a las guerrillas indígenas de El Salvador (aun cuando estas se movilizaron sobre todo en respuesta al terrorismo estatal —amparado por los Estados Unidos—, reciben muy poca ayuda militar del extranjero —o ninguna—, carecen de los servicios de inteligencia y soporte que proporciona el superpoderoso promotor de la contra,[118] y se en-

115. *Harper's*, octubre de 1987.
116. Lindsey Gruson, NYT, 15 de diciembre de 1987.
117. Tad Szulc, *Parade Magazine*, 28 de agosto de 1988.
118. Julia Preston observa que los sandinistas han interceptado «equipamiento militar de última tecnología, tan moderno que ni siquiera disponen de él todas las unidades estadounidenses» (WP, 4 de febrero de 1988), sin mencionar para nada el abastecimiento regular

frentan a un ejército que, al menos sobre el papel, es mucho más poderoso que el de Nicaragua). Forzosamente, por tanto, hay que suprimir de la cobertura informativa la sorprendente incapacidad de los EE.UU. para organizar una guerrilla auténticamente nicaragüense, a pesar de que se le presta un apoyo nunca visto por una guerrilla genuina: el control mediático de gran parte del país (pues se cuenta con potentes emisoras de radio), la recluta de mercenarios en Honduras y terceros países, una economía arruinada (como resultado de la guerra económica y el terrorismo estadounidenses) y un gobierno atado de manos (gracias a la guerra ideológica de Washington), al que se le niega el derecho a tomar medidas adoptadas normalmente por las democracias occidentales en situaciones mucho menos conminatorias. Con solo una porción de la ayuda exterior a las fuerzas delegadas de los EE.UU., la guerrilla salvadoreña hubiera depuesto fácilmente al gobierno delegado por los EE.UU.; y podría pensarse que alguna superpotencia ahora inimaginable sería capaz de establecer con éxito un movimiento guerrillero en las zonas limítrofes de nuestra frontera. Este fracaso de los EE.UU. —su incapacidad de organizar una guerrilla interior o, al menos, que no requiriera la ayuda y dirección exterior en la escala actual, completamente desconocida— es muy llamativo, y a la vez muy ilustrativo, para quien esté preparado para pensar en cuál es su significación. Por tanto, se hace imprescindible suprimir escrupulosamente tanto los hechos como su significación.

El presupuesto de la ayuda exterior estadounidense, para el año fiscal de 1989, incluía 2 millones de dólares para los grupos políticos y los medios de oposición al sandinismo (según informó *Congressional Quarterly* el 25 de junio de 1988), algunos de los cuales se identificaban abiertamente con la contra. Ni uno solo de los «grupos democráticos nicaragüenses», como los denomina la referida fuente, cuenta con el soporte de más del 3 por 100 de la población; sumados, no pasan del 9 por 100, es

masivo y la ayuda crucial que presta la vigilancia aérea y naval estadounidense. Sobre la alta calidad de los sistemas militares y de comunicación de la contra, extraordinarios para el estándar de la región, véase *Culture of terrorism*, pág. 91. La ayuda «humanitaria» ilegal que se envía a las bases hondureñas de la contra les proporciona un nivel de vida superior al que se puede conseguir en Nicaragua, y no solo en cuanto a los alimentos y el abastecimiento militar, pues incorpora incluso equipamiento deportivo de primera clase (véase Joe Gannon, *CSM*, 13 de febrero de 1989). Probablemente, esta ayuda «humanitaria» tiene el doble objetivo de mantener a las fuerzas terroristas en ese territorio y de ir atrayendo a nicaragüenses a medida que empeora la situación económica en su país.

decir, menos de un tercio del porcentaje de la población que respalda a los sandinistas. Estos son algunos de los resultados de varias encuestas emprendidas bajo los auspicios del Centro Interamericano de Investigaciones (de México) y la universidad jesuita de Managua (la UCA). En cuanto al presidente Ortega, el 42 por 100 lo valoraron «excelente o bueno» y el 29 por 100, «correcto». Compárese con otra encuesta de la UCA en El Salvador —poco noticiada—, según la cual el 6 por 100 se sentían representados por los demócrata cristianos de Duarte y el 10 por 100 por la derechista Alianza Republicana Nacional (ARENA), mientras que el 75 por 100 consideraron que no había ningún partido que los representara.[119]

Otro resultado interesante de la encuesta salvadoreña indica que el 95 por 100 preferían una ayuda económica y humanitaria a una de tipo militar, que solo el 4 por 100 culpaban de la crisis a «la guerrilla o la subversión comunista», y que solo el 13 por 100 valoraban a Duarte como «excelente o bueno». Nótese que solo el 10 por 100 de la población salvadoreña veía señales de progresos democráticos.[120] Un tercer contraste entre Nicaragua y El Salvador indica que, en el segundo caso, los encuestadores habían encontrado que

> algunas preguntas de carácter político tenían que ser cuidadosamente expresadas en un lenguaje libre de acusaciones. Un porcentaje significativo de los salvadoreños nos dijo que no discutían nunca de política, ni siquiera con sus amigos o familiares más cercanos. Por el contrario, en las encuestas celebradas en Nicaragua, en junio, los entrevistadores consideraron que el 77 por 100 de los 1.129 encuestados en Managua respondieron a todas las preguntas sin signos aparentes de temor o desconfianza.

Los entrevistadores de Nicaragua consideraron que «el mayor problema con que toparon en el trabajo de campo fue el retraso causado por la amplificación de las respuestas», ya que los encuestados explicaban minuciosamente el porqué de su apoyo o su crítica al régimen sandinista. En cambio, en la encuesta organizada en Honduras en noviembre de 1987, el 65 por 100 de los entrevistados «afirmaron creer que los hondureños tenían miedo de expresar sus opiniones políticas en público» y «los entrevistadores consideraron que solo el 36 por 100 de los encues-

119. *Interamerican's Public Opinion Series*, nº 7, 4-5 de junio, 1988, Interamerican Research Center, Los Ángeles; *Alert!* (CISPES), marzo de 1988.

120. Véase *NeI*, pág. 16.

tados habían respondido sin signos aparentes de temor o desconfianza».[121] Siempre ha sido evidente que existía una diferencia clara entre el clima político en Nicaragua o en El Salvador, aunque los medios estadounidenses hayan logrado trasmitir la impresión contraria.

Se han silenciado también otras informaciones sobre la opinión pública salvadoreña, que arrojan luz sobre la política de los Estados Unidos y sobre las inquietudes reales de nuestros medios. En 1988, el arzobispo de San Salvador organizó un debate nacional para analizar los problemas de la nación. Participaron en él más de sesenta asociaciones, «representantes del sector privado, asociaciones profesionales, instituciones educativas y culturales, organizaciones sindicales, grupos humanitarios, los refugiados, instituciones religiosas y otros».[122] Hubo un acuerdo casi unánime (suscrito por entre el 95 y el 100 por 100 de los participantes) sobre «el fracaso de los proyectos de la administración de Reagan para El Salvador»; la defensa de los acuerdos negociados; la preocupación creciente ante las violaciones de los derechos humanos y el empobrecimiento de la mayoría «mientras que se ha enriquecido una pequeña minoría»; la identificación de la «raíz» del conflicto no en una «agresión del comunismo internacional», sino más bien en «la injusticia estructural, que se manifiesta en una concentración injusta de la riqueza» de la tierra, la industria y el comercio, así como en «el agotamiento del capitalismo y un modelo de dependencia de la exportación agrícola que forma parte de una estructura injusta del comercio internacional».

Con el mismo porcentaje (95-100 por 100 de votos favorables), se condenaron

1. La «subordinación del poder político al poder económico».
2. La «interferencia directa y permanente del ejército en la actuación del estado y la sociedad, prestando su apoyo a la oligarquía y los sectores dominantes y, con ello, a los intereses norteamericanos», ya que el país está «sometido a los intereses del capital internacional».
3. «La hipoteca de la soberanía nacional y la autodeterminación, así como

121. William Bollinger y David M. Lund, *LPr*, Perú, 22 de setiembre de 1988. Bollinger es director del Interamerican Research Center; Lund es catedrático del departamento de historia de la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Ambos están relacionados con la realización de encuestas en Centroamérica, incluidas las que se mencionan aquí.

122. *Conclusiones del Debate Nacional por la Paz en El Salvador, promovido por el arzobispo Arturo Rivera y Damas*, setiembre de 1988 (distribuidas por la National Agenda for Peace in El Salvador, PO BOX 192, Cardinal Station, Washington, DC 20064).

la enorme interferencia de los Estados Unidos en los asuntos nacionales de El Salvador».
4. La ayuda militar extranjera.
5. La «fuerte oposición de los EE.UU.», sus aliados militares y la derecha salvadoreña a los acuerdos de paz de Esquipulas, a los cuales debería adecuarse El Salvador, bajo presión si es necesario.
6. La Ley de Amnistía, que exculpa «a los acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad».

Además, el 88 por 100 observa la presencia de «serios impedimentos para el proceso democrático» y consideran que la «democracia cristiana es una tapadera del refuerzo de la interferencia norteamericana»; entiende que la responsabilidad principal del conflicto armado cabe achacarla a la «intervención extranjera, especialmente a la de los Estados Unidos»; y la lucha armada se considera una respuesta a «la inexistencia de formas genuinas de participación popular». La mayoría exigieron el reconocimiento de las guerrillas del FMLN como una «fuerza política representativa», surgida como respuesta a la violencia y la injusticia (55-59 por 100). Las tan cacareadas elecciones fueron descritas por el 81 por 100 de los participantes en el debate como «el instrumento fundamental del proyecto antiinsurgente de los EE.UU.», con el que se «legitima la guerra y se neutraliza el movimiento popular».

El documento ilustra bien el «proyecto antiinsurgente de los EE.UU.», así como las perspectivas más probables para este país torturado. Pero fue silenciado en los EE.UU., al igual que las encuestas.

La falta de interés por conocer el pensamiento de la opinión pública salvadoreña revela aspectos interesantes de la cultura política estadounidense y de la función social de los medios. Los Estados Unidos han dispuesto en El Salvador un aparato militar y represivo de enormes proporciones, y han introducido en el país sumas ingentes de dinero; si tales esfuerzos se dirigiesen —siquiera remotamente— a colmar las necesidades e inquietudes de los salvadoreños, en tal caso es obvio que las opiniones de estos ocuparían la portada de nuestros medios y serían objeto de un minucioso comentario. Lo que se observa, sin embargo, es que no se tiene el más mínimo interés por sus opiniones. Sería erróneo pensar que se suprime esta información; se trata, más bien, de algo tan simple como una regla matemática: esa gente, que hemos sometido a nuestro capricho, es del todo irrelevante. Preocuparse por qué puedan

pensar es tan absurdo como querer tomar en cuenta el criterio de un asno o de un pollo.

La conclusión, en suma, es clara: los planificadores estadounidenses —al igual que las élites instruidas que comentan y articulan los puntos de vista sobre los asuntos internacionales— se desentienden de las necesidades e inquietudes del pueblo de El Salvador; lo único que les interesa es preservar su poder y sus privilegios. La retórica de la «benevolencia», de las «buenas intenciones» que se han malogrado y otras expresiones por el estilo, no es más que un engaño (y, probablemente, también un autoengaño). No solo se hace oídos de mercader ante las ideas y las opiniones de los salvadoreños, como si no tuvieran ninguna relevancia, sino que además acontece que son diametralmente opuestas a las de sus teóricos benefactores de Washington, Nueva York, Cambridge o donde sea. Nada de esto importa, ni siquiera se le presta atención a los simples hechos. El desprecio manifiesto por nuestros pueblos súbditos es, sencillamente, una circunstancia más de la vida, como el aire que respiramos.

Los corresponsales del *New York Times* suelen pretender que, en Nicaragua, las encuestas son ilegales, sin citar ninguna prueba. Tampoco se atiende a la declaración del respetado padre jesuita que ocupa la rectoría de la UCA (la universidad que, en condiciones normales, se encargaría de las encuestas), según el cual las encuestas son legales pero faltan los medios; es una afirmación plausible, vistas las circunstancias. El ya citado informe del Interamericano (véase la nota 119) entiende que las encuestas son legales desde 1984, que su legitimidad se ha visto reforzada por los acuerdos de paz de agosto de 1987 y que «la presente encuesta pone a prueba esa percepción general». La encuesta, sin embargo, no fue noticiada por el *Times*; en el resto de medios, lo fue escasamente, y con poca fiabilidad.[123]

Volvamos a las negociaciones de paz en Centroamérica, después de la demolición efectiva de los acuerdos de Esquipulas, en enero de 1988. En los comentarios posteriores, el tratado fue entendido en los términos de la versión de Washington, que Nicaragua tuvo que aceptar por la fuerza: la interpretación extensiva preparada por Washington se aplica exclusivamente a Nicaragua. Por esta razón, la prensa puede afirmar que «otros países han tenido mayor éxito» en su adecuación a los acuerdos

123. Véase *NeI*, capítulo 3, nota 47.

y su requisito de «libertad para la prensa y los grupos políticos, cese de la ayuda a las guerrillas de otros países y establecimiento de negociaciones con los rebeldes de Nicaragua» (*Boston Globe*, agosto de 1988); en realidad, los otros países *no pueden* violar los acuerdos de paz, hagan lo que hagan, según las convenciones de la neolengua orwelliana que practican el gobierno y los medios.[124]

Dejando de lado, por el momento, el silenciamiento habitual del terrorismo de estado en las «democracias inexpertas» y la ayuda de Honduras a la contra, la referencia a las negociaciones no deja de ser audaz; era bien conocido que solo Nicaragua había negociado un acuerdo de alto el fuego. Pero se aplicó el algoritmo habitual y, cuando Nicaragua entabló conversaciones hasta acordar una tregua con la contra, este «punto central» fue suprimido del programa por su consiguiente inutilidad.

También fue necesario suprimir otro inconveniente: El Salvador y Guatemala, haciendo caso omiso de la voluntad casi unánime de sus pueblos,[125] se negaron a tratar con las guerrillas indígenas. En enero —el mes crucial para el desmantelamiento de los acuerdos— el *Times* no quiso interrumpir su reprensión diaria de los sandinistas para informar de que «según [el líder del FDR, Guillermo] Ungo, las conversaciones no se han reanudado, a pesar de las peticiones del FMLN, debido a la presión que ejercen sobre Duarte la administración de Reagan y las fuerzas de seguridad del país».[126] La demanda de diálogo realizada por Ungo el 8 de febrero fue rechazada por el gobierno, quien adujo que «solo dialogaremos con partidos políticos registrados legalmente»; esta noticia se comentó profusamente en la prensa mexicana, pero no así en el *Times*.[127] El FMLN/FDR declaró que era la tercera vez que Duarte se negaba a enta-

124. Katherine Ellison, Knight-Ridder Service, *Boston Globe* (BG), 1 de agosto de 1988. Otros consideran que «Nicaragua ha avanzado en el cumplimiento del "plan de paz Arias" más que Guatemala, Honduras y El Salvador», pero los lazos de Nicaragua con el bloque soviético proporcionan «una razón, si no una excusa» para ignorar este hecho; su reconocimiento, además, tampoco ejerce ninguna influencia sobre el continuismo en la cobertura de las noticias o en la opinión pública; editorial, *NYT*, 11 de marzo de 1988.

125. En El Salvador, al menos; no hay datos disponibles sobre Guatemala. El informe de Ellison es inusual, pues cuando menos reconoce que Guatemala «rompió las conversaciones con la guerrilla».

126. COHA, *News and analysis* (*N&A*), 14 de enero de 1988. El FDR es el grupo político aliado con las guerrillas del FMLN.

127. *Excelsior*, 9 de febrero de 1988; *CAR*, 26 de febrero. Aparecieron algunas breves notas en *BG*, 9 y 11 de febrero, y en *CSM*, 10 de febrero de 1988.

blar conversaciones con ellos desde noviembre, pero ni esta afirmación, ni la homilía en la que el arzobispo Rivera y Damas exhortaba a Duarte a responder, parecen haber sido noticiadas. Muy al contrario, el *Washington Post* realizó un ejercicio de construcción fantasiosa y condenó a las guerrillas por haber «rechazado la apertura de Duarte», que «iba sustancialmente más allá de las obligaciones contraídas en los acuerdos de paz de Centroamérica». Así mismo, los medios informaron escasamente de las posteriores ofertas de diálogo por parte de la guerrilla, nuevamente descartadas por el gobierno. Jeane Kirkpatrick llegó al extremo de denunciar a las guerrillas por rechazar todas las «generosas ofertas» de negociación presentadas por Duarte.[128] Por enésima vez, los hechos se trasforman en su contrario cuando se reflejan en el espejo deformador de los medios.

En Guatemala, la conferencia episcopal pidió que se reanudaran las negociaciones, el 29 de enero; la guerrilla aceptó, pero no así el ejército, respaldado por el presidente Cerezo. A finales de febrero, los rebeldes volvieron a poner una oferta sobre la mesa, con la posible mediación del arzobispo; pero el gobierno la rechazó. Un nuevo intento acometido en abril, con el apoyo del presidente Arias —que ofrecía su país como espacio neutral—, fue declinado por Cerezo, y la propuesta de tregua de junio fue igualmente despreciada por su gobierno.[129] De acuerdo con los principios que hemos visto, todas estas noticias se consideraron carentes de interés.

La lógica fue aclarada posteriormente por George Shultz, en una carta de respuesta a una proposición del Congreso que requería, antes de hacer efectiva la ayuda al gobierno salvadoreño, información de Reagan sobre los esfuerzos de Duarte por lograr una tregua. Los defensores de la propuesta adujeron que, de este modo, el Congreso «haría patente su apoyo a una solución negociada» para la guerra civil de El Salvador. Shultz objetó que «es del todo inadecuado intentar presionar al gobierno electo para que negocie o haga concesiones a las guerrillas, pues ello sería inaceptable para un gobierno democrático». Dado que en Nicaragua —a diferencia de El Salvador— no hay una democracia ni un gobierno electo, entonces es muy adecuado someterla al terrorismo y a la

128. *El Sol* (*El Salvador On Line*), 22 de febrero de 1988; editorial, *WP Weekly*, 28 de marzo; AP, 13 de mayo; *BG*, 1 de mayo; Tad Szulc, *LAT*, 22 de mayo de 1988.

129. *CAR*, 4 de marzo y 24 de junio de 1988; AP, 24 de febrero y 30 de marzo de 1988.

guerra económica, y de este modo presionarla hasta que negocie con los delegados de los Estados Unidos.[130]

El 23 de marzo de 1988 se alcanzó una tregua en Nicaragua; de nuevo, era el único país que realizaba una de las resoluciones de los acuerdos de paz.[131] La tregua fue inmediatamente saboteada por la legislación del Congreso, y la administración llegó más lejos, violando tanto la citada legislación como el pacto de alto el fuego. Los medios siguieron sus pasos, como se ha visto. Las conversaciones ulteriores se rompieron en junio, mientras la contra, bajo una dirección cada vez más dura, seguía la estrategia estadounidense y las minaba, elevando sus exigencias cada vez que el acuerdo parecía posible.

El Consejo para Asuntos del Hemisferio (COHA) declaró que

> la ruptura de las conversaciones en Nicaragua forma parte también del plan estratégico diseñado varias semanas antes por Elliott Abrams, el ayudante del secretario de Estado: la administración impulsaba a la contra a no firmar un acuerdo de paz con los sandinistas, pero ir prolongando la tregua *de facto*, esperando que alguna acción militar sandinista —la que fuera, como derribar un avión de suministro de la contra o abrir fuego contra alguna de sus unidades— permitiría a la Casa Blanca procurar la reanudación de la mortífera ayuda militar del Congreso. Según Abrams, ese era el objetivo mínimo que esperaba conseguir. Al preguntársele qué era lo máximo que podrían llegar a emprender si se les presentaba la referida posibilidad, Abrams replicó: «Arrasaremos Managua».

Entre las jugadas adicionales del «plan estratégico», los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tenían que intensificar sus actividades en Nicaragua, «con la esperanza de utilizar a las fuerzas de oposición interior para desacreditar a los sandinistas y dar una imagen de descontento», así como sentar la base de la futura intervención militar. A esta jugada se la conoce, fuera de los medios, con el muy descriptivo nombre de «método chileno», en referencia a los métodos usados para sustituir la democracia chilena por una dictadura militar. Como ejemplo, el COHA citó el arresto y breve retención de quince dirigentes de la opo-

130. *Congressional Quarterly*, 25 de junio de 1988.

131. Para ser más precisos, nos referimos ahora a los acuerdos revisados, modificados según los dictados del gobierno de los EE.UU. y reproducidos por los medios en conformidad con estos dictados.

sición política, por manifestarse ante el edificio de la Asamblea Nacional después de haberse negado a solicitar el correspondiente permiso; según el COHA, «en Washington existe la convicción generalizada de que la oposición actuaba al dictado de su contacto de la CIA, quien recomendó celebrar una manifestación no autorizada» y lograr así un arresto que atestiguara la mala fe de los sandinistas.[132]

Varias semanas más tarde, Stephen Kinzer, en un análisis de la situación, indicó que el «personal de la administración atribuye el fracaso de las conversaciones a la intransigencia sandinista», sin mencionar la posibilidad de ninguna otra explicación. Los editores del *Times* añadieron que «sin la guerra, y el consiguiente deterioro de la economía nacional, es probable que Managua no hubiera firmado el plan de paz para la región» de agosto de 1987; y también animaron a la administración «a colaborar con los centroamericanos» para que se presione a Nicaragua y esta acepte «objetivos y calendarios concretos», bajo amenaza de sanciones adicionales; pero nada que decir al resto de participantes en el drama de Centroamérica. Algunas semanas antes, James LeMoyne había aceptado que «hay pocas dudas de que la presión de las guerrillas [salvadoreñas] ha representado un estímulo clave para un cambio político en positivo».[133] Siguiendo la lógica editorial, parece razonable que hubiéramos apoyado a las guerrillas de El Salvador; sin embargo, siempre se evita extraer este tipo de conclusiones lógicas.

Mientras se acercaba el primer aniversario de los acuerdos de Esquipulas, seguían incumpliéndolos los países que ahora estaban exentos de su compromiso. En El Salvador, la Oficina de Derechos Humanos de la Iglesia documentó «un incremento alarmante» de los asesinatos políticos de civiles durante 1988. El arzobispo, en una homilía dominical, condenó el «regreso a la ley de la selva», con la violencia creciente de los escuadrones de la muerte; su auxiliar, Rosa Chávez, denunció en la televisión nacional el asesinato de numerosos campesinos afiliados al sindicato UNTS, declarando a su vez que «todos los indicios apuntan en una sola dirección: las fuerzas armadas de El Salvador». Se informó también de que varios campesinos y miembros de la ANIS habían aparecido muertos y con señales de tortura (incluyendo a un hombre de noventa y nueve años y su hija), en un pueblo recién reconstruido. El 28

132. Comunicado de prensa del COHA, 11 de junio de 1988.
133. Kinzer y editorial, *NYT*, 25 de junio de 1988; LeMoyne, *NYT*, 7 de junio de 1988.

de julio, Rigoberto Orellana, líder del nuevo Movimiento por el Pan, la Tierra, el Trabajo y la Libertad, fue asesinado por los servicios de seguridad nacional, según los portavoces de la asociación. La carnicería no se frenó con el aniversario. El 21 de agosto, la policía nacional detuvo y quitó la vida a un médico suizo, Jurg Weiss, al cual le dispararon en el rostro en un intento, al parecer, de impedir su identificación. Weiss investigaba el bombardeo de un pueblo; el ejército afirmó que había muerto en combate, pero sus compañeros adujeron que, debido a su participación en la actividad humanitaria, fue seleccionado como un objetivo dentro de la campaña de represión contra los cooperantes humanitarios y religiosos. El asesinato fue condenado por una resolución del Parlamento Europeo que se refería a la «creciente escalada del terrorismo de estado» en El Salvador. El mismo día se hallaron dos cadáveres tiroteados en la capital, con lo que el número de muertos de aquella semana se elevaba a cinco; y las cinco víctimas presentaban marcas de tortura, según el portavoz de la CDHES, quien describió los asesinatos como dirigidos a instaurar «el terror sicológico entre la población». La ya mencionada intentona terrorista contra el coronel Majano se produjo cuatro días más tarde.[134]

Los abusos tomaban también formas más leves. El ejército, por ejemplo, impidió que la Iglesia abasteciera a los pueblos reconstruidos por los refugiados. En las áreas rurales, la policía interrumpía sistemáticamente cualquier concentración política (según informa Rubén Zamora). Una manifestación del 21 de julio en pro de la liberación de un sindicalista secuestrado fue atacada por la policía, que disparó armas automáticas y gases lacrimógenos, causando numerosos heridos. El 12 de julio, las tropas habían lanzado gases lacrimógenos y golpeado con porras y culatas a una marcha de granjeros y cooperativistas que intentaba entregar provisiones a unos trabajadores en huelga, pertenecientes al sector eléctrico; los manifestantes fueron detenidos por la policía (hubo, dependiendo de las fuentes, entre uno y cien detenidos). Anteriormente, con el propósito de impedir las concentraciones sindicales del uno de mayo, el ejército había bombardeado la sede de la UNTS, y la policía del tesoro secuestró y apalizó al auxiliar del operador de sonido, después de

134. COHA, *Washington Report on the Hemisphere* (*WRH*), 20 de julio de 1988, citando a Tutela Legal. Arzobispo Rivera y Damas, 29 de mayo; obispo Chávez, denunciando 14 matanzas en abril; *Alert!* (CISPES), junio y julio; El Sol, 8 de agosto; Orellana, *El Sol*, 1 de agosto; *Guardian*, Nueva York, 17 de agosto; *El Sol*, 29 de agosto de 1988. Parlamento Europeo, *Excelsior*, México, 7 de octubre de 1988; *Central America News Update*.

que el titular renunciara a acudir, bajo amenaza de muerte. Muchos de los organizadores y manifestantes fueron retenidos en la prisión, y «desapareció» uno de los líderes del sindicato del metal, que estaba en huelga y había pronunciado consignas ante la multitud. En Honduras, el ejército impidió que los trabajadores participaran en las manifestaciones del día del trabajo, organizadas en Danlí por el sindicato mayoritario de la Honduras oriental. A mediados de abril, la policía de Tegucigalpa había realizado disparos al aire y usado gases lacrimógenos para dispersar una marcha de protesta que se dirigía a la embajada de los Estados Unidos y, según los cooperantes pro derechos humanos, «desapareció» un estudiante, Roger González, mientras otros fueron encarcelados por su supuesta participación en el ya referido ataque del 7 de abril al consulado estadounidense, que la policía había observado impasible. En Costa Rica, varios granjeros y cooperativistas en huelga fueron acosados y detenidos por la guardia rural; en al menos un caso, se recurrió a los gases lacrimógenos y la fuerza física para evitar que presentaran una petición en el ayuntamiento.[135]

Ni las atrocidades continuadas ni los abusos menos graves recibieron la atención de los medios estadounidenses, aparte de alguna breve nota displicente. En cambio, la denuncia de la iniquidad sandinista continuaba a un ritmo febril, especialmente cuando Nicaragua se acercó por un momento a algunos de los abusos menores que practican con regularidad los países clientes de los Estados Unidos; así, a mediados de julio se despertó una nueva ronda de condenas indignadas por parte de todo el espectro político, y se renovó el apoyo de los congresistas liberales a la ayuda prestada a la contra.

En su análisis del primer año de los acuerdos de paz, Julia Preston ha constatado que se han producido muy pocos avances, excepto en Nicaragua. En Honduras, Azcona no pasa de ser «otro de los presidentes provisionales para el poder militar»; lo mismo es cierto, aunque no se afirme abiertamente, en El Salvador y Guatemala. Preston cita un informe sobre derechos humanos de Americas Watch, publicado el 4 de agos-

135. Brook Larmer, CSM, 16 de agosto de 1988; Zamora, NPR, 19 de julio; *El Sol*, 25 de julio; AP, *BG*, 22 de junio, 100 palabras. *El Sol*, 18 de julio; AP, *NYT*, 14 de julio, 125 palabras. Joel Bleifuss, *In These Times*, 18 de mayo. Hondupress, 4 de mayo; editorial, *El Tiempo*, 4 de mayo; Hondupress, 18 de mayo y 15 de junio; *CAR*, 18 de noviembre de 1988. María Verónica Frenkel relata una visita a unos granjeros costarricenses en huelga en *Nicaragua through our eyes* (*Americans working in Nicaragua*), julio de 1988.

to, en el que se indica que «los asesinatos políticos a manos de las fuerzas militares y paramilitares continúan produciéndose en gran escala en El Salvador y Guatemala, y en menor grado en Honduras», además de «varios supuestamente acontecidos en Nicaragua», según añade Preston, «donde no eran habituales». «Inicialmente, Nicaragua había dado muchos más pasos que el resto de países centroamericanos para adecuarse» a lo acordado en Esquipulas, hasta mediados de julio, diez meses después de la firma. Se trata de un largo periodo «inicial», que terminó con la ruptura de las negociaciones de tregua; el 10 de mayo el gobierno nicaragüense «dispersó violentamente una concentración de opositores [en Nandaime], mantuvo en prisión a seis de sus dirigentes durante un largo proceso judicial, cerró la Radio Católica indefinidamente, expulsó a Melton, el embajador de Estados Unidos, y expropió la mayor plantación azucarera del país». Las dos últimas acciones, sin embargo, difícilmente pueden representar una violación de los acuerdos de paz. Y Radio Católica se reabrió el 18 de agosto, quedando bajo sanción gubernamental tan solo una revista prosandinista, *La Semana Cómica*, por haber publicado contenidos que degradaban a las mujeres.[136]

Los acontecimientos de mediados de julio —los de Nicaragua, claro está— horrorizaron a nuestros medios. «Los sandinistas serán siempre sandinistas», indicó perspicazmente un comentarista de radio, en una de las reacciones más suaves a la intervención de la policía en Nandaime, que recurría por primera vez al uso de gases lacrimógenos (después de haber recibido «una lluvia ... de piedras y palos», según el párrafo decimotercero del artículo de Stephen Kinzer, un detalle que desapareció de casi todos los comentarios posteriores).[137] Se dedicaron noticias de portada, editoriales y artículos reiterados a la barbarie de los sandinistas, que habían dispersado una manifestación —al estilo típicamente salvadoreño—, habían expulsado al embajador —acusándolo de colaborar en la organización de los partidarios políticos de la contra— y habían nacionalizado una plantación de azúcar —que, aun cuando alegaron que no se trabajaba, llegó a la portada del *Times*—. Las referencias a los gases lacrimógenos y la violencia policial aparecieron regularmente, con la carga apropiada de horror y durante varios meses. El Congreso se enojó tanto que, además de las peticiones renovadas de armamento para la

136. WP *Weekly*, 15-21 de agosto de 1988; NYT, 19 de agosto; COHA, *WRH*, 31 de agosto de 1988.
137. NYT, 11 de julio de 1988.

contra, las dos cámaras aprobaron condenas apasionadas de la «brutal represión de los derechos humanos» por parte de Managua, con mayorías escandalosas (91 a 4 en el Senado, 358 a 18 en la Cámara de Representantes), según trasmitió la prensa con satisfacción.[138]

Recuérdese que la «brutal represión de los derechos humanos» solo se acercó, y solo momentáneamente, a algunos de los abusos menores perpetrados habitualmente por los favoritos de los Estados Unidos en la región; y que ni de lejos se asemeja al ejercicio regular de la «pedagogía del terrorismo». Y recuérdese también que, mientras los servicios de seguridad de Duarte y sus escuadrones de la muerte incrementaban los actos terroristas después de la firma de los acuerdos de Esquipulas, no hubo condena en el Congreso, sino que, por el contrario, se aplaudió su progreso hacia un sistema «que respeta las libertades humanas».

El debate de los congresistas sobre de qué forma podría castigarse más duramente al sandinismo por sus trasgresiones de julio no carece de interés, incluso si dejamos de lado la emocionante retórica sobre nuestros hondos principios libertarios y el dolor que nos inflige en lo más sensible del alma cualquier alejamiento de estos principios ... en Nicaragua. El Senado aprobó la Enmienda Byrd, que sentaba las bases para reemprender la ayuda militar a la contra.[139] Hablando en nombre de sus colegas —incluyendo algunos de los más señeros liberales— Byrd, el líder de la mayoría, advirtió a los sandinistas de que «pueden o bien cumplir por entero los requisitos de democratización que suscribieron en el plan de paz Arias, y entrar así en la corriente dominante de relaciones democráticas y armónicas con sus vecinos», o bien pueden continuar «violando a todas luces las resoluciones de los acuerdos de paz», reprimir «las legítimas aspiraciones democráticas del pueblo de Nicaragua» y, en tal caso, afrontar las consecuencias: una «vuelta a la presión militar» (es decir, al terrorismo internacional promovido por los Estados Unidos). Byrd estaba igualmente angustiado por la incapacidad de los reaganitas de «presionar a los dirigentes soviéticos para que desistan de su empeño de ayudar militarmente al gobierno de Nicaragua», de forma que el único país de la región sometido al ataque extranjero ha de ser, así mismo, el único completamente desarmado. El senador Dodd —quizá el más pacifista de los senadores, en lo que atañe a Centroamérica—

138. Robert Pear, *NYT*, 15 de julio de 1988, y otras muchas referencias.
139. Véase *NeI*, pág. 57.

quedó profundamente impresionado por tales observaciones y propuestas y pidió que se le permitiera «añadir mi voz en honor de nuestro líder», el senador Byrd. No fue menos efusivo en su elogio del «valiente liderazgo del presidente Arias, de Costa Rica; del presidente Cerezo, de Guatemala; del presidente Azcona, de Honduras; y del presidente Duarte, de El Salvador, un gran amigo de nuestro Congreso», aunque no tan amigo del pueblo salvadoreño, que lo teme, lo desprecia y no ve signos de progreso democrático en el país, según demuestran las varias encuestas de las que se hace caso omiso, por inútiles. El senador Dodd y otros patrocinadores de la Enmienda Byrd son bien conscientes de los logros de los regímenes militares que gobiernan en nuestros estados terroristas, así como de la escalada de terror que, en respuesta a los acuerdos de paz de Esquipulas, están ocultando los «moderados» oficiales a beneficio del Congreso y los medios. Pero qué importa que lo sepan.

El Congreso ha tomado una decisión «excelente» al «dar un buen revés a los sandinistas, por haber retomado la fórmula dictatorial» y «recordarles que los americanos solo tenemos una postura por lo que respecta a los derechos y los excesos democráticos», según comentó el *New York Times*, urgiendo a los demócratas a que «hagan saber públicamente a los sandinistas el riesgo que corren por sus acciones de mala fe». Está claro que los editores también tienen solo una postura sobre «los derechos y los excesos democráticos» en El Salvador: sienten un desprecio máximo por los derechos democráticos de los salvadoreños, como indica a las claras su silencio, sin olvidar que elogian incesantemente el progreso de la democracia en ese estado terrorista. En cuanto a Guatemala, Stephen Kinzer —que conoce bien el país— llegó incluso a citar a un veterano oficial guatemalteco que expresaba el «palpable descontento» de su gobierno por el abyecto comportamiento de los sandinistas: «se percibe en todo el mundo una corriente liberalizadora, y Nicaragua es casi el único país que se resiste a ella»; este representante habla en nombre de un gobierno efectivamente liberal, puesto que los asesinatos y desapariciones han disminuido hasta una media de solo unos cuantos al día, según los grupos pro derechos humanos, lo cual es toda una mejora, comparada con los años precedentes.[140]

Los editores del *Washington Post*, por su parte, hicieron un llama-

140. Editoriales, NYT, 18 de julio y 7 de agosto de 1988; Kinzer, NYT, «The week in review», 17 de julio de 1988.

miento a las «democracias centroamericanas» y a «los demócratas críticos con la ayuda a la contra» para que se unan y condenen «a una sola voz» la violación sandinista de su «compromiso democrático solemne», ya que los sandinistas actúan «de forma similar a la de los estados policiales del comunismo: rompen cabezas, encarcelan, censuran a los medios»; imaginen qué términos cabría aplicar a El Salvador o a Israel, si medimos con este rasero. Sin duda, era de justicia que el embajador estadounidense ofreciera «la ayuda extra que requería la oposición», en palabras de los editores. Como apunta el COHA, sin embargo, pocas naciones tolerarían esta intervención: «Washington consideraría inamistoso, si no propiamente ilegal, que un gobierno extranjero financiara las entidades disidentes de los EE.UU.», y probablemente no «aprobaría que el embajador soviético en Washington participara en la manifestación de un grupo izquierdista local que exigiese el derrocamiento del gobierno actual», por no hablar de la intervención de los embajadores alemanes y japoneses en 1942, si queremos trazar un parangón más exacto. También es poco probable que el embajador de una potencia enemiga en guerra con los Estados Unidos fuese siquiera admitido en el país, y menos uno como Melton, quien, al jurar su cargo en Washington, anunció que «pretendo hacer relucir los principios de América y los valores de la democracia, y cómo los sandinistas no cumplen ni tan solo los requisitos mínimos». No se iban a hacer «más concesiones» a los sandinistas, según este favorito de Elliott Abrams, el arquitecto del ataque terrorista contra Nicaragua.[141] Claro está que, en el caso de un enemigo oficial, hay un único rasero.

Pocos meses antes, Singapur había expulsado a un diplomático de los Estados Unidos, «acusado de interferir impropiamente en los asuntos nacionales», según comenta Owen Harries en el periódico de derechas que dirige.[142] «De acuerdo con la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, esta interferencia es inaceptable, de modo que los EE.UU. no tenían más opción que aceptar la expulsión», ya que Singapur acusaba al agregado de haber «animado a singapurenses descontentos a participar en actividades antigubernamentales». Harries ha redactado una defensa de Singapur, contra los cargos de conducta inco-

141. *WP Weekly*, 18-24 y 25-31 de julio de 1988; comunicado de prensa del COHA, 14 de julio; *Update*, CAHI, 17 de agosto de 1988.
142. *The National Interest*, otoño de 1988.

rrecta y represión estatal y policial. Como Singapur es un país semifascista, que ofrece un clima favorable a la inversión, entonces se aplica la Convención de Viena. No es el caso de Nicaragua, a la cual las autoridades cuentan entre los enemigos.

Profundizando en la cuestión, el COHA indica que, si bien Melton y otros miembros del cuerpo diplomático han sido expulsados «por interferir abiertamente en los asuntos interiores de Nicaragua, [sin embargo] prosigue el uso de la embajada estadounidense para financiar, dirigir y coordinar las actividades subversivas de la oposición civil nicaragüense, en armonía con las acciones de la contra»; la financiación incluye, como mínimo, 700.000 dólares del programa de ayuda estadounidense a la oposición. El gobierno de los EE.UU. «está intentando por todos los medios crear un gobierno paralelo en Nicaragua», que pueda asumir el poder ante una escalada de los ataques o un derrumbe social.[143]

En octubre de 1988, Amnistía Internacional (AI) publicó un estudio titulado *El Salvador: "Escuadrones de la muerte", una estrategia gubernamental*, en el que se documentaba que las fuerzas derechistas de los escuadrones de la muerte habían secuestrado, torturado y asesinado a cientos de salvadoreños durante los dieciocho meses anteriores, y que decapitaban habitualmente a las víctimas, para extender el miedo.[144] Los llamados "escuadrones de la muerte" son una sección de las fuerzas de seguridad del gobierno instalado por los EE.UU., y sirven a su estrategia de intimidar a cualquier posible opositor. Según AI:

> Las víctimas suelen aparecer mutiladas, decapitadas, descuartizadas, estranguladas, o con señales de tortura o ... violación. ... Los escuadrones de la muerte tienen un modo de operar muy característico: actúan en secreto, pero dejan los cuerpos mutilados de las víctimas, para aterrorizar a la población.

Entre las víctimas se cuentan sindicalistas, cooperantes pro derechos humanos, jueces y jurados que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos, refugiados, miembros de la Iglesia, maestros y estudiantes. AI recoge también que «no se puede recurrir a la policía o al

143. COHA, *N&A*, 8 de setiembre de 1988.
144. Reuters, *TG&M*, 26 de octubre de 1988; *Miami Herald* (en adelante, *MH*), 26 de octubre; el mismo día apareció una información más breve en *BG*, AP. Véase también Americas Watch, *Nightmare revisited*, setiembre de 1988.

ejército, puesto que son ellos mismos los que realizan las carnicerías de los escuadrones de la muerte». Las matanzas son obra de pistoleros de paisano y policías y militares uniformados, y cuentan con la aparente aprobación del estado: «los escuadrones salvadoreños sirven para proteger al gobierno de su responsabilidad en la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales que se cometen en su nombre». Varios miembros de los escuadrones —algunos de los cuales viven escondidos en los EE.UU.— indicaron a AI que los integrantes fueron seleccionados de entre los cuerpos especiales de la policía, como la policía del tesoro o la guardia nacional. La Iglesia y los grupos de defensa de los derechos humanos estiman que, en 1987, hallaban cada mes cerca de una docena de cadáveres con las marcas de haber sido torturados y ejecutados por los escuadrones de la muerte, en los márgenes de la carretera o apilados en montones; la media se cuadruplicó a principios de 1988. Así mismo, AI considera que el resurgimiento de los escuadrones de la muerte se debe en parte a la amnistía aprobada por el gobierno un año antes, tal como se había predicho extensamente al tiempo que el *New York Times* aplaudía los progresos de El Salvador hacia el cumplimiento pleno de los acuerdos de paz.

El informe de AI no fue noticiado por el *Times*. Y el Senado aprobó una resolución (por 54 votos contra 12) advirtiendo a Nicaragua de que «la continuada trasgresión sandinista de los acuerdos de paz de la región causaría, "muy probablemente", que el Congreso sancionara un nuevo envío de ayuda militar al año siguiente».[145] Estamos, de nuevo, ante el modelo conocido: a las atrocidades de los gobiernos protegidos por Estados Unidos se acompaña solo la rigurosa advertencia a Nicaragua de que mejore su comportamiento o se intensificará el terrorismo estadounidense. En el mismo octubre de 1988, en cambio, el *Central America Report* (de Ciudad de Guatemala) se ocupó, como tema central, del recién aparecido *Informe anual* de AI sobre los derechos humanos. Así, se informa de que «algunas de las violaciones más graves de los derechos humanos ocurren en Centroamérica», especialmente en Guatemala y El Salvador, donde «los secuestros y los asesinatos son utilizados por el gobierno como un instrumento contra la oposición de izquierdas, según constata el informe» de AI; se recuerda, igualmente, que la situación ha empeorado después de los acuerdos de Esquipulas, y que se tornó aún

145. Pamela Constable, *BG*, 27 de octubre de 1988.

más crítica durante 1988. La situación de los derechos humanos, por el contrario, es «menos dramática» en Nicaragua y Honduras, exceptuando «las muertes de civiles a manos de las fuerzas de la contra, apoyadas por los EE.UU.». Si bien ha habido «casos de secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales en Honduras, Panamá y Nicaragua, tales acciones no se han convertido en un recurso sistemático del gobierno».[146]

En noviembre, el *New York Times* publicó un artículo de portada de Lindsey Gruson sobre las atrocidades cometidas en Guatemala.[147] En el pasado, según Gruson, Ciudad de Guatemala había sido una zona de «fuego a discreción, donde los extremistas políticos» habían generalizado el terror (pero no se menciona que esos «extremistas políticos», responsables de la inmensa mayoría de las carnicerías, eran —y son todavía— agentes del gobierno respaldado por los Estados Unidos; de hecho, el papel desarrollado por los EE.UU. no se menciona en todo el artículo). Gruson describe el incremento actual de los secuestros, la tortura y el asesinato; la situación de las ciudades, cada vez peor; y la «dictadura militar *de facto*» que impera en el campo (según Anne Manuel, observadora de Americas Watch). Los objetivos principales, en la ciudad, son «los líderes y activistas sindicales y los izquierdistas». El portavoz de una organización independiente pro derechos humanos ha indicado que «ahora hay una fachada democrática, eso es todo. La fachada esconde que todo el poder es detentado por el ejército y que la situación empeora cada día». Y un informe de Americas Watch, dos semanas más tarde, acusa al gobierno de ser el máximo responsable del elevado crecimiento de los abusos, con cerca de dos violaciones diarias de los derechos humanos; el informe concluye que, además, se trata de una cifra presumiblemente corta.[148]

En diciembre, las salvajadas gubernamentales siguieron creciendo en nuestros estados cliente. Aparecieron, por ejemplo, nuevos escuadrones de la muerte. Imelda Medrano, la decana de la Escuela de Derecho de Santa Ana, fue asesinada el día 16, tras regresar de una manifestación universitaria en San Salvador, en la que había participado como portavoz; su casa había sido vigilada durante dos días por un jeep con los cristales oscuros, un signo de identidad de los escuadrones. El edificio

146. *CAR*, 14 de octubre de 1988.
147. *NYT*, 13 de noviembre de 1988.
148. *LAT-BG*, 25 de noviembre de 1988.

de la facultad de biología de la Universidad Nacional fue destruido el 22 de diciembre, por tres potentes explosiones; los atacantes asesinaron a un vigilante, y un segundo guarda pudo describir a una patrulla compuesta por unos cincuenta hombres armados hasta los dientes. El rector de la universidad acusó al ejército de haber colocado las bombas: «Esta es la respuesta de las fuerzas armadas a la escalada de la guerra y su propia impotencia para contenerla». El ataque se desarrolló mientras los soldados estaban rodeando el campus, por lo que es evidente que solo los militares podían haberse movido con libertad, según precisó el rector. El director de Tutela Legal coincidió en que «son acciones de personas con entrenamiento militar, fuertemente armadas, y que se mueven con plena libertad». Cinco días más tarde, una bomba destruyó las oficinas de la iglesia luterana, a la cual el ejército mira con reticencia debido a la ayuda que presta a los refugiados; varios miembros de la iglesia, que habían recibido amenazas de muerte, culparon al ejército en privado. El embajador de Alemania del Este también fue amenazado de muerte y decidió abandonar el país. Según comentó un diplomático occidental, «se ve la mano de los militares» en el bombardeo. Otra fuente, cercana al ejército, aclaró que los militares creen que solo podrán contrarrestar la fuerza de la guerrilla con «terrorismo selectivo».[149] No tuvo demasiado reflejo en los medios, no preocupó demasiado, excepto por la posible amenaza al proyecto de Reagan de llevar la «democracia» a El Salvador.

Tampoco los abusos *menores* cesaron durante este tiempo. El 13 de setiembre, por ejemplo, los soldados y la policía atacaron una manifestación de estudiantes en San Salvador y dispersaron otra en Santa Ana, mientras las fuerzas de seguridad rodeaban el edificio del sindicato UNTS. Fueron arrestados unos 250 estudiantes y trabajadores de la universidad, aunque el rector afirmó que habían sido detenidos 600 estudiantes y se desconocía el paradero de otros 400. «Durante la manifestación, la policía antidisturbios disparó ráfagas de fuego real y botes de gases lacrimógenos contra una multitud de 3.000 personas», hiriendo a «varias decenas de manifestantes» y, aparentemente, causando la muerte incluso de un policía que manejaba un cañón de agua (*Central America Report*). Treinta periodistas, locales y extranjeros, «fueron obligados a estirarse en el suelo por los agentes de seguridad, que les prohi-

149. Chris Norton, CSM, 13 de enero de 1989; *El Sol*, 9 de enero de 1989.

bieron moverse o tomar fotografías», y se detuvo como mínimo a diez observadores extranjeros. El director de Tutela Legal «afirmó que las acciones de la policía parecen tener como objetivo intimidar a los participantes en las protestas urbanas, ahora que se inicia un periodo electoral decisivo». Por el contrario, el ministro de Defensa, Vides Casanova, indicó a los periodistas que «la paciencia de los cuerpos de seguridad tiene un límite, y ya basta de provocaciones en la calle ... Ya no toleraremos más violencia». Pero el día antes, según una noticia del COHA, los militares habían «atacado a 500 manifestantes en Usulután, que protestaban pacíficamente contra la falta de ayuda gubernamental, después de unas graves inundaciones», hiriendo a quince personas y deteniendo a ocho.[150]

Al igual que en los meses anteriores, la importancia de estos abusos menores palidece en contraste con la estrategia gubernamental de intimidación terrorista. Pero, en cualquier caso, tampoco estos últimos hechos despertaron interés ni inquietud en nuestros medios, a diferencia de lo sucedido en Nandaime, donde el gobierno sandinista se acercó a alguno de los sistemáticos abusos menos graves de otras regiones; los hechos de Nandaime, como hemos visto, provocaron tanto horror que los pacifistas del Congreso se vieron obligados a renovar la ayuda a sus fuerzas terroristas, para castigar a Nicaragua. Más aún, los aliados europeos de los Estados Unidos se limitaron a enviar una simple ayuda testimonial después de que, en octubre, el huracán Joan destruyera gran parte de Nicaragua. La razón aducida fue su profunda indignación ante la represión de Nandaime, que «muchos gobiernos europeos consideran ... como un desafío claro de los sandinistas al proceso de paz en la región», según escribe Julia Preston, observando «el descontento actual de Europa con Nicaragua». Pero no existe tal descontento con El Salvador y Guatemala, que continúan mereciendo su ayuda.[151] De nuevo, vemos que la hipocresía no tiene fronteras y que Europa está mucho más colonizada de lo que se quiere creer.

Como se ha indicado en la nota 150, Sam Dillon, del *Miami Herald*, sí que informó sobre la serie de abusos menos graves cometidos en los estados cliente. En un artículo posterior, analiza la creciente represión

150. UPI, *BG*, 14 de setiembre de 1988; *El Sol*, 19 de setiembre; *CAR*, 23 de setiembre; Sam Dillon, *MH*, 20 de setiembre; COHA, *N&A*, 19 de octubre de 1988.
151. Preston, *WP*, 8 de noviembre de 1988.

que se extiende por la zona, señalando a Nicaragua como el culpable principal; su mayor delito fue «haber lanzado gases [lacrimógenos] contra una manifestación pacífica y encarcelado a los líderes políticos más destacados de Nandaime». Luego describe cómo el ejército salvadoreño atacó a varias «concentraciones de protesta en las ciudades, numerosas, pero pacíficas», a las que una «violenta policía antidisturbios ... machacó ... con gases lacrimógenos, golpes de porra y más de 150 detenciones», junto con el arresto de muchas otras personas «en incursiones nocturnas a las oficinas de dos sindicatos de izquierda y asociaciones de campesinos». Dillon menciona brevemente el «radical» incremento de los «asesinatos políticos por parte del ejército y los escuadrones de la muerte (pero también por parte de las guerrillas)». Conoce los hechos a la perfección, pero, como tienen que pasar a través del filtro ideológico, las referidas matanzas en gran escala, el terrorismo y la represión como estrategias gubernamentales de intimidación en los clientes de los Estados Unidos se convierten en una minucia en comparación con los abusos reales, pero menores, que se cometen en un país sometido al terrorismo y la guerra económica por los EE.UU. Obsérvese, sin embargo, que nos referimos a un diario y un periodista que, al menos, hacen el esfuerzo de informar sobre algunos de los hechos.[152]

Mientras los países cliente rechazaban repetidamente las negociaciones, los medios y el gobierno de los Estados Unidos recriminaban a los sandinistas por su incapacidad de revitalizar las conversaciones de paz (estancadas por las tácticas obstruccionistas de los delegados estadounidenses). La prensa mexicana nos informa de que el presidente Cerezo «reiteró su negativa a dialogar con el ejército de las guerrillas», añadiendo que en tanto que «los subversivos ... no abandonen su posición beligerante, no abriremos conversaciones directas con sus líderes ... Ningún diálogo puede desarrollarse entre armas». Y en cuanto a El Salvador, cientos de campesinos, estudiantes y trabajadores organizaron una marcha que cruzaba la capital hasta llegar al hotel donde se celebraba una reunión de la OEA, para exigir que el gobierno negociara con las guerrillas. Durante este encuentro, la guerrilla había declarado una tregua unilateral y «renovado su petición de negociar con el gobierno», según AP; pero el presidente Duarte, en su alocución a los delegados de la OEA, «afirmó que el deseo expresado por las guerrillas de reanudar las

152. Sam Dillon, *MH*, 1 de octubre de 1988.

conversaciones de paz era tan solo "táctico", y acusó a los rebeldes de perseguir "una maniobra estratégica" para destruir la democracia a través de las propias libertades democráticas».[153]

La reunión de la OEA fue seguida en el *New York Times* por Lindsey Gruson, quien se refirió, sin excesivo optimismo, a la «perversión» del proceso de paz en Centroamérica. Sin embargo, como cabría esperar, solo se cita un ejemplo: la concentración de Nandaime y la detención de campesinos nicaragüenses, acusados de colaborar con la contra; estos actos represivos han «debilitado todos los intentos de revitalizar las negociaciones», según Gruson, que cita aquí a diplomáticos estadounidenses. Respecto de El Salvador, tan solo se refiere a que la amnistía de octubre de 1987 pasó la página de los asesinatos cometidos anteriormente por la policía. Los abusos en Guatemala u Honduras no se mencionan siquiera, y tampoco se dice nada del estado de las negociaciones en El Salvador y Guatemala, ni de por qué no se han «revitalizado».[154] En suma, se aplica un filtro a medida de las necesidades de la propaganda gubernamental, mediante el cual el terrorismo, las torturas y la represión que no sirven a los fines deseados pasan a ser insignificantes.

Gruson recoge también que no se pudo llegar a ningún acuerdo sobre la fecha de la siguiente cumbre centroamericana, por razones desconocidas. La prensa mexicana descubre el velo, al informar de que el gobierno salvadoreño había cancelado la cumbre, que debía celebrarse en su país, alegando «falta de capacidad económica». La cancelación, no obstante, «se produjo pocas horas después de la visita al país de Morris Busby, el embajador especial de los Estados Unidos para Centroamérica» y su reunión con el presidente Duarte. Los analistas citados atribuyen las supuestas dificultades a «un boicot de los EE.UU., en el cual Morris Busby tiene su parte de "responsabilidad" y que podría haber sido planeado para contrarrestar la negativa del presidente Cerezo a apoyar las acciones de guerra contra Nicaragua». Para el presidente Cerezo, «es de vital importancia que se pueda celebrar la cumbre presidencial, según los observadores, porque con ella intenta distraer la atención de la violencia que asola su país, así como incrementar el prestigio internacional

153. *Excelsior*, México, 31 de agosto de 1988; Central America NewsPak; AP, 15 de noviembre; se extractaron algunas palabras en el *BG* (16 de noviembre de 1988), donde se lee que había habido una marcha sin un propósito declarado.

154. Lindsey Gruson, *NYT*, 18 de noviembre de 1988.

que ha adquirido gracias a su política de neutralidad activa».[155] El modelo es el mismo que hemos ido viendo repetidamente: los Estados Unidos preparan iniciativas para dificultar los acuerdos políticos, Duarte las pone en práctica y los medios no dicen palabra.

La selección de los temas y el estilo del comentario ilustran sobre los mecanismos utilizados para inculcar en los lectores los hábitos del pensamiento correcto. Una de las técnicas más útiles consiste en citar, sin criticarlos, a líderes con buena reputación. Así se hizo en el verano de 1988, por ejemplo, cuando los medios y el gobierno procuraban revigorar el fervor antisandinista: Stephen Kinzer informó sobre una reunión de los Estados Unidos y sus cuatro aliados centroamericanos, indicando que «los cuatros países desaprueban el sandinismo y han urgido a Nicaragua para que liberalice su régimen, aunque no coinciden en cuál es la mejor manera de ejercer esta presión». Se cita al presidente Arias comentando que «desgraciadamente, Nicaragua nos ha fallado» y expresando «mi decepción, mi pena, mi tristeza», mientras analizaban los abusos cometidos por los sandinistas con sus colegas centroamericanos; sobre las prácticas de estos no ha dejado entrever decepción ni tristeza alguna, cuando menos según la versión de los medios estadounidenses. El presidente Cerezo añadió que se siente «muy apenado porque los sandinistas no acepten las reglas de la democracia». George Shultz, por su parte, denunció al «gobierno comunista de Nicaragua, así como a las guerrillas comunistas de El Salvador y Guatemala» en tanto que son una «fuerza destructiva y desestabilizadora de la región», ya que «el gobierno sandinista sigue dependiendo de las armas soviéticas y acumulando un arsenal militar muy superior a sus necesidades de defensa». Por último, «el Sr. Shultz y los ministros de Exteriores de Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica expresaron "su respeto por los principios de la paz, la democracia, la seguridad, la justicia social y el desarrollo económico"», según recoge Kinzer, sin comentarios adicionales ni repeluzno perceptible.[156]

En un artículo complementario desde Washington, se describe el consenso de los senadores, que aprobaron nuevas ayudas a la contra, así como la preocupación de los demócratas sobre si podría dañar «la imagen de su partido» el que los sandinistas reprimieran la oposición polí-

155. *Excelsior*, 19 y 21 de octubre de 1988; Central America NewsPak.
156. Kinzer, NYT, 2 de agosto de 1988.

tica o «desencadenaran una ofensiva militar sobre los contras»; sin embargo, parece ser que «la imagen del partido» no resulta dañada por su respaldo a las atrocidades continuadas de los estados terroristas. Pocos días más tarde, los senadores pacifistas aprobaron una ley que permitía el envío de nuevas ayudas militares si los sandinistas traicioneros atacaban a la contra dentro de Nicaragua o recibían más apoyo militar del que el Congreso estimaba razonable.[157] La agencia AP cita a John Kerry, senador liberal por Massachusetts, quien apadrina la «ayuda humanitaria a los rebeldes» con un voto a favor del envío reiterado de armamento si «continúa la afluencia de armamento soviético en Nicaragua, si los sandinistas violan los acuerdos de paz del año pasado o si el gobierno nicaragüense intenta "barrer" militarmente a las fuerzas rebeldes».[158]

Todas estas muestras cumplen las normas del periodismo competente. Las citas son, probablemente, fidedignas, al igual que las afirmaciones descriptivas. Pero detrás de la selección de los hechos y la manera de presentarlos, hay ciertos presupuestos incuestionados, como el siguiente: solo Nicaragua no está «liberalizándose», solo Nicaragua incumple los acuerdos de Esquipulas. Como la realidad de los hechos es otra, no son bienvenidos y se notician muy raramente. Nicaragua no tiene derecho a defenderse del ataque terrorista de las fuerzas delegadas de los Estados Unidos, radicadas en Honduras, ni siquiera dentro de su territorio; tampoco a recibir armamento del único proveedor tolerado por los EE.UU. En cambio, los aliados de los EE.UU. sí tienen derecho a rechazar las negociaciones con las guerrillas indígenas (una información habitualmente silenciada), así como a intentar destruirlas con armamento e instructores estadounidenses. Si se miran bien sus palabras, el presidente de Costa Rica —cuya democracia, controlada por los hombres de negocios, sobrevive gracias a la caridad de los EE.UU.— se preocupa muy poco de las atrocidades continuas en las «democracias inexpertas», o de la violación brutal de las mínimas condiciones democráticas y los acuerdos de paz que, en los medios, llevan su nombre; sin embargo, es el juez que ha de determinar el grado de cumplimiento de las resoluciones de Esquipulas y de la práctica democrática. El presidente de Guatemala, un país dominado por los militares y que continúa aterrorizando y asesinando a sus ciudadanos —aunque sea en una escala menor que en

157. Véase la nota 138.
158. Rasky, *NYT*, 2 de agosto de 1988; AP, *BG*, 3 de agosto de 1988.

años anteriores— está en la posición de condenar a sociedades mucho menos represivas y más abiertas, por su supuesta incapacidad de avanzar hacia la «democracia». Un funcionario de los EE.UU., responsable en gran medida de los ataques contra Nicaragua y la traumatización de El Salvador —y que ha apoyado las matanzas casi genocidas en Guatemala—, está, igualmente, en una posición que le permite decidir quién está «desestabilizando» Centroamérica y qué nivel de defensa es el más adecuado para un gobierno atacado con armas estadounidenses. La ayuda a las fuerzas delegadas de los EE.UU. se considera «humanitaria»; no importa que las convenciones internacionales, reafirmadas por el Tribunal Internacional —cuyas reglas son despreciadas por los EE.UU. e ignoradas por los medios—, sean muy explícitas y restrinjan el concepto de «ayuda humanitaria» al socorro prestado solo a los civiles, y a los civiles de ambos bandos, sin discriminación. Es de pura justicia que una «agencia neutral» como el Departamento de Estado administre esta «ayuda humanitaria»; y, si Nicaragua intenta aplicar cualquiera de los mecanismos de autodefensa que son habituales e indiscutibles en las democracias occidentales, es también de justicia que la CIA abastezca a sus fuerzas terroristas dentro del territorio nacional de Nicaragua (a no ser, claro está, que demuestren ser un «instrumento imperfecto» y, por tanto, contribuyan a «nuestra agonía nicaragüense»).

Podría imaginarse una manera alternativa de informar, que no parta de los presupuestos de la propaganda estadounidense, que cite otras fuentes (como el Tribunal Internacional, por ejemplo), que seleccione los hechos más relevantes a partir de otros criterios (los derechos y necesidades humanas, la democracia y la libertad, el imperio de la ley, y otros valores habituales). Pero pocas veces se verá tal cosa en los medios. El bombardeo incesante de material convenientemente seleccionado, junto con la ausencia casi total de razonamientos críticos y pasajes de análisis, es lo que inspira sus presupuestos de partida, conformando así la percepción de la audiencia al sistema general de la doctrina correcta, con mucha más efectividad que la que lograría un Ministerio de la Verdad. Entretanto, los medios pueden alegar que cumplen su labor con total franqueza (y lo hacen, aunque no en el sentido que pretenden). A lo largo de esta década espantosa, los que han violado más gravemente (y con diferencia) los derechos humanos han sido o bien creaciones directas de los Estados Unidos —la contra y el gobierno de El Salvador— o bien el gobierno de Guatemala, respaldado por los EE.UU. Si

la evidente relevancia de estos hechos ha sido analizada en los principales medios de comunicación, yo no he sabido darme cuenta. La naturaleza real de estos regímenes se desvela parcialmente, en ocasiones; pero no se extraen conclusiones sobre el papel central desarrollado por los EE.UU. en Centroamérica, sobre la cultura política de nuestro país o sobre los principios morales de unas clases privilegiadas que construyen y apoyan estas políticas.

En cambio, *sí* se extraen otras conclusiones, bien diferentes. Robert Pear, corresponsal diplomático del *New York Times*, relata las perspectivas de una «nueva política diplomática en Centroamérica» bajo la administración de George H. Bush. Esta esperanzadora nueva política del presidente Bush y su pragmático secretario de Estado, James Baker, se centrará en colaborar

> más estrechamente con el Congreso y las naciones de Latinoamérica, para elevar la presión política sobre los sandinistas, hasta que se convoquen elecciones en Nicaragua [aunque lo que las impedía era un edicto de los EE.UU.] y se restaure la libertad de expresión y otros derechos garantizados por los acuerdos de paz de la región.

Para asegurarse de que el lector comprende bien la línea del partido, Pear añade que «Nicaragua firmó esos acuerdos en 1987 y 1988, pero los EE.UU. y otras naciones entienden que los sandinistas han incumplido muchas de sus resoluciones». Nada que lleve a pensar que algo pueda fallar en los clientes de los Estados Unidos, nada que apunte a que la política de los propios EE.UU. pueda ser cuestionable.

Toda esta actuación teatral impresionaría, sin duda, a los soberanos de un estado totalitario. El sufrimiento que ha originado —y ha de originar todavía— es desmedido.

4

La democracia de mercado en el sistema neoliberal: realidad y doctrina*

Se me ha invitado a hablar aquí sobre algún aspecto relacionado con la libertad académica o humana, una invitación que ofrece muchas opciones. Me atendré a algunas muy sencillas

La libertad, cuando no hay oportunidades, es un regalo envenenado; y negarse a proporcionar estas oportunidades es un acto criminal. El destino de los más vulnerables es un indicador claro de la distancia que hay de aquí a lo que pueda merecer el nombre de «civilización»: mientras yo estoy disertando, morirán 1.000 niños de enfermedades fácilmente evitables, y al menos el doble de mujeres morirán o sufrirán graves secuelas tras el embarazo o el parto, debido a la falta de medicamentos y cuidados muy sencillos.[1] La UNICEF estima que, para superar estas tragedias y asegurar el acceso universal a los servicios sociales básicos, no haría falta más que la cuarta parte de los gastos militares anuales de los «países en desarrollo», o cerca del 10 por 100 del gasto militar anual de los Estados Unidos. Es frente a este panorama frente al que debemos desarrollar cualquier conversación seria sobre la libertad humana.

Se suele afirmar que tenemos a nuestro alcance la solución para todas estas graves enfermedades sociales, que hay razones para la esperanza. Se dice, por ejemplo, que en los últimos años hemos visto caer

* «Market democracy in a neoliberal order: doctrines and reality»; conferencia Davie pronunciada en la Universidad de Ciudad del Cabo (Sudáfrica), én mayo de 1997, y reproducida en *Pretexts*, 1, 1998 (Ciudad del Cabo), y en *Z Magazine*, set.-nov. 1997 (18 Millfield Street, Woods Hole, MA 02543, USA; www.Znet.org).

1. UNICEF, *The state of the world's children 1997*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1997; UNICEF, *The progress of nations 1996*, UNICEF House, Nueva York, 1996.

tiranías brutales, que hemos visto crecer prometedores avances científicos, que hay muchos otros argumentos para tener confianza en un futuro mejor. El discurso de los privilegiados está siempre marcado por la confianza y el triunfalismo: conocemos el camino que tenemos delante, y no hay otro camino. La idea fundamental, articulada con la suficiente fuerza y claridad, indica que «la victoria de los Estados Unidos en la guerra fría ha significado la victoria de un compuesto de principios políticos y económicos: democracia y mercado libre». Estos principios, se dice, son «la ola del futuro: un futuro del cual los EE.UU. son el modelo y a la vez tienen la llave». Acabo de citar al principal comentarista político del *New York Times*, pero es una imagen convencional, repetida con frecuencia en muchas regiones del mundo, y aceptada como esencialmente verdadera incluso por los críticos. También se le ha dado el nombre de «Doctrina Clinton», ya que este proclamaba que nuestra nueva misión es «consolidar el triunfo de la democracia y los mercados abiertos» que acababan de ganarse. Hay cierto margen para la disensión: en un extremo, están los «idealistas wilsonianos», que postulan una dedicación continuada a la misión tradicional de la benevolencia; en el otro, los «realistas» replican que podrían faltarnos los medios necesarios para emprender esas cruzadas de «meliorismo mundial»* y no deberíamos sacrificar nuestro propio interés a beneficio de otros.[2] Estos son los márgenes que limitan el camino hacia un mundo mejor.

La realidad, por mi parte, creo que es muy diferente. El ámbito actual del debate político tiene tan poca relevancia para la política real como sus numerosos antecedentes: ni los Estados Unidos ni ninguna otra potencia se han sentido guiados nunca por ese «meliorismo mundial». La democracia está siendo atacada en todo el mundo, sin excluir a los países más industrializados; cuando menos, la *democracia* bien entendida, la que ofrece oportunidades para que todos gobernemos nuestros propios asuntos, colectivos o privados. Algo similar sucede con los mercados, ya que los ataques contra la democracia y los mercados están

* *Wilsoniano*, en referencia a Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921; véase más adelante, así como el capítulo «Democracia y educación». El *meliorismo* (del latín *melior*, 'mejor') es una doctrina política y filosófica que afirma que el esfuerzo de los hombres puede mejorar el mundo. (*N. del t.*)

2. Thomas Friedman, *New York Times* (en adelante, NYT), 2 de junio de 1992; Antony Lake, Consejero de Seguridad Nacional, NYT, 26 de setiembre de 1993; David Fromkin, historiador, NYT *Book Review*, 4 de mayo de 1997, donde resume varios trabajos recientes.

relacionados entre sí: tienen su raíz en el poder de las grandes corporaciones, que son totalitarias en su estructura interna, están cada vez más interconectadas unas con otras y dependen cada vez más de estados poderosos, y que, en lo fundamental, no han de responder de nada ante el público. Su poder, que ya es inmenso, está creciendo aún más como resultado de una política social que «globaliza» el modelo estructural del Tercer Mundo, con sectores que concentran la riqueza y los privilegios y un incremento paralelo del «porcentaje de los que trabajarán sufriendo la dureza de la vida y, en secreto, suspirarán por una distribución más equitativa de sus bendiciones», como predijo James Madison, el principal teórico de la democracia estadounidense, hace doscientos años.[3] Estas opciones políticas son especialmente obvias en el modelo social angloestadounidense, pero se extienden por todo el mundo. Y no pueden ser atribuidas a «la decisión del mercado libre, en su sabiduría infinita pero misteriosa», al «barrido implacable de la "revolución del mercado"», al «grosero individualismo reaganita» ni a la «nueva ortodoxia» que «deja el campo libre al mercado».[4] He citado una serie de afirmaciones liberales, tirando a izquierdistas, y en algunos casos muy beligerantes; pero el análisis es similar a lo ancho del espectro político (más eufórico, quizá). La realidad, por el contrario, es que la intervención del estado desempeña hoy un papel esencial, al igual que en el pasado, y que las líneas básicas de la política tienen poco de innovador. Las versiones actuales reflejan que «el capital ha subyugado claramente a los trabajadores» desde hace ya más de quince años, en palabras de la prensa económica,[5] donde se suele articular con franqueza las ideas de la comunidad de los negocios, muy consciente de su clase y entregada a la guerra de clases.

Si las ideas que he mencionado son válidas, entonces el camino hacia un mundo más justo y más libre queda fuera del espacio establecido

3. Para una perspectiva general sobre la situación y sus orígenes históricos, véanse, entre otros, el estudio clásico de Frederic Clairmont: *The rise and fall of economic liberalism* (Asia Publishing House, 1960), reimpreso y actualizado recientemente (Third World Network, Penang y Goa, 1996); y Michael Chossudovsky, *The globalization of poverty*, Third World Network, Penang y Goa, 1997. Clairmont ha sido durante muchos años economista de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); Chossudovsky es profesor de Economía en la Universidad de Ottawa.

4. John Cassidy, *New Yorker*, 16 de octubre de 1995; Harvey Cox, *World Policy Review*, primavera de 1997; Martin Nolan, *Boston Globe* (*BG*), 5 de marzo de 1997; John Buell, *The Progressive*, marzo de 1997.

5. John Liscio, *Barron's*, 15 de abril de 1996.

por el poder y los privilegiados. Aunque no podré demostrar estas conclusiones aquí, confío en dejar entrever que son suficientemente creíbles para que las tomen en consideración; y confío en sugerir, así mismo, que la doctrina actual no podría sobrevivir si no fuera por su contribución a «regimentar y reglamentar el pensamiento público en todos y cada uno de sus puntos, al igual que el ejército regimenta y reglamenta a sus batallones», por decirlo en palabras de Edward Bernays —un respetado liberal entre Roosevelt y Kennedy—, en su manual clásico sobre la industria de las relaciones públicas, de la que fue fundador y representante señero.

Bernays partía de su experiencia en el Comité de Información Pública (la agencia estatal de propaganda del presidente Wilson). Bernays escribió que «fue, naturalmente, el sorprendente éxito de la propaganda durante la guerra lo que abrió los ojos de la minoría inteligente de todos los ámbitos de la vida a las posibilidades de regimentar la opinión pública»; su objetivo era adaptar la experiencia de partida a las necesidades de las «minorías inteligentes» —sobre todo, los grandes hombres de negocios—, cuya tarea es «manipular consciente y astutamente las costumbres sistemáticas de la opinión y las masas». Esta «maquinación del consenso» es la «esencia [misma] del proceso democrático», según postuló Bernays poco después de ser homenajeado por la Asociación Sicológica Estadounidense en 1949. Desde entonces, cada vez se ha reconocido más abiertamente la importancia de «controlar la opinión pública», mientras la lucha popular lograba extender las modalidades de la democracia, dando origen a lo que las élites liberales denominan «crisis de la democracia» (por ejemplo, cuando una población habitualmente apática y pasiva se organiza e intenta ingresar en el circo político para defender sus propios intereses y exigencias, amenazando con ello la libertad y el orden). Según lo explicó Bernays, con «el sufragio universal y la educación generalizada ... incluso los burgueses empezaron a sentir miedo ante el pueblo, porque las masas prometían convertirse en soberanas»; por suerte, esta tendencia se ha invertido —o en eso se confía— a medida que se diseñaban y aplicaban los nuevos métodos «de modelar la opinión de las masas».[6]

6. Bernays, *Propaganda*, Liveright, Nueva York, 1928, caps. 1-2. Véase M. P. Crozier, S. J. Huntington y J. Watanuki, *The crisis of democracy: report on the governability of democracies to the Trilateral Commission*, New York Univ. Press, Nueva York, 1975.

Es llamativo que, en las dos democracias punteras del momento, se extendiera la misma conciencia de la necesidad de «aplicar la lección» de los tan exitosos sistemas de propaganda de la primera guerra mundial «para la organización de la guerra política», según lo expresó el presidente del Partido Conservador británico, hace más de setenta años. Por la misma época, los liberales wilsonianos sacaron las mismas conclusiones, incluyendo a intelectuales públicos y figuras señeras de la naciente profesión de las ciencias políticas. En otro rincón de la civilización occidental, Adolf Hitler juró que Alemania no volvería a ser derrotada en la guerra de propaganda y diseñó su propia manera de aplicar la lección de la propaganda angloestadounidense para la guerra política interior.[7] Entretanto, el mundo de los negocios advertía del «peligro que corren los industriales» con «el poder político recuperado por las masas», así como del imperativo de proseguir hasta vencer «la guerra eterna por el control del pensamiento humano» y de «adoctrinar a los ciudadanos con el cuento capitalista» hasta que «sean capaces de reproducirlo con suficiente fidelidad», y otras muchas afirmaciones parecidas, en un aluvión impresionante, que se acompañó de otro tipo de esfuerzos aún mayores. Sin duda, es uno de los capítulos centrales de la historia moderna.[8]

Para descubrir el significado real de los «principios políticos y económicos» que se supone representan «la ola del futuro», hace falta, lógicamente, dejar atrás el preciosismo retórico y los pronunciamientos públicos y analizar la práctica real y nuestros archivos documentales. El escrutinio de casos particulares es el camino más productivo, pero hay

7. Richard Cockett, «The party, publicity, and the media», en Anthony Seldon y Stuart Ball, eds., *Conservative century: the conservative party since 1900*, Oxford Univ. Press, Oxford, 1994; Harold Lasswell, «Propaganda», *Encyclopedia of the social sciences*, vol. 12, Macmillan, Nueva York, 1933. Para las citas y el análisis, véase mi conferencia Huizinga «Intellectuals and the state», reimpresa en *Towards a new Cold War*, Pantheon, Nueva York, 1982 [hay trad. cast.: *La segunda guerra fría*, Crítica, Barcelona, 1984]. Además, por fin se han recopilado algunos de los trabajos de Alex Carey, pionero en este campo, en su *Taking the risk out of democracy*, University of New South Wales Press, Sydney, 1995; University of Illinois Press, Urbana, 1997.

8. Ibídem; Elisabeth Fones-Wolf, *Selling free enterprise: the business assault on labor and liberalism, 1945-1960*, University of Illinois Press, Urbana, 1995. Véase también Stuart Ewen, *PR!: a social history of spin*, Basic Books, Nueva York, 1996. En cuanto al contexto general, véanse el ya citado «Intellectuals and the state» y «Force and opinion», reimpreso en *Deterring democracy*, Verso, Londres, 1991 [«Fuerza y opinión», en *El miedo a la democracia*, Crítica (Biblioteca de bolsillo, 63), Barcelona, 2001, págs. 334-401; trad. de Mireia Carol].

que escogerlos bien, por tal de trasmitir la imagen más correcta. Hay varias orientaciones lógicas: podemos, por ejemplo, tomar los casos propuestos por los propios defensores de la doctrina como su «punto fuerte»; o podemos, igualmente, investigar las situaciones donde la influencia ha sido mayor y la interferencia menor, de forma que se vean los principios en su forma operativa pura. Así, si queremos determinar qué sentido tienen para el Kremlin la «democracia» o los «derechos humanos», prestaremos poca atención a las denuncias solemnes de *Pravda* sobre el racismo en los Estados Unidos o sobre el terrorismo estatal en los regímenes clientes de Washington, y menos todavía a sus protestas públicas de nobles motivos; en cambio, será mucho más productivo analizar la realidad de las «democracias populares» de la Europa del Este. Es una cuestión básica, que se aplica igualmente a los que «son el modelo y a la vez tienen la llave». Por tanto, la zona de examen tiene que ser Latinoamérica, y especialmente la región de Centroamérica y el Caribe. Aquí Washington se ha enfrentado a pocos enemigos externos durante cerca de un siglo, por lo cual, al analizar el estado de la región y las causas de esa situación, los principios rectores de la política —y del actual «consenso de Washington», de corte neoliberal— se ponen de manifiesto de la forma más clara.

Curiosamente, es un ejercicio poco habitual y, al que lo propone, suelen tacharlo de izquierdista (o algo peor). Lo dejo como un «ejercicio para los lectores», añadiendo, tan solo, que enseña lecciones útiles sobre esos principios políticos y económicos que están llamados a ser «la ola del futuro».

La «cruzada por la democracia» de Washington (como se la suele llamar) fue prolongada con un fervor especial durante los años de Reagan, con Latinoamérica como territorio preferencial. Los resultados suelen presentarse como una muestra de primer orden de cómo los Estados Unidos se han convertido en «inspiradores del triunfo de la democracia en nuestro tiempo», por citar un editorial del periódico intelectual puntero del liberalismo estadounidense.[9] Un estudio académico muy reciente describe «el renacimiento de la democracia en Latinoamérica» como impresionante, aunque no libre de problemas; las «barreras para su implantación» siguen siendo «formidables», pero quizá puedan ser supera-

9. Editorial, *New Republic*, 19 de marzo de 1990.

das mediante una integración más estrecha con los EE.UU.[10] Su autor, Sanford Lakoff, destaca el «histórico Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC)» como un instrumento potencial de democratización. Los países de la región tradicionalmente más influida por los EE.UU., afirma, están avanzando hacia la democracia, tras haber «sobrevivido a la intervención militar» y a una «cruel guerra civil».

Empecemos examinando de cerca los casos recientes; es lo más lógico, dada la apabullante influencia estadounidense, y son, además, los ejemplos típicos de los logros y las promesas de la «misión de los Estados Unidos».

Las principales «barreras a la implantación» de la democracia, según apunta Lakoff, son los «intereses personales» que procuran defender los «mercados nacionales»; esto es, evitar que las corporaciones extranjeras (mayoritariamente estadounidenses) acrecienten su control sobre la sociedad. Hay que entender, parece, que la democracia se asentará en esos países cuando las decisiones significativas pasen a ser tomadas cada vez más por tiranías privadas que no rinden cuentas ante nadie y se radican mayoritariamente en el extranjero. Entretanto, la arena pública se encoge a medida que el estado «se minimiza», de acuerdo con los «principios políticos y económicos» triunfantes. Un estudio del Banco Mundial indica que la nueva ortodoxia representa «dar un giro radical desde un ideal de política pluralista y participatoria hacia uno autoritario y tecnocrático», hacia un ideal muy cercano al pensamiento liberal y progresista del siglo XX y, en otra variante, cercano igualmente al modelo leninista (puesto que ambos son más similares de lo que se suele reconocer).[11]

Si prestamos atención al razonamiento implícito, podremos comprender mejor a qué se refieren los conceptos de democracia y mercado libre en su sentido operativo. Lakoff no examina «el renacimiento de la democracia» en Latinoamérica, pero cita una fuente académica que incluye una contribución a la cruzada de Washington en los años

10. Sanford Lakoff, *Democracy: history, theory, practice*, Westview, Boulder, 1996, págs. 262 y ss.

11. J. Toye, J. Harrigan y P. Mosley, *Aid and power*, vol. 1, Routledge, Londres, 1991, pág. 16, citado por John Mihevc, *The market tells them so*, Zed, Londres, 1995, pág. 53. Sobre la comparación con Lenin, véase mis ensayos citados en la nota 8 y la introducción a mi *For reasons of State*, Pantheon, Nueva York, 1973 [trad. cast.: *Por razones de estado*, Ariel, Barcelona, 1975].

ochenta. Su autor es Thomas Carothers, quien combina la perspectiva académica con la del «copartícipe», pues había trabajado en uno de los programas de «extensión democrática» del Departamento de Estado de Reagan.[12] Carothers considera que este «impulso de promover la democracia» era «sincero», pero fracasó en gran medida. De hecho, el fracaso fue sistemático: allí donde la influencia de Washington era menor (es decir, en Sudamérica) hubo progresos reales hacia un sistema democrático, al que la administración de Reagan se estuvo oponiendo hasta verse superada por estos avances, de los cuales decidió entonces arrogarse el mérito. En cambio, donde la influencia de Washington se dejaba sentir con más fuerza, hubo menos progresos y, donde los hubo, la intervención de los EE.UU. fue marginal o incluso contraria a ellos. La conclusión general de Carothers es que los Estados Unidos intentaron mantener «el orden básico de ... sociedades muy antidemocráticas» y evitar «la trasformación de base populista», buscando, «inevitablemente, solo formas jerárquicas y limitadas de trasformación democrática, para que no se corriera el riesgo de invertir las estructuras de poder tradicionales, con las que los EE.UU. han estado aliados desde hace mucho tiempo».

Esta última frase requiere una pequeña apostilla. El término de *Estados Unidos* se usa convencionalmente para referirse no tanto al país, como a sus estructuras de poder; acompaña el término de *interés nacional*, que es concretamente el interés de esos grupos de poder y se corresponde bastante poco con las necesidades de la población en general. Hay que entender, por tanto, que Washington buscaba imponer formas jerárquicas de democracia que no subvirtieran las estructuras de poder con las cuales han estado aliadas, tradicionalmente, las estructuras de poder de los EE.UU. No es un hecho sorprendente, ni nada que rompa con la historia.

Para apreciar la significación de todos estos hechos, es necesario examinar más en detalle la naturaleza de las democracias parlamentarias. Los Estados Unidos son el ejemplo paradigmático, no solo por su poder, sino también por sus instituciones democráticas, tan arraigadas y estables. Además, los Estados Unidos eran casi el modelo perfecto y

12. Carothers, «The Reagan years», en A. Lowenthal, ed., *Exporting democracy*, John Hopkins Univ. Press, Baltimore, 1991. Véase igualmente su *In the name of democracy*, Univ. of California Press, Berkeley, 1991.

«pueden sentirse satisfechos a placer», en palabras de Thomas Paine (1776), ya que «escriben sobre una hoja en blanco».[13] En efecto, las sociedades indígenas fueron exterminadas casi del todo; hay pocos restos de las anteriores estructuras europeas (lo que, a su vez, es una de las razones de la relativa debilidad del contrato social y los sistemas asistenciales, que con frecuencia hundían sus raíces en instituciones precapitalistas); y, hasta un extremo inhabitual, el orden sociopolítico fue cuidadosamente diseñado. El estudio de la historia no permite la construcción de experimentos, pero los Estados Unidos son lo más cercano al «caso ideal» de estado capitalista democrático que se pueda hallar.

Ahondando en la cuestión, el principal forjador del sistema constitucional fue el ya citado James Madison, un teórico político lúcido y habilidoso, cuyas ideas terminaron por prevalecer. En los debates sobre la Constitución, Madison señaló que en Inglaterra, si las elecciones «estuvieran abiertas a todo tipo de gentes, la propiedad de los terratenientes sería insegura; se impondría en seguida una nueva ley agraria» que daría la tierra a los desposeídos. El sistema que estaban diseñando entre todos debía impedir tal injusticia y «asegurar el interés permanente del país», que son los derechos de propiedad. El gobierno tiene la responsabilidad, según Madison, «de proteger a la minoría opulenta frente a la mayoría». Para conseguir este objetivo, el poder político debe estar en manos de «la riqueza de la nación», esto es, de hombres que «crean suficientemente» en el derecho de propiedad y sean «un seguro depositario del poder sobre ellos»; el resto, en cambio, deben ser preteridos y malquistados entre sí, ofreciéndoles solo una participación limitada en la arena política. Los estudiosos de la obra de Madison suelen estar de acuerdo en que «la Constitución era, intrínsecamente, un documento aristocrático concebido para refrenar la tendencia democrática de la época», entregando el poder a la «clase selecta» de gente y excluyendo «del ejercicio del poder político a los que no eran ricos, eminentes o de buena cuna».[14]

13. Citado por Gordon Wood, *The radicalism of the American Revolution*, Vintage, Nueva York, 1991, pág. 190.

14. Lance Banning, el investigador que aboga de forma más destacada por la interpretación libertaria de las ideas de Madison, citando a Gordon Wood. Para una discusión más amplia y las referencias bibliográficas, véase mi *Powers and prospects*, South End, Boston, 1996, cap. 5, así como «Consent without consent», *Cleveland State Law Review*, 44/1 (1996).

Estas conclusiones suelen ser matizadas con la observación de que Madison —y el sistema constitucional en su conjunto— querían equilibrar los derechos de las personas y los derechos de la propiedad. Pero se trata de una formulación interesada, porque la propiedad no tiene derechos. Tanto en la teoría como en la práctica, la locución «derechos de propiedad» se refiere al derecho *a la* propiedad (típicamente, a las posesiones materiales), un derecho que debe ser privilegiado por encima de todos los demás y que se diferencia crucialmente de los otros: cuando una persona posee ese derecho, el resto no lo posee. Después de poner los hechos sobre la mesa, podremos apreciar mejor la fuerza de la doctrina que indica que «el país ha de ser gobernado por quienes lo poseen», según «una de las máximas favoritas» de John Jay, un influyente colaborador de Madison.[15]

Algunos historiadores aducen que estos principios originarios perdieron su fuerza cuando se conquistó y colonizó el territorio nacional y se expulsó o exterminó a su población nativa. En cualquier caso, independientemente de cómo valore cada cual esos años, a finales del siglo XIX la doctrina desarrolló una forma nueva y mucho más opresiva. Cuando Madison hablaba de los «derechos de las personas», se refería a los seres humanos; pero con el crecimiento de la economía industrial y el ascenso de las corporaciones empresariales se dio un significado nuevo al término. En un documento oficial de nuestros días, «"persona" se define extensivamente e incluye a individuos, sucursales, sociedades colectivas, asociados y asociaciones, el estado, *trusts*, corporaciones empresariales y cualquier otro tipo de organización (organizada o no según las leyes de alguno de los estados), así como a las entidades gubernamentales»,[16] con una concepción que, sin duda, hubiera chocado a Madison y al resto de intelectuales cuyas raíces culturales pertenecen a la Ilustración y al liberalismo clásico, de espíritu pre– y anticapitalista.

Esta trasformación radical de los conceptos de «derechos humanos» y «democracia» no fue impuesta por cambios legislativos, sino más bien por decisiones de jueces y comentarios de intelectuales. Se otorgó a las corporaciones —que, anteriormente, habían sido consideradas entidades artificiales, sin derechos propios— los derechos de las personas, o in-

15. Lo constata así su biógrafo, Frank Monaghan, en *John Jay*, Bobbs-Merrill, 1935, pág. 323.

16. *Survey of Current Business*, Departamento de Comercio de los EE.UU., Washington D.C., 76/12 (diciembre de 1996).

cluso más, ya que son «personas inmortales» y «personas» de extraordinario poder y capacidad económica. Además, dejaron de estar vinculadas a los propósitos específicos formulados en los estatutos locales, por lo que podían actuar con libertad (y muy pocas restricciones). El trasfondo intelectual que permite conceder derechos tan extraordinarios a las «entidades legales colectivas» es el mismo que subyace al bolchevismo y al fascismo: la idea neohegeliana de que las entidades orgánicas tienen derechos adicionales a los de las personas. Los juristas conservadores se opusieron a estas innovaciones, al reconocer que socavaban la concepción tradicional de que los derechos eran inherentes a las personas, y que minaban igualmente los principios del mercado.[17] Pero a la postre se institucionalizaron las nuevas formas de gobierno autoritario y, junto con ellas, la legitimación del trabajo por jornal (que, en la línea central del pensamiento estadounidense decimonónico se reputaba de poco mejor que la esclavitud, no solo por parte del creciente movimiento sindical, sino también por Abraham Lincoln, el Partido Republicano y los medios de comunicación de la clase dirigente).[18]

Estos temas tienen fuertes implicaciones para la comprensión real de la democracia de mercado. En este espacio, sin embargo, solo puedo mencionarlos. El resultado material e ideológico ayuda a explicar el principio de que la «democracia», en el extranjero, debe reflejar el modelo que se busca imponer en casa: formas de control «jerárquico», cuyo público se limite al rol de «espectador» y no intervenga en la escena donde se toman las decisiones (que, según la corriente principal de la teoría democrática moderna, debe excluir a esos «observadores externos, necios y metijones»). Casualmente, estoy citando los ensayos de Walter Lippmann sobre la democracia, uno de los intelectuales y periodistas estadounidenses más respetados del siglo XX.[19] Pero las ideas básicas son un estándar muy arraigado en la tradición constitucional, aunque seria-

17. Morton Horwitz, *The transformation of American law, 1870-1960*, Harvard Univ. Press, Cambridge (MA), 1992, cap. 3. Véase también Charles Sellers, *The market revolution*, Oxford Univ. Press, Oxford, 1991.

18. Véase Michael Sandel, *Democracy's discontent*, Harvard Univ. Press, Cambridge (MA), cap. 6. Su interpretación —en términos de republicanismo y virtud cívica— es demasiado reductiva, en mi opinión, pues pasa por alto sus profundas raíces ilustradas, y aun anteriores. Para algunos análisis, véase entre otros mi *Problems of knowledge and freedom*, Pantheon, Nueva York, 1971, cap. 1; los diversos ensayos recogidos en James Peck, ed., *The Chomsky reader*, Pantheon, Nueva York, 1987; y *Powers and prospects*, cap. 4.

19. Véase Carey, *Taking the risk*, y Chomsky, «Fuerza y opinión».

mente modificado en esta nueva era, la de las entidades legales corporativas.

Volvamos ya al «triunfo de la democracia» bajo la guía de los Estados Unidos: ni Lakoff ni Carothers se preguntan cómo lo hacía Washington para mantener las estructuras tradicionales del poder en las sociedades antidemocráticas. El tema del que se ocupan no tiene nada que ver con las guerras terroristas que han dejado decenas de miles de cadáveres torturados y mutilados, millones de refugiados y una devastación tal vez imposible de recuperar; guerras especialmente dirigidas contra la Iglesia, que se convirtió en un enemigo al adoptar «la opción preferencial por los pobres», procurando aliviar el sufrimiento de los pueblos y ayudarlos a conseguir cierto grado de justicia y derechos democráticos. Es más que simbólico que la espantosa década de 1980 se abriera con el asesinato de un arzobispo que había llegado a ser «la voz de los sin voz» y se cerrara con el asesinato de seis importantes intelectuales jesuitas que habían escogido el mismo camino; y a manos, en ambos casos, de fuerzas terroristas armadas y entrenadas por los vencedores de la «cruzada por la democracia». Pero aún debemos fijarnos atentamente en un hecho adicional: estos intelectuales centroamericanos, estos disidentes señeros, fueron asesinados por dos veces: fueron asesinados y además silenciados. Sus palabras, incluso su misma existencia, son casi desconocidas en los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede con los disidentes de los países enemigos, que son honrados y admirados. Es otro universal de la cultura, imagino.

Estas cuestiones no entran en la historia explicada por los vencedores. El estudio de Lakoff adopta una actitud corriente: lo único que hace constar es la referencia a la «intervención militar» y la «guerra civil», sin que se identifique ninguna causa externa. Pero seguro que no dejarán de lado las causas los que quieran comprender mejor los principios que han de conformar nuestro futuro, si las actuales estructuras de poder imponen su camino.

La descripción que Lakoff hace de Nicaragua es, de nuevo, la más corriente y significativa: «se terminó una guerra civil, a la que siguieron unas elecciones democráticas, y se intenta, con dificultades, construir una sociedad más próspera y autónoma». En el mundo real, sin embargo, la superpotencia que estaba agrediendo a Nicaragua reforzó su asalto después de las primeras elecciones democráticas del país: las de 1984, supervisadas muy de cerca y reconocidas como legítimas por la Asocia-

ción Profesional de Expertos Latinoamericanos (LASA) y las delegaciones de los parlamentos irlandés y británico, entre otras, como una delegación del gobierno holandés, particularmente hostil a los sandinistas y afín a las atrocidades reaganitas; o como José Figueres, de Costa Rica, otro observador crítico —y una figura esencial de la democracia centroamericana—, que consideró legítimas las votaciones en este «país invadido» y apeló a Washington para que permitiese a los sandinistas «terminar lo que habían comenzado en paz, [pues] se lo merecen». Los EE.UU., sin embargo, se opusieron a la realización de las elecciones e intentaron sabotearlas, inquietos ante la idea de que una votación democrática pudiera interferir en su guerra terrorista. Pero la inquietud se calmó gracias a la buena conducta del sistema doctrinal, que impidió con notable eficacia el acceso a la información y, cerrándose sobre sí mismo, adoptó la línea de la propaganda estatal, según la cual las elecciones eran un fraude sin valor.[20]

También se pasa por alto el hecho de que, cuando se aproximaba la fecha prevista para las siguientes elecciones,[21] Washington se esforzó por dejar claro que, si los resultados no eran los correctos, Nicaragua continuaría teniendo que soportar la guerra económica —ilegal— y el «uso antilegal de la fuerza», a pesar de que el Tribunal Internacional lo había condenado y había exigido su cese (sin éxito, naturalmente). Esta vez el resultado fue aceptable y fue aplaudido en los EE.UU. con una explosión de alegría muy ilustrativa.[22]

20. Para más detalles, véase mi *Turning the tide*, South End, Boston, 1985, cap. 11 (y las fuentes allí indicadas), que incluye largas citas de Figueres, cuya exclusión de los medios, sin duda, requirió una dedicación considerable. Véanse también mis *Letters from Lexington*, Common Courage, Monroe (NH), cap. 6, para el registro, incluyendo la extensa necrología del corresponsal en Centroamérica del *New York Times* y el efusivo editorial que la acompañó; con ello se logró ocultar completamente, de nuevo, sus ideas sobre la «cruzada por la democracia» que había emprendido Washington. En cuanto a la cobertura mediática de las elecciones en Nicaragua y El Salvador, véase Edward Herman y Noam Chomsky, *Manufacturing consent*, Pantheon, Nueva York, 1988, cap. 3 [hay trad. cast.: *Los guardianes de la libertad*, Crítica (Biblioteca de Bolsillo, 45), Barcelona, 2000]. Incluso el propio Carothers, que suele ser respetuoso con los hechos, ha escrito que los sandinistas «no quisieron aceptar las elecciones» hasta 1990.

21. Otra manipulación habitual es que las elecciones, planeadas desde tiempo atrás, solo se celebraron gracias a la presión económica y militar de los EE.UU.; esta, en consecuencia, quedaría justificada retroactivamente.

22. Sobre las elecciones y la reacción en Latinoamérica y los EE.UU., incluyendo las fuentes para lo que sigue, véase «The decline of the democratic ideal» (capítulo 10 de la edición inglesa de *Deterring democracy*).

En la margen de la independencia crítica, el columnista Anthony Lewis, del *New York Times*, se vio superado por la admiración ante el «experimento de paz y democracia» que había realizado Washington, y que demostraba que «vivimos en una época romántica». Los métodos de este experimento pacífico, sin embargo, son bien conocidos. La revista *Time*, que se unió a la fiesta por la «explosión democrática» en Nicaragua, los expuso sin ambages: «arruinar la economía y prolongar la guerra —larga y mortífera— de nuestros delegados, hasta que los nativos, exhaustos, terminen ellos mismos con el gobierno que no queremos»; todo ello, con un coste «mínimo» para nosotros y dejando a nuestra víctima «con los puentes derruidos, las centrales eléctricas saboteadas y las granjas arruinadas», por lo que el candidato de Washington tiene en la mano «un eslogan invencible», el de acabar con «el empobrecimiento del pueblo de Nicaragua», por no hablar —mejor así— del terrorismo continuado. Desde luego, el coste no fue precisamente «mínimo» para los nicaragüenses: Carothers constata que el peaje «en términos per cápita, fue significativamente superior al número de víctimas de la guerra civil estadounidense y de todas las guerras del siglo XX *juntas*».[23] A la postre, se produjo la «Victoria de los EE.UU. y su juego limpio», según exultaba un titular del *New York Times*, que dejaba a todos los americanos «Unidos por la alegría» (al estilo, tal vez, de Albania o Corea del Norte).

Los métodos de esta «época romántica» —y el modo de reaccionar de los círculos ilustrados— arrojan luz sobre los ya referidos principios democráticos triunfantes. También ilustran sobre por qué hay tantas «dificultades» para «construir una sociedad más próspera y autónoma» en Nicaragua. Es cierto que nuestro intento progresa y está, incluso, teniendo cierto éxito para una minoría privilegiada, mientras la mayoría de la población se enfrenta con la ruina social y económica, como sucede habitualmente en las dependencias occidentales.[24] Nótese que justamente este ejemplo movió a los editores a elogiarse a sí mismos como «inspiración para el triunfo de la democracia en nuestro tiempo», uniéndose así al coro de entusiastas.

23. En cursiva en el original de Carothers.

24. Para más detalles, véanse, entre otros, Richard Garfield, «Desocializing health care in a developing country», *Journal of the American Medical Association*, 270/8 (25 de agosto de 1993), y mi *World orders, old and new*, Columbia Univ. Press, Nueva York, 1994, págs. 131 y ss. [Hay trad. cast.: *El nuevo orden mundial (y el viejo)*, Crítica, Barcelona, 1996.]

Podemos aprender aún más sobre los principios victoriosos si recordamos que estas mismas figuras, representativas de la vida intelectual de los liberales, habían instado al gobierno de Washington a que potenciara su guerra sin compasión, prestando apoyo militar a «los fascistas latinos ... sin tener en cuenta el número de muertos», ya que «existen prioridades americanas más elevadas que los derechos humanos en El Salvador». Abundando en la cuestión, el editor Michael Kinsley (que, en la corriente principal de los comentarios de prensa y debates televisivos, representaba a la «izquierda») nos amonestaba por criticar irreflexivamente la política oficial de Washington —esto es, atacar objetivos civiles indefensos—; hay que reconocer que estas operaciones de terrorismo internacional causan «un gran sufrimiento entre la población civil», pero pueden ser «perfectamente legítimas» si el «análisis de costes y beneficios» demuestra que «la cantidad de sangre y miseria que se va a verter» genera «democracia» (según la definen los gobernantes del mundo). La opinión ilustrada insiste en que el terrorismo no es bueno por sí mismo, sino que debe someterse a un criterio pragmático. Kinsley comentó más tarde que se habían logrado los fines deseados: «empobrecer al pueblo de Nicaragua era el objetivo último de la guerra de los contras, de la política paralela de embargo económico y del veto adicional a cualquier préstamo internacional para el desarrollo», con lo cual se «arruin[ó] su economía» y se creó «el desastre económico que, con toda probabilidad, fue el gran gancho electoral para la victoria de la oposición»; luego se unió a la celebración de bienvenida al «triunfo de la democracia» en las «elecciones libres» de 1990.[25]

Los países cliente disfrutan de privilegios similares. Así, al comentar un nuevo ataque de Israel contra el Líbano, el director de internacional del *Boston Globe*, H. D. S. Greenway —que había trabajado como reportero gráfico durante la primera invasión israelí, quince años antes— postuló que

> si bombardear pueblos libaneses, aun con el coste de vidas humanas, y desplazar hacia el norte a los refugiados civiles, puede servir para asegurar la frontera de Israel, debilitar a Hezbollah y promover la paz, yo diría que

25. Kinsley, *Wall Street Journal* (WSJ), 26 de marzo de 1987; *New Republic*, 19 de marzo de 1990. Para ampliar la información sobre estos ejemplos y otros similares, véanse *La cultura del terrorismo*, cap. 5; «The decline of the democratic ideal»; y «Fuerza y opinión».

adelante con ello, como dirían también muchos árabes e israelíes. Pero la historia no ha sido amable con las aventuras de Israel en el Líbano. Han solucionado muy pocas cosas y, en cambio, han creado casi siempre más problemas.

Si lo valoramos con el criterio pragmático, entonces el asesinato de multitud de civiles, la expulsión de cientos de miles de refugiados y la devastación del sur del Líbano resulta ser ... una estrategia de valor incierto.[26]

Imagino que no sería muy difícil dar con ejemplos parecidos aquí donde nos encontramos hoy, relativos al pasado reciente de Sudáfrica. Téngase en cuenta, aparte, que he analizado solo el sector disidente dentro de la opinión tolerable, lo que se suele llamar la «izquierda», un factor que revela mucho sobre los principios triunfantes y la cultura intelectual que los acoge.

También es muy reveladora la reacción que despertaron las acusaciones periódicas de la administración de Reagan sobre la intención de Nicaragua de adquirir reactores soviéticos (los Estados Unidos habían impedido que los compraran a sus aliados). Los políticos más agresivos exigieron el bombardeo inmediato de Nicaragua; los pacifistas replicaron que primero era necesario verificar las incriminaciones, pero que, de ser ciertas, tendríamos que bombardearla. Cualquier observador juicioso, en cambio, podía entender rápidamente por qué necesitaba Nicaragua interceptores a reacción: para defender su territorio de los vuelos nocturnos con los que la CIA abastecía a sus fuerzas delegadas y les proporcionaba información actualizada, de modo que pudieran seguir las instrucciones de atacar «objetivos blandos», poco defendidos. La presuposición implícita es que ningún país tiene derecho a defender a su población civil del ataque estadounidense. La doctrina —que nadie discutió— es muy interesante. Sería también interesante buscar equivalentes en otras partes del mundo.

La guerra terrorista de Washington se emprendió con el pretexto de la autodefensa, la justificación oficial estándar de cualquier acto monstruoso (como el propio holocausto nazi). De hecho, Ronald Reagan, después de considerar «que la política y las acciones del gobierno de Nicaragua constituyen una amenaza, inusual y extraordinaria, para la seguri-

26. Greenway, BG, 29 de julio de 1993.

dad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», declaró —sin despertar el chacoteo general— «la emergencia nacional para enfrentarse a la amenaza».[27] Otros no lo veían de la misma manera. Como respuesta a los intentos de John F. Kennedy por organizar una actuación colectiva en contra de Cuba, en 1961, un diplomático mexicano explicó que su país no se uniría a ella porque «si declaramos públicamente que Cuba es una amenaza para nuestra seguridad, cuarenta millones de mexicanos se morirán de risa».[28] La opinión ilustrada de Occidente se enfrentó con menos frivolidad a aquella amenaza sin parangón que hacía temer por nuestra seguridad nacional. Claro está que, aplicando la misma lógica, la Unión Soviética tenía todo el derecho a agredir a Dinamarca —una amenaza considerablemente más grande— y, sin duda alguna, también a Polonia y Hungría, cuando dieron el paso previo a la independencia. El hecho de que acusaciones como las referidas se impongan sistemáticamente es, de nuevo, una muestra definitoria de la cultura intelectual de los vencedores, y otra indicación de lo que nos espera.

La naturaleza de los pretextos de la guerra fría se hace muy evidente en el caso de Cuba, e igualmente los principios que operan en la práctica. Estos se han podido ver con claridad en las pasadas semanas, cuando Washington se negó a aceptar la sentencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de la Unión Europea, que había recusado el embargo; un embargo único por su severidad, que ya había sido condenado —como violación de la ley internacional— por la Organización de Estados Americanos (OEA), y de forma repetida por las Naciones Unidas, por mayorías siempre aplastantes; aun así, el embargo ha sido ampliado con leyes que penalizan severamente a las terceras partes que desobedezcan el edicto de Washington, lo cual significa aún otra violación más de la ley internacional y los acuerdos de comercio. La respuesta oficial de la administración de Clinton (trascrita en el *Congressional Record*) fue que «Europa pretende desafiar "tres décadas de la política estadounidense sobre Cuba, que se inició con la administración de Kennedy" y que busca, como único objetivo, forzar un cambio de gobierno en La Habana».[29] La administración declaró también que la

27. *NYT*, 2 de mayo de 1985.

28. Ruth Leacock, *Requiem for revolution*, Kent State Univ. Press, Kent (OH), 1990, pág. 33.

29. David Sanger, «U.S. won't offer testimony on Cuba embargo», *NYT*, 21 de febrero de 1997. Según la terminología oficial de hoy en día, «la política bipartidista que se sigue

OMC «no tiene competencia para decidir» sobre un asunto de seguridad nacional y tampoco puede «obligar a los EE.UU. a cambiar sus leyes».

Exactamente en el mismo momento, sin embargo, Washington y los medios aplaudían el acuerdo de telecomunicaciones de la OMC como «un nuevo instrumento de política exterior» que fuerza a otros países a cambiar sus leyes y prácticas, y ajustarlas a las exigencias de Washington (casualmente, cediendo sus sistemas de comunicación a las megacorporaciones —sobre todo estadounidenses—, con lo que se asesta un nuevo golpe importante a la democracia).[30] Ahora bien, la OMC no tiene autoridad para obligar a los EE.UU. a cambiar sus leyes, al igual que el Tribunal Internacional carece de autoridad para constreñir a los EE.UU. a abandonar el terrorismo internacional y la guerra económica ilegal. El mercado libre y la ley internacional son lo mismo que la democracia: ideas guapas, pero que deben juzgarse por su resultado, y no como procedimiento.

El razonamiento aplicado a la OMC recuerda los motivos expresados oficialmente por los Estados Unidos para rechazar la sentencia del Tribunal Internacional a favor de las acusaciones de Nicaragua. En ambos casos, los EE.UU. recusaron la jurisdicción ante la perspectiva probable de que fallaran en su contra; es de lógica, entonces, considerar que son foros inadecuados. El consejero legal del Departamento de Estado indicó que, cuando los EE.UU. aceptaron la jurisdicción del Tribunal Internacional (en la década de 1940), la mayoría de los miembros de la ONU «se alineaban con los EE.UU. y compartían sus ideas sobre el orden mundial». Ahora bien, hoy en día «muchos de estos países no participan de nuestro punto de vista sobre la concepción original de los estatutos de las Naciones Unidas», por lo que «esta mayoría contradice con frecuencia a los EE.UU., en cuestiones internacionales de importancia». Como

---

desde principios de los años sesenta [está] basada en la idea de que tenemos un régimen hostil y poco amistoso a 90 millas de nuestra frontera, y que todo lo que se haga para fortalecerlo servirá únicamente para alentarlo no solo a continuar con su hostilidad, sino que, durante toda su permanencia en el poder, tratará de desestabilizar gran parte de Latinoamérica». Sobre la «amenaza» cubana, véase Morris Morley y Chris McGillion, Council on Hemispheric Affairs (COHA), *Washington Report on the Hemisphère*, 3 de junio de 1997.

30. David Sanger, «Playing the trade card: U.S. is exporting its free-market values through global commercial agreements», *NYT*, 17 de febrero de 1997. El mismo día, los editores del *Times* advirtieron a la UE para que no volviera a la OMC en contra de las sanciones de Washington a Cuba, puesto que este asunto es «esencialmente, una lucha política», según dicen, que no afecta a los «compromisos de libre comercio» por parte de Washington.

nada garantiza ya que los EE.UU. hayan de salirse con la suya, entonces «debemos reservarnos el derecho a determinar si el Tribunal tiene o no jurisdicción sobre nosotros en cada caso particular», por el principio de que «los Estados Unidos no aceptan ninguna jurisdicción obligatoria que afecte a disputas relacionadas con cuestiones que, a criterio de los EE.UU., pertenezcan esencialmente a la jurisdicción nacional de los EE.UU.». La cuestión «nacional», en este caso, era la agresión estadounidense contra Nicaragua.[31]

Los medios, al igual que la mayoría de los intelectuales, coincidieron en que el Tribunal se desacreditaba a sí mismo al fallar en contra de los Estados Unidos. Se silenciaron los elementos básicos de la decisión del Tribunal, incluyendo su valoración de que toda la ayuda de los EE.UU. a la contra era militar, y no humanitaria; la ayuda continuó siendo designada como «humanitaria» en todo el ámbito de la opinión respetable hasta que el terrorismo de Washington, su guerra económica y las trasgresiones diplomáticas produjeron la «Victoria de los EE.UU. y su juego limpio».[32]

Volviendo al caso de la OMC, no hará falta que perdamos el tiempo con la teoría de que la existencia de los Estados Unidos está en juego si no estrangulamos la economía de Cuba. Es más relevante la concepción de que los Estados Unidos tienen pleno derecho a derrocar gobiernos ajenos; en este caso, mediante la agresión, el terrorismo en gran escala durante muchos años y el ahogo económico. De acuerdo con esta concepción, la ley internacional y los tratados de comercio son irrelevantes. Se percibe claramente el triunfo repetido de los principios fundamentales del orden mundial.

Las declaraciones de la administración de Clinton fueron aprobadas sin que nadie las refutara; solo fueron criticadas, en un análisis de miras estrechas, por el historiador Arthur Schlesinger. Como persona «involucrada en la política cubana de la administración de Kennedy», Schlesinger sostuvo que el gobierno de Clinton había interpretado mal la política del anterior presidente, ya que esta respondía a la inquietud por «las

31. Sofaer, *The United States and the World Court*, Bureau of Public Affairs (Current Policy, 769), Departamento de Estado de los EE.UU., diciembre de 1985.

32. Para un análisis detallado del éxito conseguido con la subversión de la diplomacia —que suele elogiarse como si fuera un triunfo de la propia diplomacia—, véanse *La cultura del terrorismo*, cap. 7, y *Necessary Illusions*, South End, Boston, 1989, Apéndice V, sección 5 (págs. 84 y ss.).

perturbaciones que causa [Cuba] en el continente» y la «conexión soviética».[33] Como todo eso ha quedado atrás, la política de Clinton resulta ser anacrónica (aunque no merece ninguna otra objeción, al parecer).

Schlesinger no explicó entonces el significado de esas referencias a «las perturbaciones causadas en el continente» y la «conexión soviética», pero lo había aclarado en otro lugar, en secreto. Al informar al entrante presidente Kennedy sobre las conclusiones de una misión en Latinoamérica, a principios de 1961, Schlesinger desentrañó las «perturbaciones que causa» Castro; se corresponden con lo que la administración de Clinton designó más tarde como intentos de Cuba «por desestabilizar grandes zonas de Latinoamérica». Se trata de «la propagación de la idea de Castro de que cada cual se ocupe de sus propios asuntos», y ello es un problema serio, según precisó Schlesinger, cuando «la distribución de la tierra y de otras formas de riqueza nacional favorece en gran medida a la clase de los propietarios ... El ejemplo de la revolución cubana anima a los pobres y los desfavorecidos a exigir ahora la oportunidad de vivir una vida decente». Schlesinger también aclaró lo de la «conexión soviética»: «Mientras tanto, la Unión Soviética espera el momento de intervenir, ofrece cuantiosos créditos de desarrollo y se presenta como el modelo que permitirá modernizar el país en el plazo de una sola generación».[34] La «conexión soviética» se entendía de forma similar —aunque ampliada— en Washington y Londres, desde los orígenes de la guerra fría, hace ochenta años.

Gracias a estas explicaciones (secretas) de la «desestabilización» de Castro, de las «perturbaciones que causa en el continente» y de la «conexión soviética», podemos entender más claramente cuáles fueron los motivos reales de la guerra fría (pero es otro tema que debo dejar de lado aquí). No debería sorprendernos que la política, en el fondo, sea la misma que entonces, aunque la guerra fría empiece ya a olvidarse entre nuestros recuerdos; de hecho, es la misma que se había desarrollado antes de la revolución comunista, con la invasión brutal y arrasadora de Haití y la República Dominicana (por poner solo un ejemplo del «meliorismo mundial» que se amparaba en la bandera del «idealismo wilsoniano»).

33. Carta, *NYT*, 26 de febrero de 1997.

34. *Foreign relations of the United States, 1961-1963*, vol. 12, American Republics, págs. 13 y ss., 33.

Quisiera precisar, además, que la política de derribo contra el gobierno de Cuba es anterior a la administración de Kennedy. Castro llegó al poder en enero de 1959; y ya en junio de ese mismo año, la administración de Eisenhower había decidido que se debía derrocar ese gobierno. La determinación final de sustituirlo por un régimen «más favorable a los intereses verdaderos del pueblo cubano y más aceptable para los Estados Unidos» se tomó en marzo de 1960, en secreto, con el añadido de que la operación tenía que desarrollarse «de una manera que oculte la intervención de los EE.UU.»; se temía la reacción de los países latinoamericanos y se quería liberar de la carga a los rectores de la doctrina nacional. En esa fecha, no había nada parecido a la «conexión soviética» y las «perturbaciones» que causaba Cuba en el continente (aparte de la interpretación de Schlesinger). La CIA constató que el gobierno de Castro contaba con el apoyo popular (y la administración de Clinton dispone hoy de pruebas similares); también la administración de Kennedy reconoció que su interferencia violaba las leyes internacionales y los estatutos de las Naciones Unidas y la OEA. A pesar de ello, se hizo caso omiso de ambas cuestiones sin discutirlas siquiera, como demuestran los archivos desclasificados.[35]

Avancemos un poco, y tratemos ahora del TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo «histórico» que, según Lakoff, puede ayudar a que progrese en México una democracia más parecida a la estadounidense. El examen detallado es, de nuevo, muy instructivo. El TLC fue una imposición del Congreso; la opinión popular se mostró tenazmente en contra, pero era respaldado sin reservas por los medios y el sector de los negocios, desbordantes de alegría por las promesas de beneficios para todos. Tales beneficios fueron predichos también, con la misma confianza desbordante, por la Comisión Internacional del Comercio de los EE.UU. y por economistas señeros, equipados de modelos teóricos actualizadísimos (que, si bien habían errado misera-

35. Piero Gleijeses, «Ships in the night: the CIA, the White House and the Bay of Pigs», *Journal of Latin America Studies*, 27/1 (febrero de 1995), págs. 1-42; Jules Benjamin, *The United States and the origins of the Cuban revolution*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1990, págs. 186 y ss. Sobre las encuestas recientes, realizadas por un socio de Gallup, véanse las ediciones en español del *Miami Herald*, 18 de diciembre de 1994; María López Vigil, *Envío*, Universidad Jesuita de Centro América, Managua, junio de 1995 (reseñado en mi «Passion for free markets», *Z Magazine*, mayo de 1997); y mi *Profit over people*, Seven Stories Press, Nueva York, 1998, pág. 81 [trad. cast.: *El beneficio es lo que cuenta*, Crítica, Barcelona, 2000].

blemente al no prever los perjuicios derivados del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y los EE.UU., esta vez sí que iban a funcionar, esta vez sí). En cambio, se desentendieron del minucioso análisis de la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso (OTA), cuyas conclusiones indicaban que la versión escogida del TLC afectaría negativamente a la mayoría de la población de Norteamérica, por lo cual se proponían modificaciones que podían hacer extensivos los beneficios del tratado fuera de los círculos inversores y financieros. Más ilustrativo aún fue el silenciamiento de la postura oficial del movimiento sindical estadounidense, que se plasmó en un análisis parecido. En cambio, se reprobó a los sindicatos su perspectiva «retrasada y carente de luces» y su «estrategia de simples amenazas», debida a su «miedo al cambio y miedo a los extranjeros»; téngase en cuenta que vuelvo a estar citando a la extrema izquierda del espectro oficial (en este caso, a Anthony Lewis). Estas acusaciones eran demostrablemente falsas, pero fue lo único que se trasmitió al público en este inspirador ejercicio democrático. Hay aún otros detalles muy significativos, que han sido analizados en la bibliografía disidente de entonces y ahora, pero se han ocultado a la luz pública y tienen pocas probabilidades de ingresar en la historia sancionada.[36]

En este momento, los cuentos y fabulaciones sobre las maravillas del TLC han sido archivados con discreción, a medida que iban trascurriendo los hechos. Ya no se oye hablar con entusiasmo de los cientos de miles de puestos de trabajo y tantos otros beneficios que ha de ver la población de los tres países. La buena nueva ha sido sustituida por la «perspectiva económica señaladamente benigna» —según la «opinión

36. Véase mi *World orders, old and new*, págs. 131 y ss. Sobre las predicciones y el resultado del TLC [conocido en inglés como NAFTA], véase el trabajo del economista Melvin Burke, «NAFTA integration: unproductive finance and real unemployment», *Proceedings from the English annual labor segmentation conference*, abril de 1995, congreso organizado por las universidades de Notre Dame e Indiana. Véase igualmente el informe *Social dimensions of North American economic integration*, preparado por el Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos del Congreso Canadiense del Trabajo [Canadian Labour Congress], 1996. Sobre las predicciones del Banco Mundial en torno a África, véase Mihevc, *The market tells them so*, quien recapitula los efectos desastrosos de este fracaso repetido (desastrosos para la población, claro está, no para los integrantes reales del Banco Mundial). Los defectos en el registro de esta predicción y su escasa perspicacia son bien conocidos por los economistas profesionales; véase, por ejemplo, Paul Krugman, «Cycles of conventional wisdom on economic development», *International Affairs*, 71/4 (octubre de 1995). Krugman es, sin embargo, un tanto selectivo, al exceptuar a los economistas profesionales de su censura desdeñosa.

de los expertos»— de que el TLC «no ha tenido efectos significativos». El *Wall Street Journal* ha informado de que «los responsables de la administración se sienten defraudados por su propia incapacidad de convencer a los votantes de que la supuesta amenaza no les afecta» y que la pérdida de puestos de trabajo es «muy inferior a lo previsto por Ross Perot», al que se le permitió participar en los debates importantes —a diferencia de la OTA, el movimiento sindical, los economistas que no compartían la línea del partido y, naturalmente, los analistas que discrepaban del tratado— porque sus afirmaciones eran a veces tan extremas que se le podía desacreditar fácilmente. «Es difícil luchar con los críticos a base de decirles la verdad: que el pacto, "en realidad, no ha cambiado nada"», según comenta con tristeza un funcionario de la administración. Pero lo que no se recuerda es en qué iba a trasformarse esa «verdad» cuando esta impresionante máquina democrática funcionara a todo vapor.[37]

Mientras los expertos han devaluado al TLC y ahora resulta que «no ha tenido efectos significativos», relegando así al olvido la anterior «opinión de los expertos», lo cierto es que no podemos hablar de ninguna «perspectiva económica señaladamente benigna» si ampliamos el ámbito del «interés nacional» para incluir en ese concepto a toda la población. En su comparecencia ante el Comité de Banca del Senado, en febrero de 1997, el presidente de la Reserva Federal de los EE.UU., Alan Greenspan, se mostró muy optimista ante la «expansión económica sostenible» causada por una «moderación atípica del incremento de las compensaciones [salariales, que] parece ser debida al crecimiento de la inseguridad laboral» ... ¿Qué más puede pedir una sociedad justa? El *Informe económico del presidente* de febrero de 1997 se muestra igualmente orgulloso de los logros de la administración, aunque lo plantea más discretamente y menciona los «cambios en las instituciones y prácticas del mercado de trabajo» como causa de «una significativa moderación salarial» que refuerza nuestra salud económica.

Una de las razones de tales trasformaciones benignas se aclara en un informe encargado por el Secretariado Laboral del TLC «sobre los efectos del cierre repentino de fábricas en el principio de libertad de asociación y el derecho de los trabajadores a organizarse en los tres países».

37. Helene Cooper, «Expert's view of NAFTA's economic impact: it's a wash», *WSJ*, 17 de junio de 1997.

Este análisis fue comisionado por el TLC como respuesta a una denuncia de los empleados de la empresa de telecomunicaciones Sprint, por supuestas irregularidades en su práctica laboral. Como es habitual, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de los EE.UU. resolvió a favor de la denuncia, pero imponiendo penas mínimas y después de años de retraso. El estudio del TLC —realizado por una economista de la universidad de Cornell, Kate Bronfenbrenner— ha sido autorizado para su publicación en Canadá y México, pero no lo ha hecho así la administración de Clinton, ya que desvela un fuerte impacto sobre el derecho de huelga. Se estima que cerca de la mitad de los intentos de organización sindical son saboteados por las amenazas de los empresarios de trasladar la producción al extranjero, colocando, por ejemplo, un cartel que anuncie el «Traslado de la producción a México» en aquellas plantas que intentan organizarse. Las amenazas son más que simples bravatas: si los trabajadores logran coordinar la huelga, los empresarios cierran la planta, total o parcialmente, en una proporción de casos tres veces mayor que antes de la firma del TLC (alrededor de un 15 por 100 de las ocasiones). Y las amenazas de cierre son dos veces más frecuentes en las empresas de mayor movilidad (en el sector industrial frente al de la construcción, por ejemplo).

Tanto esta como otras prácticas que se recogen en el informe son ilegales, pero eso es un pormenor accesorio, al igual que lo es la violación de la ley internacional y los acuerdos comerciales cada vez que generen resultados inaceptables. La administración de Reagan había dejado claro al sector de los negocios que sus actividades antisindicales, aunque eran ilícitas, no serían perseguidas por el estado criminal, y sus sucesores han continuado con la misma línea. Con ello se ha logrado, en gran medida, destruir los sindicatos; o, por decirlo más fino, se ha dado pie a «cambios en las instituciones y prácticas del mercado de trabajo» que derivan en «una significativa moderación salarial». Este es el modelo económico que, con gran orgullo, se está presentando a un mundo retrasado que no ha sabido entender todavía la grandeza de los principios que van abriendo el camino de la libertad y la justicia.[38]

38. Editorial, «Class war in the USA», *Multinational Monitor*, marzo de 1997; Bronfenbrenner, «We'll close», ibídem, basado en un estudio dirigido por ella misma («Final report: the effects of plant closing or threat of plant closing on the right of workers to organize»). El impacto masivo de la criminalidad reaganita se detalla en un informe del *Business Week*, «The workplace: why America needs unions, but not the kind it has now», 23 de mayo de 1994.

El objetivo último del TLC, tal como se podía leer en los medios disidentes, se reconoce hoy de forma tácita: se trataba, sobre todo, de «atrapar a México» en las «reformas» que lo habían convertido en un «milagro económico»; ello en el sentido técnico del término, esto es, un «milagro» para los inversores estadounidenses y los mexicanos ricos, mientras que la población se hundía en la miseria. La administración de Clinton «se olvidó de que el propósito subyacente al TLC no era promover el comercio, sino consolidar las reformas económicas de México», según censuraba con desprecio Mark Levinson, corresponsal del *Newsweek*; solo le faltó recordar que, para asegurar la aprobación del TLC, se había proclamado a voces justamente lo contrario, y que los críticos que denunciaban este «propósito subyacente» habían sido excluidos del mercado libre de las ideas por obra y gracia de los amos. Tal vez algún día también se reconozcan las razones que los movieron. Lo cierto es que se confiaba en que, «atrapando» a México, se pudieran evitar los riesgos detectados por un Seminario sobre el Desarrollo Estratégico en Latinoamérica en setiembre de 1990; este concluyó que las relaciones con la brutal dictadura mexicana eran excelentes, pero existía un problema potencial: «una "apertura democrática" en México podía poner a prueba las relaciones económicas si llegaba al poder un gobierno más interesado en desafiar a los EE.UU. por razones a la par económicas e ideológicas»;[39] sin embargo, eso ya no representa un problema, puesto que México ha sido «atrapado» en el TLC. Los EE.UU. tienen libertad para hacer caso omiso de sus obligaciones; México, no.

La amenaza, en suma, es la democracia. Ya sea en los Estados Unidos o en otros países, como demuestra este último ejemplo. La democracia es tolerable, e incluso deseable, pero siempre dependiendo de los resultados que se obtengan, no del proceso en sí, como se ha visto. El TLC se consideró un buen instrumento para frenar la amenaza democrática; en los EE.UU. fue impuesto mediante la subversión efectiva del proceso democrático y, en México, por la fuerza, y también sin tener en cuenta las protestas públicas. El resultado se presenta hoy como un vehículo esperanzador, que llevará la democracia (entendida a la estadounidense) a los insipientes mexicanos. Si un observador cínico estuviera al tanto de los hechos, quizá estaría de acuerdo con esta última frase.

39. Levinson, *Foreign Affairs*, marzo-abril de 1996; *Workshop*, 26-27 de setiembre de 1990, sección «Minutes», pág. 3.

De nuevo, los ejemplos habituales del triunfo de la democracia son los más naturales, y muy interesantes y significativos, aunque tal vez no en la línea que se pretendía.

Los mercados son siempre una construcción social y, articulados específicamente por la actual política social, deben servir para limitar el funcionamiento democrático, como sucede con el TLC, los acuerdos de la OMC y otros posibles instrumentos futuros. Un caso que merece ser examinado con atención es el del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), que se está negociando en la OCDE —el club de los millonarios— y la OMC. Al parecer, se espera que el acuerdo podrá ser cerrado sin proporcionar información pública, como se pretendía hacer con el TLC, aunque sin demasiado éxito (no por culpa del «sistema de información», que logró mantener ocultos los hechos básicos). Si, finalmente, se aplican los proyectos en curso, el mundo entero estará «atrapado» en tratados que dotarán a las grandes corporaciones trasnacionales de herramientas aún más poderosas para restringir la arena de la política democrática, cediendo casi todo el control político a estas enormes tiranías privadas que cuentan, así mismo, con herramientas para interferir significativamente en los mercados. El intento, sin embargo, puede verse bloqueado en la OMC, debido a las protestas enérgicas de varios «países en desarrollo» —sobre todo, la India y Malasia—, que no quieren acabar siendo filiales en propiedad absoluta de las grandes empresas extranjeras. La versión de la OCDE quizá tenga más éxito, y se presente al resto del mundo como un hecho consumado (con sus consecuencias evidentes). Por el momento, todo ello se desarrolla con un secretismo pasmoso.[40]

El anuncio de la «Doctrina Clinton» se acompañó de un ejemplo selecto como ilustración de los principios triunfantes: los logros de la ad-

40. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), *Multilateral agreement on investment: consolidated texts and commentary*, OLIS, 9 de enero de 1997; DAFFE/MAI/97; confidencial. Scott Nova y Michelle Sforza-Roderick, del Preamble Center for Public Policy, Washington, «MIA culpa», *The Nation*, 13 de enero (*); Martin Khor, «Trade and investment: fighting over investors' rights at WTO», *Third World Economics*, Penang, 15 de febrero; Laura Eggerston, «Treaty to trim Ottawa's power», *Toronto Globe and Mail*, 3 de abril; Paula Green, «Global giants: fears of the supranational», *Journal of Commerce*, Canadá, 23 de abril; George Monbiot, «A charter to let loose the multinationals», *Guardian*, Reino Unido, 15 de abril de 1997. Sobre el resultado y su importancia, véase *El beneficio es lo que cuenta*, caps. 6-7. [(*) MIA son las siglas inglesas del AMI; WTO, las de la OMC. (*Ad. del t.*)]

ministración estadounidense en Haití. Ya que nos lo presentan como el mejor de los ejemplos, qué menos que echarle un vistazo.

Es verdad que al presidente de Haití se le permitió regresar al país; pero solo después de que las organizaciones populares hubieran sido sometidas a tres años de terrorismo por parte de fuerzas que siempre mantuvieron una vinculación muy estrecha con Washington. Además, la administración de Clinton se niega aun hoy a devolver a Haití cerca de 160.000 páginas de documentos sobre el terrorismo de estado, confiscados por el ejército de los Estados Unidos «para evitar revelaciones comprometedoras» sobre la implicación del gobierno en el golpe de estado, según Human Rights Watch.[41] Y Aristide tuvo que asistir a un «curso urgente sobre democracia y capitalismo», según describió su partidario más acérrimo en Washington este proceso de civilización del sacerdote problemático.

El recurso no es desconocido en otros lares, cuando se contempla la necesidad de una transición forzada a la democracia.

Como condición de su regreso, Aristide se vio obligado a aceptar un programa económico que adecua la política haitiana a las necesidades de la «sociedad civil, especialmente el sector privado, tanto nacional como extranjero»: los inversores estadounidenses han sido designados como la médula de la sociedad civil haitiana, junto con los haitianos acomodados que respaldaron el golpe militar. No sucede lo mismo con los campesinos y los habitantes de los suburbios, quienes habían organizado una sociedad civil tan animada y vibrante que, contra todas las apuestas, fueron incluso capaces de escoger a su propio presidente, ganándose la enemistad inmediata de los EE.UU. y su decisión de derrocar al primer gobierno democrático de Haití.[42]

La actuación intolerable de «observadores externos, necios y metijones» en Haití fue solucionada recurriendo a la violencia, con la complicidad clara de los EE.UU., y no solo mediante contactos con los terroristas en el poder. La OEA decretó un embargo, pero las administraciones de Bush y Clinton lo sabotearon de buen principio: se eximió de él a las

41. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, carta, *NYT*, 12 de abril de 1997.

42. Véase Paul Farmer, *The uses of Haiti*, Common Courage Press, Monroe (ME), 1994; Chomsky, *World orders, old and new*, págs. 62 y ss., y «Democracy restored», *Z Magazine*, noviembre de 1994; NACLA, *Haiti, dangerous crossroads*, South End, Boston, 1995.

empresas estadounidenses, y se autorizó en secreto a la Texaco Oil Company a abastecer al régimen golpista y sus poderosos partidarios, violando así las sanciones oficiales. Se trata de un hecho crucial, que se dio a conocer justo el día antes de que las tropas de los EE.UU. desembarcasen para «restaurar la democracia», pero no ha llegado todavía a conocimiento del gran público y difícilmente ingresará en los anales históricos.[43]

La democracia, hoy, se ha restaurado al fin. Y el nuevo gobierno ha tenido que abandonar el programa democrático y reformista que había escandalizado a Washington y ajustarse a la política del candidato de los EE.UU. en las elecciones de 1990, [Mark Bazin], que en esa fecha recibió tan solo el 14 por 100 de los votos.

Este ejemplo selecto, por tanto, dice mucho del significado y las implicaciones del «triunfo de la democracia y los mercados abiertos».

En cuanto a los haitianos, parece que han aprendido la lección, aunque los rectores de la doctrina occidental no quieran verlo así. En las elecciones parlamentarias de abril de 1997, la participación fue de un «mísero 5 por 100», según la prensa, que se preguntó entonces: «¿Ha fallado Haití a la confianza de los EE.UU.?»[44] Resulta que hemos hecho enormes sacrificios para llevarles la democracia, y son unos desagradecidos, indignos del esfuerzo. Ahora entiende uno mejor por qué los «realistas» observan con recelo las cruzadas de «meliorismo mundial».

El mismo sentimiento se ha extendido por el continente. Las encuestas demuestran que, en Centroamérica, la política genera «aburrimiento», «desconfianza» e «indiferencia», y nada de «interés» o «entusiasmo», entre «un público apático ... que se ve a sí mismo como un simple espectador de su sistema democrático» y «mira el futuro con pesimismo». El primero de tales estudios, financiado por la Unión Europea, encontró resultados muy similares: según el coordinador brasileño, «el mensaje más alarmante de la encuesta [es] la percepción popular de que solo las élites se han beneficiado de la transición a la democracia».[45] Los investigadores latinoamericanos han destacado que la reciente ola democratizadora coincidió con las reformas económicas neoliberales,

43. Chomsky, «Democracy restored», citando a John Solomon, Associated Press (AP), 18 de setiembre de 1994 (noticia principal).

44. Nick Madigan, «Democracy in inaction: did Haiti fail US hope?», *Christian Science Monitor*, 8 de abril de 1997; AP, *BG*, 8 de abril de 1997.

45. John McPhaul, *Tico Times*, Costa Rica, 11 de abril y 2 de mayo de 1997.

que han sido muy perjudiciales para la mayoría de la población y han provocado su evaluación cínica de los procedimientos democráticos formales. La introducción de programas parecidos en el país más rico del mundo ha generado efectos análogos: a principios de los años noventa —tras quince años de vigencia de la versión nacional de estos ajustes estructurales—, más del 80 por 100 de la población de los EE.UU. considera que el sistema democrático es una farsa, con un poder excesivo de los hombres de negocios y una economía «inherentemente injusta». Estas son las consecuencias naturales de la forma concreta que adquiere la «democracia de mercado» bajo el yugo del sector de los negocios.

Es lógico y esperable. El neoliberalismo se remonta a varios siglos atrás, y sus efectos deberían sernos conocidos. Paul Bairoch, un reputado economista, ha indicado que «sin duda, el liberalismo económico al que se obligó al Tercer Mundo en el siglo XIX es un factor clave del actual retraso en su industrialización», e incluso un factor de su «desindustrialización»; entretanto, Europa y las regiones que escaparon a su control se desarrollaron gracias al incumplimiento total de estos principios.[46] En referencia ya a un pasado más reciente, el citado informe secreto de Arthur Schlesinger sobre la misión de Kennedy en Latinoamérica criticaba con realismo «la influencia destructiva del Fondo Monetario Internacional», que perseguía, en la década de los cincuenta, una versión del actual «consenso de Washington» (es decir, «ajustes estructurales» y «neoliberalismo»). A pesar de tanta declaración retórica prometedora, no se entiende demasiado lo del desarrollo económico. Pero algunas lecciones de la historia sí parecen meridianamente claras y poco difíciles de entender.

Volvamos a la doctrina prevaleciente de que la «victoria de los Estados Unidos en la guerra fría» supuso el triunfo de la democracia y el mercado libre. Respecto de la democracia, la teoría es parcialmente cierta, si precisamos qué debe entenderse por democracia: un control jerárquico que proteja «a la mayoría opulenta frente a la minoría». Y en cuanto al mercado libre, encontramos de nuevo que la doctrina queda bien lejos de la realidad, como habrán mostrado ya los ejemplos precedentes.

Consideremos de nuevo el caso del TLC, el tratado que debía «atrapar» a México en unas determinadas normas económicas que defienden

46. Bairoch, *Economics and world history*, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1993.

a los inversores frente a los peligros de una «apertura democrática». Sus disposiciones ilustran varios aspectos adicionales de los principios que estamos analizando aquí. A pesar de su nombre no es, desde luego, un «tratado de libre comercio»; es muy proteccionista, para obstaculizar a los competidores de Europa y Asia oriental. Además, comparte con los acuerdos mundiales restricciones tan antimercado —y tan extremas— como las de los «derechos de propiedad intelectual», que las sociedades ricas no habían aceptado durante su periodo de desarrollo, pero que ahora pretenden usar para proteger sus corporaciones de base nacional (destruyendo la industria farmacéutica de los países más pobres, por ejemplo; o bloqueando determinadas innovaciones tecnológicas, como la mejora de los procesos de producción de artículos patentados). El progreso tampoco es una aspiración obvia, no más que el mercado libre; depende de si genera beneficios para los que cuentan.

Hay también otras cuestiones relacionadas con la naturaleza del «comercio». Se estima que más de la mitad del comercio de los EE.UU. con México consiste en transacciones intraempresariales (han crecido en un 15 por 100 desde la firma del TLC). Hace ya una década, una serie de fábricas —la mayoría de propiedad estadounidense— instaladas en el norte de México producían más de un tercio de los bloques para motor de la industria automovilística de los EE.UU., y tres cuartas partes de otros componentes esenciales. El hundimiento de la economía mexicana en 1994, después de la firma del TLC —del cual se salvaron solo los millonarios y los inversores estadounidenses, protegidos por los subsidios de su gobierno—, provocó un incremento del comercio bilateral a medida que la crisis, que sumía a la población en una miseria aún mayor, «trasformaba a México en una fuente barata [esto es, aún más barata] de productos manufacturados, con salarios industriales diez veces inferiores a los de los EE.UU.», según indica la prensa económica. Algunos especialistas han calculado que la mitad del comercio total de los EE.UU. en todo el mundo consiste en esta clase de transacciones controladas desde el centro, y lo mismo puede decirse de otras potencias industriales,[47] aun-

47. Vincent Cable, *Daedalus* (primavera de 1995), citando el informe *UN world investment report 1993*; este, sin embargo, incluye unas cifras muy diferentes, considerando a su vez que «los datos disponibles son relativamente escasos», págs. 164 y ss. Sobre los EE.UU. y México, véase David Barkin y Fred Rosen, «Why the recovery is not a recovery», *NACLA report on the Americas*, ene.-feb. de 1997; Leslie Crawford, «Legacy of shock therapy» [es decir, «Herencia de una terapia de choque»], *Financial Times*, 12 de febrero de

que siempre se deben manejar con prudencia las cifras relativas a instituciones que no han de rendir cuentas en público. Algunos economistas han descrito el sistema mundial con una imagen razonable, la del «mercantilismo corporativo», muy alejado del ideal del comercio libre. Y un estudio de la OCDE adopta, implícitamente, una perspectiva similar, al concluir que son «la competencia oligopolística y la interacción estratégica de empresas y gobiernos, más que la "mano invisible" de las fuerzas del mercado, [las que] condicionan hoy en día la superioridad competitiva y la división internacional del trabajo en las industrias de alta tecnología».[48]

De hecho, la propia estructura básica de la economía nacional de los Estados Unidos viola los mismos principios neoliberales que tanto se exaltan. La tesis central de la obra de referencia sobre la historia económica de los EE.UU. es que «la empresa moderna ha ocupado el lugar que tenían los mecanismos de mercado en la coordinación de las actividades económicas y en la localización de sus recursos», pasando así a manejar internamente muchas de las transacciones, lo cual también es un alejamiento considerable del mercado libre.[49] Hay muchos otros; considérese, por ejemplo, dónde ha acabado la máxima de Adam Smith, según el cual la circulación libre de personas era un componente crucial del mercado libre (incluyendo la circulación libre entre fronteras). Cuando observamos el mundo de las corporaciones trasnacionales, con sus alianzas estratégicas y el apoyo clave de los estados poderosos, el abismo que separa la doctrina y la práctica real se acrecienta aún más.

La teoría del libre mercado se presenta en dos envases: la doctrina oficial y la que podríamos designar como «doctrina del mercado libre existente en la realidad»: la disciplina del mercado es buena para ti, pero yo necesito la protección de mi estado niñera. Pues bien, la doctrina oficial se impone a los que no pueden defenderse; la «real», en cambio, ha sido adoptada por los poderosos desde los tiempos en que el Reino Uni-

---

1997 (con el subtítulo de «México: un aspecto más saludable», este artículo repasa la miseria creciente en la que se halla la gran mayoría de la población, exceptuando a «los muy ricos»). Sobre las transacciones intraempresariales posteriores a la constitución del TLC, véase William Greider, *One world, ready or not*, Simon and Schuster, Nueva York, 1997, pág. 273, citando al economista mexicano Carlos Heredia.

48. Estudio de la OCDE de 1992, citado por Laura Tyson, la antigua consejera económica de Clinton, *Who's bashing whom?*, Institute for International Economics, Washington (DC), 1992.

49. Alfred Chandler, *The visible hand*, Belknap, Cambridge (MA), 1977.

do emergió como un muy avanzado modelo de desarrollo fiscal y militar, gracias a las fuertes subidas de impuestos y a una administración pública eficaz, que convirtieron al estado en el «principal agente individual de la economía» y de su expansión global,[50] con lo que se establecía un patrón que ha sido adoptado hasta el presente en todo el mundo industrial (y, desde sus mismos orígenes, en los EE.UU.).

El Reino Unido acabó optando por el internacionalismo liberal en 1846, después de que ciento cincuenta años de proteccionismo, violencia y poder estatal lo hubieran hecho adelantar, por un amplio margen, a todos sus competidores. Pero este giro hacia el mercado se hizo con reservas notables. El 40 por 100 de la producción textil británica siguió dirigiéndose a la India colonial, al igual que la mayoría de sus exportaciones. Los Estados Unidos impidieron la entrada al acero británico gracias a unos aranceles muy altos, que permitieron desarrollar una industria del metal propia; pero la India y las otras colonias eran todavía un mercado disponible, y lo continuaron siendo cuando el acero británico fue expulsado del mercado internacional por su elevado coste. El caso de la India es instructivo: producía tanto hierro como toda Europa a finales del siglo XVIII y, en la década de 1820, los ingenieros británicos se dedicaron a estudiar sus técnicas manufactureras, más avanzadas, con miras a intentar reducir la «diferencia tecnológica». Y cuando se inició la explosión del ferrocarril, Bombay producía locomotoras muy competitivas. No obstante, la doctrina del «mercado libre real» destruyó esos sectores de la industria india, como había hecho ya con la industria textil, los astilleros y otras industrias adelantadas para el estándar de la época. Dado que Japón y los EE.UU. habían escapado al control europeo, pudieron adoptar el modelo británico de interferencia en los mercados.

Cuando la competencia japonesa empezó a ser demasiado fuerte, el Reino Unido canceló la partida y el imperio se cerró a las exportaciones de Japón (lo cual es uno de los factores de la segunda guerra mundial). Al mismo tiempo, los productores indios pidieron protección; pero contra el Reino Unido, no contra Japón. Claro está que, bajo la doctrina del mercado real, no tuvieron suerte.[51]

50. John Brewer, *Sinews of power*, Knopf, Nueva York, 1989.

51. Radhakamal Mukerjee, *The economic history of India: 1600-1800*, Kitab Mahal, Allahabad, 1967; C. A. Bayly, *The new Cambridge history of India*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988; Dietmar Rothermund, *An economic history of India*, Croom Helm, Londres, 1993; Bairoch, *Economics and world history*.

Tras abandonar esta doctrina limitada del *laissez-faire*, en la década de 1930, el Reino Unido pasó a intervenir de forma más directa también en la economía nacional. Al cabo de pocos años, la producción de máquinas herramientas se había quintuplicado, junto con un *boom* de la química, la metalurgia, la industria aerospacial y toda una serie de nuevas industrias, «una nueva ola, no reconocida, de la revolución industrial», en palabras de Will Hutton. El control estatal de la industria permitió que el Reino Unido superara la producción alemana durante la guerra, e incluso recortara la diferencia con los EE.UU. que, por entonces, estaban desarrollando su propia expansión económica en gran escala, mientras los administradores de las corporaciones se adueñaban de la economía de guerra, intervenida por el estado.[52]

Un siglo después de que el Reino Unido adoptara el internacionalismo liberal, los EE.UU. siguieron el mismo camino. Después de ciento cincuenta años de proteccionismo y violencia, los EE.UU. se habían convertido, con diferencia, en el país más rico y poderoso del mundo y —como Inglaterra anteriormente— supieron darse cuenta de las ventajas de competir «en igualdad de condiciones», una «igualdad» que permite machacar a todos los competidores. Y, también como el Reino Unido, no sin reservas.

Una de las reservas más significativas consistía en utilizar el propio poder para impedir el desarrollo independiente de otras regiones del mundo (lo mismo que había hecho el Reino Unido). En Latinoamérica, Egipto, Asia meridional y otras regiones, el desarrollo debía ser «complementario», y no «competitivo», por lo que se interfirió decididamente en el comercio. Por ejemplo, la ayuda del Plan Marshall estaba condicionada a la adquisición de productos agrícolas de los Estados Unidos; ello ayuda a explicar que el peso de los EE.UU. en el comercio mundial de cereales pasara de menos del 10 por 100 (antes de la guerra) a más de la mitad (hacia 1950), mientras que las exportaciones argentinas se vieron reducidas en dos terceras partes. La ayuda del programa Food for peace [Alimentos para la paz] se utilizó también para subvencionar el negocio y la exportación agrícolas de los EE.UU. y debilitar, consiguien-

52. Hutton, *The state we're in*, Jonathan Cape, Londres, 1995, págs. 128 y ss. Sobre la recuperación económica de los EE.UU. en periodos de guerra, que sientan las bases del crecimiento económico de posguerra, véase Gregory Hooks, *Forging the military-industrial complex*, Univ. of Illinois Press, Urbana, 1991.

temente, a los productores extranjeros (entre otras medidas dirigidas a impedir el desarrollo económico independiente).[53] Ello ha acarreado, por ejemplo, la destrucción, en su práctica totalidad, de los cultivos de trigo en Colombia, lo cual ha ayudado al crecimiento de la industria de la droga, que también se ha impuesto en las regiones andinas, debido a las políticas neoliberales de los últimos años. La industria textil de Kenia se hundió en 1994, cuando la administración de Clinton impuso una cuota que cerraba el paso al mismo florecimiento con el que había empezado el desarrollo de todos los países industriales, al par que se advierte a los «reformadores africanos» que «deben avanzar más» en la implantación de las condiciones necesarias para las operaciones comerciales, la «introducción de reformas dirigidas al mercado libre» y la instauración de «políticas comerciales y de inversión» ajustadas a los requisitos de los inversores occidentales. En diciembre de 1996, Washington impidió la importación de tomates mexicanos, violando así las reglas del TLC y la OMC (aunque no técnicamente, puesto que fue un simple ejercicio de poder y no necesitó de la imposición oficial de aranceles), lo que cuesta cerca de mil millones de dólares anuales a los productores mexicanos. La razón oficial con que se quiso justificar este regalo a los cultivadores de Florida fue que los precios eran «sistemáticamente rebajados por la competencia mexicana» y que los consumidores estadounidenses preferían los tomates extranjeros. En otras palabras, resultó que los principios del mercado libre estaban funcionando en la dirección equivocada.[54]

Y podrían citarse muchos otros ejemplos. Volvamos, por un momento, sobre uno de los más ilustrativos: Haití.

Haití, que, junto con Bengala, era la joya colonial más importante del mundo —y fue la fuente de buena parte de la riqueza de Francia—, ha estado bajo control estadounidense desde que los marines de Wilson lo invadieron hace ochenta años, y hoy en día es un desastre de tal mag-

53. Véase, entre otros, Gerald Haines, *The Americanization of Brazil*, Scholarly Resources, Wilmington (DE), 1989; Nathan Godfried, *Bridging the gap between rich and poor*, Greenwood, Westport (CT), 1987; Michael Weis, *Cold warriors and coups d'etat*, Univ. of New Mexico Press, Albuquerque, 1993; David Rock, *Argentina*, Univ. of California Press, Berkeley, 1987, págs. 269 y 292 ss.

54. Sobre Colombia, véase Walter LaFeber, «The alliances in retrospect», en Andrew Maguire y Janet Welsh Brown, eds., *Bordering on trouble*, Adler and Adler, Bethesda (MD), 1986. Sobre Kenia, véase Michael Phillips, «U.S. is seeking to build its trade with Africa», *WSJ*, 2 de junio de 1997. Sobre México, véase David Sanger, «President wins tomato accord for Floridians», *NYT*, 12 de octubre de 1996.

nitud que quizá no sea ni siquiera habitable en un futuro no demasiado lejano. En 1981, el Banco Mundial y US AID iniciaron una estrategia de desarrollo conjunta, basada en las cadenas de montaje y la exportación agrícola, por lo que la tierra dejó de dedicarse a la producción de alimentos para el consumo local. US AID pronosticó un «cambio histórico hacia una mayor interdependencia de sus mercados con los de los Estados Unidos» en una isla que iba a convertirse en «el Taiwan del Caribe». El Banco Mundial colaboró recordando las normas habituales de «expansión de las corporaciones privadas» y minimización de los «objetivos sociales», con lo que se agudizaron la desigualdad y la miseria y se redujeron los niveles de alfabetización y atención sanitaria. Quizá valga la pena hacer constar —por si interesara— que estas normas habituales se acompañan siempre de la insistencia en la necesidad de reducir la desigualdad y la miseria y de mejorar los niveles de alfabetización y atención sanitaria, puesto que los estudios del Banco Mundial reconocen que una mínima igualdad y unas cifras elevadas de salud y educación pública son factores cruciales para el desarrollo económico.

En el caso de Haití, las consecuencias son las previstas: beneficios para los productores estadounidenses y los millonarios haitianos y una disminución de los salarios del 56 por 100 a lo largo de la década de los ochenta. Todo un «milagro económico», en suma. Haití siguió siendo Haití, y no Taiwan, que había tomado un camino muy diferente, como bien sabían los «expertos».

El primer gobierno democrático de Haití intentó aliviar el desastre cada vez mayor que habían despertado la enemistad de Washington y el golpe militar y el terrorismo que le siguieron. Una vez se ha «restaurado la democracia», US AID reparte ayudas para asegurar la privatización de las cementeras y los molinos de harina, que favorece a los haitianos privilegiados y los inversores extranjeros (la «sociedad civil», como se recordará), mientras que se impide gastar en salud y educación. La agricultura industrial recibe amplios subsidios, pero no así la agricultura tradicional ni la artesanía, que son la única fuente de ingresos de la inmensa mayoría de la población. Las cadenas de montaje, de propiedad extranjera —que emplean a trabajadores (sobre todo mujeres) por un salario muy inferior al de subsistencia y en unas condiciones laborales horrendas— se ven favorecidas por una sustancial rebaja en el coste de la electricidad, subvencionada por el generoso supervisor. A los pobres, sin embargo —la población haitiana en general—, no se les puede rebajar

la electricidad, ni el combustible, ni el agua, ni los alimentos, ya que lo prohíbe el Fondo Monetario Internacional (FMI), con razones bien fundamentadas: ello constituiría un «control de los precios». Antes de la instauración de las reformas, el cultivo local de arroz abastecía casi todas las necesidades nacionales y tenía una importancia crucial para la economía haitiana; hoy, gracias a la «liberalización» unilateral, no representa más que el 50 por 100, con el efecto consiguiente sobre la economía. Hemos topado con un punto imperioso: la liberalización ha de ser unilateral. Haití tiene que «hacer reformas» y eliminar los aranceles, como exigen los rigurosos principios de la ciencia económica; ahora bien, la agricultura industrial de los EE.UU. (¿quizá por algún raro milagro de la lógica?), está exenta de esas reformas y continúa recibiendo cuantiosos subsidios públicos hasta el punto de que estos suponen el 40 por 100 de los ingresos brutos de los empresarios agrícolas. Las consecuencias que se derivan son esperables y esperadas; un informe de US AID de 1995 constata que la «política de inversiones y comercio exterior» impuesta por Washington está «machacando progresivamente a los cultivadores locales de arroz», por lo que deberán perseguir un objetivo más racional: la exportación, a beneficio de los inversores estadounidenses, de acuerdo con la teoría de las expectativas racionales.[55]

Mediante métodos como estos se ha conseguido que el país más pobre del continente se haya trasformado en un importante comprador del arroz de producción estadounidense, para mayor enriquecimiento de las empresas subvencionadas por Washington. Los afortunados que hayan recibido una buena educación occidental sabrán explicar, sin duda, que la riqueza generada acabará por filtrarse gradualmente hasta alcanzar a los campesinos y chabolistas ... algún día.* Los africanos deberían seguir el mismo camino, según los consejeros del «meliorismo mundial» y de las élites locales; es posible que, en las circunstancias actuales, no vean otra opción, pero me parece una afirmación cuestionable y, tomen la decisión que tomen, que sea con los ojos bien abiertos.

55. Véase mi *Year 501*, South End, Boston, 1993, cap. 8, y las fuentes citadas allí; Farmer, *The uses of Haiti*; *Labor rights in Haiti*, International Labor Rights Education and Research Fund, abril de 1989; *Haiti after the coup*, National Labor Commitee Education Fund, Nueva York, abril de 1993; Lisa McGowan, *Democracy undermined, economic justice denied: structural adjustment and the AID Juggernaut in Haiti*, Development Gap, Washington (DC), enero de 1997.

* En el original, Chomsky se refiere al efecto de *trickle-down*, un concepto desarrollado por la teoría económica neoliberal a partir del verbo *trickle*, 'gotear' (*N. del t.*)

Este último ejemplo muestra hasta qué punto es posible alejarse de la doctrina oficial del comercio libre, mucho más de lo que pueda hacerlo el proteccionismo. De hecho, tampoco es cierto que, en épocas anteriores a la nuestra, el proteccionismo fuera la interferencia más significativa en el mercado libre; dentro de la separación convencional de las disciplinas académicas se lo suele estudiar en esa línea, pero ello contribuye una vez más a disfrazar la realidad política y social. Por citar un caso obvio, la Revolución Industrial dependía de un algodón barato, al igual que la «época dorada» del capitalismo contemporáneo dependió de una energía barata, pero, ¿qué métodos se utilizaron para asegurarse del precio y la disponibilidad de estas mercancías cruciales?, ¿acaso estos métodos se adecuan a los principios de un mercado libre? Al parecer, estas preguntas quedan fuera del ámbito profesional de la teoría económica.

Otro de los puntos esenciales de la teoría del mercado libre es que no se permiten las subvenciones públicas. Sin embargo, después de la segunda guerra mundial, los líderes del sector de los negocios postularon que la economía se hundiría si cesaba la masiva intervención estatal con la que se había logrado superar la Gran Depresión; recalcaron, así mismo, que una industria avanzada «no puede existir satisfactoriamente en una economía de "empresa libre" pura, competitiva y no subvencionada» y que «solo el gobierno puede salvarla» (son frases de *Fortune* y *Business Week*, que expresan un consenso generalizado). Reconocieron que el sistema del Pentágono sería la mejor manera de trasferir al público una parte de los gastos. La inversión social también podía ser un estímulo económico, pero la perjudicaban varios defectos: no es un subsidio directo al sector corporativo, tiene efectos democratizadores y es redistributiva. En cambio, la inversión militar está libre de todas estas características negativas; y es fácil de vender (con engaños). El secretario de las Fuerzas Aéreas de Truman lo expresó claramente: no debemos usar la palabra *subvención*, sino referirnos a la *seguridad*; luego se aseguró de que el presupuesto militar «se ajuste a las necesidades de la industria aeronáutica». Una consecuencia derivada es que la aviación civil es hoy la principal exportación de los EE.UU., y que la industria turística y la del trasporte, de base aérea, son un venero de beneficios.[56]

56. *La quinta libertad*, caps. 4 y 5; Frank Kofsky, *Harry Truman and the war scare of 1948*, St. Martin's Press, Nueva York, 1993; *El nuevo orden mundial (y el viejo)*, cap. 2.

Clinton, por tanto, obró con toda propiedad al escoger a Boeing como «un modelo para las empresas estadounidenses» en su exitosa campaña de predicación de una «nueva visión» del futuro del mercado libre. La producción aeronáutica civil es, desde luego, un ejemplo paradigmático de la realidad del mercado libre: está dominada por dos corporaciones, Boeing-McDonald y Airbus, que deben su existencia y sus resultados positivos a las subvenciones públicas en gran escala. El mismo modelo es el que prevalece en la industria informática y electrónica, en la automatización, en la biotecnología, en las comunicaciones ... y, de hecho, en todos los sectores dinámicos de la economía.[57]

Anteriormente, la administración de Reagan demostró conocer a la perfección este requisito del «mercado libre real»: fueron unos maestros en el arte de celebrar las glorias del mercado ante los pobres del país y los medios extranjeros, mientras se gallardeaba ante los hombres de negocios porque el presidente había «otorgado más ayudas económicas a la industria de los Estados Unidos que cualquiera de sus antecesores de los últimos cincuenta años» —en realidad, más que todos sus antecesores combinados— y había «presidido el mayor giro proteccionista desde los años treinta», con lo que los EE.UU. pasaron de ser «el paladín mundial del comercio libre multilateral a uno de sus contrincantes más duros», según constató en un análisis de esa década la revista del Consejo de Relaciones Extranjeras. Los reaganitas lideraron «el asalto sostenido a este principio [el del librecambio]» que habían comenzado ya desde los setenta los sectores más ricos y poderosos, y que ha deplorado, en un estudio académico del secretariado del GATT, el economista Patrick Low, que estima los efectos restrictivos de las medidas de Reagan en el triple de los causados por otras potencias industriales.[58]

Este gran «giro proteccionista» era solo una parte del «asalto sostenido» a los principios del librecambio, que se aceleró bajo el «grosero individualismo reaganita». En otro capítulo de la misma historia habría que relatar la enorme trasferencia de fondos públicos al poder privado, frecuentemente bajo el disfraz de la «seguridad», un «incremento progresivo [que] ha elevado los gastos de I+D militar (medidos en dólares

57. Ibídem.

58. Ibídem, citando a James Baker, secretario del Tesoro; Shafiqul Islam, *Foreign affairs, America and the world* (invierno 1989-90); Low, *Trading free*, Twentieth Century Fund, Nueva York, 1993, págs. 70 y ss., 271.

constantes) hasta superar las cifras récord de mediados de los sesenta», según Stuart Leslie.[59] El público se sentía aterrorizado por las amenazas exteriores (los rusos, los libios, etc.), pero el mensaje de Reagan a los hombres de negocios era mucho más sincero: sin tales medidas extremas de interferencia en el mercado, era dudoso que industrias estadounidenses como la del automóvil, el acero, las máquinas herramientas o los semiconductores pudieran sobrevivir a la competencia japonesa o liderar el desarrollo de las tecnologías emergentes, que tantos efectos tiene en la economía general.

Tampoco necesita que le expliquen la doctrina real el máximo adalid de la actual «revolución conservadora», Newt Gingrich, quien alecciona implacablemente a los niños de siete años sobre los males de depender de los subsidios, a la par que lidera la trasferencia pública de subvenciones a los miembros más ricos del país. Y lo mismo puede decirse de la Heritage Foundation [Fundación por el Patrimonio], que se encarga de articular las propuestas presupuestarias de los congresistas «conservadores» y, por ejemplo, ha exigido (y conseguido) un aumento de los gastos del Pentágono superior al de Clinton; así se aseguran de que no pierdan solidez «los cimientos de la industria de defensa», que, protegidos por el poder estatal, ofrecen a sus beneficiarios una tecnología de doble uso con la que dominar los mercados comerciales y enriquecerse a costa del erario.

Todos ellos comprenden muy bien que «empresa libre» significa que el público pague los gastos y asuma los riesgos, por si las cosas van mal (y así se han cubierto, por ejemplo, quiebras bancarias y corporativas que han costado a los contribuyentes, en los últimos años, centenares de miles de millones de dólares). El cuento, a pesar de tener ya varios siglos a sus espaldas, sigue funcionando sin demasiados cambios (y no solo en los Estados Unidos, claro está).

Las declaraciones públicas deben ser reinterpretadas a la luz de esta realidad; entre ellas, la defensa que ha emprendido Clinton de una política de *trade-not-aid* («comercio en lugar de ayuda») para con África, con una serie de resoluciones que —casualmente— no benefician más que a los inversores estadounidenses, y una retórica radiante que esquiva cuestiones como, por un lado, el largo registro histórico de políticas

59. Leslie, *The Cold War and American science*, Columbia Univ. Press, Nueva York, 1993, introducción.

similares o, por otro, el hecho de que los programas de ayuda de los Estados Unidos ya eran —incluso antes de la magnífica innovación de Clinton— los más mezquinos de todos los países desarrollados. O podemos referirnos, igualmente, a la explicación clásica que Chester Crocker hizo de los planes de la administración de Reagan para 1981: «Apoyamos la apertura de las oportunidades de mercado, el acceso a los recursos fundamentales y el crecimiento de las economías de África y los EE.UU.», y queremos incorporar a los países africanos «a la escena mayoritaria de la economía de librecambio». La frase puede parecer más que cínica, viniendo de los paladines del «asalto sostenido» a «la economía de librecambio»; pero es bastante justa, si la examinamos a la luz de la doctrina del mercado real. Las oportunidades de mercado y el acceso a los recursos son para los inversores extranjeros y sus colaboradores locales, y las dos economías han de crecer de forma controlada, protegiendo «a la mayoría opulenta frente a la minoría». Los ricos, sin embargo, reciben protección estatal y subsidios públicos. Es lógico, pues, si no fuera así, ¿cómo lo harían ellos para medrar en nuestro provecho?

Para precisar un poco más la «teoría del mercado libre real», añadiré que el estudio más completo hasta el momento sobre las corporaciones trasnacionales ha concluido que «casi todas las grandes empresas del mundo han tenido que ajustar significativamente su estrategia y su posición competitiva por influencia de las políticas gubernamentales y/o las barreras comerciales» y que «cuando menos veinte de las cien empresas punteras del ránquing de *Fortune* no sobrevivirían hoy como compañías independientes, de no ser por la intervención salvadora de sus gobiernos respectivos», que socializaron la deuda o nacionalizaron las firmas con problemas. Una de ellas es la que genera más empleos en el distrito ultraconservador de Gingrich, Lockheed, salvada de la quiebra gracias a 250 millones de dólares en garantías crediticias del gobierno. El mismo estudio señala también que la intervención gubernamental, que

> ha sido una regla, más que una excepción, durante los dos últimos siglos ... ha desempeñado una función clave en el desarrollo y la difusión de muchos productos e innovaciones procedimentales, sobre todo en la industria aerospacial, la electrónica, la agricultura moderna, la ingeniería de materiales, y la tecnología de la energía y de las comunicaciones.

Lo mismo ha sucedido con las telecomunicaciones y las tecnologías de la información (internet y la *world wide web* son ejemplos recientes muy significativos) y, anteriormente, con la industria textil, el acero y, claro está, la energía. La política gubernamental «ha ejercido una presión irresistible sobre la conformación de las estrategias y la competitividad de las mayores empresas del mundo».[60] Otros estudios alcanzan conclusiones muy similares.

Como se ha indicado repetidamente, los Estados Unidos no están solos en su concepción del «mercado libre», aun cuando sus ideólogos suelen encabezar el coro de los cínicos. Desde 1960, la distancia entre los países ricos y los pobres es atribuible en gran parte a las medidas proteccionistas de los ricos, según la edición de 1992 del *Informe sobre desarrollo* de Naciones Unidas. En 1994, el mismo informe concluye que «los países industriales, con su violación de los principios del mercado libre, están costando a los países en desarrollo del orden de 50.000 millones de dólares anuales, lo cual equivale prácticamente al flujo total de asistencia exterior», y eso que esta ayuda consiste, sobre todo, en subsidios públicos a la exportación nacional.[61] El informe mundial de 1996 de la Organización para el Desarrollo Industrial, perteneciente a la ONU, estima que la diferencia entre el 20 por 100 más pobre y el más rico de la población mundial se acrecentó en más del 50 por 100 entre 1960 y 1989, y predice «un aumento de la desigualdad mundial, debido al proceso de "globalización"». Esta diferencia creciente se extiende a las sociedades ricas, con los EE.UU. abriendo camino y Gran Bretaña a su rueda. La prensa económica exulta por el crecimiento «espectacular» e «impresionante» de los beneficios y aplaude esa concentración extrema de la riqueza en manos de una pequeña minoría, mientras que, para la mayoría, las condiciones empeoran o, a lo sumo, se mantienen. Los medios corporativos, la administración de Clinton y las *cheerleaders* del «estilo de vida americano» se suelen presentar, con orgullo, como un modelo para el resto del mundo; así, el griterío del coro que se vitorea a sí mismo tapa los resultados de la política social que se ha venido desarrollando —de forma intencionada— durante estos años felices en los

60. Winfried Ruigrock y Rob van Tulder, *The logic of international restructuring*, Routledge, Londres, 1995, págs. 221-222, 217.

61. Para un análisis, véase Eric Toussaint y Peter Drucker, eds., *IMF-World Bank-WTO, Notebooks for study and research*, International Institute for Research and Education, Amsterdam, 1995, págs. 24-25.

que «el capital ha subyugado claramente a los trabajadores». Es el caso, por ejemplo, de los «indicadores básicos» que UNICEF ha analizado recientemente: desvelan que los Estados Unidos tienen las peores cifras de los países industrializados, semejantes a las de Cuba (esto es, a las de un país del Tercer Mundo que ha sido atacado por la superpotencia del continente desde hace cuarenta años). El estudio de UNICEF analizaba indicadores sociales básicos, como la mortalidad infantil (de niños menores de cinco años), el hambre o la pobreza infantil.[62]

Todo esto sucede en el país más rico del mundo, que posee ventajas sin igual e instituciones democráticas estables, pero que a la vez está, más que ninguna otra sociedad, bajo el dominio de los hombres de negocios. Y así son los augurios para el futuro, si se impone y se globaliza el ya citado «giro radical desde un ideal de política pluralista y participatoria hacia uno autoritario y tecnocrático».

Es importante destacar que estas intenciones, en secreto, se declaran abiertamente; por ejemplo, poco después de la segunda guerra mundial, cuando George Kennan —un planificador muy influyente y reputado por humanista señero— asignó una función a cada región del mundo: respecto de África, los Estados Unidos no tenían demasiado interés en ella, ya que su función era ser «explotada» por Europa, para su propia reconstrucción. Un año antes, un estudio de planificación en gran escala había considerado «que el desarrollo cooperativo de los alimentos baratos y las materias primas del norte de África puede ayudar a fraguar la unidad europea y crear una base económica para la recuperación del continente [europeo]», lo cual no deja de ser un concepto curioso de «cooperación».[63] No tengo constancia de que nadie haya sugerido que África pueda «explotar» a Occidente para recuperarse así del «meliorismo mundial» de los siglos pasados.

Si nos tomamos la molestia de distinguir realidad y doctrina en el sistema neoliberal, encontramos, en suma, que los principios políticos y económicos vigentes en la realidad son muy diferentes a los que se proclaman. También despierta escepticismo el que hayan de ser «la ola del futuro» y acabar la historia con un final feliz, puesto que ese mismo «fin

62. UNICEF, *State of the world's children 1997*.

63. UNICEF, *State of the world's children 1997*; Kennan, Public Papers of Presidents 23, 24 febrero de 1948 (*Foreign relations of the United States*, vol. 1, 1948), pág. 511; Michael Hogan, *The Marshall Plan*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987, pág. 41, parafraseando el memorando Bonesteel de mayo de 1947.

de la historia» ya se ha anunciado con confianza en muchas ocasiones, y siempre de forma equivocada. Sin embargo, a pesar de la sórdida continuidad de las mismas prácticas, el realismo no impide que podamos ser un tanto optimistas, pues algo se ha avanzado. En los países más industrializados —y, con frecuencia, en otras partes del mundo— la lucha popular parte de una situación mejor y con mejores expectativas que en el pasado. Y la solidaridad internacional puede adoptar formas nuevas, más constructivas, a medida que la mayoría de la población mundial entienda que sus intereses son comunes o muy similares y que avanzaremos más si avanzamos juntos. No existen hoy en día más razones que en el pasado para creer que estamos constreñidos por leyes sociales misteriosas y desconocidas, cuando no son más que decisiones tomadas dentro de instituciones subordinadas a la voluntad humana: instituciones humanas, en definitiva, que han de ser sometidas a un examen de legitimidad y, caso que no lo aprueben, pueden ser sustituidas por otras más libres y más justas, como se ha hecho ya en el pasado.

Los escépticos que rechazan estas ideas, tildándolas de utópicas o ingenuas, no tienen más que echar un vistazo a lo que ha sucedido aquí, en Sudáfrica, en los últimos años: un tributo ejemplar a lo que el espíritu humano tiene a su alcance, a las perspectivas ilimitadas que se nos brindan. Son lecciones que el mundo necesita aprender, inevitablemente, y que deben guiar nuestros próximos pasos en la lucha continua por la justicia y la libertad, mientras el pueblo de Sudáfrica, alentado por una gran victoria, se enfrenta a los retos aún más difíciles que le aguardan.

5

La pedagogía de las mentiras* (un debate con John Silber)

Jeremy Paxman (BBC, Radio 4): Entonces, ¿usted no niega que [el bombardeo de Camboya] fuera secreto? ... Fue una operación secreta y contra un país neutral.

Henry Kissinger: No me venga con esas, señor Paxman; eso pasó hace quince años, y les creo capaces, en su programa, de informarse antes de empezar, por si les han contado una mentira.

Paxman: ¿Acaso hay algo de lo que he dicho que sea falso?

Kissinger: Es una infamia.

En la disputa que antecede, Henry Kissinger demuestra de nuevo que, si eres el vocero intelectual de la doctrina y su sistema, puedes quitar del paso los hechos históricos impertinentes de una forma bien sencilla: colgándoles la etiqueta de «mentiras». Y no te inquietes, porque el sistema doctrinal te recompensará, además de protegerte. De hecho, Kissinger puede despreciar a la vez con tranquilidad y arrogancia los hechos históricos porque, según Chomsky, «si te atienes a la línea del partido, no hace falta que documentes nada; puedes decir lo que te venga en gana ... Es uno de los privilegios de la obediencia. Pero si te muestras crítico con la opinión recibida, tendrás que documentar todas y cada una de tus frases». Hoy día tenemos pruebas irrefutables de que Kissinger participó en

* «Unmasking a pedagogy of lies: a debate with John Silber», editado por Donaldo Macedo.

el infame bombardeo secreto e intensivo de Laos y Camboya, que causó la muerte de miles de personas inocentes, incluyendo a mujeres y niños; no obstante, sigue gozando de un gran prestigio como «experto» autorizado y del acceso a las instituciones responsables de dar forma a la opinión pública. Es también notorio su apoyo igualmente infame a Augusto Pinochet, quien destruyó el gobierno socialista de Salvador Allende, elegido democráticamente, y asesinó a más de 3.000 personas en el camino. Y está bien atestiguada su complicidad con la invasión indonesia de Timor Oriental; la invasión del gobierno indonesio desencadenó un genocidio de proporciones monstruosas que no se ha detenido todavía, con matanzas despiadadas que son designadas con el eufemismo de «limpieza étnica» por nuestros «expertos», mientras las potencias occidentales se sientan en la banda del campo y aguardan la llegada de la solución final en Timor. Sin embargo, el Tribunal de Crímenes de Guerra no ha acusado a Kissinger de crímenes contra la humanidad, y este continúa realizando declaraciones sobre el bombardeo de Kosovo por parte de la OTAN.

Una vez que los intelectuales se integran en el sistema doctrinal y son recompensados por él, les resulta cada vez más fácil vivir en la mentira e ignorar la verdadera realidad, incluso si se les coloca ante hechos históricos atestiguados. Quizá la demostración más clara de ello sea el debate que sigue entre Noam Chomsky y John Silber: cuando Chomsky procedía a exponer las contradicciones y la hipocresía inherentes a la política estadounidense en El Salvador, citando la matanza en gran escala de salvadoreños a manos de los escuadrones de la muerte —de orientación derechista, y apoyados e instruidos por los EE.UU.—, Silber despreció acremente las pruebas documentales de Chomsky tachándolo de «mentiroso compulsivo». Las pruebas de Chomsky hablan por sí mismas; y recientemente hemos sabido que la Comisión de la Verdad, en las Naciones Unidas, ha confirmado la verdad de los hechos denunciados por Chomsky desde hace tiempo. Las conclusiones de la comisión son claras:

1. Entre 200 y 500 campesinos asesinados en El Mozote en 1981; se acusa al coronel Domingo Monterrosa (ya fallecido).
2. El arzobispo Óscar Romero, muerto a tiros mientras pronunciaba una misa en 1980; se acusa a Roberto d'Aubuisson (ya fallecido).
3. Seis sacerdotes jesuitas, el ama de llaves y su hija de quince años, asesinados en 1989; se acusa al general René Emilio Ponce, ministro de Defensa de El Salvador hasta 1993.

4. Tres monjas y una abogada estadounidense violadas y asesinadas en 1980; se acusa al general Vides Casanova, antiguo ministro de Defensa.

David Nyhan, periodista del *Boston Globe*, relata que otros dos articulistas estadounidenses, Raymond Bonner (del *New York Times*) y Alma Guillermoprieto (del *Washington Post*), «fueron atacados con nombre y apellidos» en un editorial ignominioso del *Wall Street Journal*, que los tildaba de «excesivamente crédulos». En la jerga editorial, equivale a decir «a esos dos izquierdosos échenlos al trullo, con los rojos». En un pasaje que acabó expulsando a Bonner de la pelea de El Salvador, el *Wall Street Journal* instaba a los directores del *Times* a desconfiar de su periodista, que había estado «fisgoneando por entre los cadáveres».

Ahora tenemos pruebas documentales de que el asesinato del arzobispo Romero fue ordenado por Roberto d'Aubuisson, a quien nuestro Congreso había recibido con todos los honores por iniciativa de Jesse Helms (senador republicano de Carolina del Norte) y otros ideólogos que respaldaban —y respaldan todavía— una serie de atrocidades inimaginables en Latinoamérica. Pero no hay manera de que gente como John Silber, el antiguo rector de la Universidad de Boston, rinda cuentas por su desvergüenza intelectual e irresponsabilidad moral.

De este modo, dado que, si uno apoya la línea del partido, no hay que dar cuentas de nada, Silber no solo podía seguir mintiendo sobre las atrocidades cometidas en El Salvador con el patrocinio de los Estados Unidos; también puede atacar arrogante y sistemáticamente al que se atreva a decir la verdad. Como Silber forma parte de un sistema «atrapado por sus propias mentiras», puede bastardear con insolencia lo que le plazca, y será recompensado y promocionado por el sistema doctrinal, que lo ascenderá, con escasa justificación real, al rango de líder, educador o filósofo. Si uno lee con atención el siguiente debate entre Noam Chomsky y John Silber, podrá empezarse a ver que, cuanto mayores sean las recompensas otorgadas por el sistema doctrinal, más dogmática será, a cambio, su defensa. La apología dogmática que de un sistema doctrinal insostenible realiza Silber en su debate con Chomsky es suficientemente ilustrativa. Como apéndice, citaremos algunos fragmentos adicionales de otras obras de Chomsky relacionadas con el tema del debate.

DONALDO MACEDO

Chris Lydon (moderador): Nuestros invitados de hoy representan, en la cuestión de la contra, los dos extremos de la opinión pública estadounidense. John Silber, rector de la Universidad de Boston, fue miembro de la Comisión Kissinger que ha diagnosticado una amenaza para la seguridad nacional en Centroamérica. Noam Chomsky es un lingüista del MIT que, en su último libro, titulado *Turning the tide*,* ha denunciado que la intervención de los Estados Unidos en Centroamérica es un ejemplo palmario de nuestro habitual abuso de poder en el Tercer Mundo.

Quisiera que empiece usted, rector Silber. Diríjase a los indecisos —si es que hay alguno— del Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué votaría a favor del dinero de la contra?

John Silber: Bueno, el Senado de los Estados Unidos siempre se ha mostrado favorable a apoyar las fuerzas democráticas en su lucha contra las fuerzas totalitarias. Y, si no abandona esta práctica, votará a favor de los contras. El pasado 15 de octubre los sandinistas aprobaron un edicto que suspende la prohibición de registrar los domicilios particulares sin una orden judicial previa, suspende la privacidad del correo y permite su censura. Han suspendido el derecho de libre reunión. Han suspendido la libertad de prensa. Continúan hostigando al pueblo y han suspendido prácticamente todos los derechos democráticos. El decreto del 15 de octubre [de 1984] es mucho más restrictivo y abarcador que el decreto que aprobó Hitler el 28 de febrero de 1933, con el que puso fin a la República de Weimar. Cuando te das cuenta de la naturaleza totalitaria de ese régimen, que ya era perceptible desde setiembre de 1979 y ha continuado desde entonces, es la hora de que el Senado de los Estados Unidos dé su apoyo a los demócratas.

Lydon: Noam Chomsky, dirija una breve alocución al Senado de los Estados Unidos: ¿Por qué se opone al dinero de la contra?

Noam Chomsky: Bueno, como reconocen ya incluso los defensores más ardientes de la contra, los contras son lo que se conoce como un «ejército delegado», que ataca a Nicaragua desde bases militares en el extranjero, depende por entero de sus dueños para su dirección y abastecimiento, nunca ha defendido un programa político, no tiene una base de apoyo político dentro del país y su mando militar está formado casi al completo por oficiales somocistas. Hasta el presente, sus logros militares se resumen en una prolongada y espantosa serie de torturas, mutilaciones y atrocidades —todo ello perfectamente docu-

* Traducido al castellano como *La quinta libertad*; para más referencias, véase el apéndice de este capítulo. (*N. del t.*)

mentado—, y nada más. Los propios responsables de la administración reconocen abiertamente, en declaraciones públicas, que la función principal de la contra consiste en retrasar o subvertir el porcentaje de reformas sociales en Nicaragua, en acabar con la notable apertura de esa sociedad. El estado de sitio, que fue, efectivamente, declarado el pasado otoño —pero se aplica tibiamente, podría decirse, ya que la apertura política de Nicaragua es notable, como le confirmará cualquiera que haya vivido en el país, incluso el propio embajador de los EE.UU.—, se corresponde aproximadamente con el estado de sitio vigente en El Salvador desde principios de 1980; con una diferencia, ya que en El Salvador se asocia con una masacre desmedida, de decenas de miles de personas. En cuanto a la destrucción de la prensa, lo mismo digo. Pero en Nicaragua estamos hablando de una reacción a la guerra que hemos desencadenado en su contra, con el propósito, justamente, de retrasar la reforma social y limitar las posibilidades de una sociedad abierta en desarrollo. La nuestra es una política cruel y brutal, y tenemos que acabar con ella.

Silber: ¿Acaso piensa proseguir con esa sarta de mentiras? Nunca había visto una sarta de mentiras tan gordas y en tan poco tiempo. Las únicas masacres de Nicaragua son las masacres de indios misquitos por parte de Nicaragua. La represión allí es terrible. Es lo peor que se ha visto nunca en Centroamérica o en ningún país latinoamericano. Allí lo que han impuesto es una auténtica dictadura. Y decir que los líderes de la contra son partidarios de Somoza es una simple invención: Robelo, Cruz, Calero, [Fernando] Chamorro no son somocistas ni lo han sido jamás. Si uno se mira el mando del ejército de los contras ... es cierto, algunos fueron miembros de la guardia nacional de Somoza, pero si me va a replicar —y no hay razón alguna para replicar, porque ese era un ejército que no estaba compuesto solo de somocistas—, entonces recordaré, por mi parte, que Modesta Rojas, la vicecapitana general de las fuerzas aéreas de los sandinistas, había formado parte de la guardia nacional, y muchos de los miembros de la guardia nacional son los que coordinaban los comités de bloqueo que impusieron la dictadura de los sandinistas. Eso no es más que una sarta de inventos y bastardeos, y está perfectamente demostrado que los sandinistas pretenden desacreditar a los contras achacándoles sus atrocidades.

Lydon: Es el turno de Noam Chomsky, para responder, entre otras cosas, a este panorama del totalitarismo...

Chomsky: Empecemos hablando de los hechos. Quiero insistir en que el mando militar de la contra está formado, casi por entero, por la cúpula de la guardia nacional somocista...

Silber: ...porque los soldados de Somoza...

Chomsky: ...cuarenta y seis de los cuarenta y ocho componentes del mando militar de la contra —según el propio Edgar Chamorro—, eso es casi todo el mando militar...

Silber: ...los soldados son...

Chomsky: Disculpe. Veamos, yo le he dejado hablar. ¿Acaso no le he dejado hablar?

Silber: Usted está contando una sarta de invenciones, y ya es hora de que alguien...

Chomsky: ¿Me permite, por favor?

Silber: ...la oportunidad de corregir sus falsificaciones históricas, ahora que todavía...

Chomsky: Parece que el Sr. Silber tiene buenas razones para no dejarme hablar...

Silber: ...y Ferdinand Marcos, Marcos también...

Chomsky: ...sabe cuál es la verdad de los hechos, y no quiere que yo...

Silber: ...no, no, nada de eso, lo que sucede es que ya vale de manipular la verdad.

Chomsky: ¿Me permite decir...

Silber: No, déjeme terminar. Ha sido Marcos. Marcos es el ejército que ha ayudado a Corazón Aquino a subir al poder, así que cuando usted acusa a la guardia nacional, como si la guardia nacional de Somoza fuera somocista, se equivoca.

Lydon: Rector Silber, permítale continuar, es su...

Silber: Además, usted pasa por alto que hay cantidad de miembros de la guardia nacional que apoyan a los sandinistas.

Lydon: Es el turno del Sr. Chomsky.

Silber: Venga, continúe, continúe distorsionando la verdad.

Chomsky: Vamos a ver, esto sí que es una embestida. Es un buen ejemplo de totalitarismo, para asegurarse de que la oposición...

Silber: Soy el primero que ha frenado su monopolio de la desinformación.

Chomsky: La idea de que monopolizo la desinformación de la prensa estadounidense me suena un poco ridícula.

Silber: No, no lo es.

Chomsky: ¿Seguro? ¿Así que yo controlo la prensa de los Estados Unidos? Mejor que volvamos a los hechos: decía que cuarenta y seis de los cuarenta y ocho mandos superiores del ejército de la contra son oficiales somocistas. Está escrito así en las sesiones del Congreso. Y lo ha dicho también Edgar Chamorro, que es el portavoz designado por la CIA. Eso es lo que yo he dicho, y es cierto. En cuanto a la tesis de que los sandinistas han realizado masacres comparables a las que nosotros hemos organizado en Centroamérica, vaya, ¡eso sí que es una sorpresa!

En El Salvador, la cifra de personas asesinadas desde 1978 o 1979, desde que nos desplazamos en serio hasta allí, es del orden de 60.000. Y en Guatemala, a quien habíamos estado respaldando todo el tiempo con nuestra ayuda militar, que no se ha detenido nunca y ahora se ha convertido en un apoyo entusiasta, han masacrado a cerca de 100.000 personas.

El Sr. Silber se ha referido a los indios misquitos que, sin duda, fueron pisoteados; diría que murieron unos sesenta o setenta. En cambio, han muerto entre 5.000 y 6.000 personas —pero no me refiero a las muertes selectas de Silber, sino a la tortura, al asesinato, a la mutilación, atestiguadas con todo lujo de detalles— a manos de nuestras fuerzas. Están los crímenes de los sandinistas, sin duda, pero son ínfimos en comparación con los que hemos patrocinado nosotros...

Lydon: Quisiera volver sobre dos de los postulados principales de la presente cuestión. Uno dice que la Nicaragua sandinista supone una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y la del continente. El segundo es que ello es culpa de los llamados demócratas, así como de la concepción democrática de que debemos ayudar a la gente que impone nuestros principios en la región. John Silber, ¿considera que son argumentos iguales, está de acuerdo con los dos?

Silber: Bueno, con lo que no estoy de acuerdo es con la presencia de cerca de 6.500 efectivos soviéticos y cubanos en Nicaragua. No estoy de acuerdo con la presencia de 24 helicópteros artillados, proporcionados por los rusos, o de 150 tanques de combate, de cerca de 1.200 camiones y 300...

Lydon: De acuerdo, pero, ¿de dónde procede la idea de que eso suponga una amenaza para nuestra seguridad nacional?

Silber: Bueno, no es una amenaza, de momento. Pero tampoco Hitler era una amenaza para la seguridad cuando suspendió todas las libertades de los alemanes, el 28 de febrero de 1933; ni era una amenaza seria en 1936, cuando remilitarizó la Renania. Y cuando los aliados se dieron cuenta de que era efectivamente una amenaza, entonces derrotarlo nos costó seis años y decenas de millones de vidas.

Ahora, en este momento, podemos acabar con la dictadura sandinista en Centroamérica sin utilizar una sola vida de nuestro país. Lo único que tenemos que hacer es pagar a los que disparan. Ahí abajo han roto el fuego; no tenemos por qué apagar ese fuego, lo único que nos piden es que paguemos a los soldados. Si nos esperamos, si decidimos no hacer nada hasta que los rusos hayan colocado allí una base terrestre y empiece a crecer —y crecerá, si dejamos que lo haga—, entonces tendremos que enfrentarnos a otro hecho: a una posibilidad de guerra. No es una amenaza actual, es un agente contaminado. Si la gente no tiene cabeza suficiente para darse cuenta de que un fuego pequeño en una habitación representa una amenaza, no porque sea un fuego pequeño sino porque una chispa se acaba convirtiendo en una hoguera, entonces la historia no ha servido para que aprendamos nada.

Lydon: Es el turno de Noam Chomsky para responder a la cuestión de la posible amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y el continente.

Chomsky: Bueno, considerar que Nicaragua significa una amenaza es como preguntarse si la Unión Soviética se siente amenazada por Luxemburgo. El Sr. Silber ha mencionado a Hitler ... y yo soy lo suficientemente viejo para recordar los discursos de Hitler, en los cuales se refería justamente a que Polonia era una amenaza para Alemania y, por tanto, Alemania tenía que defenderse. Pero incluso esa comparación es excesiva. Es cierto que Nicaragua ha acabado armándose, y mucho, con ayuda soviética. Ello se debe a que está siendo atacada por una superpotencia que, además, ha bloqueado cualquier otra posible fuente de abastecimiento. Por ejemplo, hasta el embargo de mayo del pasado año, el comercio de Nicaragua con el bloque soviético no pasaba del 20 por 100; antes del embargo, su armamento procedía de varias fuentes. Pero entonces, decidimos bloquear los suministros.

A medida que hemos intensificado la guerra, están haciendo justo lo que esperaba el gobierno de los EE.UU.: gastar los fondos de las reformas sociales —que nos producen pánico— y dedicarlos a la militarización del país. Y eso de que Nicaragua podría atacar a los ... diré tan solo que los estados de Latinoamérica lo consideran una locura de histérico. Todos los países —todos los de Contadora, los de los grupos de apoyo, que son todos los países relativamente democráticos de Latinoamérica— nos instan a que detengamos la guerra contra Nicaragua. Se dan perfecta cuenta de lo que pretende la guerra: los obliga a convertirse en un estado militarizado, y crea el peligro de otras guerras mayores en la región. Si de verdad queremos que se marchen los tanques rusos de Nicaragua —y hay muy pocos— y que se marchen los instructores cubanos, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, y todos lo saben, en el gobierno. Detengamos la guerra, y volverán a hacer lo mismo que estaban haciendo antes de que los agrediéramos; es decir, instaurarán de nuevo las reformas más efectivas del continente, que fueron muy elogiadas por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones como OXFAM, quien las describió como unas reformas únicas en sus sesenta y seis años de experiencia de países en desarrollo...

Lydon: Se está acabando...

Chomsky: ...las hemos retrasado y frenado con nuestro ataque.

Lydon: Se nos está acabando el tiempo, deberíamos proseguir. Quiero que opinen también sobre la cuestión de la democracia y de nuestra responsabilidad de ayudar o no a la causa. Usted ha criticado a los sandinistas, [Sr. Silber,] pero ¿cree realmente que los contras son un vehículo para alcanzar la democracia?

Silber: Sin duda alguna. Ya es hora de que acabemos con esa especie de mito de que los nicaragüenses eran unos demócratas admirables hasta que nuestra oposición los arrojó en manos de la Unión Soviética. Eso es inventarse la historia, y el Sr. Chomsky sabe que es falso. De hecho, cuando terminó la revolución, en julio de 1979, los sandinistas vinieron a Washington después de haber prometido solemnemente en la Organización de Estados Americanos que celebrarían elecciones libres. Entonces recibieron préstamos por valor de 117 millones de dólares, recibieron créditos del Banco Mundial gracias a la intermediación de los Estados Unidos. Se los recibió muy bien, se los trató muy bien. Y en setiembre de 193 ... perdón, de 1979, entonces comenzaron con la represión. Así que la idea de que los hemos arrojado en manos de los comunistas es totalmente falsa: es una invención.

Lydon: Sin embargo, la pregunta era si cree que los contras son un vehículo hacia la democracia.

Silber: Por el momento, dentro de Nicaragua, los contras no cuentan con un respaldo explícito del pueblo nicaragüense, por una razón muy simple. Los oponentes de Hitler tampoco tenían un respaldo explícito en Alemania, después de que Hitler tomara el poder: en un estado totalitario, la oposición no puede expresarse de forma efectiva. Tampoco en la Unión Soviética se escucha la voz de la oposición. Se ven solo algunas muestras de desobediencia civil. Pero en Nicaragua hay un liderazgo: Robelo, Cruz, Chamorro, Calero; son grandes personajes, personajes importantes de la democracia que se habían enfrentado a Somoza, y muchos habían ido a la cárcel por ello, y los siguen miles de personas —literalmente—, que se oponen a la dictadura sandinista. Intentar desdeñarlos, tachándolos de totalitarios, o venir con todas esas tonterías de si han cometido no sé cuántas atrocidades, todo eso es un buen ejemplo de cómo se contradicen los adoctrinados.* Se trata tan solo de un ejercicio sobre *1984* con el que el Sr. Chomsky se ha ganado ya una reputación mundial. Pero es un disparate.

Lydon: Sr. Chomsky, cuando se nos llama a acudir al rescate de la democracia y las fuerzas democráticas, ¿qué responde?

Chomsky: Nada me gustaría más que la idea de que los Estados Unidos invirtieran su política tradicional de oposición a las fuerzas democráticas de toda Centroamérica y que, por fin, se decidieran a respaldarlas.

Volvamos, por tanto, a Nicaragua y al mundo real. Yo nunca he dicho que los sandinistas fueran demócratas perfectos o como lo haya descrito usted. Me he limitado a citar al Banco Mundial, a OXFAM, a la Compañía de Jesús y a muchos otros que reconocen que lo único que estaba haciendo Nicaragua era utilizar sus escasos recursos a beneficio de la mayoría pobre del país. Esa es la razón de que se dispararan los indicadores de salud, de que se disparara la alfabetización. Esa es la razón de que la reforma agraria fuera un éxito (y es el único país de la región). Esa es la razón, también, de que mejorara la agricultura de subsistencia y creciera el consumo de carne, y por esa razón les agredimos. No tenía nada que ver con la democracia.

Bien, tampoco he dicho que Cruz y Robelo hayan cometido esas carnicerías. De hecho, tanto Cruz como Robelo están en Washington y no hacen absolutamente nada: son simples testaferros que nos hemos inventado. Los que sí

* Silber utilizaba originalmente el término *doublespeak*, acuñado por George Orwell en *1984*; en «El arte de la "maquinación histórica"», Chomsky se había referido también a la neolengua orwelliana o *newspeak*. (*N. del t.*)

cometen las atrocidades son los soldados de la contra, dirigidos por la guardia nacional. Y de todos los personajes que ha mencionado usted, hay uno que sí está implicado: Adolfo Calero, un empresario de la ultraderecha que representa a los sectores económicos más intolerantes y extremistas.

Así que, si tuviéramos el más mínimo interés por la democracia —pero no es así, eso no es lo que mueve nuestra política internacional— volveríamos la vista hacia otros países sobre los que ejercemos nuestra influencia, como El Salvador. Sucede que en El Salvador no insultan al arzobispo; lo matan. No censuran la prensa; la liquidan. Y enviaron al ejército para que volara la emisora de radio de la Iglesia. El director del único periódico independiente fue hallado en una zanja, mutilado y destazado con un machete.

Silber: ¿Podría acaso...

Chomsky: ¿Me permite continuar? Yo no le he interrumpido...

Silber: ¿Podría acaso ponerle fechas a todo lo que va diciendo...

Chomsky: Disculpe; sucedió en 19...

Silber: ... o lo único que pretende es aparecer en televisión y mentir compulsivamente?

Chomsky: Le hablo de ... Le hablo de ... Le hablo de 198...

Silber: ¡Es usted un mentiroso compulsivo!

Chomsky: Lo que le he contado, ¿sucedió o no?

Silber: Nada de lo que ha contado sucedió de verdad en el contexto que usted pretende sugerir.

Chomsky: ¿De veras?

Silber: Y cuando usted pretende que Cruz no es más que un testaferro y que no hace nada, está dejando de lado que Arturo Cruz fue embajador de los sandinistas en los Estados Unidos.

Chomsky: Exacto; y siempre...

Silber: Y era el banquero principal de los sandinistas...

Chomsky: Ahí voy a parar: en los Estados Unidos.

Silber: ...hasta que rompió con ellos, cuando se dio cuenta de que eran absolutamente totalitarios. Es usted un timador, señor mío, y ya es hora de que se entere todo el mundo.

Chomsky: Bueno, está claro que pretende apartarme del tema...

Silber: Nada de eso. ¡Lo que pasa es que estamos hartos de su basura!

Chomsky: Discúlpeme. Arturo Cruz, como ya he dicho, vino a los Estados Unidos y se le hizo...

Silber: ¿Y por qué vino a los Estados Unidos?

Chomsky: Vino aquí y desertó una vez aquí; entonces lo volvieron a llevar a Nicaragua como si fuera un líder político, porque la oposición, que está integrada por el sector de los negocios, no tiene ningún candidato creíble. No participó en las elecciones, aunque podía haberse presentado, porque...

Silber: Porque no pudo, estaba en la miseria...

Chomsky: ¿Me permite continuar?

Silber: No, porque está mintiendo otra vez.

Lydon: Lo siento, tengo que cortarles a los dos.

Chomsky: Yo todavía no he podido decir nada.

Silber: Y las Turbas [las milicias callejeras prosandinistas] fueron las que impidieron a Cruz participar en las elecciones...

Chomsky: Esa es otra mentira. Pero sigamos con...

Lydon: Lo lamento, pero no va a ser posible; me temo que se nos ha acabado el tiempo. Se lo han puesto difícil al presidente Reagan el próximo domingo. Les damos las gracias a los dos, John Silber y Noam Chomsky.

Chomsky: Bien, gracias a ustedes.

Apéndice

La caída de[l dictador nicaragüense] Somoza en 1979 hizo temer a Washington que también fuese derrocado el brutal dictador de El Salvador, con lo que los Estados Unidos perderían el control del país. El segundo y aún más amenazador suceso de la década [de los setenta] fue el auge de las «organizaciones populares», grupos de estudio de la Biblia que se convirtieron, bajo la protección de la Iglesia, en grupos autónomos: organizaciones campesinas, sindicatos y similares. Existía la espantosa posibilidad de que El Salvador se encaminara hacia una democracia significativa, que permitiera una participación popular real en el proceso político ...

La administración Carter reaccionó a estas amenazas en El Salvador respaldando, en octubre de 1979, un golpe dirigido por militares reformistas, mientras se aseguraba por otra parte de que los elementos militares más reaccionarios continuasen en posiciones de predominio ...

En febrero de 1980, el arzobispo Romero suplicó a Carter que no prestase apoyo militar a la Junta, puesto que, según sus palabras, «haría que aumentase la injusticia y endurecería la represión desatada contra las organizaciones populares que combatían para defender los derechos humanos más esenciales» ...

Sin embargo, la médula de la política estadounidense consistía justamente en aumentar la represión, aniquilar las organizaciones populares e impedir la independencia; así pues, Carter ignoró la súplica del arzobispo Romero y envió ayuda para «fortalecer el papel clave del ejército en las reformas» ...

El arzobispo Romero fue asesinado en marzo de 1980 y se inició una investigación judicial dirigida por el juez Atilio Ramírez, que acusó al general Medrano —organizador de los escuadrones de la muerte y favorito de los Estados Unidos— y al líder derechista Roberto d'Aubuisson de haber contratado a los asesinos. Poco después, [el juez Ramírez] tuvo que abandonar el país, tras haber recibido amenazas de muerte y haber sufrido un atentado ... El juez llegó a la conclusión de que «sin duda alguna, [la policía y la Fiscalía general] estaban implicadas desde el principio en una conspiración para echar tierra sobre el asunto» ...

La universidad fue cerrada en junio, tras un ataque del ejército que causó un elevado número de muertos, entre los que se encontraba el rector. Las instalaciones fueron saqueadas y destruida ...

Mientras tanto, se eliminaron los medios de comunicación independientes mediante las bombas y el terror, otro de los requisitos previos a las «elecciones libres» que legitimarían el régimen cliente. Fueron hallados los cuerpos, despedazados por los machetes, del editor y de uno de los redactores de un periódico [*La Crónica del Pueblo*], y un segundo diario, [*El Independiente*,] cerró después de que su editor sufriera tres atentados contra su vida, su familia recibie-

ra amenazas, las oficinas fueran ocupadas por las fuerzas armadas y el equipo de redacción fuese detenido y torturado. La emisora de radio eclesiástica fue bombardeada en varias ocasiones; poco después de la elección de Reagan, las tropas ocuparon el edificio de la archidiócesis, destruyeron la emisora de radio y saquearon las oficinas del periódico ...

El 26 de octubre de 1980, el obispo Rivera y Damas, sucesor del arzobispo Romero, condenó a las fuerzas armadas «por su guerra de exterminio y genocidio contra la indefensa población civil». Unas semanas más tarde, Duarte, en el acto de su investidura como presidente civil de la Junta, alabó a las fuerzas armadas por «los valientes servicios que prestaban, mano a mano con el pueblo, en contra de la subversión».[1]

* * *

Durante las elecciones en El Salvador, [el *New York Times*, *Time*, *Newsweek* y las noticias de la CBS] no mencionaron siquiera la destrucción violenta y los asesinatos de *La Crónica* y *El Independiente*, ni la gran cantidad de periodistas asesinados.[2]

1. *Turning the tide*, South End, Boston, 1985, págs. 102-107 [trad. cast. de Carme Castells, *La quinta libertad*, Crítica (Biblioteca de Bolsillo, 17), Barcelona, 1999, págs. 163-171].

2. Noam Chomsky y Edward S. Herman, *Manufacturing consent*, Pantheon, Nueva York, 1988, pág. 129 [hay trad. cast.: *Los guardianes de la libertad*, Crítica (Biblioteca de bolsillo, 45), Barcelona, 2000].

Nota sobre el autor y el editor

Noam Chomsky, autor de más de ochenta libros, se doctoró en lingüística en la Universidad de Pennsylvania, en 1955; en la actualidad es profesor en el Departamento de Lingüística y Filosofía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y reside en Lexington. Sus trabajos de investigación lingüística han sido estudiados y discutidos durante más de cinco décadas, gracias a un enfoque multidisciplinar que relaciona estrechamente el estudio del lenguaje con la filosofía, la sociología, la biología y las ciencias cognitivas; destacan *Aspectos de la teoría de la sintaxis* (1965; Aguilar, 1976), *Lingüística cartesiana* (1966; Gredos, 1984), *El lenguaje y el entendimiento* (1972[2]; Seix Barral, 1984) y *El conocimiento del lenguaje* (1985; Alianza, 1989). Sus estudios paralelos sobre historia de las ideas y política internacional han resultado igualmente influyentes y han sido traducidos a numerosas lenguas. En este ámbito destacan *Sobre política y lingüística* (Anagrama, 1971), *La segunda guerra fría* (Crítica, 1984), *La quinta libertad* (Crítica, 1988), *Sobre el poder y la ideología* (Visor, 1989), *La cultura del terrorismo* (Ediciones B, 1989), *Los guardianes de la libertad* (Crítica, 1990), *El miedo a la democracia* (Crítica, 1992), *El nuevo orden mundial (y el viejo)* (Crítica, 1996), *Lucha de clases* (Crítica, 1996), *El beneficio es lo que cuenta* (Crítica, 2000) y *Actos de agresión* (Crítica, 2000).

Donaldo Macedo es profesor de Inglés y *distinguished professor* de Educación y Artes Liberales en la Universidad de Massachusetts, Boston. Ha publicado numerosos estudios en los campos de las lenguas criollas, la alfabetización crítica, el bilingüismo y la multiculturalidad.

Entre sus publicaciones se incluyen: *Alfabetización, lectura de la palabra y lectura de la realidad* (con Paulo Freire; Paidós, 1989), *Literacies of power: what Americans are not allowed to know* (1994) y *Ideology matters* (con Paulo Freire, 2000).

Resumen de siglas y abreviaturas

Publicaciones y medios de comunicación

AP	The Associated Press
BG	*Boston Globe*
BBC	British Broadcasting Corporation, Reino Unido
CAR	*Central America Report*, Ciudad de Guatemala
CBS	Columbia Broadcasting System, EE.UU.
CSM	*Christian Science Monitor*
El Sol	*El Salvador On Line*, Washington
G&M	*Globe and Mail*
JP	*Jerusalem Post*
LAT	*Los Angeles Times*
LPr	*Latinamerica Press*, Perú
NeI	Noam Chomsky, *Necessary illusions: thought control in democratic societies*, South End, Boston, 1989
MH	*Miami Herald*
N&A	COHA, *News and Analysis*
NBC	National Broadcasting Company, EE.UU.
NYT	*New York Times*
NYT Mag	*New York Times Magazine*
TG&M	*Toronto Globe and Mail*
UPI	United Press International
WP	*Washigton Post*
WSJ	*Wall Street Journal*
YAh	*Yediot Ahronot*
WRH	COHA, *Washington Report on the Hemisphere*
ZMag	*Z Magazine*

Organizaciones, instituciones, tratados y otras siglas

Se han incluido también algunas siglas inglesas con equivalente castellano, cuando aparecían así en las referencias bibliográficas.

ABM	Antiballistic Missile, «misil antimisil, antimisil balístico»
ACNUR	Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AFL-CIO	American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de las Organizaciones Industriales)
AI	Amnistía Internacional
AID	Agency for International Development (Organismo para el Desarrollo Internacional), EE.UU.
AMI	Acuerdo Multilateral sobre Inversiones
ANIS	Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños
ARENA	Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
CAHI	Central American Historical Institute (Instituto de Historia de Centroamérica), Univ. de Georgetown, Washington
CIA	Central Intelligence Agency (Servicio Central de Información), EE.UU.
CDHES	Comisión para los Derechos Humanos en El Salvador
CIVS	Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento
CODEH	Comisión para los Derechos Humanos en Honduras
CODEHUCA	Comisión para los Derechos Humanos en Centroamérica
COHA	Council on Hemispheric Affairs (Consejo para Asuntos del Hemisferio)
FAIR	Fairness and Accuracy in Media (Justicia y Exactitud en los Medios de Comunicación)
FDN	Fuerzas Democráticas Nicaragüenses
FMI	Fondo Monetario Internacional (en inglés, IMF)
FMLN	Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio)
IMF	International Monetary Fund = FMI
INF	Intermediate-range Nuclear Forces, «misiles de medio alcance»
MAI (MIA)	Multilateral Agreement on Investments = AMI

MIT	Massachusetts Institute of Technology (Instituto de Tecnología de Massachusetts)
NAFTA	North American Free Trade Agreement (Tratado de Libre Comercio de América del Norte = TLC)
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OLP	Organización para la Liberación de Palestina
OMC	Organización Mundial del Comercio (en inglés, WTO)
OTA	Office of Technology Assessment (Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de los EE.UU.)
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
TLC	Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en inglés, NAFTA)
UCA	Universidad de Centro América (Managua)
UN	United Nations = ONU
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo)
UNRWA	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (Organismo de Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio), Beirut
WTO	World Trade Organization = OMC

Abreviaturas topográficas de los Estados Unidos

CT	Estado de Connecticut
DC	Distrito de Columbia
DE	Estado de Delaware
MA	Estado de Massachusetts
MD	Estado de Maryland
ME	Estado de Maine
NH	Estado de Nueva Hampshire
NY	Estado de Nueva York
OH	Estado de Ohio

Índice alfabético

Índice



NOAM CHOMSKY

La (des)educación

A Noam Chomsky se le reconoce mundialmente como uno de los grandes intelectuales y educadores del siglo XX. Y, sin embargo, hasta ahora no se habían recogido en ningún libro sus escritos sobre la educación y la deseducación de los ciudadanos. En éste, el gran lingüista norteamericano critica duramente nuestro actual sistema de enseñanza. Frente a la idea de que en nuestras escuelas se enseñan los valores democráticos, lo que realmente existe es un modelo colonial de enseñanza diseñado primordialmente para formar profesores cuya dimensión intelectual quede devaluada y sea sustituida por un complejo de procedimientos y técnicas; un modelo que impide el pensamiento crítico e independiente, que no permite razonar sobre lo que se oculta tras las explicaciones y que, por ello mismo, fija estas explicaciones como las únicas posibles. Raras veces los profesores piden a los alumnos que analicen las estructuras políticas y sociales que informan sus vidas. Raramente se insta a los estudiantes a que descubran la verdad por sí mismos. En este libro, Chomsky nos proporciona excelentes herramientas para desmontar este tipo de enseñanza pensada para la domesticación de los ciudadanos: si los educadores rechazan el adiestramiento tecnocrático que les desintelectualiza para convertirse en intelectuales auténticos que denuncien la hipocresía, las injusticias sociales y la miseria humana, conseguirán que los estudiantes asuman el reto de ensanchar los horizontes de la democracia y de la ciudadanía y, junto a ellos, trabajarán para construir un mundo menos discriminatorio, más democrático, menos deshumanizado y más justo.

NOAM CHOMSKY (1928), profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, es no sólo una autoridad mundial en lingüística sino también un luchador decidido por la causa de la paz y la libertad. Entre sus obras políticas destacan *La segunda guerra fría* (1984), *Los guardianes de la libertad* (1995), *El nuevo orden mundial (y el viejo)* (1996), *Lucha de clases* (1999), *Actos de agresión* (2000), *El beneficio es lo que cuenta* (2001), *El miedo a la democracia* (2001), *Una nueva generación dicta las reglas* (2002) y *Propaganda y opinión pública* (2002), todas ellas publicadas por CRÍTICA.

968035

